

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLÍN
Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014)

Radicado	05001 31 07 005 2011 01799
Procesado	Gabriel Jaime Sierra Moreno y otros
Delitos	Concierto para delinquir y otros
Víctima	La seguridad pública y otros
Decisión	Sentencia condenatoria y absolutoria
Sentencia N°	054

Este Despacho, advirtiendo que no se vislumbran nulidades que frustren la actuación y que le correspondió por cambio de radicación conocer del presente trámite, se propone, en esta oportunidad, emitir la decisión de fondo que ponga fin a la instancia, adelantada en contra de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO y ORLANDO MORENO MORA** como coautores de los punibles de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado; **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, como coautor de los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica; **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO y ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ** como coautores de los punibles de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, al igual que de **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO y CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA**, como coautores del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

DE LA INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS

1. **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** se identifica con la cédula de ciudadanía 70.070.712 de Medellín, nació en Medellín el 1° de agosto de 1953.

es hijo de Jesús María y Ligia, es casado, es bachiller, de ocupación comerciante, actualmente en detención domiciliaria en la ciudad de Medellín.

2. MARIO LEÓN VILLA PACHECO se identifica con la cédula de ciudadanía 3.469.687 de Entreríos (Antioquia), nació en Montería (Córdoba), el 19 de octubre de 1959, es hijo de Miguel y Margarita, es casado, reside en Belén de Bajirá y actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

3. JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, alias "El Diablo", se identifica con la cédula de ciudadanía 12.000.725 de Ríosucio (Chocó), nació en ese lugar el 5 de agosto de 1963, grado de instrucción quinto de primaria, residía en el barrio El Indio de Belén de Bajirá, se dedicaba a la agricultura, actualmente privado de la libertad.

4. MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, alias "Goyo", se identifica con la cédula de ciudadanía 8.111.436 de Mutatá (Antioquia), nació el 3 de septiembre de 1975 en Murindó (Antioquia), es hijo de Américo Denis y Venancia Blandón Romaña, hace unión marital de hecho, grado de instrucción quinto de primaria, ocupación agricultor, reside en Chigorodó (Antioquia).

5. MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO se identifica con la cédula de ciudadanía 70.044.787 de Medellín, nació en Rionegro (Antioquia), es hijo de Meimber y María, hace unión marital de hecho con Dora Lucía Delgado, es abogado, residía en la calle 25 sur # 44-40, apto 301, actualmente se encuentra privado de la libertad.

6. SOR ENID OSPINA RENDÓN se identifica con la cédula de ciudadanía 43.018.082 de Medellín, nació en Guadalupe (Antioquia), es hija de Félix Antonio y Bernarda, es soltera, abogada, reside en Medellín y actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

7. JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT se identifica con la cédula de ciudadanía 8.719.724 de Barranquilla, nació en Barranquilla el 10 de febrero de 1962, es hijo de Rodolfo e Isabel, es casado con Olga Marcela Rossi, es administrador de empresas, comerciante, actualmente se encuentra en trámite la solicitud de su extradición desde Panamá.

8. **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** se identifica con la cédula de ciudadanía 34.972.898 de Montería, nació en Montería, (Córdoba) el 14 de enero de 1956, es hija de Alfredo y Rosario, hace unión marital de hecho con Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández, es administradora turística y hotelera y reside en Montería en la calle 57 # 8-80.

9. **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ** se identifica con la cédula de ciudadanía 19.165.025 de Bogotá, nació en Montería (Córdoba), el 8 de febrero de 1952, es hijo de Hernán y Lina, hace unión marital de hecho con Katia Patricia Sánchez Mejía, es antropólogo y docente universitario, residía en la calle 57 # 8-80 de Montería (Córdoba), actualmente tiene orden de captura.

10. **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ** se identifica con la cédula de ciudadanía 21.446.537, nació en Amalfi (Antioquia) el 27 de junio de 1956, es hija de Rafael y María, es soltera, residía en la calle 31 # 9-75 de Medellín, actualmente se encuentra privada de la libertad.

11. **GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO** se identifica con la cédula de ciudadanía 78.748.611 expedida en Montería, nació en esa ciudad el 12 de febrero de 1976, es hijo de Gabriel y Carmen, hace unión marital de hecho con Araceli Cabria, se dedica a oficios varios, reside en Montería y actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

12. **ORLANDO MORENO MORA** se identifica con la cédula de ciudadanía 4.855.748 de Bocas de Curvaradó (Chocó), nació en dicha municipalidad el 24 de mayo de 1945, es hijo de Julio y Filomena, hace unión marital de hecho con Luz Marina Lemus, se dedica a la agricultura, actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

13. **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** se identifica con la cédula de ciudadanía 6.893.269 de Montería, nació en Montería (Córdoba), el 19 de julio de 1964, casado, es bachiller, se dedica a la agricultura, reside en Montería y actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

14. **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, alias "El Cucho" o "El Retro", se identifica con la cédula de ciudadanía 10.899.081 de Valencia (Córdoba), nació en ese mismo municipio el 25 de septiembre de 1954, es hijo

de Dagoberto y Antonio Elena, hace unión marital de hecho con Yesenia del Carmen Hernández, es bachiller, reside en el municipio de Valencia (Córdoba) y actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

15. ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ, alias "El Choco Robi", se identifica con la cédula de ciudadanía 10.902.686 de Valencia (Córdoba), nació en ese mismo municipio el 15 de septiembre de 1974, es hijo de Guillermo y Benilda, hace unión marital de hecho con Cielo del Carmen Ibáñez Miranda, grado de instrucción segundo de primaria, reside en el corregimiento Guasimal de Montería y actualmente se encuentra en detención domiciliaria.

16. RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ se identifica con la cédula de ciudadanía 3.353.895 de Medellín, nació el 1º de marzo 1959 en Medellín, es hijo de Bernardo y Lucía, es casado, es ingeniero agrónomo, reside en Llano Grande, teléfono 569 54 03, actualmente se encuentra en libertad.

17. JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO se identifica con la cédula de ciudadanía 98.555.560 de Envigado, nacido en Medellín (Antioquia), el 9 de junio de 1971, es hijo de José María y Ana Rosa, es casado, es administrador de empresas agropecuarias, reside en la vereda Los Salados del municipio El retiro (Antioquia).

18. CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA se identifica con la cédula de ciudadanía 70.561.922 de Envigad, nació en Medellín el 22 de octubre de 1962, es hijo de Ángelo y Fabiola, es casado, es administrador de empresas, reside en Medellín, Antioquia.

ACONTECER FÁCTICO

A raíz de la denuncia efectuada por la señora LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA y el señor MANUEL DENIS BLANDÓN, representantes de los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, al igual que por solicitud del director de la corporación regional CODECHOCÓ, se supo que en febrero de 1997 tuvo lugar la denominada operación "Génesis", en la cual integrantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (A.C.C.U.) y miembros de la Brigada 17 del Ejército Nacional, incursionaron violentamente

en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó del municipio de Ríosucio (Chocó); ofensiva militar que se extendió al bajo Atrato chocoano, jurisdicción del Carmen del Darién, entre las cuales están las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde ejecutaron actos hostiles contra las comunidades afrodescendientes que poblaban ese sector, lo cual generó su desplazamiento.

Posteriormente, aproximadamente a partir del año 2000, empresas dedicadas al cultivo de palma o a la ganadería extensiva, entre ellas las denominadas URAPALMA S.A.; Palmas del Curvaradó S.A.; Palmura S.A.; Palmadó LTDA.; Inversiones Agropalma & Cía Ltda.; Palmas S.A.; Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa, entre otras, se asentaron en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de implementar el proyecto agroindustrial de explotación de la palma de aceite, lo cual, finalmente, impidió el retorno de las comunidades desplazadas y generó un impacto ambiental negativo en territorios colectivos y zonas declaradas reserva forestal.

Para el cumplimiento de sus fines comerciales, los representantes legales y/o socios de las citadas empresas, en cofradía con miembros de grupos paramilitares que tenían injerencia en la región, trataron de legalizar la ocupación de las tierras, razón por la que acudieron a la compraventa de predios cuya extensión incrementaron ostensiblemente mediante la utilización fraudulenta del modo de adquirir el dominio de la posesión; se compraron terrenos inenajenables a precios irrisorios con documentos falsos, suscribieron compraventas de posesiones de personas fallecidas, entre otras modalidades; procedimientos con los cuales también respaldaron créditos bancarios y se obtuvieron incentivos estatales.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

La Fiscalía 8ª Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante resolución del 18 de mayo de 2010, resolvió la situación jurídica de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ, JAVIER JOSÉ DAZA PRETEL, CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL,**

MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, SOR ENID OSPINA RENDÓN y KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, profiriendo medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sin beneficio de libertad provisional, como posibles coautores de los delitos de *desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado y el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica*¹, que prevén los artículos 180, 337 y 340 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

Del mismo modo, dicha Fiscalía, el 27 de septiembre de 2010, resolvió la situación jurídica de **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ y DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, y les impuso medida de aseguramiento por las referidas conductas punibles² y bajo los mismos parámetros de los anteriores.

Entretanto, a **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ** la Fiscalía le resolvió la situación jurídica el 31 de enero de 2011, en la cual profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunta autora de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Por tanto, se ordenó su captura³.

Finalmente, en cuanto atañe a **GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO y ORLANDO MORENO MORA**, su situación jurídica se resolvió el 23 de marzo⁴ y 13 de mayo de 2011, respectivamente, decisiones en las que la Fiscalía de marras les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los mismos delitos que se le endilgaron a la procesada **SOR TERESA**.

Agotada la fase instructiva, se profirieron las siguientes resoluciones de acusación:

- El 11 de abril de 2011 – *proceso matriz* – en contra de **SIERRA MORENO, VILLA PACHECO, PALACIOS PALACIOS, DENIS BLANDÓN, VÉLEZ**

¹ Folios 150 y ss del c. original 32 y 1 y ss del c. original 33

² Folios 4 y ss del C. 45

³ Folios 1 y ss del C. 55

⁴ Folios 85 y ss del C. 58

GIRALDO, OSPINA RENDÓN, DAZA PRETELT y SÁNCHEZ MEJÍA, como coautores de los punibles de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado; en contra de **ÁLVAREZ VERTEL** como coautor de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica y en contra de **PENAGOS GONZÁLEZ, RUIZ COSSIO y FREGNI OCHOA**, como coautores del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

- El 7 de junio siguiente en contra de **GÓMEZ HERNÁNDEZ y GÓMEZ ÁLVAREZ⁵**, como coautores de desplazamiento forzado; invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

- El 5 de julio de 2011 en contra de **MONTIEL MERCADO y CALONGE ALCALÁ⁶** como coautores de los punibles de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

- El 25 de julio de 2011 en contra de **FERNÁNDEZ NAVARRO⁷** como coautor de los punibles de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

- El 1º de noviembre de 2011 en contra de **MORENO MORA⁸** como coautor de los punibles de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.

Posteriormente, el proceso matriz fue asignado, en virtud del Acuerdo PSAA11-8804, del 23 de noviembre de 2011, al Juzgado adjunto al Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Medellín, razón por la cual asumió conocimiento y, el 9 de diciembre de 2011, se dio trámite a lo previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), después de lo cual se realizó la audiencia preparatoria el 30 de enero de 2012⁹, acto procesal en el cual, no obstante se negaron unas nulidades solicitadas por la defensa, se declaró, oficiosamente, la nulidad parcial de la resolución de acusación, en relación con el delito de desplazamiento forzado, debido a la anfibología de la misma, ya que no

⁵ Folios 107 y ss del C. 64

⁶ Folios 160 y ss del C. 65

⁷ Folios 53 y ss del C. 66

⁸ Folios 1 y ss del C. 72

⁹ Folios 297 y ss del C. 68

se especificó cuántas fueron las conductas imputadas, cuáles las víctimas de los desplazamientos, cuál fue el lugar de desarraigo y la fecha de los hechos de manera clara y diferenciada y quiénes concretamente fueron los responsables de cada uno de los desplazamientos.

Asimismo, en dicha diligencia se decretó la práctica de algunas pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa, en tanto que también se negaron otras. Del mismo modo, se dispuso la práctica de varias probanzas de oficio.

Finalmente, en la audiencia se dispuso decretar la acumulación de los procesos 05000 31 07 005 2011-02459, 05001 31 07 001 2011-02068, 05001 31 07 001 2011-02335, 05001 31 07 001 2011 02346 con el proceso matriz 05001 31 07 005 2011-01799, que se adelantaban concomitantemente en dicho juzgado, ya que en los mismos existía homogeneidad en el modo de actuar, relación en el lugar de los hechos, el tiempo y la evidencia aportada en una de las investigaciones podía influir en las demás. Además, ello permitía cumplir las medidas provisionales que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en punto a efectivizar los derechos de las víctimas, cumplir con los principios de economía, celeridad y eficacia de la administración de justicia y, por ser el desplazamiento un delito de ejecución permanente, era viable jurídicamente la aplicación ultractiva de dicha figura.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó íntegramente la nulidad parcial de la resolución de acusación y confirmó las demás decisiones que negaron el decreto de varias nulidades y pruebas.

Ante la voluminosidad de las pruebas decretadas en la audiencia preparatoria, la audiencia pública fue realizada en múltiples sesiones, en las cuales se practicó la prueba decretada y, finalmente, se presentaron las alegaciones de las partes, quedando la actuación a despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

No obstante lo anterior, debe precisarse que, en relación con **JORGE LUIS SANTOS ORTEGA**, el 25 de marzo de 2014, se declaró la extinción de la acción penal y la consecuente cesación de procedimiento, con fundamento en los

Entretanto, respecto a **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ** y **JAVIER MORALES ESTRADA**, los días 28 de marzo y 2 de mayo últimos, respectivamente, este Despacho dispuso suspender provisionalmente el proceso, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1592 de 2012, el cual modificó el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, ya que los justiciables, al parecer, cometieron los hechos fundamento de esta actuación durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), por lo cual, actualmente, se encuentran como postulados a la Ley de Justicia y Paz. Por tanto, se ordenó la ruptura de la unidad procesal y posterior archivo provisional en cuanto a los mismos, conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000- ya que, como viene de argumentarse, el juzgamiento de estos acusados está atribuido, hasta el momento, a una jurisdicción especial de Justicia Transicional.

SÍNTESIS DE LAS ALEGACIONES FINALES

Fiscalía: El Fiscal arguyó que, con base en los medios de prueba recaudados, se demostró la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de los procesados en los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado, en concurso homogéneo y sucesivo, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En principio, se refirió a la variación de la calificación, de que trata el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, en relación con la cual la Corte Suprema de Justicia no obstante ha variado su criterio en cuanto a este aspecto, finalmente concluyó que la variación de la calificación jurídica provisional es procedente con apoyo en prueba sobreviniente y antecedente cuando medie un error en la imputación jurídica.

En ese sentido, citó el criterio sostenido en auto del 23 de abril de 2008, radicado 29.339, donde deja de lado el error en la calificación jurídica, que no sólo proviene de una indebida selección del precepto que regula el comportamiento investigado, dando lugar a un *nomen juris* diferente al que en verdad se adecua a la conducta, sino que puede surgir de un desatino en la valoración de los elementos de convicción.

Así las cosas, concluyó que como el acto de acusación es complejo, por cuanto se completa con la modificación de la imputación introducida en el juicio - cuando la hay-, no cabría ninguna limitación a la modificación de la calificación jurídica sustentada en prueba antecedente, siempre y cuando se acredite la producción de un error en dicha imputación y se respete el núcleo básico de carácter fáctico, con todas sus circunstancias modales.

Interpretación, que explica, satisface tanto el principio de legalidad como el de consonancia, pues a más que se soporta en los presupuestos normativos del instituto procesal, garantiza el ejercicio del derecho a la defensa en su componente de contradicción porque mientras no se altere la descripción de los supuestos de hecho, objeto de investigación y juzgamiento, la defensa técnica y material mantiene incólume sus garantías esenciales, en tanto goza de la oportunidad de contravenir el señalamiento específico realizado por la fiscalía.

En el caso concreto, analizó que en auto proferido en la audiencia preparatoria del 30 de enero de 2012, el Juzgado decretó la nulidad parcial de las resoluciones de acusación, en lo que respecta al delito de desplazamiento forzado, con el argumento de no haberse determinado con precisión los sujetos pasivos de esta conducta. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, el 4 de mayo de 2012, revocó la decisión e indicó que para solucionar el problema del concurso homogéneo y sucesivo en el delito de desplazamiento forzado, la Fiscalía podía acudir a la figura de la variación de la calificación.

Sin embargo, el Fiscal consideró que con la calificación fáctica y jurídica que comprenden las cinco acusaciones que posteriormente fueron acumuladas, no existe fundamento para solicitar la variación de la calificación y por consiguiente, solicitó que se mantenga la calificación fáctica y jurídica hecha en las resoluciones de acusación, con base en los siguientes argumentos:

- Respecto al delito de concierto para delinquir, se imputó fácticamente la existencia de una asociación entre la Casa Castaño, empresarios y particulares, con la finalidad de apoderarse ilegalmente de los territorios pertenecientes a las comunidades negras o afrocolombianas localizadas en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), donde tendría lugar un proyecto agroindustrial de palma de aceite; lo cual condujo al desplazamiento forzado de

11

los integrantes de esas comunidades o el aprovechamiento de ese estado antijurídico en que se encontraban, ya que algunos de ellos fueron desplazados a finales de 1996 y principios de 1997, razón por la cual dicho comportamiento se adecua al artículo 340 del Código Penal, agravado por la expresión *con el fin de cometer desplazamientos*, del inciso segundo, y si bien, en la parte resolutive de algunas de las resoluciones de acusación, se dijo que se imputaba este delito, sin que se aludiera expresamente a que era *con fines de cometer desplazamientos*, en la parte motiva de las citadas providencias quedó claro, probatoriamente, dicha agravante.

- En el delito de desplazamiento forzado se precisó fácticamente que la conducta se materializó por los desplazamientos ejecutados por integrantes de la estructura paramilitar en asocio con empresarios y particulares, a integrantes de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, mediante amenazas o acudiendo a mecanismos ilegales en el despojo de tierras o aprovechándose de la situación de desplazamiento, pues varias de las víctimas habían sido desplazadas desde finales de 1996, y el desplazamiento que se está imputando es el ocurrido desde finales de 1998, cuando inició la ubicación de las tierras para los cultivos de palma.

En ese orden de ideas, se dijo que la conducta se tipifica en el artículo 180 del Código Penal, ya que de manera arbitraria, mediante actos violentos o coactivos, se hizo desplazar a los integrantes de la población mencionada o, se aprovechó esa situación antijurídica en que se encontraban. Además, atendiendo a que son múltiples las víctimas de esta conducta, de conformidad a lo previsto en el artículo 31 del Código Penal, se trata de un concurso homogéneo y sucesivo, expresión utilizada en la parte resolutive de la acusación y, no obstante no se mencionó a cada una de las víctimas, esta circunstancia quedó establecida en la parte motiva de las acusaciones.

- En cuanto a la conducta de invasión de áreas de especial importancia ecológica, también se dijo en la imputación fáctica que la misma tuvo lugar cuando se invadieron o se compraron, de manera ilegal, territorios colectivos de las comunidades negras localizadas en Curvaradó y Jiguamiandó, territorios amparados por la Ley 70 de 1993. En relación con la circunstancia de agravación, prevista en el inciso segundo del artículo 337 del Código Penal, esto es, cuando sobrevengan daños al medio ambiente, en la parte motiva de

las acusaciones se mencionó esta circunstancia con medios de prueba como el concepto del Ministerio del Medio Ambiente, que señaló los impactos y daños; al igual que los medios de prueba testimonial que se refirieron a las obras, canales, etc., que se tuvieron que hacer en esos territorios, definidos mediante prueba técnica, que condujeron al secamiento de ciénagas, humedales y desaparición de fauna y flora. Este aspecto fue puesto en relevancia por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, al resolver algunos recursos de apelación.

Así las cosas, el Fiscal arguyó que no se reúnen los presupuestos para solicitar variación de la calificación de las conductas imputadas y, en consecuencia, sostiene la calificación efectuada en las respectivas acusaciones.

De otra parte, indicó que la aplicación de la autoría mediata, en aparatos organizados de poder, ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la empresa criminal conjunta no encuentra consagración legal pero dicha corporación ha señalado que puede utilizarse como metodología para entender el actuar en las empresas criminales, como la que nos ocupa, sin perder de vista que, al momento de individualizar responsabilidad, lo debe ser por alguno de los mecanismos previstos en los artículos 29 y 30 del Código Penal.

Se refirió a los hechos jurídicamente relevantes descritos en la actuación, a fin de focalizar referentes geográficos, económicos, militares y jurídicos. En primer lugar, respecto al referente geográfico, arguyó que la comisión de las conductas de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, tuvieron ocurrencia en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, municipio de Carmen del Darién (Chocó), región del bajo Atrato, la cual se encuentra integrada por los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién, Ríosucio y Unguía, a los que pertenecen las más importantes cuencas hídricas de esa zona del territorio nacional.

Para mayor claridad, el Fiscal describió las características del río Atrato, entre otros aspectos, como principal medio de transporte de la región, el cual sirve de ruta de comercio entre Chocó y el puerto de Cartagena, considerada la zona con mayor biodiversidad del planeta y una de las más lluviosas, de ahí su alto

caudal, y considerado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre como uno de los bancos genéticos más ricos del mundo. Además, se refirió al origen de la ancestralidad de esos territorios.

Las conductas punibles que se endilgaron tuvieron ocurrencia en los territorios de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, municipio de Carmen del Darién (Chocó), región del bajo Atrato. Con respecto a la situación legal de esos territorios indicó que antes de la expedición de la Constitución Política, en su mayoría, se consideraban baldíos, salvo aquellos que eran de propiedad privada o habían sido adjudicados según las leyes, por el entonces INCORA. Sin embargo, el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, estableció que, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, *"el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley..."*.

En efecto, la Ley 70 de 1993 desarrolló dicha normativa con miras a reconocer la propiedad colectiva a las comunidades negras ocupantes de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y las zonas baldías, rurales y ribereñas ocupadas por comunidades negras con prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país, terrenos que la ley denomina *tierras de las comunidades negras*. Para hacer viable la efectividad de esta reforma agraria, el artículo 7º de dicha normatividad estableció, entre otros aspectos, que *la parte de la tierra de la comunidad negra destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable*, y a su vez, el artículo 15 considera como poseedor de mala fe las ocupaciones de personas no pertenecientes al grupo étnico negro.

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) mediante resolución 02809, del 22 de noviembre de 2000, adjudicó, en calidad de tierras de las comunidades negras, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario del río Curvaradó. Lo mismo aconteció en la resolución 02801, del 22 de noviembre de 2000, en lo referente con el Consejo Comunitario del río Jiguamiandó.

En las resoluciones de adjudicación se excluyeron de titulación colectiva aquellos predios rurales en los cuales se acreditara propiedad privada, conforme las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994, así como, contraviniendo la ley que las hizo posibles, reconoció en calidad de terceros ocupantes de buena fe a las personas no pertenecientes al grupo étnico negro que tuvieran mejoras al interior del territorio titulado, por lo que autorizó que siguieran aprovechando las áreas ocupadas hasta cuando los beneficiarios compraran las mejoras establecidas. Además, la Corte Constitucional ha impulsado un proceso de políticas públicas para proteger la población desplazada, mediante la sentencia T-025 de 2004; y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante sentencias del 26 de julio de 2007, M.P. Enrique José Arboleda Perdomo, y del 24 de agosto de 2006, M.P. Gustavo Aponte Santos, indicó que, según la legislación colombiana, las accesiones como las tratadas en este estrado, no resultan procedentes.

De otra parte, el Fiscal se refirió al origen de los grupos de autodefensa, en respuesta a la amenazas de desplazamiento y el consustancial despojo de los bienes de las comunidades por parte de la guerrilla, relatando que, consolidados como grupos de autodefensa en 1994, uno de los primeros objetivos fue conseguir el dominio territorial del Urabá que por ese entonces era víctima del aislamiento geográfico y de la invasión de colonos en busca de una mejor suerte al servicio de las empresas bananeras, condiciones óptimas para la agudización de la pobreza y los excesos de los administradores de las haciendas con los trabajadores, factores trascendentes que a la postre constituyeron el germen de la guerrilla en la zona.

La presencia de grupos de autodefensa en la región y para la fase histórica de la presente investigación, según la fiscalía *resulta un hecho incuestionable, al punto que su dominio territorial, operacional y militar en el bajo Atrato chocoano se mostraba como una realidad social*. En 1997, bajo un proyecto político expansionista del cual fue artífice CARLOS CASTAÑO, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá unió sus fuerzas con las del Magdalena Medio y los Llanos Orientales para conformar lo que en adelante se conocerían como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con todo, la presencia de las autodefensas no dejó de ser una constante en el Urabá antioqueño. Ineludible se presentaba entonces, la necesidad que tenían las autodefensas de ocupar

también el Urabá chocoano, lo cual empezó a verificarse a finales de 1996 con la presión que hicieron a las guerrillas principalmente las FARC, que hasta ese momento dominaban dicho territorio. Efectivamente, la selvática región era un corredor de movilidad imprescindible para el sostenimiento de la primacía militar y operativa de las autodefensas, pues el río Atrato permite a los grupos ilegales la posibilidad de moverse con bastante libertad de una región a otra, en un país extenso y geográficamente difícil.

Con las pruebas que hay en el proceso, se supo que la idea de ingresar a los territorios de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó surgió de la estructura armada ilegal conocida como *Casa Castaño*, para lo cual el Fiscal relató varios pormenores de su surgimiento y ubicación en el Urabá chocoano y antioqueño. Asimismo, se refirió al origen del bloque Bananero, su conformación y zonas de operatividad.

Con respecto a la denominada Operación Génesis, manifestó que fue realizada del 24 al 28 de febrero de 1997, por la Brigada-XVII del Ejército Nacional y la estructura paramilitar, en la que ejercieron control militar inicial en las comunidades de Salaquí y Cacarica, participaron los bloques de Autodefensas denominados Bloque Chocó, Grupo la 70, Arlex Hurtado y Bloque Bananero, hubo combates con el Frente 57 de las FARC, fueron incautados fusiles a la guerrilla, hubo guerrilleros muertos y desplazamientos de todas las comunidades del Bajo Atrato. En relación con este operativo, el Fiscal hizo alusión a la declaración de FREDY RENDÓN HERRERA, quien relacionó varios pormenores de la misma.

El Fiscal se refirió al surgimiento de la Fundación para la paz de Córdoba, FUNPAZCOR, entidad sin ánimo de lucro, domiciliada en Montería (Córdoba), cuyo objeto social era *trabajar por la promoción y mejoramiento de las condiciones de vida de las diversas comunidades de Colombia*, la cual fue creada por VICENTE CASTAÑO para desarrollar trabajo social, entregando propiedades (Finca Las Tangas), a diferentes parceleros que habían sido desplazados del departamento por la violencia por ellos generada. El modelo de FUNPAZCOR ya había sido aplicado en Córdoba y en otras zonas, como el sector conocido como TULAPAS en Urabá, y resultó decisivo en el proyecto del Urabá chocoano. Por eso, el megaproyecto agrícola (banano y palma) surgió de los líderes de la conocida *Casa Castaño* y se enfocó, desde el punto de vista



cuencas. A finales de 1996, la guerrilla, al perder territorio, organizó desplazamientos de la gente de esas cuencas hacia Mutatá para bloquear la vía. Ante ello, los paramilitares y el Ejército empezaron a taponar, para que los campesinos desplazados por la guerrilla no pudieran salir, se montó un tapón en Pavarandó y es cuando la guerrilla replantea y mueven a los campesinos por

sociológico, en la capitalización de las miserias de la región y el provecho extraído de la auspiciosa rentabilidad del megaproyecto industrial basado en una producción a bajo costo y sin riesgos de mercado.

de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía nacional, el azúcar y la palma.

En fin, el Fiscal estima que el acusado tuvo buena relación con las autodefensas y, no obstante no formó parte directamente de la empresa, su cónyuge **KATIA MARÍA SÁNCHEZ MEJÍA** se apersonó de las iniciativas de explotación de la palma y de las estrategias para que los terrenos donde se ejecutaba pudieran legalizarse a favor de URAPALMA, en detrimento de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó.

De igual forma, citó a **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA**, comandante paramilitar desmovilizado que operó en la zona de los hechos, quien al preguntársele sobre las circunstancias en que se inició el negocio de la palma, inmediatamente se remitió a **HERNÁN GÓMEZ** y refirió que en una oportunidad **VICENTE CASTAÑO** le pidió que acudiera a la finca La Quince para entrevistarse con unos empresarios de la palma que habían venido del Magdalena, se desplazó hasta la finca y allí se reunió con **CASTAÑO**, quien le presentó a **ITALO GIOVANY CIANCI** y **LUIS RIASCOS**, siendo esa la primera de muchas reuniones con estos empresarios.

En tales condiciones, el Fiscal infiere que el justiciable hizo parte de las Autodefensas, aprovechando la amistad con los **CASTAÑO GIL**, e interviniendo en conductas que no resultaban propias de las negociaciones de paz, pues se inclinaron por aspectos económicos, como la creación de empresas y la posible adquisición de tierras.

En cuanto al desplazamiento forzado, adujo que el mismo se deduce de los mecanismos utilizados por los empresarios, representantes, socios y demás personas que intervinieron en la adquisición fraudulenta de tierras protegidas, con la finalidad de desarrollar el proyecto de palma de aceite. Actos coactivos

de Urabá, iniciado por VICENTE CASTAÑO, quien impulsó y controló la expansión de estos, montó URAPALMA y el proyecto de la extractora de aceite en Mutatá, en la cual, con la complicidad de funcionarios del INCORA -después INCODER-, legalizó miles de hectáreas que les pertenecían a las comunidades negras. Además, según VELOZA GARCÍA, se trató de *"un proyecto que generó desplazamientos, que generó muertes y expropiación de tierras"*.

Además, en este proyecto agroindustrial, la asociación entre la Casa Castaño y los empresarios se vislumbra de las atestaciones de JESÚS IGNACIO ROLDÁN PEREZ, alias Monoleche, el 23 de julio de 2012, en la cual afirmó, entre otros aspectos, que en el año 1998, en San Pedro de Urabá, en la vía de Santa Catalina – Las Tangas, para salir a Villanueva, como a medio día, encontró en unos vehículos a ITALO GIOVANNI CIANCI, referido narcotraficante de Santa Marta, al doctor RAMON PUPO FRAGOZO de FUNPAZCOR y suegro de ITALO, al señor **HERNÁN GÓMEZ** y otras personas que no recuerda. **HERNÁN GÓMEZ** preguntó por VICENTE CASTAÑO, pues lo necesitaban para hablar acerca de las tierras que se iban a comprar en Bajirá, para sembrar palma. En fin, el Fiscal se refirió a los pormenores de la declaración de ROLDÁN PÉREZ en relación con el negocio de la palma de aceite y la compra de los terrenos cuando la región estaba dominada por los paramilitares.

Del mismo modo, el Fiscal aludió a la declaración de RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA acerca de la presencia de las AUCC en Urabá en 1991 con FIDEL CASTAÑO cuando se desmovilizó el EPL; el surgimiento de los comandos populares en 1991; que en 1996 se unió a las AUCC y fue designado comandante del "Arlex Hurtado", por lo que se enteró que para esa época había apoyo de los empresarios de banano, ganadería, comercio interno de los cascos urbanos hacia las autodefensas; que para el año 1998 VICENTE CASTAÑO tenía el dominio de la margen izquierda del río Curvaradó o Ríosucio, sin embargo, debido a las bajas, es cuando decide mandar grupos de 80 y 90 hombres, entregándole el mando a FREDY RENDÓN HERRERA del bloque Elmer Cárdenas y, en conjunto con el "Arlex Hurtado", operaban en esas cuencas. A finales de 1996, la guerrilla, al perder territorio, organizó desplazamientos de la gente de esas cuencas hacia Mutatá para bloquear la vía. Ante ello, los paramilitares y el Ejército empezaron a taponar, para que los campesinos desplazados por la guerrilla no pudieran salir, se montó un tapón en Pavarandó y es cuando la guerrilla replantea y mueven a los campesinos por

el Atrato y los sacan a Turbo; es allí donde la guerrilla, en conexión con las ONG, iniciaron la creación de comunidades de paz, como la de San José de Apartadó, para no perder los corredores estratégicos. Una vez iniciaron la creación de las comunidades de paz, la guerrilla sólo permitió el retorno de la población que era manejada por ellos, los demás no los dejaron retornar. El proyecto palmero empezó a mediados de 1999, cuando empresarios de la costa Atlántica le propusieron a VICENTE CASTAÑO su creación.

La Fiscalía también aludió a los casos de las falsedades a las resoluciones del INCODER, los cuales enumeró detalladamente; a la financiación del proyecto, razón por la cual se refirió al objeto de FINAGRO -Fondo para el financiamiento para el sector agropecuario-, el cual, a través del intermediario Banco Agrario de Colombia y la Corporación Financiera del Valle, fusionada posteriormente con la Corporación Financiera Colombiana, otorgaron crédito a URAPALMA, Palmas del Curvaradó y PALAMADÓ.

En relación con la materialidad de las conductas, respecto al concierto para delinquir indicó que el surgimiento de la asociación criminal se vislumbra de la existencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, denominada *Casa Castaño*, donde provino la iniciativa de desarrollar un proyecto agro industrial, para lo cual, en primer lugar, se debía desalojar a las guerrillas de las cuencas de los ríos del bajo Atrato que por décadas habían imperado, lo cual se inició con la "Operación Génesis" en las cuencas de Cararica, Salaquí y Truandó, para posteriormente trasladar sus efectos a las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, acción en la cual se produjeron desplazamientos; y en segundo lugar, se debía ubicar las tierras aptas para desarrollar esos proyectos, para lo que se ubicaron las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó como las más aptas para este tipo de cultivos, según estudios que ordenó el propio VICENTE CASTAÑO.

Dada la naturaleza jurídica de los territorios de las cuencas (pertenecientes a las comunidades negras) donde desarrollarían los proyectos de palma, según la Ley 70 de 1993, se destinó a un sinnúmero de paramilitares y comisionistas a comprar de manera ilegal los territorios. Para tales efectos, acudieron a amenazas, desplazamientos, falsedad de documentos, accesiones irregulares, entre otros. Realizadas estas tareas, se atrajeron varias empresas palmeras,

las que además de promover el cultivo, acudieron a créditos irregulares, para lo cual tuvieron que crear asociaciones de campesinos.

En relación con los desplazamientos, se refirió a los testimonios de las víctimas o testigos directos de los hechos, como MARTHA MARGIT MARTÍNEZ GIRALDO, MARÍA UBERLINA GIRALDO ZULETA, EFREN ROMAÑA CUESTA, EDILMA ROSA JULIO, MIGUEL ENRIQUE PÁEZ PETRO, EMIRO REGINO TORDECILLAS, MIRIAM DE JESÚS NARVÁEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS BABILONIA CUADRADO, MANUEL RAMOS HERNÁNDEZ, HIPÓLITA ISABEL DÍAZ GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO VILLALBA DÍAZ, EUCLIDES DE JESÚS TREJOS, entre otros, declaraciones en las cuales se evidencia el acuerdo delincencial autodefensas-empresarios, en los terrenos donde ejercían dominio armado los primeros, y los procedimientos empleados conjuntamente para desplazar las comunidades mediante actos violentos, con el objetivo de utilizar las tierras con fines agroindustriales. Además, presionaban su venta, a favor de las empresas palmeras, en reuniones en las que estaban presentes empresarios y miembros de las autodefensas, comprando a precios irrisorios e informando a los indecisos la conveniencia de vender, según sus condiciones, a costa de su vida o la de sus familiares cercanos.

Así las cosas, la estructura delincencial, conformada por empresarios y palmeros, obedeció a un acuerdo previo entre ellos. En efecto, dentro de la sistemática operativa de los procesados, fungieron como empresarios, intermediarios o facilitadores de la contratación ilícita en connivencia con las autodefensas que operaba militarmente e impartía sus directrices o aprobaciones, por lo que, concluye el Fiscal, puede percibirse la conformación de una organización con proyección en el tiempo, donde se toleró tanto los delitos como los procedimientos necesarios para alcanzar su objetivo económico.

Además, como el fin último de la asociación criminal fue el de obtener de manera irregular las tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó para desarrollar el proyecto de palma, en razón de lo cual no solo se aprovecharon de la condición de desplazados de muchos ancestrales, sino que a través del brazo armado de la organización se desplazó a los integrantes de esas comunidades que habían retornado o se resistían a abandonar sus territorios, deviene una conducta agravada con la finalidad de cometer

desplazamientos forzados. Por tanto, se trata de la conducta de concierto para delinquir, descrita en el artículo 340 del Código Penal, agravado por los fines de desplazamiento de los poseedores, propietarios o tenedores de las tierras e integrantes de las comunidades negras.

De otro lado, respecto al desplazamiento forzado, se deben diferenciar dos fenómenos de desplazamiento de las comunidades afrocolombianas ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodó. El primero, ejecutado por el Frente 57 de las FARC, en el mismo espacio territorial y coincidente en espacio temporal, que es objeto de investigación en el proceso 2022, del cual se trasladaron varias pruebas. Este desplazamiento, ejecutado en los últimos meses de 1996 y los primeros meses del año de 1997, como lo señalaron los testigos MANUEL MOYA LARA –fallecido-, GRACIANO BLANDÓN, JAIR BLANDÓN MENA, LEOFANOR CUESTA CHALÁ, ROBINSON ROBLEDO CÓRDOBA, GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO, DANILO MURILLO CÓRDOBA, JAIME BEITAR MENA, JESÚS ADÁN QUINTO y DANIS DANIEL SIERRA, fue producto del enfrentamiento entre grupos armados ilegales, especialmente como una medida encaminada a contrarrestar la operación génesis, que tendría lugar en febrero de 1997, por las Autodefensas y el Ejército Nacional, desplazamientos que se diferencian, porque los desplazados pertenecían a otras comunidades.

Igualmente, hay pruebas que indican que varios de los integrantes de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó pudieron retornar, inicialmente instalándose en el sitio “La Marina” y posteriormente a las comunidades de origen; así como que, no todos los integrantes de esas comunidades resultaron desplazados por el accionar de la guerrilla, habiendo quedado algunos pobladores en sus territorios.

El segundo fenómeno de desplazamiento, investigado en este proceso, fue ejecutado por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, liderado en ese momento por VICENTE CASTAÑO, en asocio con personas que pertenecieron o pertenecen a las empresas cultivadoras de palma de aceite, desplazamientos que tuvieron la finalidad de adquirir de manera irregular las tierras pertenecientes a los integrantes de las comunidades afrocolombianas, localizadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y se produjeron a partir de 1997 cuando se inició la localización de terrenos para

cultivos de palma, luego arriban las primeras empresas palmicultoras e instalaron los previveros y viveros y, finalmente, se iniciaron los cultivos de palma; fenómeno que se extendió hasta el 2005 y recayó en casi la totalidad de comunidades del Curvaradó y algunas de Jiguamiandó.

De modo que si ambos desplazamientos, los ejecutados por la subversión y el ejecutado por el grupo paramilitar, comparten espacios temporales y territoriales en algunos momentos, no son las mismas conductas punibles, sino que presentan elementos estructurales diferentes, esto es, en uno, los sujetos actores fueron la guerrilla y, en el otro, los paramilitares y empresas palmicultoras, la finalidad en uno y otro es diferente, las comunidades afectadas varían, aunque en algún momento pueden coincidir como acontece con algunos sujetos pasivos; esto obedece a que después de haber sido desplazados por los rebeldes, posteriormente lo fueron por los paramilitares.

Al respecto, el Fiscal resaltó que debe tenerse en cuenta la naturaleza de ejecución permanente del delito de desplazamiento forzado, en aras de estructurar la tipicidad. Al respecto, si bien algunos de los procesados no ejecutaron acción de desplazar en contra de los integrantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en 1996 y los primeros meses de 1997, su intervención posterior se ejecutó a sabiendas de que los integrantes de esas comunidades se encontraban desplazadas, es decir, se encontraban en ese estado antijurídico, situación no solo conocida sino aprovechada por los inculcados, acudiendo a diversas formas, como impidiendo el retorno, mediante negociación ilegal de sus posesiones o propiedades. Entonces, por unidad de imputación del crimen, como lo ha señalado el precedente de la Corte Suprema de Justicia, a las personas ejecutoras que intervengan en ese interregno, entre la consumación y el agotamiento, resulta atribuible la conducta punible. Al respecto, están las declaraciones de JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA ALGUMEDOS, WELLINTON CUESTA CÓRDOBA, ERASMO SIERRA ORTÍZ, LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA, HUGO DE JESÚS TUBERQUIA, CRISTÓBAL BLANDÓN BORJA, MIGUEL MARIANO MARTÍNEZ CUAVA, ELADIO BLANDÓN DENIS, CRISTÓBAL BLANDÓN BORJA, JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA, ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA y CARMEN ALICIA BOLAÑO ACOSTA, entre otros.

En consecuencia, es incuestionable para el Fiscal que se cumplen los presupuestos del tipo penal de desplazamiento forzado, descrito en el artículo 180 del Código Penal, en la medida en que de manera arbitraria y a través de violencia, amenazas y actos coactivos se despojó de las tierras, se hizo migrar a los integrantes de comunidades negras asentadas en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Además, por la multiplicidad de acciones de desplazamiento, se trata de un concurso homogéneo y sucesivo, al tenor de lo establecido en el artículo 31 del ídem.

En cuanto al delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, la Fiscalía se enfocó en la naturaleza jurídica del terreno donde se ejecutaron los desplazamientos; si hubo en ellos actos de invasión y el impacto ambiental producto de la invasión para establecer la modificación de los componentes naturales, decisivos para la calificación de los territorios.

En cuanto al primer aspecto, la región donde se estableció el cultivo de palma y la actividad ganadera es considerada *área de reserva forestal*, de acuerdo con la Ley 2 de 1959, o a partir de 1993, *terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras* y, por tanto, en términos del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente está destinada para el establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras.

Por tanto, la reserva forestal del pacífico y el territorio de propiedad colectiva de Jiguamiandó y Curvaradó, del cual hace parte, se catalogan como zonas de importancia ecológica, reserva forestal o derecho a la propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes. Luego de los desplazamientos ocurridos en la región del bajo Atrato chocóano, siguió una invasión sistemática de los territorios, promovida por las autodefensas en acuerdo previo con los empresarios de la palma presentes en el sector, quienes ocuparon el sector abandonado e invadieron los territorios de propiedad colectiva, con presencia armada como expresión de dominio, a través del cultivo palmero, al cual se destinaron las tierras, según lo manifestaron varias víctimas de tal accionar.

Con respecto al impacto ambiental que sobrevino con la invasión de los terrenos y la acción de las empresas para contribuir a ese resultado, debe tenerse en cuenta el *informe final* del Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, en el cual se realizó un estudio del impacto ambiental de los cultivos de palma y la ganadería en los territorios colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó, y se concluye que el cultivo de palma y la ganadería alteraron negativamente la biodiversidad, el suelo y el agua, debido a las actividades de adecuación de terrenos, sistema de drenaje, la construcción de vías y el establecimiento de pastos. En efecto, las empresas presentes en la zona, esto es, URAPALMA, Palmas del Curvaradó, Palmadó, Palmas S.A., Tukeka y Asibicon crearon impactos ambientales negativos en los recursos hídricos, de suelo y biodiversidad, según concluyeron los expertos en la materia. Por tanto, se tipifica el delito previsto en el artículo 337 del Código Penal.

En lo relativo al aspecto de la responsabilidad de los justiciables, en relación con **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, vinculada como persona ausente, adujo que en relación con el concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, la procesada participó en la fundación para la paz de Córdoba -FUNPAZCOR- y en el trasplante de este modelo a otros lugares del país. En este sentido, se refirió a la declaración de JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, en audiencia pública del 23 de julio de 2012, en la cual precisó, entre varios aspectos, que la procesada estuvo casada con un hermano de los CASTAÑO y, luego de la muerte de su cónyuge, pasó a ser la administradora de las empresas ganaderas de dicha familia. Además, le consta que la misma estuvo en Bajirá manejando la empresa URAPALMA y luego el proyecto de plátano, encargada por VICENTE CASTAÑO.

Asimismo, el Fiscal aludió al testimonio de PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS, quien como ex empleado de la empresa URAPALMA tramitó un crédito de fomento para la siembra y desarrollo de una plantación de palma africana de aceite en Urabá, crédito que fue concedido a principios de 2001 por el Banco Agrario, y para lograrlo la empresa incurrió en procedimientos irregulares. Además, dijo que para acceder a los créditos debían constituirse unas figuras asociativas, por tanto se crearon unas asociaciones de pequeños cultivadores, que fueron empresas fachada, gracias a las cuales las empresas palmicultoras obtuvieron incentivos a la capitalización rural con dineros públicos. Dichas asociaciones se crearon con la colaboración de "doña Tere", reconocida en la región de Belén de Bajirá, remoquete que corresponde a la procesada, según varios medios de prueba.

Por su parte, señaló que RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA mencionó que en 1996 VICENTE CASTAÑO llegó a la región de Bajirá e inició un proceso de adquisición de tierras, sin saber que eran de comunidades negras o que tenían problemas de títulos; hicieron carreteras de acceso, instaló un grupo de 90 hombres al mando de "Gavilán" y siguió comprando tierras a través de varias personas, entre ellas, "Cincuenta y Cinco" y "Palillo", de una señora llamada Teresita y de alias "Napo". Del mismo modo, en audiencia reiteró que **TERESA GÓMEZ**, o "Teresita", era la encargada de escoger a las personas que comprarían las tierras, manejaba los recursos de los CASTAÑO, por eso la nombraron para la sociedad URAPALMA, manejaba FUNPAZCOR y luego donó las tierras para la siembra de plátano en Bajirá.

Por su parte, FREDY RENDÓN HERRERA señaló que conoció a **SOR TERESA** desde 1996, quien tenía algún parentesco con los Castaño y era la encargada de manejar la fundación FUNPAZCOR en Montería, la cual era de Vicente, y a través de la misma se donaban tierras a los desmovilizados.

En el mismo sentido, HEBERT VELOZA GARCÍA manifestó que el proyecto de cultivo de palma de aceite en el Urabá fue iniciativa de VICENTE CASTAÑO, quien involucró a varios empresarios del ramo, compró y legalizó tierras abandonadas como consecuencia del conflicto y las adecuó para el cultivo de palma, proyecto al que se vincularon otras personas, entre ellas Teresita, llamada **SOR TERESA**, que fue la gerente de FUNPAZCOR, fundación que pertenecía a los Castaño en Montería.

Así las cosas, el Fiscal concluye que **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ** fue clave en el proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región, pues fue una emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, que andaba con dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por sujetos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención. Por tanto, le resulta incuestionable que la acusada estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor, como la encargada de pagar a las personas que de diversas formas vendían sus propiedades, es decir, ejecutó múltiples acciones en la región de Belén de Bajirá. Su actuación fue trascendental, ya que la finalidad exclusiva era la de apoderarse ilegalmente de las tierras de las comunidades negras,

habiéndolos desplazado y aprovechándose de esa situación antijurídica en que se encontraban.

Respecto a la conducta de desplazamiento forzado, el Fiscal se refirió a las declaraciones de **SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO**, **MARIO MANUEL CASTAÑO BRAVO**, **BERNARDO DE JESÚS DURANGO OSORIO** y **GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA**, quienes aludieron a la forma en que miembros de las autodefensas les compraron sus tierras y la participación de **TERESA CASTAÑO**, unos señalándola como quien finalmente era la que les pagaba sus terrenos y otros como la encargada, junto con otro sujeto, de las compraventas.

Para la Fiscalía, la procesada **SOR TERESA**, de manera arbitraria y mediante actos coactivos, despojó a varias personas de sus tierras ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En estas condiciones, le atribuyó responsabilidad, a título de coautora material de la conducta de desplazamiento forzado.

En relación con la invasión de áreas de especial importancia ecológica, adujo que se demostró que **GÓMEZ ÁLVAREZ** fue una de las personas que pagó los fundos rurales, con el propósito de cultivar palma de aceite, predios que se ubican en los territorios colectivos de las comunidades negras. Es decir, su conducta se enmarca en la acepción de invadir las áreas protegidas por la Ley 70 de 1993, pues contribuyó en la adquisición de tierras que posteriormente quedaron en manos de la empresa URAPALMA.

Por tanto, el Fiscal solicitó la condena de esta justiciable como coautora de los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de cometer desplazamientos, desplazamiento forzado -en concurso homogéneo y sucesivo- e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Con respecto a **HERNÁN DE JESÚS IÑIGO GÓMEZ HERNÁNDEZ**, la Fiscalía considera que si bien es cierto se corroboraron algunas de las reuniones que sostuvo con los grupos armados al margen de la ley con ocasión de su intermediación en los procesos de paz, dichos nexos o relaciones desbordaron una simple gestión humanitaria, no obstante existan elementos de prueba que demuestran su actividad en diferentes procesos de paz, tales como los

testimonios de GILBERTO MAURICIO ALZATE RONGA y CARLOS ALONSO LUCIO LÓPEZ.

Su responsabilidad la dilucida, en primer lugar, de la entrevista publicada en la revista *Semana*, el 6 de junio de 2005, en la cual el comandante de las autodefensas VICENTE CASTAÑO, alias "*El Profe*", puso al descubierto que la organización a su cargo hizo alianzas o acuerdos con personas vinculadas con la empresa privada, a fin de desarrollar un megaproyecto agrícola en la región del bajo Atrato chocoano, en el marco del plan estratégico trazado por la organización, conforme al cual había que maximizar el aprovechamiento económico del dominio territorial que se tenía en la zona, que se basó en el cultivo de palma de aceite, una alternativa rentable si se tenía en cuenta las condiciones óptimas del mercado de los biocombustibles ante la crisis petrolera de esa época.

Acerca del acuerdo entre autodefensas y empresarios para desarrollar el cultivo palmero, se refirió nuevamente a la versión de HEBERT VELOZA GARCÍA, comandante del bloque Bananero de las Autodefensas que operó en el Urabá antioqueño, quien adujo que la instalación de cultivos de palma en el Urabá chocoano fue liderado directamente por VICENTE CASTAÑO, proyecto que tenía bases firmes, puesto que se trataba de una zona ubicada estratégicamente con gran futuro económico. Asimismo, señaló las formas en que la organización implantó el proyecto agroindustrial, en el que participaron algunos empresarios, con los cuales se asociaron las autodefensas para cometer los delitos indeterminados y necesarios que permitieran alcanzar su objetivo común.

Establecida la alianza entre paramilitarismo y empresarios y el proyecto de adquisición de tierras de manera irregular, con el propósito de cultivar palma, la relación directa del procesado **GÓMEZ HERNÁNDEZ** con los hechos que se le endilgaron, la extrae inicialmente de las declaraciones de CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, en las que se encuentra que el origen de la empresa URAPALMA fue en las reuniones adelantadas en Córdoba, lideradas por VICENTE CASTAÑO y personas de la región, en las que participó directamente **GÓMEZ HERNÁNDEZ**, tejiéndose un entramado con personas naturales y jurídicas con asiento en la costa Atlántica, para llevar a cabo el gran proyecto de Urabá.

Por ello, HEBERT VELOZA aseguró que VICENTE CASTAÑO trajo una gente de Santa Marta a montar ese proyecto de la palma, palmicultores reconocidos de toda la vida, unión empresarial que paulatinamente atraía la atención de otros potenciales socios puesto que VICENTE formó el proyecto y después se fueron vinculando empresarios bananeros y gente del interior del país.

En este escenario, dicho testigo ubicó a **HERNÁN IÑIGO**, junto a CARLOS SPATH, como emisarios de VICENTE CASTAÑO en las negociaciones de las autodefensas con algunos empresarios azucareros del Valle del Cauca, de cuyo progreso rendían periódicos informes directamente a VICENTE CASTAÑO. En este sentido, el mismo **GÓMEZ HERNÁNDEZ** en su indagatoria refirió que CARLOS SPATH, de quien dijo que se trata de un ganadero y empresario cordobés, estuvo con él en algunas reuniones con LUIS DONACIANO RIASCOS, a quien se le adjudica una cuantiosa compra de derechos de posesiones en territorios de propiedad colectiva y ser, al mismo tiempo, precursor del cultivo de palma de aceite en la zona del bajo Atrato chocoano, tema por el que, precisamente, se suscitaron las reuniones con **GÓMEZ HERNÁNDEZ** y CARLOS SPATH a finales de la década de los noventa.

Entretanto, ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO señaló que acudieron a CARLOS MERLANO para que los asesorara, momento en que nació URAPALMA con el 45.9 de Construcciones Unidas (de la cual es socio), LUIS RIASCOS con otro tanto, CARLOS MERLANO con el 3%, JAIRO ALONSO con el 3% y **KATIA SÁNCHEZ** -cónyuge de **GÓMEZ HERNÁNDEZ**- con el 3.82%, el capital era de 1000.000.000 de pesos, 225 millones los tenía que aportar el procesado.

Lo anterior fue confirmado en audiencia pública por JESUS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, quien lo ubicó como uno de los diseñadores, junto con VICENTE CASTAÑO, del proyecto de palma y la obtención de tierras. A su vez, FREDY RENDÓN HERRERA conoció a **HERNÁN DE JESÚS**, como una persona cercana a los hermanos Castaño, asesor de las AUC y asesor en "*temas de la palma*".

Así las cosas, concluyó que **GÓMEZ HERNÁNDEZ** era un emisario de los Castaño, asumió funciones trascendentales como la ejecución de las políticas

de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía nacional, el azúcar y la palma.

En fin, el Fiscal estima que el acusado tuvo buena relación con las autodefensas y, no obstante no formó parte directamente de la empresa, su cónyuge **KATIA MARÍA SÁNCHEZ MEJÍA** se apersonó de las iniciativas de explotación de la palma y de las estrategias para que los terrenos donde se ejecutaba pudieran legalizarse a favor de URAPALMA, en detrimento de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó.

De igual forma, citó a **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA**, comandante paramilitar desmovilizado que operó en la zona de los hechos, quien al preguntársele sobre las circunstancias en que se inició el negocio de la palma, inmediatamente se remitió a **HERNÁN GÓMEZ** y refirió que en una oportunidad **VICENTE CASTAÑO** le pidió que acudiera a la finca La Quince para entrevistarse con unos empresarios de la palma que habían venido del Magdalena, se desplazó hasta la finca y allí se reunió con **CASTAÑO**, quien le presentó a **ITALO GIOVANY CIANCI** y **LUIS RIASCOS**, siendo esa la primera de muchas reuniones con estos empresarios.

En tales condiciones, el Fiscal infiere que el justiciable hizo parte de las Autodefensas, aprovechando la amistad con los **CASTAÑO GIL**, e interviniendo en conductas que no resultaban propias de las negociaciones de paz, pues se inclinaron por aspectos económicos, como la creación de empresas y la posible adquisición de tierras.

En cuanto al desplazamiento forzado, adujo que el mismo se deduce de los mecanismos utilizados por los empresarios, representantes, socios y demás personas que intervinieron en la adquisición fraudulenta de tierras protegidas, con la finalidad de desarrollar el proyecto de palma de aceite. Actos coactivos que se reflejaron en la presión que ejercieron integrantes de las Autodefensas en contra de propietarios, poseedores o tenedores de terrenos para que vendieran a bajos precios.

En sentir de la Fiscalía, entonces, se probó que el grupo de las Autodefensas ideó el proyecto agroindustrial de palma de aceite, promoviendo la creación de la empresa URAPALMA, en la que, según los medios de prueba, el procesado

GÓMEZ HERNÁNDEZ asesoró en su constitución e hizo aportes dinerarios, lo cual posteriormente cedió a su cónyuge **KATIA PATRICIA**, quien después se convirtió en representante legal de la empresa. Además, **RAÚL EMILIO HASBÚN** lo ubicó en la zona de Belén de Bajirá, en varias reuniones con **JAVIER DAZA PRETELT**, primer representante de URAPALMA, quien tenía relaciones con los paramilitares, planeando la forma en que se comprarían las primeras tierras de manera irregular. Respecto a los desplazamientos cita los testimonios de **CRUZ MARY URIBE GÓMEZ**, **WILLINGTON CUESTA CÓRDOBA** y **GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA**, **JOSÉ ALBERTO VITALINO MOSQUERA**, **LUIS OVIDIO RENTERIA ROBLEDO**, **ENRIQUE MANUEL PETRO**, **ROBINSON RENTERÍA** y **GUILLERMO ANTONIO AGUDELO**, **ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA**, **MYRIAM DE JESÚS NARVÁEZ**, **ANDRÉS BABILONIA CUADRADO**, víctimas del desplazamiento por parte de URAPALMA.

Finalmente, en torno a la *invasión de áreas de especial importancia ecológica*, el Fiscal concluyó que hay evidencia que permite inferir la posible incursión del procesado en dicha conducta, ya que se demostró que URAPALMA fue una de las pioneras en la adquisición de tierras de forma ilegal, mecanismo que generó sendos desplazamientos, predios que a la postre se ubican en reservas protegidas por la Ley 70 de 1993.

Así las cosas, solicitó la condena de **HERNÁN DE JESÚS IÑIGO GÓMEZ HERNÁNDEZ** como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En cuanto a **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, el Fiscal arguyó que se demostró que éste no solo adelantó obras en beneficio de la comunidad de Belén de Bajirá, sino que fue uno de los pioneros en introducir la empresa URAPALMA y, por ende, ejecutó actos de desplazamiento, basado en la estructura paramilitar que operaba en el sector. Con respecto al delito de concierto para delinquir agravado, dijo que la asociación del acusado con los paramilitares y con el proyecto de palma, se probó inicialmente con la declaración de **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ** quien dijo que **VICENTE CASTAÑO** compró tierras al otro lado del río, por los lados de PAVARANDÓ, se creó la firma URAPALMA

y la primera persona encargada de esa empresa fue **SOR TERESA** pero luego fue **JAVIER JOSÉ**, quien sabía que el negocio del proyecto de palma era con **VICENTE CASTAÑO**.

Adujo que personalmente le había dicho a **VICENTE** que las tierras que había comprado con HH pertenecían a **URAPALMA**, sin embargo, como **JAVIER DAZA** era el que administraba, compraba las tierras y sembraba la palma, no se pudo concretar; finalmente, indicó que dicho justiciable estaba mal con **VICENTE**, por los gastos de la empresa **URAPALMA**.

Del mismo modo, **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA**, en audiencia pública, lo relacionó como comandante paramilitar y describió sus vínculos con **VICENTE CASTAÑO** y su participación en el origen del proyecto palmero. También, **CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ**, quien aceptó cargos en este asunto, expresó que **DAZA PRETELT**, junto con **LUIS RIASCOS**, lo contrataron para prestar asesoría en la empresa **URAPALMA** y, por lo mismo, dicho acusado le remitió en varias oportunidades documentos para su estudio y sostuvieron reuniones en ese sentido.

Por tanto, deduce el Fiscal que el procesado, en asocio con **LUIS RIASCOS** y **CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ**, ideó las estructuras legales y operativas para la sustracción de tierras del dominio o posesión de los pobladores. Para ello, eran necesarios los nexos con las autodefensas, aspecto que se soporta con los testimonios de **YONIS JAVIER DORIA LÓPEZ**, **JUAN FRANCISCO ESPITIA LUGO**, **HEBERT BARRIOS PÉREZ**, **CRISTIAN JAVIER TORDECILLA BLANCO**, **LEONARDO ENRIQUE SÁNCHEZ MORELO**, **MARIO DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ**, **EVARISTO SUÁREZ BALTASAR**, **LUIS ALBERTO FLORES**, **ISMAEL DE JESÚS ARROYO MEDINA**, **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**, **JOSÉ FRANCISCO DÍAZ**, **VÍCTOR MANUEL LEÓN VÁSQUEZ**, **LUZ DARY SEVILLA PERTUZ**, **LUIS ALBERTO FLORES PÉREZ**, **MÓNICA FERNANDA ARROYO SOLANO**, **PEDRO PABLO PITALÚA PACHECO**, **RUBÉN DARÍO LÓPEZ BORJA**, **LUIS CARLOS MADRID RIVERA**, **EDWIN ALEXANDER RUEDA PARRA**, **JAIR RAMÍREZ GOEZ**, **JOSÉ MIGUEL VERGARA MENDOZA**, **ORLANDO ANTONIO GUISAO RODRÍGUEZ**, en su mayoría extrabajadores de **URAPALMA** y otros integrantes de las asociaciones de campesinos cultivadores de palma de aceite, quienes adujeron

que **DAZA PRETELT** no sólo era de las autodefensas sino que ejecutó actos de desplazamiento.

Describió el Fiscal que la presencia del acusado es recurrente en los eventos de suscripción de ventas de tierras bajo amenazas y presiones, y en la conformación de asociaciones de cultivadores con trabajadores de su compañía que un día adquirirían predios, fruto de accesiones no naturales, para vendérselas a sus mentores, cuando no hacían de intermediarios en la compra de tierras a supuestos colonos a precios inconcebibles, negocios en los que se enriquecieron.

Al respecto, cita los testimonios de CRUZ MARY URIBE GÓMEZ, WELLINGTON CUESTA CÓRDOBA y GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO VITALINO MOSQUERA, LUIS OVIDIO RENTERÍA ROBLEDO, ENRIQUE MANUEL PETRO, ROBINSON RENTARÍA y GUILLERMO ANTONIO AGUDELO. Además, acerca de los desplazamientos están las declaraciones de las víctimas y de varios testigos de ello, tales como ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA, MYRIAM DE JESÚS NARVÁEZ, ANDRÉS BABILONIA CUADRADO, MIGUEL ÁNGEL HOYOS, LUIS ALBERTO RENTARÍA, PEDRO ANTONIO CARDONA, YENIS MIRANDA, WILSON NIETO REBOLLEDO, YONIS JAVIER DORIA y ELIÉCER MANUEL CASTILLO GONZÁLEZ.

Finalmente, respecto a la invasión de áreas de especial importancia ecológica, para el Fiscal se demostró con el dictamen que rindió el Ministerio del Medio Ambiente, que varios de los terrenos que de manera irregular fueron adquiridos se encuentran ubicados en los terrenos colectivos de que trata la Ley 70 de 1993, por lo que resulta atribuible este comportamiento. Por tanto solicitó que se condene a **JAVIER JOSÉ** como autor del delito de Concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En relación con **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** indicó que la misma fue gestora de la creación de la empresa URAPALMA, estuvo al tanto del surgimiento del proyecto, desde Montería, al punto de que se convirtió en socia de la mencionada compañía. Por tanto, su responsabilidad frente al delito de

en la zona con ocasión de la compra de tierras. Por tanto, le resulta incuestionable la responsabilidad de la acusada en los desplazamientos y su relación con el grupo paramilitar que sirvió de plataforma para la adquisición de tierras y, de esa forma, desplazar a los pobladores de la región de Curvaradó y Jiguamiandó.

Mencionó que otra de las formas de consumación del desplazamiento fue la consecución de millonarias sumas de dinero, a través de créditos tramitados ante entidades como el Banco Agrario de Colombia, y en buena medida los procedimientos desplegados por la sindicada se rigieron por las exigentes necesidades de capitalización demandadas de la explotación económica de los territorios afrodescendientes.

Además de las alianzas estratégicas, los sucesivos representantes legales de URAPALMA, en particular **JAVIER DAZA PRETELT** desde 1999 y **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** desde 2003, en calidad de gerentes administrativos, se auxiliaron de otras figuras para acceder a los créditos, tales como contratos de transacción, de colaboración empresarial, comodatos, prenda agraria sin tenencia, entre otros.

En tales condiciones, para la Fiscalía la procesada **SANCHEZ MEJÍA**, en condición de representante de la empresa URAPALMA, acudió a maniobras simuladas y engañosas para conseguir los créditos de financiamiento y se apropió de los recursos generados por incentivos de la línea de crédito agrario.

De otra parte, URAPALMA garantizó el préstamo con hipoteca abierta y de cuantía indeterminada sobre predios ubicados en Caño Claro de Ríosucio (Chocó), que están incluidos en territorios de titulación colectiva y, por consiguiente, no podían gravarse.

Así las cosas, dedujo que **KATIA PATRICIA** tuvo relación con la estructura paramilitar, con la cual se hicieron acuerdos para la adquisición de tierras y el adelanto del proyecto palmicultor. En ese mismo escenario, toda su actividad desplegada para comprar tierras de manera irregular, es considerada arbitraria y constitutiva de actos coactivos que desencadenaron en el desplazamiento de varias personas. Concluyó que según experticia, muchos de los terrenos que

fundaron URAPALMA. Sobre este tópico, también se demostró que varios de los terrenos que se compraron hacen parte de los colectivos de las comunidades Afrocolombianas.

De otro lado, se demostró que su compañero **HERNÁN DE JESÚS** sostuvo buenas relaciones con las autodefensas.

Así las cosas, **SÁNCHEZ MEJÍA** se apersonó de las iniciativas de explotación de la palma y de las estrategias para que los terrenos donde se ejecutaba pudieran legalizarse a favor de URAPALMA, en detrimento de los consejos comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó.

Su responsabilidad en los desplazamientos forzados emerge del testimonio de PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS, ex empleado de URAPALMA, a quien le constan las actuaciones de **SÁNCHEZ MEJÍA**, y afirmó que tenía íntima amistad con paramilitares.

Asimismo, se encuentran el testimonio de la víctima de desplazamiento GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA, que trató de solucionar el problema con la acusada pero nunca quiso atenderlo. En el mismo sentido, VÍCTOR ENRIQUE DÍAZ TAPIAS, hijo del fallecido LINO ANTONIO DÍAZ, señaló a la acusada y a URAPALMA como autores del desplazamiento forzado.

También, PEDRO ANTONIO CARDONA, trabajador de la empresa URAPALMA, adujo que dicha acusada en el año 2003, intervino en el proceso de creación de las asociaciones de campesinos de palma, que como se ha dicho, fue uno de los mecanismos estratégicos utilizados para la desposesión de las tierras y desplazamiento a sus propietarios, tenedores o poseedores.

En la misma línea, WILSON MANUEL NIETO REBOLLEDO, extrabajador de URAPALMA, afirmó que **KATIA PATRICIA** iba a la empresa y los motivaba a ser copropietarios de la misma, por lo que recibirían un 20%, pero realmente no resultó con nada, sin embargo, si se expropiaron tierras.

En fin, el Fiscal relacionó varios testimonios, entre los cuales está el de RAÚL EMILIO HASBÚN, que dan cuenta de sus reuniones con miembros de las autodefensas, en las que se debatían los problemas que se estaban generando

en la zona con ocasión de la compra de tierras. Por tanto, le resulta incuestionable la responsabilidad de la acusada en los desplazamientos y su relación con el grupo paramilitar que sirvió de plataforma para la adquisición de tierras y, de esa forma, desplazar a los pobladores de la región de Curvaradó y Jiguamiandó.

Mencionó que otra de las formas de consumación del desplazamiento fue la consecución de millonarias sumas de dinero, a través de créditos tramitados ante entidades como el Banco Agrario de Colombia, y en buena medida los procedimientos desplegados por la sindicada se rigieron por las exigentes necesidades de capitalización demandadas de la explotación económica de los territorios afrodescendientes.

Además de las alianzas estratégicas, los sucesivos representantes legales de URAPALMA, en particular **JAVIER DAZA PRETELT** desde 1999 y **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** desde 2003, en calidad de gerentes administrativos, se auxiliaron de otras figuras para acceder a los créditos, tales como contratos de transacción, de colaboración empresarial, comodatos, prenda agraria sin tenencia, entre otros.

En tales condiciones, para la Fiscalía la procesada **SANCHEZ MEJÍA**, en condición de representante de la empresa URAPALMA, acudió a maniobras simuladas y engañosas para conseguir los créditos de financiamiento y se apropió de los recursos generados por incentivos de la línea de crédito agrario.

De otra parte, URAPALMA garantizó el préstamo con hipoteca abierta y de cuantía indeterminada sobre predios ubicados en Caño Claro de Ríosucio (Chocó), que están incluidos en territorios de titulación colectiva y, por consiguiente, no podían gravarse.

Así las cosas, dedujo que **KATIA PATRICIA** tuvo relación con la estructura paramilitar, con la cual se hicieron acuerdos para la adquisición de tierras y el adelanto del proyecto palmicultor. En ese mismo escenario, toda su actividad desplegada para comprar tierras de manera irregular, es considerada arbitraria y constitutiva de actos coactivos que desencadenaron en el desplazamiento de varias personas. Concluyó que según experticia, muchos de los terrenos que

adquirió URAPALMA se encuentran en los colectivos creados y protegidos por la Ley 70 de 1993.

En consecuencia, solicitó la condena de **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, como autora del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautora del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautora de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En relación con **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**, el Fiscal adujo que los medios de prueba acreditan que, en condición de representante de la asociación de pequeños cultivadores de palma, también realizó ventas de terrenos a empresas palmeras, que anteriormente habían sido desenglobados y que inicialmente se habían acrecentado con la figura de la accesión irregular, por ende, la conducta del justiciable no puede reducirse a la de un simple trabajador de URAPALMA.

En este punto, solicita tener en cuenta lo que señaló ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, socio de URAPALMA, referente a que el único título dentro de las comunidades fue el que se compró a las asociaciones por intermedio de **MARIO LEÓN**, títulos que fueron anulados por la Superintendencia de Notariado y Registro.

En sentir del Fiscal, la titulación fraudulenta constituyó medio eficiente e idóneo para la producción del desplazamiento de las personas, ya que su consecuencia, el apoderamiento "jurídico" de las tierras forzadas al abandono, terminó por hacer nugatorio cualquier derecho que se quisiera ejercer por los pobladores desalojados. Igualmente, halló evidentes nexos con la conducta que desplegó CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, pues, en calidad de asesor jurídico de URAPALMA, experto en temas del derecho privado y la actividad notarial, el abogado diseñó los matices jurídicos de los desplazamientos forzados en el bajo Atrato con la creación de artificios contractuales.

Por lo anterior, solicitó la condena de **MARIO LEÓN VILLA PACHECO** como autor material del delito de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, en la modalidad de ejecutar desplazamientos y coautor de los

reatos de desplazamiento forzado - *en concurso homogéneo*- e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Referente a **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, conocido como "El Diablo", el Fiscal adujo que, a pesar de que negó vínculos paramilitares, figura en calidad de vendedor en la escritura 0364 del 22 de abril de 2003 en la compraventa del lote de terreno "*El Tesoro*", realizada con el sindicado **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, siendo irregular la forma en que se le adjudicó al primero dicho predio. Igualmente, participó en múltiples compras de tierra como comisionista, pues no puede desconocerse su cercanía personal con **DAZA PRETELT**, gerente de URAPALMA.

En efecto, según GUSTAVO GARCÍA PÉREZ, "El Diablo" era un reconocido paramilitar que se dedicó, junto con "Palillo", al *abigeato* y participó en el homicidio de JOSÉ LUIS ECHAVARRÍA en 1997. Su presencia en el sector y la labor de comisionista que le fue encomendada por sus superiores, revelan su compromiso en los delitos endilgados. Para la Fiscalía, la actividad de **PALACIOS PALACIOS** es prueba indicativa de la dinámica y directa intervención de la organización delincuencia en el proyecto agrícola, dejando sin justificación a los empresarios que, frente a este tipo de trabajadores, se mostraron ajenos a cualquier información que les permitiera asociarlo con los grupos ilegales imperantes en el sector.

En este sentido, señala el Fiscal que existe prueba testimonial que lo ubica como un miembro de las autodefensas y como comisionista en la venta de tierras en la región. Al respecto, cita los testimonios de los desplazados JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA, JOSÉ ALBERTO VITALINO MOSQUERA, MANUEL ENRIQUE PETRO HERNÁNDEZ, MARTHA MARGIT MARTÍNEZ GIRALDO, JUAN IGNACIO AVILES MONTIEL, ANDRÉS CARMONA PADILLA, LUIS CARLOS FERIA CONDE, MIGUEL ENRIQUE PÁEZ PETRO, entre otros.

Por su parte, mencionó que GABRIEL JAIME CARO y WALTER ATENCIO GARAY escucharon que **PALACIOS PALACIOS** es paramilitar; mientras que a EDILMA ROSA JULIO, MIGUEL ANGEL HOYOS, y a otros declarantes, les consta que es integrante de los paramilitares.

Por tanto, estima que está acreditado que el acusado perteneció a la estructura paramilitar y en esa condición ejecutó múltiples actos de desplazamiento en contra de la población de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Además, perteneció a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, forma asociativa de URAPALMA para la obtención de créditos con el INCODER, a través del Banagrario, y firmó una autorización de prenda con hipoteca en favor de URAPALMA.

En razón de lo anterior, solicitó la condena de este acusado como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En cuanto a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, el delegado de la Fiscalía arguyó que su participación en la comisión de las conductas delictivas se deduce de tres frentes, la primera, como comprador de terrenos baldíos de gran extensión, adjudicados irregularmente por el INCORA, actuando como su vendedor el abogado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**. La segunda, como comprador de múltiples predios pequeños y, la tercera, como instigador y ejecutor directo de actos de desplazamiento forzado sobre los pobladores.

En el primero de los eventos, aparece involucrado en la suscripción de dos escrituras públicas por medio de las cuales su empresa adquirió a **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** tres terrenos baldíos de gran extensión para el cultivo de palma, los cuales tienen relación directa con varias resoluciones irregulares mediante las cuales se asignaron los inmuebles, pues el INCODER así lo declaró.

En el otro evento, el procesado **GABRIEL JAIME** aparece signando las escrituras 533 de 2005, 534 de 2005, 535 de 2005, 536 de 2005, 537 de 2005, 538 de 2005, de 567 de 2005, hechas en la Notaría Única de Chigorodó, por medio de las cuales adquirió múltiples predios inferiores a 450 hectáreas, en los que en la actualidad se observan plantaciones de palma de aceite.

En relación con las compras a 52 familias desplazadas de Jiguamiandó, pero de terrenos ubicados en su mayoría en Curvaradó, según el Fiscal, lo que

aconteció fue que **MANUEL GREGORIO** y **GABRIEL JAIME**, conocedores de la condición de desplazados de las 52 familias, se aprovecharon de esa situación antijurídica y los ubicaron y negociaron sus propiedades. Además, sobreviene una inconsistencia, en el sentido de que las 52 familias fueron desplazadas de Jiguamiandó, concretamente de Pueblo Nuevo, y la mayor parte de los terrenos que vendieron se ubican en Curvaradó, como Andalucía y Caño Claro. La explicación que tiene el Fiscal para esta contradicción es que los procesados ubicaron terrenos baldíos y los hicieron pasar como de posesión o propiedad de dichas familias.

Asimismo, resulta que los terrenos comprados por **SIERRA MORENO** y que hicieron parte de las supuestas resoluciones de adjudicación, posteriormente declaradas falsas, son los mismos terrenos pertenecientes a las 52 familias, que en total suman aproximadamente 4.500 hectáreas.

Del mismo modo, **AMADOR CAICEDO**, exalcalde de Chigorodó, declaró que después de haber comprado a las 52 familias sus supuestas posesiones, el procesado **GABRIEL JAIME** advierte que los predios adquiridos a las familias desplazadas se encontraban en los colectivos de las comunidades negras, razón por la cual le aconsejan que acuda a la figura de las estrategias o contratos de participación (participación que en ningún momento recibieron las familias), buscando el apoyo del entonces representante del Consejo Mayor de Curvaradó, **MANUEL MOYA LARA -fallecido-**.

Por ello, es que el comandante paramilitar **RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA**, alias "Ricardo", condenado por estos hechos, surge como supuesto dueño de esos territorios e hizo un reclamo a **GABRIEL JAIME**, litigio que fue ventilado en una oficina del excomandante **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA**, siendo aclarada esta situación por el mismo **HASBÚN MENDOZA**, al indicar que **GABRIEL JAIME** aportó dinero al grupo paramilitar, concretamente al frente Arlex Hurtado. Supo que las tierras que había comprado este acusado a unos campesinos las habían vendido a **RICARDO** y **JORGE ANTONIO** y, cuando **GABRIEL JAIME** fue a tomar posesión, el abogado de "Ricardo", **MARIO VELEZ**, las reclamó, diciendo que esas tierras eran de "Ricardo", lo cual fue confirmado por **RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA**, alias Ricardo.

En tal sentido, también cita la declaración de **FREDY RENDÓN HERRERA**.

En el tercer evento, dice el Fiscal que se encuentran los testimonios de LUZ MARY CABEZAS, PABLO CUESTA DENIS, DOMINGO ROMANA ROMANA, LUIS FERNANDO COGOLLO, MEDARDO ANTONIO ACOSTA PADILLA, DANILO VERGARA FLOREZ, ERASMO LUIS CUADRADO PATERNINA, EFRÉN ROMANA CUESTA, ARLEDIS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FÉLIX ANTONIO ALVARADO, ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA, ENRIQUE MANUEL PETRO, EMILSEN GALLEG0 MESTRA, JOSÉ ANTONIO CORREA PÉREZ, JORGE ELÍAS LÓPEZ FLÒREZ, EDILMA ROSA JULIO, MIGUEL ENRIQUE PÁEZ PETRO, WALTER ATENCIO GARAY, ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA, MYRIAM DE JESÚS NARVÁEZ HERNÁNDEZ, quienes señalaron que **SIERRA MORENO** ejecutó actos de desplazamiento, en la medida que a través de los paramilitares les impidieron el acceso a las víctimas, por orden de este acusado, para de esta forma, ubicar los terrenos que posteriormente resultaron propiedad del inculpaado y en los cuales se asientan las plantaciones de palma de aceite.

Por tanto, frente a los tres eventos mencionados y en lo que respecta al desplazamiento forzado, le resulta claro que el procesado no solo tenía conocimiento del desarrollo del proyecto palmicultor, sino que ejecutó conductas que condujeron a desplazar las comunidades que se asentaban en la zona, antes de plantarse los cultivos de palma. Indicó, que tuvo que acudir a la adquisición irregular de tierras, simulando adjudicaciones por el INCODER, para posteriormente, resultar en poder del procesado, con el propósito de sembrar palma de aceite.

En tales circunstancias, el Fiscal concluyó que el procesado ejecutó actos dirigidos en contra de los habitantes de las comunidades que se asentaban en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, con el propósito de adquirir sus fundos, sacarlos del lugar y de esa forma sembrar palma de aceite. Pero además, a sabiendas de que las 52 familias, a quienes compró territorios, se encontraban desplazadas, se aprovechó de esa situación y les compró, impidiendo un retorno voluntario y libre. Conductas que desplegó con conocimiento y voluntad, pues no es cierto que arribó a la zona en el año 2003, ya que de las diligencias de indagatoria se infiere que era un conocedor de la zona de tiempo atrás en desarrollo de otras actividades agrícolas y tuvo la oportunidad de enterarse del desarrollo del proyecto de palma.

En lo que respecta al concierto para delinquir agravado, argumentó el acusador que el inicio y ejecución del proyecto de palma, que originó el desplazamiento poblacional fue obra de las Autodefensas, respecto a lo cual **SIERRA MORENO** aceptó haberse reunido con VICENTE CASTAÑO, aunque por motivos diferentes, sin embargo, por la forma en que se adquirieron los terrenos y se desarrolló el proyecto de palma, le resulta claro el compromiso del inculpado con esa organización criminal, máxime que se demostró que para ingresar a la zona y desarrollar el proyecto, necesariamente se debía contar con la aquiescencia de la asociación criminal, tal como lo expresó RAÚL EMILIO HASBÚN en sus intervenciones.

Finalmente, en cuanto a la invasión de áreas de especial importancia ecológica, con el uso actual del cultivo de palma de aceite en producción y con la pudrición del cogollo de la empresa Palmas del Curvaradó, se impactó negativamente el ambiente. Además, consideró demostrado que los terrenos que adquirió Palmas del Curvaradó, se localizan dentro de las reservas sometidas a la Ley 70 de 1993, lo que implica consumación de esta conducta punible. Al respecto, alegó que la ignorancia de la Ley 70 de 1993 pretendida por el sindicato, se rebate con la versión de su intermediario **MANUEL DENIS BLANDÓN**, a quien le consta que debido al conocimiento de las restricciones de esa legislación, tanto **SIERRA MORENO** como él optaron por crear una alianza entre las 52 familias *"para salvar alguna cosa del capital"*.

En este orden de ideas, solicitó que se condene a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** como coautor de los delitos de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo-*, autor de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de desplazamiento y conformación de grupos armados ilegales y, coautor del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En lo que se refiere al justiciable **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, dice la Fiscalía que contrario a tratarse de unos servicios profesionales, tuvo nexos con los Castaño y una sociedad con integrantes de esa asociación, lo cual fue determinante en los despojos de tierra en Curvaradó y Jiguamiandó, dada su condición de abogado de RODRIGO ZAPATA SIERRA, alias "Ricardo", lo que lo vincula a las conductas ilegales ejecutadas por JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ.

En relación con la participación de este justiciable en el manejo de las tierras para el cultivo de la palma, mencionó las declaraciones de FREDY RENDÓN HERRERA, RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA y RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA.

Con respecto a estas declaraciones, el Fiscal concluyó que **VÉLEZ GIRALDO** fue uno de los artífices en la adquisición irregular de terrenos de las comunidades que habitaban las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, como mecanismo coactivo para ejecutar el desplazamiento, en la medida en que se acudió al INCODER, donde se obtuvieron resoluciones falsas y, posterior a estos actos, se procedió a vender los fundos rurales, basado en poderes que no provenían del titular del derecho. En esencia, se demostró que el procesado recibió poderes de varias personas para vender terrenos, cuya adjudicación fue irregular por parte del INCORA, ya que excedieron las áreas permitidas en las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988, aserto que se basa en las resoluciones 702, del 22 de marzo de 2006, y 2672, de 6 de diciembre de 2006, proferidas por el INCODER, en las que se cancelan las mismas por ser falsas.

Además, la prueba recaudada le permitió inferir que esos poderes son falsos y que correspondieron a maniobras fraudulentas para sacar dichos bienes del comercio y direccionarlos hacia el patrimonio de la empresa Palmas del Curvaradó S.A., de propiedad de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, para implementar en ellos el proyecto palmicultor. Al respecto, uno de los beneficiarios con la adjudicación irregular supuestamente por parte del INCODER, AGUSTÍN MONTALVO QUINTERO, manifestó no haber sido adjudicatario del INCODER, no haber sido propietario de la finca la "Esmeralda", no conocer al abogado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** y tampoco haberle otorgado poder para comprar o vender.

En este punto, el Fiscal aludió a los predios que, de acuerdo a la prueba allegada al proceso, fueron adjudicados irregularmente por el INCORA por exceder el tope de 450 hectáreas, de acuerdo a la legislación agraria vigente para esa época, y que fueron a dar al patrimonio de Palmas del Curvaradó S.A, en las que **VÉLEZ GIRALDO** firmó las tres escrituras en calidad de vendedor, supuestamente como apoderado de ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA, BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA y CATALINA MÁRMOL LEMUS, en tanto que **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** aparece también firmando

como comprador, lo que presupone un concierto para apoderarse de estos predios. Además de las resoluciones falsas, en las que finalmente le otorgan poder a este procesado con el fin de vender los fundos.

Entonces, frente al delito de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, observó claro que **VÉLEZ GIRALDO** desplegó comportamientos que condujeron al desplazamiento de múltiples pobladores de Curvaradó y Jiguamiandó; además que, los terrenos de los que tramitó irregularmente su compra, se localizan en los colectivos creados y protegidos por la Ley 70 de 1993.

Con base en estos argumentos, solicitó que se condene a **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** como autor material de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, coautor material de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo-* y, en la misma calidad por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Respecto a **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN** el Fiscal arguyó que pertenece o perteneció a una de las comunidades afrodescendientes, de donde posiblemente fue desplazado por actores armados, motivo por el que terminó vendiendo sus predios a la empresa Palmas del Curvaradó. Empero, esa condición le permitió vincularse como comisionista de tierras en la región de Bajará y como miembro de la asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y zonas aledañas.

En efecto, **MANUEL GREGORIO** asegura que fue comisionista de 52 familias que vendieron tierras a la empresa Palmas del Curvaradó. No obstante, para el Fiscal la prueba testimonial demuestra la asociación o plan común de actuar ilegalmente en el proyecto agroindustrial.

El testigo **RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA**, condenado por estos hechos, en la audiencia pública señaló que **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN** era el comisionista de **JAIME SIERRA** y tuvo que ver con la compra de tierras de éste. **MANUEL ENRIQUE PETRO** dijo que conocía a **JAIME SIERRA**, dentro de sus comisionistas estaba **JUAN PABLO** y **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDON**, último que llegó a su finca, entró a mirar la palma que estaba sembrada, y le manifestó que *"yo no mandaba en mis*

tierras, sino que ahí mandaban los empresarios". HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, condenado por estos hechos, adujo haber conocido a **MANUEL DENIS BLANDON**, como comisionista de tierras en esa zona de Bajirá. EDUARDO RENTERÍA MENA, señaló que en el 2003 escuchó que **JAIME SIERRA** estaba comprando tierras, fue cuando lo contacto **MANUEL DENIS**, a quien conocía desde niño; **MANUEL GREGORIO** le dijo que **JAIME SIERRA** estaba comprando las tierras, que por su intermedio se hacía el negocio.

Además, aludió a las declaraciones de FLORENTINA GUTIÉRREZ PÁEZ, SILFREDO SOLIPAZ RODRÍGUEZ, RUGERO VÉLEZ RAMOS, WILSON LUNA MALDONADO, JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ, CRISTÓBAL MARTÍNEZ COAVAS, VALENTÍN CAUSIL HERNÁNDEZ, TOMÁS JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ, SANTANDER PEÑA GUZMÁN, FELIZA SANTOS BARRIOS, JUAN SUÁREZ ALARCÓN, ESTHER VALETA OVIEDO, ASCARIO JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN, MANUEL GÓMEZ VARGAS, OBET GALINDO IBARRA, MARCELINO TORDECILLAS GUTIÉRREZ, REBOLLET TORRES SOLANO, GUSTAVO MARTÍNEZ COAVAS, GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO, DANILO MURILLO CÓRDOBA, EUSEBIO MARTÍNEZ ANAYA, JORGE HURTADO MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE PALACIOS, MANUEL JAIME MORENO, VÍCTOR NORBERTO RENTERÍA, PEDRO PABLO PALACIO y LUIS FERNANDO MENA MORENO, en relación con las que infiere que el procesado no solo actuó como simple comisionista, sino que implícitamente ejecutó actos que los hicieron vender sus predios para posteriormente ser cultivados con palma de aceite y de esa manera perder su arraigo.

Explicó que **DENIS BLANDÓN** se hizo comisionista de Palmas del Curvaradó y ayudó a esta empresa a convencer a los antiguos residentes de Curvaradó para que vendieran sus terrenos a muy bajos precios, abjurando de su condición de afrodescendiente al presionar a sus coterreños para que cedieran a las exigencias de los poderosos compradores. Su presencia es habitual en las reuniones de la empresa con los miembros de las comunidades en las que se les instaba a vender la hectárea a \$200.000 y, una vez el campesino tomaba la decisión, este justiciable entraba en acción. Sus resultados fueron muy provechosos para Palmas del Curvaradó.

Asimismo, mencionó que el acusado perteneció activamente a la asociación *Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y zonas aledañas*, cargo desde el cual, dado su conocimiento de los propietarios y de los terrenos de la zona, facilitó la adquisición de tierras a favor de Palmas del Curvaradó y no solo lo relacionado con las 52 familias, sino que intervino en la compra de otras tierras ubicadas en el ámbito de la Ley 70 de 1993. Además, el mecanismo diseñado por la organización paramilitar para la compra irregular de tierras, fue precisamente la creación de asociaciones que les sirvió para cumplir requisitos ante FINAGRO y las demás entidades financieras.

Por estos motivos, solicitó que se le condene como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado - *en concurso homogéneo y sucesivo*- e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Con respecto a **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, el delegado de la Fiscalía adujo que de las comunicaciones interceptadas a su celular puede notarse su cercanía con JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, conversaciones en las que la procesada da cuenta de una estación de gasolina que presuntamente pertenece al desmovilizado. Coincidentemente en su indagatoria sostuvo que Inversiones Agropalma, de la cual es representante legal, se forjó en la región como consecuencia de la compra de una estación de servicios en Belén de Bajirá a fines de 2002.

Entretanto, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ señaló que se enteró que estuvo en Bajirá y su hermano JAIRO OSPINA, cuando estaban en el proceso de compra de tierras, y le sugirió comprar una estación de gasolina. Pero aceptó que la procesada creó la firma Agropalma, la cual se relacionaba con URAPALMA.

Por su parte, JAIRO OSPINA RENDÓN dijo que cuando se debía legalizar la estación de servicios, **SOR ENID** se encargó de asesorarlo; y que su hermana fue la encargada de protocolizar los negocios de Agropalma en la Notaría 5 de Medellín. Que los negocios de la tierra para la palma los hizo la procesada como representante legal de Agropalma, el dinero fue producto de una deuda que tenían con URAPALMA, en cuanto ésta le debía \$150'000.000 en combustible. Unidos con URAPALMA, **JAVIER DAZA PRETELT** ofició como

mentor en la compra de una de las parcelas de esa empresa a Agropalma para que se introdujeran en el negocio palmero.

Refirió el Fiscal que Agropalma suscribió la escritura pública 2778, del 13 de octubre de 2004, con la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, representada por **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**. Se trataba de un terreno de 254 hectáreas, ubicado en Caño Claro y Llano Rico en el Carmen del Darién, cuyo valor de venta era \$785.242.980, predio que había sido desenglobado en la escritura 729 de 2001 con ocasión a la accesión declarada por el apoderado de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO.

Al respecto, **OSPINA RENDÓN** señaló que el exorbitante precio de esta venta está justificado en una maniobra conocida como "*cláusula mortis*" cuya explicación radica en que la tierra realmente se adquirió por \$60'000.000 "*y como ya estaba sembrada se cargó una valoración a la tierra con la mejora que son de Agropalma por eso la escritura se hace por un valor estimado*".

Esta evidente falsedad radicaría en la necesidad de garantizar créditos con hipotecas de inmuebles a los que se les da un valor fantasioso o, de acuerdo con la exculpativa de la procesada, el agregado de las mejoras pudiera emplearse para asegurar contratos de prenda agraria que en últimas se endosarían a las entidades bancarias promotoras del crédito financiero. Pero cualquiera haya sido el móvil de esta discordancia, para el Fiscal lo cierto es que la justiciable hizo parte de la operación jurídica de la que se auspició Agropalma para apropiarse de los terrenos de titulación colectiva.

Halló visible que Agropalma se asoció con URAPALMA técnica, logísticamente e ideológicamente, inscribió predios usufructuando la figura de la accesión del predio de DÍAZ ALMARIO, donde se plasmó un precio no correspondiente con el valor real pagado por las tierras, con un vendedor fachada pues la compra (si es que la hubo en verdad) se le hizo directamente a URAPALMA, puesto que **MARIO LEÓN VILLA PACHECO** reseñó que nunca hubo dinero percibido por la asociación de cultivadores, producto de la venta, ni las tierras discriminadas en la escritura pertenecían a la misma.

En este sentido, la relación de **OSPINA RENDÓN** con ROLDÁN PÉREZ, al igual que con la estructura paramilitar y los actos de desplazamiento, derivados

del asiento de la empresa Agropalma, para el acusador se fortalecen con lo dicho por RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA el 29 de junio de 2010 en la audiencia pública, cuando aclaró que las tierras de Agropalma, perteneciente a **SOR ENID**, se ubicaban en el triángulo imaginario que habían creado los paramilitares para el desarrollo del proyecto palmero y que era controlado por ellos, habiendo generado un fondo de gastos comunes, del cual participaba Agropalma.

Así las cosas, vislumbró la relación de **OSPINA RENDÓN** y la estructura paramilitar, con la finalidad exclusiva de plantar palma, para lo cual tuvieron que crear la empresa Agropalma, la cual estableció serios vínculos, no solo con los paramilitares, pues se encontraba orientada por JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, sino con otras empresas como URAPALMA. Es decir, los varios actos que ejecutó fueron arbitrarios y coactivos, configurando el delito de desplazamiento en su contra. Sin olvidar, que los terrenos que compró y plantó con palma, se ubican en los colectivos de las comunidades negras protegidos por la Ley 70 de 1993.

Por ello, solicitó la condena de la procesada **SOR ENID** como autora del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautora del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautora de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Respecto al procesado **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, el 17 de diciembre de 2010, suscribió acta de formulación de cargos para sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir agravado, delito por el que fue condenado. En consecuencia, el análisis de responsabilidad versó respecto a los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Así las cosas, la responsabilidad del procesado la analizó el Fiscal de sus atestaciones en la audiencia pública y, de manera concreta, por la enajenación de tierras que fueron de SIXTO PÉREZ DÍAZ en la vereda Caño Claro del municipio de Ríosucio (Chocó), lo cual afectó derechos de comunidades negras que ostentaban títulos comunitarios. Así refirió que, al momento de fallecer PÉREZ DÍAZ, el 14 de junio de 1999, era adjudicatario por parte del extinto INCORA de un predio rural denominado La Nevera de 33 hectáreas con 5.186

metros cuadrados, ubicado en la vereda Caño Claro; sin embargo, el 7 de octubre de 2002 apareció un documento autenticado en la Notaría 6ª de Barranquilla, por medio del cual supuestamente PÉREZ DÍAZ otorgó poder a HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, alias "Diomedes", condenado por estos hechos, para que hiciera con su título toda clase de trámites.

Fue así como mediante escritura 735, del 8 de octubre de 2002, de la Notaría de Carepa (Antioquia), HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ hizo aclaración de los linderos del predio La Nevera, por el fenómeno de la accesión natural, declarando que al área de 33 hectáreas con 5.186 metros cuadrados le accedieron otras 4.207 hectáreas con 4.814 metros cuadrados, quedando en total con 4.241 hectáreas. A través del acto jurídico consignado en el mencionado instrumento, se afectaron derechos de muchos campesinos cuyas parcelas cambiaron de dueño intempestivamente, siendo imposible su ingreso a esos terrenos y no teniendo otra alternativa que emigrar hacia otro lugar.

En tales circunstancias, halló una inequívoca injerencia de **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** en todo ese procedimiento arbitrario, pues a través de un instrumento notarial hubo transferencia de derechos de las comunidades negras. Declaró que, las irregularidades en este acto son evidentes, ya que ADRIÁN PÉREZ CAVADIA, hijo de SIXTO PÉREZ DÍAZ, aseguró que para la época del poder y la negociación, su padre ya había muerto; agregó que su hermano MIGUEL fue artífice y beneficiario de la venta que arregló con alias "Palillo", de quien aseguró se trata de un temible jefe paramilitar que operó en el sector, afirmación asentida por MIGUEL PÉREZ CAVADIA. Además, encontró contradictorio que MUÑOZ GONZÁLEZ niegue haber suscrito poder con PÉREZ GARCÍA y a su turno **ÁLVAREZ VERTEL** refiera en injurada que la compra, en realidad, no fue por la cantidad de terreno fijada en la mencionada escritura.

Igualmente, resaltó que a través de la misma escritura, dividieron el predio en cuatro lotes, lotes 1, 2 y 3 de 1.021, 600 y 1.220 hectáreas, respectivamente, ubicados en el sector Camelias Brisas, y el 4 de 1.400 hectáreas, ubicado en la vereda Caño Claro del municipio de Riosucio (Chocó), y se los repartieron así: la "Asociación colombiana de pequeños cultivadores de palma de aceite" ACOPALMA, representada por **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, se quedó con el lote 1, y la "Asociación de antiguos vecinos de la cuenca del río

Curvaradó y zonas aledañas” tomó los lotes 2, 3 y 4, configurándose de esta manera un despojo de todas estas tierras a las comunidades negras que ostentaban títulos colectivos.

Posteriormente, ACOPALMA, bajo la dirección y representación de **ÁLVAREZ VERTEL**, suscribió contrato de comodato con la empresa Palmas S. A., sobre el mismo terreno de 1.021 hectáreas o lote 1, empresa palmicultora que utilizó 500 hectáreas para la siembra de palma.

El contrato de comodato entre ACOPALMA, representada por **ÁLVAREZ VERTEL**, y Palmas S. A. se pactó para 6 años (entre el 7 de noviembre de 2002 y el 7 de noviembre de 2008) y una vez vencidos los agrupados podrían obtener el 30% de las utilidades que percibiera la sociedad por la explotación de esas plantaciones. Es de anotar, que el representante legal de Palmas S.A. es el coprocesado IVÁN PATIÑO PATIÑO, quien aceptó cargos por estos hechos, y en indagatoria reconoció que en virtud de lo dispuesto en la Ley 70 de 1993 estaba prohibida la venta de esos terrenos colectivos, igualmente admitió que esos terrenos recibidos en comodato por **ÁLVAREZ VERTEL** y en donde cultivó palma, estaban incluidos dentro de los territorios amparados por dicha normatividad.

Asimismo, **REMBERTO MANUEL** reconoció que es miembro de la *Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite* ACOPALMA y representante legal de la misma desde el año 2000, la cual se constituyó con la intención de sembrar palma y con la idea de obtener beneficios financieros de FINAGRO.

Así las cosas, es claro para el Fiscal que este justiciable perfeccionó un contrato de comodato con Palmas S. A. para la explotación de la palma de aceite, que a enero de 2008 alcanzaba las 462 hectáreas sembradas de las 1.021 hectáreas de un lote segregado del predio acrecentado de SIXTO PÉREZ DÍAZ. Fue entonces un excelente cooperador y aliado estratégico de Palmas S.A. para la implantación de cultivos de palma de aceite en predios de origen fraudulento para de esta forma desplazar a las comunidades y tornar los terrenos en háberes productivos.

Igualmente, dijo vislumbrar que a través de la suscripción de la escritura pública 735 del 8 de octubre de 2002 en la Notaría de Carepa (Antioquia), tanto el

vendedor HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, como los compradores, entre ellos ACOPALMA, instrumentaron el desarraigo y despojo de todos los poseedores de terrenos englobados dentro de esas 4.207 hectáreas y 4.814 metros cuadrados que se le accedieron arbitrariamente al predio La Nevera.

Por tanto, afirmó que **REMBERTO MANUEL** ejecutó personalmente labores que condujeron al proceso de desplazamiento forzado de muchos colonos y residentes de terrenos accedidos irregularmente. Además, tuvo conocimiento del desplazamiento e invasión de áreas de especial importancia ecológica, lo cual se deduce de la declaración de IVAN PATIÑO PATIÑO.

En tales condiciones, solicitó que se condene a este procesado como coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En lo que refiere a **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, y en lo que respecta al delito de concierto para delinquir, manifestó que encarna la doble condición de militante desmovilizado de las autodefensas y miembro de una de las asociaciones de cultivadores de palma de aceite, la cual tiene vínculos con la asociación ilegal, que consiguieron cuantiosos créditos sobre cultivos asentados en tierras arrebatadas a las comunidades afrodescendientes.

El primer rasgo, en su parecer se acredita mediante el aporte del oficio 363298 del 25 septiembre de 2007, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, en el cual se consigna que de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite ACOPALMA aparece como desmovilizado de las autodefensas **MONTIEL MERCADO**, pues fue militante del bloque Héroes de Tolová. Por tanto, su incursión en la región de Bajirá no fue tan descontextualizada ni circunstancial como lo planteó, sino que tuvo una participación directa con las Autodefensas y, por ende, en la comisión de algunas conductas ejecutadas por esa agrupación como el desplazamiento forzado, mediante la adquisición de tierras de manera irregular.

Citó que en la audiencia pública **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** precisó que para crear una empresa palmera en Belén de Bajirá, se "buscó a

unas personas de Córdoba, concretamente residentes de Villanueva para montar a esas empresas, dentro de quienes se encontraban ROBIN CALONGUE ALCALÁ Y DAGOBERTO MONTIEL a quienes conoció en una finca ganadera de FIDEL CASTAÑO, esos muchachos los conoció boleando -sic- machete y fumigando, luego decidieron entregar esas tierras en comodato, pues el tema no se movía".

Además de haber tenido relación o haberse beneficiado de FUNPAZCOR, fueron trabajadores de los hermanos CASTAÑO, que al haber implantado el modelo FUNPAZCOR en Urabá, trajeron varios empleados o beneficiarios de esa fundación para que hicieran parte de la Asociación creada en Bajirá, con los fines de cultivar palma.

Por lo anterior, le resulta evidente al instructor que el procesado perteneció a la asociación criminal de las Autodefensas, concretamente al bloque Héroes de Tolová, donde era conocido como "El Cucho" y "El Retro", pertenencia que luego le permitió figurar como desmovilizado, recibir salarios por esa condición, sin que a la fecha haya sido investigado, acusado, condenado o absuelto por esa conducta penal, razón por la que resulta imputable el delito de concierto para delinquir agravado dada la comisión de conductas de desplazamiento.

En lo que respecta al desplazamiento forzado, analiza que se demostró que una vez instaladas las primeras empresas cultivadoras de palma con el propósito de adquirir tierras de manera irregular y así cumplir el requisito indispensable ante FINAGRO para la obtención de beneficios agrícolas o trámite de créditos, estas empresas procedieron a conformar asociaciones que supuestamente estuvieron integradas por pequeños cultivadores de palma e inclusive por trabajadores de las mismas empresas, pero en realidad, los integrantes o miembros de esas asociaciones de cultivadores de palma pertenecían a la agrupación ilegal de las Autodefensas, es decir, que no tenían nada que ver con el cultivo de la palma de aceite.

En este contexto, como lo explicó CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, la empresa URAPALMA S.A, con los propósitos anotados, creó 3 asociaciones, entre ellas la *Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite*, ACOPALMA, órgano jurídico que tuvo papel protagónico para la legalización e introducción al tráfico jurídico de inmensos globos de tierra que

se aumentaron intempestivamente por la figura de la accesión, que luego fueron vendidas a las empresas palmeras.

Precisamente, esta actividad es la que se reprocha al procesado, pues es claro que fue secretario de ACOPALMA, una de las asociaciones creadas por URAPALMA que terminó apoderándose de grandes extensiones de terreno mediante la figura de la accesión con el colateral desplazamiento de todos sus residentes, concretamente de 1.021 hectáreas en la vereda Caño Claro del municipio de Ríosucio (Chocó), tierras accedidas a la parcela de 33 hectáreas y media de SIXTO PÉREZ DÍAZ, quien falleció en julio de 1999 y que, además, estaban amparadas por títulos colectivos bajo el régimen de la Ley 70 de 1993, por ende, estaba prohibido efectuar tal figura o cualquier otro tipo de tradición de los fundos rurales.

En tales condiciones, luego de que el Fiscal describió los actos jurídicos que se realizaron en ese predio, en los cuales tuvo que ver la *Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite*, ACOPALMA, de la cual era secretario **MONTIEL MERCADO**, el Fiscal alegó que, desde esa condición en ACOPALMA, apéndice de la empresa URAPALMA S. A., intervino directamente con el fin de apoderarse de grandes extensiones de terreno de las comunidades afrodescendientes, pues se relacionaba con las Autodefensas, las cuales gestionaron el mega proyecto de cultivo de palma de aceite en predios de la vereda Caño Claro del municipio de Ríosucio.

Además, su voluntad y conocimiento en la comisión de las conductas, la derivó precisamente de sus atestaciones en la indagatoria. Asimismo, dijo que el justiciable desplegó varios actos orientados inequívocamente a la constitución de ACOPALMA, pues aparece un memorial manuscrito y firmado por éste y **REMBERTO ÁLVAREZ VERTEL**, dirigido a la Cámara de Comercio de Urabá en Apartadó, en el que se solicitó la expedición de personería jurídica para la *Asociación colombiana de pequeños cultivadores de palma de aceite*. Estos aspectos lo llevan a inferir que el procesado tenía conocimiento de su actuar, máxime que eran actos jurídicos complejos, regulados normativamente, como la conformación de una asociación, sujetos a presupuestos estructurales.

Por lo anterior, afirmó que este justiciable ejecutó actos que condujeron a desplazar integrantes de las comunidades afrocolombianas localizadas en los terrenos adquiridos irregularmente.

Finalmente, en lo que respecta al delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, en el presente caso explicó que se ha venido imputando a otros procesados esta conducta penal, por haber invadido terrenos de propiedad de las comunidades negras, amparadas por la Ley 70 de 1993. Sin embargo, en el caso del procesado, encontró que al haber fungido como secretario de una asociación que sirvió como medio para la adquisición de fundos rurales de manera irregular, lo que a la sazón generó actos de desplazamiento de personas que ostentaban títulos comunitarios, le es imputable el delito de invasión de áreas ecológicas, aunque no figure como comprador directo de dichos terrenos.

En tales condiciones, solicitó condena en su contra como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En relación con **ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ** el Fiscal argumentó que fue militante en el grupo de las Autodefensas, bloque Pacífico, Frente Héroes de San José de Palmar, y fue socio fundador de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, ACOPALMA.

Así las cosas, en lo que incumbe al delito de concierto para delinquir agravado, refirió el informe 363298, del 25 septiembre de 2007, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DÍH, donde **CALONGE ALCALÁ** aparece en sus archivos como desmovilizado de dicho Bloque y Frente, condición que confirmó cuando admitió que fue conductor de los hermanos Castaño.

Asimismo, el delegado de la Fiscalía aludió a un aparte de la declaración de **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, en la cual lo mencionó. Así las cosas, considera que se acreditó que este procesado perteneció a las Autodefensas, que fue la organización que gestionó el proyecto de cultivo de

palma de aceite, para el cual se acudió a la accesión ficticia y la usurpación de tierras de las comunidades ancestrales, propiciando su desplazamiento. Por lo que le resulta imputable el delito de concierto para delinquir agravado.

En lo concerniente al desplazamiento forzado, mencionó que dentro del informe judicial que se relacionó, aparece que **CALONGE ALCALÁ** fue otro de los socios fundadores de ACOPALMA, condición que fue confirmada en el acta de constitución de esta sociedad, la cual firmó como socio fundador. Asociación creada por la empresa URAPALMA S.A., precisamente para alcanzar propósitos como la adquisición de tierras de manera irregular con el colateral desplazamiento de los moradores, y además servir de puente en la obtención de créditos y beneficios económicos de FINAGRO.

En ese rol terminó, junto con otras personas, apoderándose irregularmente de 3.220 hectáreas de terreno en la vereda Caño Claro de Ríosucio a través de accesiones a la parcela de SIXTO PÉREZ DÍAZ, implantando cultivos de palma de aceite, con lo cual se ocasionó el desplazamiento a las comunidades detentadoras de esos terrenos.

Estas dos condiciones lo llevan a la conclusión de que miembros de las autodefensas se involucraron en asociaciones de cultivadores constituidas por las primeras empresas cultivadoras de palma como URAPALMA, con el propósito de adquirir tierras de manera irregular y servir de requisito indispensable ante FINAGRO para la obtención de beneficios agrícolas o trámite de créditos.

A pesar de que era requisito indispensable que estas asociaciones estuvieran conformadas por pequeños cultivadores de palma e inclusive por trabajadores de las mismas empresas, en realidad algunos de los integrantes o miembros de esas asociaciones de cultivadores de palma pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, que no tenían que ver con el cultivo de la palma de aceite, y ese es el caso de **MONTIEL MERCADO** y **CALONGE ALCALÁ**.

De otro lado, refirió que CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, asesor jurídico de URAPALMA, afirmó que a raíz de la creación del Incentivo de Capacitación Rural, que era una especie de dádiva que ofrecía el Estado y que operaba a modo de redescuento de la deuda con el intermediario financiero,

debía sembrarse un cultivo de tardío rendimiento, y era necesario, además, que el proyecto estuviera ligado con asociaciones de cultivadores.

Por lo anterior, en criterio del ente instructor el acusado participó en un plan común en la comisión del desplazamiento forzado, pues los actos de adquisición de tierras se convierten en arbitrarios y generadores de los desplazamientos de integrantes de las comunidades negras. Además, tuvo conocimiento y voluntad en la comisión de las conductas, ya que se hizo miembro de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite ACOPALMA.

Así las cosas, solicitó su condena como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En cuanto a **GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO** para el Fiscal se acreditó que militó en las autodefensas y fue miembro de una asociación o forma asociativa de cultivadores de palma de aceite que consiguieron créditos sobre cultivos asentados en tierras arrebatadas a las comunidades afrodescendientes y que además dispusieron de terrenos obteniendo ganancias, acciones con las cuales generaron el desplazamiento de los habitantes de las cuencas de marra.

El primer cargo, según indicó, se acredita con su aceptación en diligencia de indagatoria, donde afirmó que perteneció a la asociación paramilitar, de la cual se desmovilizó, lo cual se constató igualmente con el oficio 363298 del 25 de septiembre de 2007, del CTI, en el cual se consignó que el acusado, además de ser miembro de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, figura como desmovilizado del grupo paramilitar, concretamente del bloque Héroes de Tolová. Además, dicha conducta es agravada por cometer desplazamientos.

Respecto a los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, se probó que el procesado tuvo vínculos con ACOPALMA, desde donde se dirigieron actos coactivos contra la población afrocolombiana asentada en dicho sector, según el Fiscal, en la medida en que

obtuvieron sus tierras fraudulentamente y los desarraigaron de su lugar de residencia. Además, dicha asociación fue una de las creadas por URAPALMA, que terminó apoderándose mediante la figura de la accesión de terrenos, concretamente de 1.021 hectáreas en la vereda Caño Claro, municipio de Ríosucio, Chocó, que además estaban amparados por títulos colectivos bajo el régimen de la Ley 70 de 1993, de suerte que estaba absolutamente impedido para efectuar tal figura o cualquier otro tipo de tradición de los fundos rurales.

Como muestra de ello mencionó los documentos aducidos como prueba a través de inspección judicial que se realizó el 6 de septiembre de 2007 en la Cámara de Comercio de Urabá, con sede en Apartadó.

De otro lado, citó a **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, miembro de ACOPALMA, quien manifestó en injurada que el rol en la asociación fue importante al vender la imagen de seriedad, dando la apariencia de ser una empresa legítima y con vocación para percibir préstamos del sector financiero, como en efecto sucedió, para la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes, pues lo importante era tener una apariencia de legalidad para acceder a los créditos de FINAGRO a través de los intermediarios financieros. Asimismo, el Fiscal aludió a las atestaciones de PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS en relación con que las asociaciones de pequeños cultivadores eran empresas ficticias; y a la declaración de CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ respecto a los propósitos de la creación de las asociaciones, las cuales tuvieron papel protagónico para la legalización de terrenos.

Desde esta perspectiva dijo que, la organización paramilitar a la que perteneció **GABRIEL SEGUNDO**, fue la promotora de las acciones que generaron el desplazamiento forzado y la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Por tanto, solicitó su condena como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En lo relativo a **ORLANDO MORENO MORA**, para la Fiscalía su intervención en el *concierto para delinquir agravado*, deviene de la conformación de asociaciones de cultivadores de palma para acceder a los incentivos de FINAGRO, a través de los intermediarios financieros. En este contexto, explicó que interviene el justiciable al crearse como apéndice de la empresa URAPALMA, la *Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del río Curvaradó y Zonas Aledañas*, el 20 de junio de 2002, en la que aparece como socio fundador y posteriormente fue elegido como presidente. Con miras a demostrar este aspecto, se introdujo certificado de existencia y representación de dicha asociación, expedido por la Cámara de Comercio de Urabá, en el que figura como representante legal.

Debido a dicha posición, ejecutó conductas para la adquisición irregular de tierras, con el propósito de cultivar palma de aceite, que a la sazón generaron los desplazamientos. Algunos casos emblemáticos son los referidos a los terrenos de SIXTO PÉREZ DÍAZ, JEREMÍAS DURANGO GUISAO, LUIS URANGO QUINTERO, predios que terminaron en propiedad de la *Asociación de antiguos vecinos de la cuenta del río Curvaradó y zonas aledañas*, e inicialmente eran pequeñas parcelas que no llegaban a las cien hectáreas y pasaron a convertirse en extensiones de miles de hectáreas, por las irregulares accesiones fundadas en inexistentes labores de drenación, efectuadas por formas asociativas, entre ellas la mencionada con antelación, lo cual condujo a que el INCODER, mediante resoluciones 702 de marzo de 2006 y 2672 de diciembre 6 del mismo año, rechazara tales accesiones.

Estas irregularidades se avizoraron con los testimonios de ADRIÁN PÉREZ CAVADIA, hijo de SIXTO PÉREZ DÍAZ; y JEREMÍAS DURANGO GUISAO.

En cuanto al delito de desplazamiento forzado, según lo anterior, argumentó que las conductas ejecutadas en la adquisición de tierras con unos propósitos definidos, no sólo hicieron parte de una empresa criminal, sino que terminaron consumando este delito, lo cual se fundamenta, además, en los testimonios de SANTANDER DE JESÚS PEÑA GUZMÁN, TERESA DE JESÚS ZAPATA GUTIÉRREZ, CLELIA SANTAMARÍA ROMERO, DEMETRIO MANUEL LEÓN, EUSTAQUIO POLO RIVERA, entre otros, quienes señalaron a **MORENO MORA** como comisionista en la venta de los predios.

En suma, resaltó el Fiscal que varios declarantes aseguraron que el acusado aprovechó su actividad de comisionista de la empresa Palmadó para forzar su salida del sector, advirtiéndoles que si no vendían sus tierras no respondían por ellos, es decir, que intimidó a las personas para lograr su propósito de que les vendieran sus tierras, para posteriormente pagarles sus fincas como quisieron.

Adicionalmente, pidió tener en cuenta que los testigos aseguraron haberlo visto actuar en sincronización y en armonía con reconocidos paramilitares como alias "*El Diablo*", quien responde al nombre de **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**.

Finalmente, respecto a la invasión de áreas de especial importancia ecológica, adujo que con ese inusual proceso de acceso de tierras se afectaron derechos de comunidades afrodescendientes porque se incluyeron terrenos asignados a ellas amparados por títulos colectivos en desarrollo de postulados supralegales.

Por lo anterior, solicitó que se condene al procesado como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautor del delito de desplazamiento forzado *-en concurso homogéneo y sucesivo-* y coautor del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En relación con **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ**, socio de la empresa "Selva Húmeda" en compañía de **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, respecto al delito de Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, por 244. 51 hectáreas de terrenos que adquirió el procesado y que se localizan en zonas de reserva, de las cuales 189.67 están en territorios colectivos, argumentó el Fiscal que no obstante no aparecer registro del impacto ambiental, no debe olvidarse que los terrenos tienen uso actual para la ganadería, lo cual genera un impacto ambiental negativo.

Citó el dictamen que rindió el Ministerio del Medio Ambiente en el aparte que indica que parte de los terrenos que compró **RAÚL ALBERTO** se localizan al interior de los conocidos terrenos colectivos. En tal sentido, argumentó que si bien es cierto **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA** en sus diferentes intervenciones precisó que **PENAGOS GONZÁLEZ** no tuvo relación con los

paramilitares, sí compró tierras en Bajirá e inició obras civiles, con lo que impactó el medio ambiente.

Así las cosas, de las circunstancias de compra de los inmuebles y su localización, deduce el conocimiento que el procesado tuvo de esta conducta, sin necesidad de conocer de manera específica y detallada el contenido de la ley 70 de 1993. Por lo que solicitó se profiera sentencia condenatoria para este justiciable como coautor material del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado.

Respecto a **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO** considera que se demostró que al haber comprado terrenos al interior de un colectivo de la comunidad afrocolombiana, según lo delimita la Ley 70 de 1993, incurrió en esta conducta, pues a través de los medios de prueba documental referidos, se acreditaron las compras efectuadas en la cuenca de Curvaradó, territorios que se encuentran comprendidos por los colectivos de las comunidades negras y, aún más, se localizaban en un extremo del mencionado triángulo descrito por RAÚL EMILIO, creado por los paramilitares, precisamente para proteger las empresas que desarrollaron el proyecto de palma.

También estimó se consuma este injusto, en la modalidad de agravado, por el daño o alteración del medio ambiente que se alcanzó a ejecutar, como se dijo en el dictamen del Ministerio del Medio Ambiente.

Agregó que, RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA expresó que en los terrenos pertenecientes a la empresa Selva Húmeda, se estaban secando unos lagos naturales, hábitat de unas aves silvestres conocidas como patos piscingos, lo que motivó a que VICENTE CASTAÑO diera la orden de sacarlos de la zona. Al respecto, se allegaron certificados de CODECHOCÓ y CORPOURABÁ, en los que se indica que si bien no se concedió licencia ambiental al procesado para la reforestación o cultivos de palma, pues no se necesitaba licencia, a través del dictamen del ministerio de Medio Ambiente y los medios de prueba testimonial, se acreditaron los daños ocasionados.

Además, para el instructor no se puede amparar la conducta del sindicado con la copia de dos contratos, uno de julio de 2007 y otro sin fecha, suscritos posiblemente entre **RUIZ COSSIO** y el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo

objetivo era la reforestación de la región de ocurrencia de los hechos, pues estos contratos fueron suscritos posteriormente a la fecha de las imputaciones.

Así las cosas, el Fiscal consideró que resulta atribuible la conducta de invasión de áreas de especial importancia ecológica, a título de coautor, por lo que solicitó su condena por este delito.

En cuanto a la responsabilidad de **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA**, dice el Fiscal que obran elementos de prueba que informan su presencia en Bajirá, donde a la sazón, compró terrenos de los colectivos de las comunidades negras y ejecutó obras configurativas del delito que se le atribuye. En primer lugar, al ente instructor le resulta ilógico que el justiciable, poco conocedor del ramo de la palma, pues fungía como prestigioso empresario en Medellín en ramos diferentes a la agricultura en Urabá, haya comprado tierras en un sector de Curvaradó, con la exclusiva finalidad de cultivar palma, sin darse cuenta que existían otras empresas con la misma finalidad y que, para poder asentarse allí, debían contar con el permiso de los Castaño.

En este sentido, aduce se demostró que, el 6 de agosto de 2002, **FREGNI OCHOA** le compró a la firma JEG EAT, según escritura pública 1322, un terreno con cabida superficiaria de 56 hectáreas y 2.500 metros cuadrados. Posteriormente, este acusado, el 8 de octubre de 2002, compareció a la notaría única de Carepa y mediante escritura pública 736 de la misma fecha, hizo declaración de accesión al predio adquirido legalmente (56 hectáreas) de una superficie de 307 hectáreas y 1.000 metros cuadrados, para lograr de esta manera una superficie de 363 hectáreas y 3.500 metros, ubicado en las Camelias, municipio de Carmen del Darién.

Así entonces, un análisis comparativo de la escritura 736 de 2002 con otras escrituras referidas en este proceso, como las escrituras 735 de 2002, de la Notaría de Carepa, relacionada con el caso de SIXTO PÉREZ; la escritura 094 de 2000, referente al caso de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, se encuentra identidad en su estipulación y argumentos para efectuar la accesión.

Argumentos que fueron diseñados por CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, sustrayéndose al concepto rendido por la Sala de Servicio y

Consulta Civil del Consejo de Estado, que ha negado la existencia de ese tipo de accesiones y, desde luego, apartándose de las estipulaciones legales.

Lo anterior le permite concluir que el procesado incurrió en la conducta de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Ciertamente, en primer lugar, los terrenos que compró se ubican en la vereda Nueva Esperanza, epicentro de los colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó, creados y protegidos por la Ley 70 de 1993. En segundo lugar, mediante dictamen del Ministerio del Medio Ambiente, se dijo que la firma *Inversiones Fregny Ochoa*, empresa proyectada para el cultivo de palma de aceite, en cuanto al recurso suelo, el nivel freático del mismo se alteró con la construcción de drenajes y eliminación de la cobertura vegetal; y, en tercer término, si bien, como lo precisó HASBÚN MENDOZA, los FREGNI no acudieron a las AUC para comprar tierras, sí eran conocedores del proyecto y acudieron a una de las estrategias jurídicas establecidas por la organización, como fue la de las accesiones irregulares.

Por tanto, solicitó la condena de **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA** como coautor del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Procurador Judicial: Inicialmente indicó que no se referirá a la materialidad de las conductas, pues la misma se probó. En relación con el aspecto de la responsabilidad expuso, en lo atinente a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA, RÁUL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ y JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, que para la concurrencia del verbo rector invadir es necesario que exista dolo, para lo cual se requiere que el sujeto activo actúe de manera consciente. En este caso, considera que dichos justiciables nunca conocieron, ni se les advirtió, que la tierras que ocuparon hacían parte de una propiedad colectiva, máxime si ni siquiera el mismo gobierno nacional conocía esa limitación de la Ley 70 de 1993, de la cual tampoco eran conocedores las comunidades afrodescendientes, y el Estado tampoco se preocupó por instruir a los registradores de instrumentos públicos en relación con que dichos territorios no se podían registrar o escriturar, lo que llevó a que el INCORA o INCODER adjudicaran la propiedad de esos terrenos a varias personas.

En su criterio, estos justiciables actuaron de buena fe, incluso muchos de los que vendieron sus tierras manifestaron que hacían explotaciones madereras,

derribaron bosques para la siembra de banano, arroz, etc., sin que ninguna autoridad vigilara la conservación de esa zona. Además, nunca se les advirtió que no podían vender sus tierras, es decir, que esos poseedores también actuaron de buena fe al vender los derechos que tenían sobre ellas.

En tales condiciones, como no se demostró que las áreas protegidas por la Ley 70 de 1993 estuviesen definidas e identificadas, para él no se puede establecer la responsabilidad de estos acusados por las transacciones que realizaron con estos predios, ni tampoco se puede predicar que ingresaron a la fuerza al sector o que se aprovecharon del conflicto armado. Por tanto, solicitó su absolución por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Respecto a **MARIO LEÓN VILLA PACHECO, MANUEL DENNIS BLANDÓN, ROBIN MANUEL CALONGUE ALCALÁ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA y DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO** solicitó sentencia absolutoria, ya que ninguno de los declarantes que intervino en la audiencia pública los señaló como autores o partícipes de las conductas por las que la Fiscalía los acusó. Además, si bien es cierto algunos de ellos tuvieron vínculos laborales, como socios o representantes de algunas asociaciones que existieron en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiando, esa circunstancia no es prueba suficiente para condenarlos, pues debe tenerse en cuenta que cuando surgieron las diferentes asociaciones anexas a la empresa matriz del cultivo de palma, ya las tierras estaban sembradas de palma africana y muchas de ellas en producción.

Del mismo modo, dijo que no obstante se demostró que muchos de ellos aceptaron haber ayudado a conseguirle terrenos a las empresas palmicultoras, a cambio de comisiones, y que eran miembros de esas asociaciones, fueron engañados o manipulados. Al respecto se refirió a la declaración de **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ** en cuanto a **MONTIEL MERCADO y CALONGUE ALCALÁ**, a quienes calificó como campesinos.

Igualmente, adujo que no existen pruebas de que estos acusados se concertaron para el proyecto de palma, ni participaron en la creación de las empresas palmicultoras ni en el despojo de tierras, ni que implementaron las accesiones, máxime si se tiene en cuenta que varios de ellos fueron víctimas de desplazamiento. Dichos justiciables no ejercieron actos violentos sobre la

población civil para desplazarla y, no obstante varias empresas palmicultoras contribuyeron con el desplazamiento, ello no significa que los mismos participaron en esos hechos.

Con respecto a la invasión de áreas de especial importancia ecológica, aludió a que los procesados de marras tampoco son responsables por este delito, ya que no adelantaron obras que atentaran contra el medio ambiente ni adquirieron terrenos colectivos. Además, para “invadir” es necesario el conocimiento de las áreas que son protegidas por la Ley 70 de 1993, por ser terrenos colectivos. Por tanto, solcito que se les absuelva de los cargos por los que la Fiscalía los acusó.

Entretanto, respecto a **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, adujo que, no obstante le compró terrenos a **DAZA PRETEL**, ello no significa que se concertó con paramilitares para desplazar a la población y así lograr que los campesinos les vendieran sus tierras para luego sembrarlas de palma. Además, ningún testigo la señaló como autora de las conductas que se le endilgaron. Por ello también pidió su absolución.

En cuanto a **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** solicitó la absolución porque, no obstante **ROLDÁN PÉREZ** lo conoció como empleado de **FUNPAZCOR** y fue socio de **ACOPALMA**, ello no lo considera suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y configurar las conductas por las que se le acusó.

Finalmente, en cuanto a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, HERNÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ, JAVIER JOSÉ DAZA PRETEL, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA y JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, afirmó que **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ** fue enfático en manifestar que **GÓMEZ HERNÁNDEZ** visitaba con frecuencia a **CARLOS** y a **VICENTE CASTAÑO** y llevó a un narcotraficante llamado **ITALO CIANCI** a donde éste último para el montaje de las empresas del cultivo de palma. Asimismo, **ROLDÁN PÉREZ** se refirió a la relación que **KATIA PATRICIA** y **SOR TERESA** tuvieron con las empresas palmicultoras; al igual que **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA**, quien, a su vez, relacionó a **DAZA PRETEL, SOR TERESA, SIERRA MORENO, VÉLEZ GIRALDO** con los Castaño y el proyecto palmero en las

cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, sectores dominados por las AUC, con el propósito de lograr la consecución de esos terrenos, para lo cual empresarios, socios y asesores de las empresas palmicultoras realizaron comportamientos ilícitos para lograr su objetivo común.

Por tanto, como halló pruebas que demostraron la concertación, el desplazamiento y la invasión de áreas de especial importancia ecológica, y el respectivo nexo causal, solicitó su condena, ya que, en relación con este último, la invasión de tierras fue planeada con la finalidad de que aparecieran como títulos individuales adjudicados con antelación a las resoluciones proferidas por el INCORA.

Parte Civil: El doctor Manuel Alejandro Garzón Correa, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, apoderado suplente de la doctora Liliana Ávila García, representante de la parte civil, solicitó sentencia condenatoria en contra de los procesados.

En principio se refirió a varios ítems, entre ellos, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de las comunidades ancestrales asentadas en la región del Bajo Atrato y en particular en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó; el reconocimiento de organismos internacionales y del Estado colombiano acerca de las violaciones a los derechos humanos; el dominio territorial, control perimetral y violencia paramilitar, a efectos de que ingresaran las empresas palmicultoras en el sector.

Posteriormente, aludió al cultivo de palma como estrategia paramilitar, respecto a lo que declararon EVER VELOZA GARCÍA y VICENTE CASTAÑO, alias El Profe; además recordó las misivas entre éste y su hermano CARLOS CASTAÑO; las declaraciones de MAURICIO GARCÍA, alias Doble Cero; y FREDY RENDÓN HERRERA, alias El Alemán. Del mismo modo, mencionó que se supo en el proceso que para hacer efectivos dichos cultivos, se debieron realizar ventas forzadas y negocios jurídicos para apropiarse de los territorios, aspecto en relación con el cual declararon RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, FREDY RENDÓN HERRERA, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS y ENRIQUE MANUEL PETRO, quienes de una u

otra manera se refirieron a la participación de varios procesados en las compraventas de las tierras y la manera de obtención de las mismas.

Igualmente, citó la declaración de varias víctimas como GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA, MIRIAM DE JESÚS NARVÁEZ, ALBERTO VITALINO MOSQUERA, MARTHA MARGUIT MARTÍNEZ, CATALINA MÁRMOL LEMUS, MIGUEL ENRIQUE PÁEZ PETRO, BERNARDO DE JESÚS DURANGO OSORIO, ENRIQUE MANUEL PETRO HERNÁNDEZ, JORGE ELIÉCER HERNÁNDEZ SANTOS y MIRIAM DE JESÚS NARVÁEZ, quienes aludieron a las modalidades que se utilizaron en su contra para la consecución de sus predios.

De otra parte, arguyó que los comandantes paramilitares EVER VELOZA GARCÍA, FREDY RENDÓN HERRERA y RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA indicaron que el proyecto palmero fue gestado e iniciado por VICENTE CASTAÑO a través de la empresa URAPALMA, razón por la cual le resultan evidentes los vínculos y nexos de dicha empresa con las demás asentadas en la región, salvo las que se vieron forzadas a salir por no pertenecer a la misma estructura.

En ese sentido, se refirió a los pormenores del testimonio de CARLOS DANIEL MERLANO, abogado de la empresa URAPALMA y gestor de la idea de sanear los territorios mediante la accesión y las asociaciones. Aunado a ello, según sus atestaciones, varios comandantes paramilitares como DIEGO MURILLO, alias "Don Berna" o "Adolfo Paz", JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, EVER VELOZA GARCÍA y RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA eran dueños o tenían participación en otras empresas.

Argumentó que en el período en que se produjeron los primeros desplazamientos forzados en la región, hacia 1996, durante las compras de territorio e invasión hechas por las empresas y hasta su conformación formal como sociedad y la consecuente explotación territorial, los mencionados paramilitares se desempeñaron como comandantes del grupo criminal y, al mismo tiempo, como prósperos empresarios en la región. Sus socios en las empresas tenían pleno conocimiento de estas situaciones, tanto de que el proyecto lo estaban desarrollando en tierras pertenecientes a comunidades

desplazadas, como que éste era impulsado por la comandancia máxima del grupo paramilitar.

En efecto, analizó que el aparato organizado de poder paramilitar no está conformado únicamente por las unidades militares armadas, sino por toda una red de apoyo, patrocinio, sostenimiento, financiación, fomento, propaganda y demás, compuesta por un gran número de empresarios, ganaderos, congresistas, alcaldes, gobernadores, militares, periodistas, curas, abogados, etc., quienes actuaban mancomunadamente con la organización criminal, como los procesados.

Arguyó que es falaz que el desplazamiento y expulsión de la población en el Bajo Atrato fuera consecuencia del enfrentamiento militar entre los paramilitares -con la connivencia, tolerancia y aquiescencia y en ocasiones en desarrollo de operaciones coordinadas y conjuntas con la Brigada 17 del Ejército Nacional- y el grupo guerrillero FARC-EP, cuya finalidad de los primeros era conseguir el dominio territorial de la región y derrotar a la insurgencia; y que posteriormente, paramilitares-empresarios aprovecharon la situación de abandono para apropiarse ilegalmente de las tierras mediante actos que se masificaron a partir de 2000, pues es posible colegir que el despojo y apropiación ilegal no fue un resultado fortuito o una consecuencia marginal, sino que fue uno de los objetivos principales, fijado desde un principio, en conexión directa con los ataques sistemáticos y generalizados en contra de la población civil. Al respecto, se refirió a las atestaciones de EVER VELOZA GARCÍA acerca de la ubicación estratégica de los terrenos y del objetivo de su accionar criminal, consistente en el despojo de las tierras pertenecientes a las comunidades negras para establecer proyectos agroindustriales de palma africana.

De otra parte, señaló que RODRIGO ZAPATA SIERRA, alias "Ricardo", comandante paramilitar de las AUC, manifestó que desde el año 1997 estuvo en la zona de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó adquiriendo tierras, y que desde esa época tenía conocimiento de ciertas zonas que no eran aptas para ser adquiridas porque estaban sometidas al trámite de la adjudicación de territorios colectivos.

Además, concluyó que si se tiene en cuenta que las labores de estudio e inteligencia que adelantaron los paramilitares sobre las tierras iniciaron en

absoluta correspondencia con el año 1997, en el que se desató la arremetida militar de los paramilitares sobre los territorios colectivos, la conclusión es que el desplazamiento forzado no fue una consecuencia marginal de los enfrentamientos bélicos, sino una estrategia diseñada e implementada con precisión, con la finalidad de obtener beneficio económico.

En relación con los acuerdos ilegales con Consejos Comunitarios suplantados, el apoderado de la parte civil adujo que en el proceso se ha hecho una amplia exposición respecto a diferentes estrategias de legalización del despojo y la suscripción ilegal de Acuerdos y de Alianzas Estratégicas con supuestos representantes legales de Consejos Comunitarios o con familias desplazadas de la región. Al respecto aludió a los testimonios de VELOZA GARCÍA y HASBÚN MENDOZA.

Del mismo modo, adujo que desde el año 1999, previo a su entrada formal, las empresas palmeras y ganaderas asentadas en las dos cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, utilizaron como estrategia, para obtener títulos o compraventas de los territorios colectivos, supuestas compras de mejoras, a través de "comisionistas", muchos de los cuales son reconocidos paramilitares, cuya función consistía en la intermediación de la "compra" de tierras para las empresas, pues los comisionistas ofrecían comprarlas mediante amenazas y actos de coacción a los miembros de las comunidades, y así lograron que estos vendieran sus tierras a precios irrisorios, hasta 10% o menos de su valor real. En muchas ocasiones no pagaron lo ofrecido o en muchos casos las comunidades abandonaron la tierra por temor a ser asesinados, circunstancias que fueron relatadas por varios testigos en el proceso, entre ellos, EFRÉN ANTONIO AREIZA GÓMEZ, SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO, MARTHA REGINA SERNA BENÍTEZ, GEORGINA DEL CARMEN MAUSSA NOBLE, MARIO MANUEL CASTAÑO BRAVO, PEDRO PABLO PALACIO CUESTA, LUIS EDUARDO COGOLLO HOYOS, MEDARDO ANTONIO GARCÍA PADILLA, etc.

Mencionó que, enfrentados con la situación desesperante provocada por la presencia de grupos paramilitares, los bloqueos económicos que no permitían comercializar sus productos y las necesidades económicas generadas por su situación de desplazamiento, varios miembros decidieron, ante las amenazas contra su vida y la necesidad económica, vender sus tierras. Empero, quienes

resistieron las presiones de los comisionistas y se negaron a vender, encontraron que sus predios fueron vendidos sin su conocimiento.

Además de lo reseñado respecto al objetivo estratégico de los paramilitares para hacerse a las tierras de Urabá, indicó que la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Colombia, a través del INCODER, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Tribunal Administrativo de Chocó, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, entre otros, constataron que no hubo un solo desplazamiento - circunscrito a comienzos de 1997- sino que esta conducta punible se repitió principalmente a partir de 2001 como contrarresto y neutralización al retorno de los desalojados a los terrenos que les pertenecía.

Aunado a ello, expresó que los actos coactivos a los que se refiere el tipo penal del desplazamiento forzado no se agotan únicamente con la irrupción violenta de un grupo armado, sino que puede perfeccionarse mediante otras múltiples modalidades, de conformidad con la Ley 387 de 1997. Por tanto, es posible afirmar que el agotamiento de esta conducta, tratándose de un delito de ejecución permanente, se predica de manera continua desde las primeras acciones tendientes al despojo material de los territorios colectivos, ejecutadas por paramilitares, pasando por todos los mecanismos que se activaron para perfeccionar y legalizar el despojo, y culminando con la implementación de megaproyectos agroindustriales de palma en las tierras invadidas y despojadas, cuyo correlato es la ausencia de una restitución y retorno efectivo de las familias que, al día de hoy, no poseen autonomía, ni poder de decisión o usufructo como legítimos propietarios.

Indicó que, en todas las fases en las que se perpetró el desplazamiento, los directivos, representantes e integrantes de las empresas palmeras actuaron en calidad de autores como parte de un aparato organizado de poder paramilitar, que posee una expresión armada, política, empresarial, jurídica, e inclusive social y cultural. Así las cosas, los procesados, además de actuar mancomunadamente con la estructura militar responsable de los desplazamientos forzados originarios, causados mediante la presión armada, los homicidios, las amenazas y la intimidación, actuaron como parte del aparato paramilitar en las ventas forzadas de tierras, y son igualmente responsables por

desplazamiento en el momento de la invasión o expropiación de las tierras, su destrucción ambiental y la implementación arbitraria de cultivos de palma.

La comprensión del desplazamiento como un fenómeno complejo, que bien puede implicar procesos de concentración masiva de la tierra, alteraciones significativas a los usos del suelo o la realización de negocios o contratos en ausencia de consentimiento por parte de la víctima del ilícito, según aduce, también ha sido reconocida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 1448 de 2011 -Ley de víctimas y de restitución de tierras-.

Agregó que, los negocios jurídicos realizados aparentemente de forma voluntaria, como excepcionalmente testigos afirmaron en el proceso, también carecen de legalidad y constituyen otra modalidad de despojo, ya sea porque hubo un aprovechamiento de la situación de violencia generalizada o porque los verdaderos compradores eran, al mismo tiempo, paramilitares y empresarios.

Del mismo modo, mencionó que en la normatividad citada se disponen cuatro causales en las que se presume legalmente, salvo prueba en contrario, la ausencia de consentimiento o causa lícita en el mismo tipo de contratos mencionados anteriormente, presunciones que fueron aplicadas en fallo reciente de la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia *"al reconocer el estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de quienes, individual o colectivamente, han sufrido el despojo y abandono forzado, dentro del contexto del conflicto armado interno, como víctimas de graves violaciones de sus derechos fundamentales"*.

Concluyó que, la tragedia de las familias ancestrales de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, es un caso tipo de despojo de tierras que quiso revestirse de legalidad y buena fe a través de la realización de diversas clases de negocios, contratos jurídicos, acuerdos, alianzas estratégicas y actos de corrupción.

De otra parte, aludió a que RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA indicó que el proyecto de palma surgió de una propuesta de unos empresarios de la costa a VICENTE CASTAÑO y el procesado JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, jefe de seguridad de VICENTE CASTAÑO y empresario de la región, aseguró que *"VICENTE tenía unos mapas y les decía a los empresarios dónde podían*

comprar, dónde no, porque habían bosques, ríos, quebradas". Asimismo, el apoderado suplente de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hizo un recuento de las pruebas que, en su criterio, existen en la actuación en contra de los justiciables, las cuales los vinculan de una u otra manera con la organización paramilitar a fin de desarrollar el negocio palmero, los despojos o las maniobras fraudulentas para legalizar los títulos sobre los terrenos colectivos, en relación con los que, a partir del artículo 55 transitorio, la Constitución Política reservó las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico para adjudicarlas a las comunidades negras que las venían ocupando y usufructuando tradicionalmente.

Citó que dicha destinación específica explica el carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable" otorgado a estos territorios por la Ley 70 de 1993, normatividad que también prevé que sólo son susceptibles de enajenarse las áreas asignadas a un grupo familiar, siempre que no conlleve titularidad, y además, éste derecho de ocupación o adquisición "únicamente podrá recaer en otros miembros de la comunidad y en su defecto en otro miembro del grupo étnico".

Agregó que el grupo paramilitar, con sus expresiones políticas, armadas y económicas, desplazó violentamente a las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó desde el año 1997, mediante la comisión de todo tipo de vejámenes. Con posterioridad o en concomitancia, forzó la venta individual de las parcelas que pertenecían a los territorios colectivos e intentó legalizarlos a través de la ampliación de las propiedades privadas que los circundaban o se encontraban en su interior, mediante absurdos jurídicos como el fenómeno de accesión y la celebración de los contratos entre personas que ya habían fallecido; la adjudicación ilegal por parte del INCORA y la alcaldía de Ríosucio, y la celebración de "Acuerdos" con los Consejos Comunitarios, entre otras modalidades.

Sentenció que una vez despojadas jurídica y materialmente las tierras de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, fueron adecuadas para su explotación intensiva en cultivo de palma africana, siendo transformadas y devastadas, generando una ruptura drástica sobre la relación de las comunidades con su territorio y menoscabando los conocimientos y prácticas asociados a él.

Analizó que si bien es cierto que algunos contratos se celebraron a título de "compraventas de mejoras", en lo sustancial, este tipo de actos es contrario también al fundamento último de la constitución de las tierras de comunidades negras como lo es el preservar su identidad cultural.

En tales condiciones, para la parte civil, cualquier negocio o contrato jurídico, verbal o escrito, que implique transferencia de la propiedad, tenencia u ocupación, o el derecho de asignación a una persona que no pertenezca al Consejo Comunitario o, en su defecto, al mismo grupo étnico, contradice disposiciones legales y constitucionales y convierte su ocupación material en una invasión. Igualmente, las contradice cualquier transacción, acuerdo o negocio, tendiente a transformar radicalmente los usos del suelo, sustituir la producción tradicional por megaproyectos agrícolas o mineros, o que impliquen graves afectaciones ambientales y ecológicas.

La Ley 70 de 1993 también estableció unos deberes de conservación ambiental respecto a los suelos y bosques incluidos en la titulación colectiva, en el entendido de que a la función social que la soporta, le es inherente una función ecológica. Indicó que la agroindustria, en general como modelo productivo, y los cultivos de palma aceitera, en específico y de la forma como se ha venido implementando a nivel mundial, no son prácticas ambientalmente sostenibles, ni mucho menos compatibles con las condiciones ecológicas de fragilidad de la cuenca del pacífico.

Para el caso concreto de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, continuó explicando, el informe de identificación del impacto ambiental ocasionado por el establecimiento de cultivos de palma de aceite y ganadería en los municipios de Carmen del Darién y Ríosucio (Chocó) y Mutatá (Antioquia), demuestra la desviación del terreno para la siembra de palma y ganadería extensiva y la construcción de vías, taponamiento y desecación de ciénagas así como la adecuación de redes de drenaje que generaron impactos directos que *"fueron muy altos y algunos irreversibles para el ecosistema..."*. Además, todas las afectaciones al ecosistema y a los recursos naturales generaron profundos impactos negativos de naturaleza socioeconómica y cultural, la agricultura, la pesca tradicional, el transporte en canoa, la movilidad de las comunidades y el intercambio cultural.

Así las cosas, en su sentir, el poder de mando estaba claramente definido dentro de la estructura vertical y jerarquizada del grupo paramilitar AUC, que si bien estaba comandada por VICENTE CASTAÑO GIL, no sólo en lo militar sino en la proyección económica y política, ese poder de mando se distribuía al interior de los mandos medios o autores por organización, entre los cuales se destacan los directivos empresariales y los demás comisionistas e intermediarios que participaron de los intentos de legalización del despojo. Los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica se cometieron de manera sistemática y generalizada, sin que sus ejecutores materiales e incluso mandos medios fueran imprescindibles para su consecución y sin que existiera una necesidad de contar con las mismas personas que lo iniciaron.

Además, recalcó que el proyecto palmero en el Urabá antioqueño fue diseñado y organizado por VICENTE CASTAÑO GIL en asocio con empresarios, ganaderos, políticos y militares de la región, y aún con su desaparición y presunta muerte, el proyecto paramilitar-empresarial sigue desarrollándose en la actualidad. Incluso, el proceso de presunta desmovilización de las denominadas AUC, al no afectar la estructura política y económica del paramilitarismo, significó un simple relevo de mandos militares, una nueva denominación de sus estructuras y la perpetuación de su accionar criminal en defensa de los intereses económicos empresariales.

Por ello, solicitó que se condene a los justiciables por los delitos por los que la Fiscalía los acusó; y se compulsen copias para que se investigue a los funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública y particulares que suplantaron a los órganos representativos de las comunidades ancestrales, en el despojo de tierras para la implementación del cultivo palmero.

Defensa: El doctor Oswaldo Pacheco Izquierdo, defensor de **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL, DAGOBERTO MONTIEL MERCADO, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO y ROBIN CALONGE ALCALÁ** solicitó la absolución de sus prohijados por los cargos que se les endilgó.

Inicialmente, respecto a **ÁLVAREZ VERTEL**, alegó que hubo vicios del consentimiento en su aceptación por el delito de concierto para delinquir, ya que

la Fiscalía ejerció fuerza moral al prometerle detención domiciliaria a cambio de dicha aceptación.

En relación con la vinculación de éste en la Fundación para la paz de Córdoba –FUNPAZCOR–, como parcelero asociado, explicó que, en su condición de desplazado junto con su familia, de la región de “Loma Verde”, por obra de los paramilitares, fue favorecido, como muchos otros que se encontraban en la misma situación, con la entrega de una parcela situada en el corregimiento de Villanueva del municipio de Valencia (Córdoba), región donde también salió favorecido el padre de **MONTIEL MERCADO**.

Relató que al barrio en el que vivía **ÁLVAREZ VERTEL**, llegaron los miembros de aquella fundación requiriendo aspirantes a ser beneficiados con la cesión de tierras, escogiéndosele, con otras 70 familias del mismo barrio para el efecto. En marzo de 1991 por ser beneficiario participó en la reunión de asociados y fue elegido por votación como secretario de la junta directiva, cargo que desempeñó hasta su liquidación y, en diciembre del mismo año, pasó a ser trabajador de dicha agremiación hasta 1998. Más adelante, FUNPAZCOR organizó diferentes asociaciones, entre ellas, la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma, ACOPALMA, en la que 30 familias beneficiadas por FUNPAZCOR se reunieron en el año 2000, por iniciativa, motivación y financiación de sus directivos, entre los que se destacaba **LUIS RAMÓN FRAGOSO PUPO**, para la explotación del cultivo de palma africana en los terrenos de Valencia (Córdoba). Sin embargo, dicho proyecto no se pudo realizar por que los predios no eran aptos para ello.

Ante el fracaso de dicha actividad y dado el aval e impulso del gobierno nacional, que hacía presencia en la región con el envío de altos dignatarios, porque podría ser un medio de subsistencia de muchas familias de la zona, en el 2000 se propuso que se reunieran con una comisión en el Urabá chocoano, donde existían tierras apropiadas para el referido cultivo, lo que en efecto se hizo con la asesoría de expertos, integrando una comisión de la que hizo parte **ÁLVAREZ VERTEL**, donde conoció a **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**. También hizo parte de esa comisión **HÉCTOR ORLANDO GARCIA HENAO**, asociado de FUNPAZCOR y ACOPALMA, quien conocía la zona; y **LUIS RIASCOS** en Urabá, como pionero de los cultivos de palma en el sector, encontrando que en esa región la palma “se daba casi silvestre”, por lo que se

constituyó y registró legalmente la asociación ACOPALMA y se hicieron las gestiones para adquirir las tierras en las que se trabajaría, para lo cual se contactó a HERMEN DE JESÚS MUÑOZ GONZÁLEZ, por indicación de LUIS RIASCOS, quien lo conocía como comisionista para la venta de tierras, persona que les vendió 1.021 hectáreas, en negociación cuya legalidad garantizó el asesor jurídico ÁLVARO TOUS, recomendado por FRAGOSO PUPO como especialista. Las tierras adquiridas tuvieron un valor total de \$204.000.000 y se pagaron con aportes personales de los asociados y un préstamo de FUNPAZCOR, que sería solucionado con el abono bimestral de lo producido por las parcelas, que eran administradas por esta fundación, y créditos de FINAGRO, entidad que finalmente no facilitó dinero, por lo que, ante la carencia de recursos, se debió hacer un contrato de comodato de 500 de esas hectáreas, a partir del 7 de noviembre de 2002, con vigencia hasta esa misma fecha de 2008, con la empresa Palmas S.A., cuyo representante era IVÁN PATIÑO PATIÑO, la que adecuó y sembró 462 de esas hectáreas, con el compromiso de darles el 30% de las utilidades obtenidas hasta la fecha de expiración del acuerdo; y que en 2008 les harían una oferta de compra, circunstancias que nunca se dieron porque desde el 2006 empezaron a tener problemas con los lugareños, debiendo abandonar los cultivos. Las restantes hectáreas no incluidas en dicho convenio, quedaron abandonadas.

Para esa época, también compraron 2.355 hectáreas a HERMEN DE JESÚS MUÑOZ GONZÁLEZ, mediante escritura, pero nunca pagaron nada por ellas, ni nunca las recibieron, ni nunca conocieron los terrenos. Estas circunstancias están acreditadas en la actuación y las mismas aún no se han controvertido.

Del mismo modo, el defensor, luego de hacer un recuento de todos los señalamientos que hizo el Fiscal en contra de sus defendidos, indicó que, en cuanto a la responsabilidad de sus prohijados, es un hecho notorio que el desplazamiento forzado en las veredas de las cuencas de los ríos Jiguamiando y Curvarado ocurrió entre los años 1996 y 1997 y su injerencia es en el año 2000, de lo cual se infiere que no puede existir actos desplegados por los mismos y, por ende, se vulnera el principio del derecho penal de acto al imputarles concierto para desplazar. Además, no existe prueba de la cual se pueda inferir que antes del año 2000 estos acusados se estaban concertando.

Alegó que la Fiscalía simplemente se limitó a expresar que debido a la suscripción de la escritura pública 735, del 8 de octubre de 2002, tanto el vendedor HERMEN JOSÉ MUÑOZ como los compradores, entre ellos ACOPALMA, representada por **ÁLVAREZ VERTEL**, instrumentaron el desarraigo y despojo de todos los poseedores de terrenos que se le accedieron arbitrariamente al predio La Nevera, empero se omite valorar la descripción física del inmueble objeto de la compraventa y la manifestación de que la asociación ACOPALMA, en calidad de compradora, recibe la posesión del área adquirida a entera satisfacción, pues *"aceptan la venta que se les hace a las Asociaciones que representan por estar de acuerdo con lo pactado y convenido. Segundo. Que las asociaciones que representan ya se encuentran en posesión quieta y pacífica del inmueble"*, aspecto importante, ya que, independientemente de la forma como se sanearon esas posesiones, ACOPALMA recibió la tierra desocupada o vacante y ello demuestra que este justiciable no actuó con dolo en el delito de concierto con fines de desplazamiento.

Asimismo, adujo que en la prueba se cercena la indicación de que el inmueble adquirido por ACOPALMA, del cual también hace parte **DAGOBERTO ANTONIO, ROBIN MANUEL y GABRIEL SEGUNDO**, se encuentra ubicado en la vereda de Brisas. Por tanto, son importantes los testimonios de quienes habitaban las áreas a las que hace referencia la escritura 735, a efectos de indagar acerca de la fecha del desplazamiento y quién lo ejecutó.

Citó varias víctimas de la vereda Brisas y testigos de ello, tales como **LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA** -denunciante-, **CECILIA NARANJO BOTERO**, **JESÚS ALBERTO FRANCO**, **MANUEL GREGORIO VILORIA ROQUEME**, **ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA**, **ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ RUEDA**, **LUIS ALBERTO RENTERÍA MOSQUERA**, quien dan cuenta de que los desplazamientos ocurrieron en 1996, bien sea por obra de la FARC, del general **RITO ALEJO DEL RIO** o de grupos paramilitares, fecha anterior a la injerencia de **REMBERTO MANUEL**, razón por la cual éste no pudo concertarse para desplazarlos.

Del mismo modo, el hecho de que ACOPALMA recibió la posesión del inmueble vacante, a su juicio también evidencia que el único desplazamiento ocurrido en Brisas fue el del año 1996, tal como lo declararon todos los testigos; y que dicha

asociación no tuvo necesidad de desplegar ninguna conducta ilícita para entrar a poseer el bien porque este le fue entregado y recibido a entera satisfacción. Además, ninguno de los testigos que declararon en el proceso narró ningún acto hostil desplegado en esa área por sus prohijados, para hacer migrar a la población ni antes, ni luego de haberse firmado la escritura 735.

De otra parte, recalcó que las víctimas del delito de desplazamiento manifestaron no conocer a ninguno de estos justiciables como coautores de los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de área especial ecológica. En este sentido resaltó que la Corte Constitucional, además de considerar la presunción de inocencia como un derecho fundamental, indica que es un postulado cardinal del ordenamiento jurídico, que no admite excepción e impone como obligación la práctica del debido proceso y los procedimientos constitucionales para desvirtuar su alcance. Por tanto, el procesado no está obligado a aportar pruebas que demuestren su inocencia, sino que el Estado tiene la obligación de desvirtuarla y probar su responsabilidad.

En relación con el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, adujo que se trata de invadir por la fuerza un espacio geográfico caracterizado por su especial protección, por ende, es necesario que el autor tenga conocimiento de ello para configurar su tipicidad.

De otro lado, arguyó que la escritura aclaratoria de linderos fue tramitada por HERMEN MUÑOZ GONZÁLEZ, sin que **ÁLVAREZ VERTEL** tuviera participación o estuviese enterado de lo que se hacía, máxime si ni siquiera conocía al primero ni había llegado todavía a la región en busca de tierras aptas para la explotación de la palma de aceite. Además, el poder que MUÑOZ GONZÁLEZ presentó para acreditar que actuaba en representación del propietario de las tierras adquiridas, al parecer no era legítimo y el asesor legal, el notario ni ninguna autoridad, o un particular ajeno o interesado, alertó sobre ello.

En estas condiciones, para el togado no existen pruebas de la participación de sus defendidos, quienes, por lo demás, según dice resultaron afectados, pues perdieron parte sustancial de su precario patrimonio en la negociación, sin obtener ningún beneficio, ya que no pudieron aprovechar, ni siquiera

temporalmente, la propiedad adquirida por el fracaso de las gestiones adelantadas para obtener créditos para explotarla directamente, y por no haber recibido las utilidades del contrato de comodato suscrito para que otro lo hiciera, o por lo menos la recuperación del valor pagado por la adquisición.

Agregó que tampoco puede endilgársele a **ÁLVAREZ VERTEL** que hubiera, en su condición de representante de ACOPALMA, suscrito el contrato de comodato con Palmas S.A. bajo el supuesto de que fue un "... *excelente cooperador y aliado estratégico*" de los socios de esta empresa, para el cultivo de la palma en unos predios adquiridos fraudulentamente, de los cuales se había desplazado a sus comunidades raizales, ya que tal contrato fue forzado por la necesidad de obtener algún beneficio de la propiedad adquirida para ellos, en limpia transacción, ante la incapacidad económica para ponerla a producir.

Del mismo modo, en su juicio lógico indica que no existió alianza entre los procesados, ya que si hubiera existido, la misma era innecesaria, pues si los socios de ACOPALMA tenían un propósito delictivo, no se entiende por qué era necesario que se pactara el contrato de comodato y por qué no se hizo sobre todo el predio; si era menos complejo que se les facilitaran los recursos para la explotación, como integrantes de una misma empresa delictiva, en la que no había necesidad de distribución de roles.

En el mismo sentido, considera que no es posible aseverar que dichos socios fueron instrumentos del desarraigo y despojo de los poseedores de los predios que fueron englobados en el terreno "La Nevera", por haber suscrito la escritura 735, del 8 de octubre de 2002, ya que, en primer lugar, desconocían los hechos antecedentes al título que acreditaba la propiedad del predio parcialmente adquirido por ellos; y, en segundo término, porque nunca supieron ni participaron en presiones armadas sobre los pobladores para que abandonaran sus tierras, además, nunca se les manifestó oposición por la transacción que hicieron o por la precaria posesión material del inmueble comprado.

Tampoco considera válido sostener que la responsabilidad está acreditada con la suscripción de la escritura de marras, porque supuestamente con ello se le hizo el quiebre a la Ley 70 de 1993, pues si **ÁLVAREZ VERTEL** y **MONTIEL MERCADO** hubieran actuado con conocimiento de las regulaciones contenidas en dicha normatividad, de lo que se les podría acusar sería por algún tipo de

fraude y no por desplazamiento forzado o invasión de áreas de especial importancia ecológica, pues una cosa es registrar ilegalmente como propio un bien, y otra ocuparlo físicamente, de suerte que el hecho de suscribir la escritura en referencia no implica, por sí solo, que cometiera tales conductas punibles, no obstante pudiera ser calificado como un acto previo y preparatorio para su posterior consumación, y darse así un conato de delito.

Por lo demás, para el defensor lo importante es que desconocían que la adquisición de esas propiedades estaba restringida, llevándolos ese desconocimiento a un error del que no fueron sacados ni por su asesor legal, ni por el notario que formalizó la escritura, ni por los particulares o representantes del Estado que estuvieron al tanto de lo ocurrido, o por aquellos que igualmente supieron del hecho, como receptores de las solicitudes de crédito oficial, lo que admite que el yerro pueda ser calificado como invencible, y entonces da lugar a la exclusión de responsabilidad, ya que se está ante una conducta dolosa, en la que se requiere que el sujeto agente haya tenido la probabilidad de saber lo que hacía, es decir, conocer la protección legal que tenía el terreno, con el consecuente impedimento de disponibilidad comercial de la zona en la que estaba situada la propiedad adquirida, por tanto, se estaría ante un error de tipo, descrito en el artículo 32, numeral 10º, del Código Penal, que da lugar a la exoneración de cargos, por atipicidad de la conducta.

En su criterio, no hay ninguna versión que insinúe que estos procesados realizaron actos violentos o coactivos que condujeran a motivar a los lugareños a abandonar sus predios, tanto es así que para atribuir esas acciones, siempre se relaciona la suscripción de la escritura de marras y la adquisición del bien en ella identificado, como si la concreción del negocio y su formalización ante notario, pudieran ser calificados como tales, particularmente cuando el cargo se formula a título de autor. La violencia o la coacción, considera que no son actos que puedan concretarse en una negociación y su formalización ante autoridad está amparada por la presunción de la buena fe, que es arco toral del sistema jurídico y de las relaciones interpersonales, la cual no se puede desconocer partiendo de conjeturas infundadas, carentes de un respaldo probatorio válido y seguro.

De otra parte, la sola compra del bien, formalizada en la escritura mencionada, no significa según él que se participaba en comportamientos penalmente

reprochables, puesto que exclusivamente fue motivada por la aspiración de unos humildes campesinos expulsados de su tierra por las autodefensas, que quisieron aprovechar la oportunidad que les brindaba un incipiente proceso parcial de paz, para obtener recursos que les permitieran acceder a los medios de producción, como en efecto lo intentaron.

En su sentir, entonces, las inferencias de la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad de sus prohijados, en el sentido de que fueron cooperadores y aliados estratégicos para constreñir al desarraigo, no tienen soporte y, entre otras cosas, lo que se insinúa es una complicidad y no una autoría. Además, lo único que animó a los procesados a la realización de la conducta fue la expectativa de participar en un negocio que parecía lucrativo, pero lícito, sin saber que al adquirir la propiedad que compraron estaban propiciando, facilitando o consumando, un desarraigo de las comunidades que al parecer habitaban esos terrenos. Por tanto, en su criterio, sus prohijados actuaron bajo circunstancias de error de prohibición directo, excluyente de responsabilidad penal, por falta de culpabilidad.

De otra parte, aludió a los requisitos indispensables de la coautoría, desarrollada tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, y concluyó que la conducta de los acusados es atípica, pues su participación fue mucho después del desplazamiento de las comunidades raizales y, además nunca ocuparon las áreas territoriales en las que estas moraban. Estima que los cargos que se les atribuyen como coautores, aún aceptando que estuviera satisfecho el requisito subjetivo para ello, carecen de fundamento dogmático y legal, por tanto se impone su absolución, pues no hay prueba de que se hayan puesto de acuerdo con los autores de las conductas punibles para ejecutarlas, o que cumplieron tareas de interdependencia funcional, o que ejercieron un esencial codominio funcional, con voluntad dirigida a una misma finalidad; o que necesariamente contribuyeron durante la ejecución del crimen, de suerte que se pudiera decir que con la exclusión de su supuesto aporte, el desarraigo y la invasión no se hubieran producido, o su concreción sufrido mengua.

Considera, entonces, que el comportamiento de sus prohijados no se adecua al descrito en el inciso segundo del artículo 29 del Código Penal, en especial, porque toda su intervención se dio después de la consumación de los delitos y su aporte, consistente en legalizar la compra de unas propiedades, no podía

catalogarse como importante para la ejecución de las conductas endilgadas, pues, reitera, **ÁLVAREZ VERTEL** y **MONTIEL MERCADO** entraron en escena en tiempos posteriores a los de la consumación de los desplazamientos forzados e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Además, **CALONGE ALCALÁ** y **SEGUNDO FERNÁNDEZ** nunca han estado en la zona de Bajirá.

Finalmente, se refirió al testimonio de **ROLDAN PÉREZ**, en el que manifestó, respecto a estos justiciables, que los conoció en los años 88-89 "*voleando -sic- machete en las fincas de FIDEL CASTAÑO*", y que no pertenecieron a las autodefensas, nunca cogieron un arma para desplazar a un campesino y que lo que sucedió fue que "Don Berna", a través de **FRAGOSO**, hizo lo mismo que **FIDEL CASTAÑO** con una cantidad de campesinos, que no saben leer ni escribir y eran sus testaferros sin saberlo.

Entretanto, el doctor Mariano Agualimpia Benítez, defensor de **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN**, solicitó la absolución del mismo, con fundamento en los siguientes argumentos:

Los declarantes **TOMÁS JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ**, **GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA**, **DANILO MURILLO CÓRDOBA**, **ROBINSON BLANDÓN CÓRDOBA**, **GUSTAVO MARTÍNEZ CUAVA**, **ASCARIO JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN**, conocedores de la situación de desplazamiento y de cómo se llevaron a cabo las negociaciones de las tierras entre **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, representante de Palmas del Curvaradó, y los propietarios o poseedores de las parcelas, fueron claros en expresar el rol de intermediario o comisionista que su prohijado tuvo en dichas negociaciones, de lo cual concluye que ninguno de los vendedores o negociadores de los predios, fueron presionados ni por **GABRIEL JAIME** ni por **MANUEL GREGORIO**.

Se refirió a varias declaraciones, rendidas ante la Notaría Única del Circulo Notarial del Municipio de Carepa, entre ellas, las de **FELISA SANTOS BARRIOS**, **MELVIS ANTONIO HERNÁNDEZ SANTOS**, **FELICIANO VARGAS RAMOS**, **CECILIO TORDECILLA MALDONADO**, **TOMÁS JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ**, **ASCARIO JOSE LÓPEZ BELTRÁN**, **JORGE ELIÉCER HERNÁNDEZ SANTOS**, **MARCELINO SUÁREZ ALARCÓN** y **JUAN SUÁREZ ALARCÓN**, propietarios o poseedores de predios en la Cuenca del río Curvaradó, quienes

se encuentran entre las 52 familias que negociaron con **SIERRA MORENO** sus parcelas, y explicaron que el justiciable fue intermediario y en ningún momento fueron presionados para la venta o negociación de sus predios, que por el contrario **MANUEL GREGORIO** les hizo un favor, dada la precaria situación económica por la cual estaban pasando por su condición de desplazados desde 1997. Además, reconocen que su defendido en ningún momento les exigió dinero por el contacto que les hizo con **GABRIEL JAIME**.

Manifestó que la Fiscalía recaudó varios testimonios de personas que negociaron sus parcelas con **SIERRA MORENO**, y en ninguna de ellas se acusó a **MANUEL GREGORIO** de haber coaccionado u obligado a ninguno de estos parceleros a vender sus tierras al primero, ni que se haya aprovechado de su situación de desplazados para forzarlos a realizar las compraventas.

Narró que luego de que su prohijado fue presentado ante **SIERRA MORENO**, se dedicó no solo él, sino otros desplazados más, como JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ, MELVIS HERNÁNDEZ SANTOS y JORGE ELIÉCER HERNÁNDEZ SANTOS, a ubicar a sus coterráneos, quienes estaban dispersos por Urabá, para explicarles que alguien quería comprar sus predios y que podían ubicarlo en Chigorodó. Por tanto, concluye el justiciable sí fue intermediario o comisionista de **GABRIEL JAIME**, pero no se ejerció presión ni se exigió a estas personas dinero por su actuar.

En relación con la aseveración de MANUEL ENRIQUE PETRO, respecto a que **MANUEL GREGORIO** llegó a su finca, entró a mirar la palma que estaba sembrada, y le dijo que él no mandaba en su tierra sino que mandaban los empresarios, el justiciable manifestó que nunca dijo eso, puesto que nunca ha sido empresario, máxime si sabía que dicho testigo no había negociado su finca con **GABRIEL JAIME**, el cual fue respetuoso con las pocas personas que no negociaron, además, en su sentir, el testigo es proclive a mentir, al punto que se ha convertido en testigo de la Fiscalía con medidas de protección. Por lo demás, si realmente el procesado hubiera hecho tal manifestación, ello no podría tenerse como fundamento para endilgarle responsabilidad.

Analizó que, no obstante la Asociación de Antiguos Vecinos de las Cuencas del Río de Curvaradó y Zonas Aledañas está inscrita en la Cámara de Comercio de Urabá, en donde también aparecen unas actas de asamblea de constitución de

la misma y un listado de socios o asociados, esta asociación realmente nunca existió, ya que fue creada para realizar algunos actos de compraventas de tierra y para la creación o conformación de esta sociedad. En efecto, el 99% de las casi 50 personas que aparecen en el listado como socios, fueron engañados por HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, quien con uno u otro argumento les hacía firmar hojas en blanco y tomaba, incluso, fotocopia de la cédula, documentos que se allegaron a la Cámara de Comercio como personas asistentes a la Asamblea de Constitución de la Sociedad, lo cual nunca ocurrió.

En el caso de su prohijado, aseguró que HERMEN JOSÉ lo abordó en el municipio de Chigorodó, frente a la estación de gasolina La Eugenia, y le manifestó que estaba en trámite de conformar una asociación de madereros para poder vender la madera a un mejor precio del que se estaba comprando en la zona, pues de esta forma tenían la oportunidad de llevarla a Barranquilla, Cartagena y Medellín, donde la pagaban a mejor precio, y por esta razón el procesado accedió y HERMEN JOSÉ utilizó una hoja con su firma y número de cédula como anexo ante la Cámara de Comercio para legalizar dicha asociación ante esa entidad. Además, en el certificado de Cámara de Comercio de esta supuesta asociación, no está **DENIS BLANDÓN** como integrante de la junta directiva ni como titular ni como suplente.

Alegó que el Fiscal no tuvo en cuenta que HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, en la diligencia de aceptación de cargos, asumió toda su responsabilidad por estos hechos, como fue la creación irregular de esta asociación, engañando a incautos para obtener beneficios. Ciertamente, en la aceptación de cargos para sentencia anticipada llevada a cabo el 8 de octubre de 2010, se interroga a HERMEN JOSÉ en el sentido que en diligencia de indagatoria, **MANUEL GREGORIO** manifestó pertenecer a la comunidad negra de la cuenca del río Jiguamiandó y acotó que en alguna ocasión le firmó una hoja en blanco a un sujeto apodado Diomedes, lo que explica que figure como miembro de la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río de Curvaradó, aspecto que HERMEN JOSÉ aceptó sin objeción, razón por la cual es evidente que el procesado dijo la verdad en el sentido de que fue engañado para firmar una hoja en blanco y dar el número de su cédula. Esta acta fue aportada al proceso.

Además, HERMEN JOSÉ declaró que engañó a la gente que aparece como socios, haciéndoles firmar documentos en blanco con sus números de cédula y, respecto a **MANUEL GREGORIO**, reafirmó que sí lo había hecho firmar una hoja en blanco, con el argumento de que era para la creación de una asociación de madereros.

Considera que el Fiscal tergiversó el testimonio de **EDUARDO RENTERÍA MENA**, pues el declarante no dijo que por intermedio del justiciable se hacía el negocio, ya que ninguna de las personas que negociaron con **GABRIEL JAIME**, lo hicieron por intermedio de su prohijado, puesto que estas personas hacían sus negociaciones de manera directa entre ellos y el representante de Palmas del Curvaradó. Fueron los vendedores y compradores quienes tasaron sus precios, acordaron sus formas de pago y suscribieron los documentos, en un principio compraventas, en las cuales no aparece la firma de su defendido y, posteriormente, escritura de alianza estratégica, en donde aparece el vendedor, el comprador y el difunto **MANUEL MOYA LARA**, en su condición de representante legal de las comunidades negras de la cuenca del río Curvaradó, como garante de que la tierra que se negociaba correspondiera realmente al vendedor, tenedor o poseedor.

Observa que el testigo **RENTERÍA MENA** confirmó las atestaciones del justiciable, referentes a haber sido desplazado desde 1997, haber salido de dicha zona en compañía de su madre, sus dos hermanas y sus dos hijas menores y sin ningún tipo de bien. Este declarante también se refirió a la mala situación económica en la que se encontraba el procesado, y ello fue precisamente la razón que lo llevó a convertirse en intermediario o comisionista de **SIERRA MORENO**, con el ánimo de ganar algo de dinero para sobrevivir con su familia.

Afirmó que en ninguna de las declaraciones recaudadas en la actuación está la expresión de que su prohijado ejecutó actos coactivos que hicieran a los poseedores o propietarios vender sus tierras y menos aún que les haya exigido dinero por su participación como intermediario o comisionista.

Por su parte, **GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA**, quien no vendió sus tierras, reafirmó, en su condición de representante legal de las comunidades negras de la cuenca del río de Curvaradó, la situación de

desplazado de **DENIS BLANDÓN**, las penurias económicas por las que estaba pasando en su condición de desplazado y lo que le constaba sobre la intervención de éste en la negociación de los predios con **SIERRA MORENO**.

Igualmente, **DANILO MURILLO CORDOBA**, representante de la comunidad desplazada de la cuenca del río de Jiguamiandó, tampoco vendió sus tierras a ninguna empresa palmicultora, y ratificó las penurias que estaba pasando el justiciable.

El procesado en ningún momento trató de impugnar el título colectivo de Jiguamiandó, ya que, como lo explicó en su indagatoria, cuando se enteró de la existencia de un título colectivo consultó al INCODER por qué motivo la tierra de su padre se encontraba inmersa o incluida en dicha colectividad.

No se tuvieron en cuenta las atestaciones de **HERNANDO OLIER PAUTT**, miembro del Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó, quien reconoció la situación de desplazado del procesado, su intervención en las negociaciones de la tierra y la situación económica por la que estaba pasando al momento de llevarse a cabo esta negociación.

Existen varios testimonios de personas que conocieron al acusado, tales como, **NEMESIO CUESTA**, **AGUSTÍN MONTALVO QUINTERO**, **AMADOR CAICEDO MENA** - exalcalde del Municipio de Chigorodó- quienes se refirieron a que trabajaba desde niño, a su difícil situación económica y a su condición de desplazado -aspecto que también se demostró con la carta de desplazado, en donde fue reconocido por la Presidencia de la República como tal-.

Por otra parte, argumentó que la Ley 70 de 1993 no tuvo divulgación, ello fue confirmado, entre otros, por **HERNANDO OLIER PAUTT**, **GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO**, **NEMESIO CUESTA**, **ASCARIO JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN**, **TOMÁS JOSÉ HERNÁNDEZ**, miembros de los consejos comunitarios, quienes afirmaron no haber conocido el alcance de dicha normatividad hasta casi después de llevarse a cabo las negociaciones de las tierras, es más aseguró, no se ha podido determinar la cantidad de tierras tituladas a las negritudes colectivamente, porque esta ley consagra el respeto por aquellas tierras que hubieran sido tituladas antes de la expedición de este título. A este respecto citó a **MANUEL GREGORIO**, en el sentido de que nunca fueron instruidos sobre el

..... y en parte miembros del municipio de Chigorodó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN**, **JORGE HERNÁNDEZ**, **ARCADIO DE JESÚS LÓPEZ BELTRÁN**, **MELBI ANTONIO HERNÁNDEZ SANTOS** y todos los campesinos que fueron desplazados de sus tierras ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, quienes señalaron que el desplazamiento de los pobladores de

alcance de esta ley y mucho menos de sus prohibiciones. Además, una vez hechas las negociaciones, fue cuando se dieron cuenta de algunos aspectos de la ley y en ese momento los palmicultores pidieron asesoría como adquirentes de esas parcelas, razón por la cual vino una comisión desde Bogotá, encabezada por el doctor SILVIO GARCÉS, funcionario del INCODER, en la que instruyeron a las comunidades de la prohibición de vender las tierras y aconsejaron hacer alianzas estratégicas.

Para el abogado el gobierno impulsó y estimuló la siembra de palmas en Curvaradó y Jiguamiandó, pues traería progreso a la zona, al punto que FINAGRO facilitó créditos con dinero del Estado a varias de las empresas para el financiamiento del proyecto de palma y no se aludió a que esas tierras no se podían vender o cultivar. Por tanto, el procesado actuó de buena fe, ya que desconocía la prohibición de negociación de dichas tierras, razón por la cual se está en presencia de una causal de ausencia de responsabilidad, de que trata el artículo 32, numerales 10 u 11, del Código Penal.

En tal sentido, el abogado relató los pormenores de las declaraciones de **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ**, **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA**, **JESÚS JAIME TOBÓN VILLEGAS**, **CARLOS MARIO ÁLVAREZ BARRERA**.

De otro lado, como el problema del desplazamiento se encuadró dentro de la problemática política que se dio en la región del Urabá para esa época, aludió a las citas tomadas de la publicación "*Cien Días*"; al artículo "*Tiempo nublado, terreno despejado*", en el cual se discutían las perspectivas del proceso de paz iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC y la problemática del desplazamiento de la zona de Ríosucio y el bajo Atrato en el Chocó, huyendo de las masacres cometidas por grupos paramilitares, de bombardeos de la Fuerza Pública, del control alimentario y de los hostigamientos de la guerrilla, hacia Pavarandó.

Igualmente, indicó que la empresa URAPALMA fue constituida con arreglo a la normatividad comercial pertinente y la demostración de su poderío y potencial económico facilitó la consecución legal de créditos, incluidos los facilitados por el Estado colombiano para la promoción agrícola. En su concepto, no existe ninguna prueba de que en la conformación de su capital social se haya introducido dinero de origen ilícito, máxime si sus actividades estuvieron encaminadas al desarrollo de su objetivo social.

Del mismo modo, relacionó la existencia de varios documentos aportados al proceso que según él demuestran que sólo mediante Resolución 2809 del 22

En relación con lo anterior, solicitó que, en virtud del principio de favorabilidad, se tengan en cuenta, respecto a **GÓMEZ HERNÁNDEZ**, las atestaciones que el periodista Mauricio Aranguren puso en boca de **CARLOS CASTAÑO GIL**, comandante de las AUC, en el libro "*Mi confesión*", ya que ellas lo favorecen y no han sido desvirtuadas durante el proceso, máxime si, respecto a su autenticidad y veracidad, **CASTAÑO GIL** depositó su confianza en él y no podía haber traicionado esa confianza tergiversando sus atestaciones, pues hubiese corrido riesgo la vida del periodista.

Respecto a los elementos de juicio que explican lo relacionado con el desplazamiento de pobladores de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, citó el estudio elaborado en el 2004 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "*Algunos indicadores sobre la situación de los Derechos Humanos en la Región del Urabá Antioqueño*", en el que se evalúa el impacto negativo sobre las poblaciones del Urabá chocoano y antioqueño por causa del conflicto armado, registrándose un mayor porcentaje de acciones ofensivas por parte de las FARC; estudio elaborado por la Universidad del Valle, en el cual se traza un perfil socioeconómico y en parte histórico del municipio de Chigorodó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN**, **JORGE HERNÁNDEZ**, **ARCADIO DE JESÚS LÓPEZ BELTRÁN**, **MELBI ANTONIO HERNÁNDEZ SANTOS** y todos los campesinos que fueron desplazados de sus tierras ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, quienes señalaron que el desplazamiento de los pobladores de esas regiones fue realizado en general durante el año 1997 y lo ocasionaron las acciones de las FARC y del Ejército Nacional. De igual manera se pronunciaron **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA** y **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ**. En general todos manifestaron que las AUC no llegaron al Urabá, luego de iniciar el Ejército Nacional sus operaciones contra las FARC, a desplazar masivamente a la población, sino que buscaban solamente eliminar a los individuos que consideraban comprometidos con la subversión y que naturalmente las masacres que cometieron al perseguir ese propósito sembraron el terror en la población remanente que no había podido ser movilizada por las consignas o prevenciones de la guerrilla.

En tal sentido, el abogado relató los pormenores de las declaraciones de **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO, RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, JESÚS JAIME TOBÓN VILLEGAS, CARLOS MARIO ÁLVAREZ BARRERA.**

De otro lado, como el problema del desplazamiento se encuadró dentro de la problemática política que se dio en la región del Urabá para esa época, aludió a las citas tomadas de la publicación "*Cien Días*"; al artículo "*Tiempo nublado, terreno despejado*", en el cual se discutían las perspectivas del proceso de paz iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC y la problemática del desplazamiento de la zona de Ríosucio y el bajo Atrato en el Chocó, huyendo de las masacres cometidas por grupos paramilitares, de bombardeos de la Fuerza Pública, del control alimentario y de los hostigamientos de la guerrilla, hacia Pavarandó.

Igualmente, indicó que la empresa URAPALMA fue constituida con arreglo a la normatividad comercial pertinente y la demostración de su poderío y potencial económico facilitó la consecución legal de créditos, incluidos los facilitados por el Estado colombiano para la promoción agrícola. En su concepto, no existe ninguna prueba de que en la conformación de su capital social se haya introducido dinero de origen ilícito, máxime si sus actividades estuvieron encaminadas al desarrollo de su objetivo social.

Del mismo modo, relacionó la existencia de varios documentos aportados al proceso que según él demuestran que sólo mediante Resolución 2809, del 22 de noviembre de 2000, el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- efectivizó lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, en el sentido de adjudicar expresamente a la comunidad negra, organizada bajo el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, determinados territorios y que, el 22 de marzo de 2006, el INCODER, sucesor del INCORA, profirió la Resolución 702 para proceder a la delimitación de los predios de propiedad privada existentes dentro de esos territorios que quedaban excluidos de los efectos de dicha ley.

Asimismo, relacionó como prueba documental, las copias de solicitudes de **MANUEL MOYA LARA**, representante legal del Consejo Comunitario del río Curvaradó, en procura de obtener la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el

INCODER en vista de que las FARC y algunas ONG estaban impidiendo a los desplazados del Atrato ejercer su autonomía en la toma de decisiones que les interesaban a los miembros de ese Consejo Comunitario; copia de la queja dirigida el 28 de abril de 2005 por ADÁN QUINTO MOSQUERA, representante legal del Consejo Comunitario del Cacarica, al Presidente de la República, en relación con los ataques que la ONG Justicia y Paz estaba realizando al Consejo Comunitario; comunicaciones suscritas por ZOELIA MOSQUERA, miembro de la comunidad afrodescendiente de Urabá-Darién, a la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, a la Vicepresidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo, al Viceministro del Interior, al Ministerio de Agricultura y a otras entidades públicas; comunicación dirigida por desplazados de Curvaradó al Presidente de la República para informarle que la ONG Justicia y Paz se encargaba de defender intereses ajenos a los de las comunidades afrodescendientes y que para el efecto presentaban a integrantes de las FARC como representantes de esas comunidades; denuncia penal de MANUEL MOYA LARA el 27 de junio de 2004, acerca de que las FARC impusieron a la fuerza a su colaboradora LIGIA MARÍA CHAVERRA como representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó; acta de reunión celebrada el 8 de junio de 2007 por miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios de Belén de Bajirá, Asoprobeba, durante la cual se denunció que constantemente se dirigían amenazas contra esa comunidad y les destruían sus plataneras, ante lo cual CARLOS FERNANDO SILGADO, director del Incoder en Urabá, anotó que esa situación se debía a que la ONG Justicia y Paz estaba fomentando la invasión de predios y manipulando la buena fe de los campesinos; y copia de un artículo publicado en la edición del 19 de septiembre de 2009 en El Colombiano, en el cual se anotó que la población agrupada en el Consejo Comunitario de Curvaradó venía siendo afectada por las actividades de la ONG Justicia y Paz, unas brigadas internacionales de paz y las FARC.

De otra parte, se refirió al testimonio de CARMEN ALICIA BLANQUICET como muestra de las situaciones engañosas que se han dado en los procesos de venta de predios y posterior reclamación de devolución de los mismos; y al artículo de autoría del periodista Alfredo Molano, edición del 14 de octubre de 2012, del diario El Espectador, que trata de sus observaciones durante un viaje al Urabá, y se encuentra en internet.

En el caso específico de **GÓMEZ HERNÁNDEZ**, adujo que las pruebas que existen respecto a su relación con los jefes paramilitares y su vinculación con el proyecto palmero, se concretan a la versión descrita en el libro *"Mi confesión"*, referente a **CARLOS CASTAÑO GIL**; las declaraciones de **SALVATORE MANCUSO**, uno de los principales cabecillas de las AUC, quien indicó que se relacionó con su prohijado desde la infancia y mantuvo con aquel trato amistoso sin que por ello el procesado se hubiera vinculado a las AUC; de **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ**, quien perteneció desde 1988 al grupo armado ilegal liderado por **FIDEL** y **CARLOS CASTAÑO GIL**, y relató los pormenores del proyecto palmicultor y su relación con los hermanos **CASTAÑO GIL** con ocasión de su participación, como garante del proceso en representación del Gobierno Nacional, en la desmovilización del grupo guerrillero **EPL**, ya que en esa ocasión también se desmovilizó **FIDEL CASTAÑO GIL** y el grupo de autodefensas que tenía constituido a nivel regional; y que no compró tierras.

En igual sentido, citó los testimonios que dan cuenta de las actividades de intermediación del procesado en procesos de paz, entre los cuales están los de los doctores **SABAS PRETELTT DE LA VEGA**, **LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ**, excomisionado de Paz, **LUIS CARLOS RESTREPO**, Alto Comisionado para la paz, **CARLOS BUELVAS**, Gobernador de Córdoba; **MILENA ANDRADE**, defensora del Pueblo Regional en Córdoba; **GILBERTO ALZATE RONGA**, miembro de una comisión de paz; **CARLOS ALONSO LUCIO**, asesor del proceso de paz con las AUC; **MIGUEL CAMPO**, Director del Plan Nacional de Rehabilitación, quienes dieron cuenta de la corrección con la cual actuó su defendido en los diálogos entre representantes del Gobierno Nacional y otros estamentos sociales con la guerrilla y las AUC.

En su sentir, entonces, dichos elementos de juicio permiten establecer que la Fiscalía se inclinó por creer en varias falacias, en las cuales se apoyó para acusar a sus defendidos.

No obstante la Fiscalía considera que las AUC protagonizaron los desplazamientos de población rural y urbana que se dieron en los territorios comprendidos por el Urabá antioqueño y chocoano entre 1996 y 1999, la mayor responsabilidad de ello recae en las FARC, en cuanto éstas, en procura de no perder el dominio que tuvieron sobre esas regiones durante aproximadamente 30 años, adoptaron, cuando se vieron acosadas por el accionar del Ejército

Nacional, la política de exigirle a sus partidarios campesinos y milicias urbanas y a la población en general desplazarse a algunos centros urbanos para evitar que aquéllos pudieran ser capturados por las autoridades y, con el desplazamiento masivo de unos y otros, ocasionarle el Gobierno Nacional problemas sociales que en su sentir pudieran obligarlo a cesar su arremetida contra las FARC.

En criterio del abogado, es cierto que se temió al accionar armado de las AUC, que siguió a los operativos del Ejército Nacional, porque ellas propendían por identificar y eliminar a simpatizantes o colaboradores de la subversión; y que también se dio el fenómeno consistente en que personas políticamente neutrales temieron ser confundidas con colaboradores de los insurgentes o se les hizo creer que de todas maneras serían perseguidos por las AUC, e incluso por el Ejército Nacional, a la vez que en otros casos muchas personas no tuvieron opción distinta a la de migrar.

En consecuencia ese desplazamiento tuvo como causa principal la necesidad pública, que satisfacían las fuerzas armadas oficiales, de erradicar los focos subversivos existentes en la región, actuación conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Carta Política.

Es diferente que las AUC, dedicada programáticamente a impedir que las fuerzas subversivas suplantarán las funciones del Estado en los territorios que llegaron a dominar en el Urabá, hayan actuado oportunamente para colaborar en el desalojo de los insurrectos, cometiendo desafueros y crímenes en contra de los individuos respecto de los cuales tenían información o sospechaban que pertenecían a la subversión.

Por ello, tacha como contrario a la verdad que las AUC hayan desalojado a la fuerza a las FARC de sus trincheras en Urabá para apoderarse de los territorios que dominaba, ocasionando un desplazamiento poblacional, pues nada indica que ese desplazamiento se haya producido como resultado del actuar institucional y programático de esa fuerza armada irregular y ni siquiera está indicado que individuos pertenecientes a la misma, y que continuaron militando dentro de ella después de expulsar a las fuerzas subversivas, hayan ejecutado esas acciones de apoderamiento como botín de guerra. El mérito de la liberación de esos territorios corresponde principalmente a las Fuerzas

Armadas, sin cuya presencia no habían podido -y muy difícilmente hubieran podido en un corto plazo y con igual eficacia- realizar las AUC la misma tarea.

En razón de varias declaraciones, considera que quedó claro que el Ejército Nacional no cometió desplazamiento forzado al penetrar a las zonas dominadas por las FARC y que, por el contrario, procuró contener a los pobladores. Asimismo se ha establecido que las AUC no entraron a esos territorios a perseguir indiscriminadamente a la población. En consecuencia quienes sí se desplazaron lo hicieron inicialmente obligados o amenazados por la guerrilla, es decir por compulsión directa, y quienes más tarde se marcharon lo hicieron por temor a las AUC, es decir para evitar ser víctimas como objetivo militar directo y específico o como víctimas inocentes de una confusión y no porque existiera el propósito de desarraigarlas, o sea, en este último caso, por una reacción refleja defensiva ante la presencia de las AUC.

Por la misma razón que no abrigaron las AUC esa función sustitutiva de dominio, tampoco hay lugar a pensar que desplazaron a habitantes de esas regiones para poder apoderarse más fácilmente de sus tierras.

En tales condiciones, le resulta desorbitado e infundado que sus defendidos hubiesen tenido algún grado de participación en ese desplazamiento, puesto que ninguno de ellos formaba parte de las AUC, a nivel de comando o de ejecución de órdenes.

Igualmente le resulta falaz que quienes habitaban en los territorios en los cuales se produjeron los hechos materia de investigación eran plenamente conocedores de que aquéllos no sólo constituían zonas de reserva forestal legalmente declaradas sino que también se encontraban dentro del perímetro de los territorios legalmente señalados, sin haber quedado suficientemente delimitados en la ley, para posesión y uso exclusivo por parte de comunidades afrodescendientes, ya que no obstante existían las normas legales, el Estado no se había preocupado de hacerlas efectivas, además que era evidente la falta de vigilancia sobre el uso de las tierras en esos territorios por cuanto se sabe que en realidad se hacía explotación maderera en gran escala, entre otras actividades que generaban un deterioro ambiental. Además, tampoco hubo acciones encaminadas a identificar y cuantificar a los individuos pertenecientes a las comunidades afrodescendientes y de singularizar éstas por su ubicación

geográfica central y el número de familias o individuos, a fin de aplicar la Ley 70 de 1993.

De otro lado, en su criterio, el tipo contenido en el artículo 337 del Código Penal hace una doble tipificación, de un lado, las conductas estrictamente lesivas de los recursos naturales por razón de invasión permanente o transitoria de las áreas donde ellos existen (reservas forestales, parques naturales, "área o ecosistema de interés estratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento") y mal uso de los recursos naturales; y, de otro lado, el respeto que los individuos no pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes deben guardar hacia los territorios donde éstas tienen su hábitat, independientemente de la existencia de recursos naturales.

En el caso que nos ocupa, dijo estimar que no existe ningún elemento de juicio indicativo de que las áreas reservadas por la Ley 70 de 1993 para las comunidades afrodescendientes se encontraran definidas e identificadas, en forma que fuera del conocimiento público, para que pudieran exigir esas comunidades el respeto por parte de los demás habitantes.

Esa tardanza de los organismos estatales encargados de hacer efectiva la Ley 70 de 1993 favoreció a que miembros de comunidades negras, poseedores de predios rurales, los negociaran con colonos, mestizos o blancos (chilapos), y éstos, a su vez, renegociaran los mismos con otras personas, lográndose en muchos casos que la posesión quedara legalizada a través de resoluciones de adjudicación del INCORA y el INCODER y los títulos de dominio se anotaran en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, lo cual permitió que las adquisiciones de terrenos con destino a las empresas que adelantarían el proyecto palmero pudieran realizarse, cumpliendo las respectivas formalidades legales. Por tanto, en su concepto no puede atribuirse ninguna culpa, por acción u omisión, a cualquiera de los particulares que realizaron esas transacciones comerciales.

Otra equivocación que observa, es que el desplazamiento forzado de habitantes de los territorios de Belén de Bajirá y zonas circunvecinas, donde luego se establecieron cultivos de palma, se realizó premeditada y planificadamente, a fin de poder adelantar ese proyecto agroindustrial, ya que, después de lograda en gran parte la expulsión de los grupos guerrilleros que tenían bajo su dominio

esos territorios y sus pobladores, transcurrió algún tiempo antes de que se pensara en adelantar dicho proyecto.

Nada indica que VICENTE CASTAÑO, sus subalternos o empresarios palmeros hayan tenido en mente, cuando procedieron a realizar sus propias acciones de rechazo armado contra la guerrilla en dichos territorios, apropiarse de éstos para constituir feudos agrícolas para su propio beneficio. La idea surgió tras la expulsión de las fuerzas guerrilleras pues obviamente no podía haber sido ejecutada en la época en que las mismas dominaban, ya que ello contrariaba su filosofía y estrategia políticas.

Por lo demás, le resulta evidente que el proyecto palmero fue puesto en marcha por empresarios, al parecer encabezados por ÍTALO CIANCI VEGA, empresario palmero en el Magdalena, quienes promovieron esa idea y buscaron a VICENTE CASTAÑO GIL para que la patrocinara.

De otro lado, afirma que se demostró también que algunos individuos decidieron engañar a los empresarios palmeros al vender lo que no era de su propiedad; incluso algunos vendieron varias veces un mismo predio.

La empresa URAPALMA fue legalmente constituida y obviamente, por el objetivo social que perseguía y la existencia de líneas de crédito específicas, se encontraba autorizada para solicitar créditos que en buena parte fueron respaldados con gravámenes sobre los bienes personales de los socios. Al respecto, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ expuso que ÍTALO CIANCI VEGA alcanzó a entregar alrededor de 12.000 millones de pesos para el proyecto palmero pero que, como éste demandaba una inversión mayor que él no podía seguir haciendo, y al parecer los Castaño tampoco, se optó por la consecución de créditos oficiales que existían como parte de los planes de impulso oficial a la agricultura.

Igualmente, el defensor se duele de la falta de sindéresis del Fiscal, en el sentido de que en la resolución de acusación no se separaron las actividades ilícitas desarrolladas por las AUC, dentro de su política de combate a la subversión, de las que se realizaron posteriormente para adelantar un proyecto palmero y en especial de las que unos pocos individuos —encargados por VICENTE CASTAÑO GIL de adquirir terrenos para formar los grandes predios,

en los cuales se adelantaría el principal proyecto palmero conocido bajo la razón social URAPALMA- realizaron en perjuicio de algunos -no todos- poseedores y propietarios de esos terrenos que pasaron a figurar dentro del patrimonio de esa empresa, a fin de poder identificar e individualizar más fácilmente a los correspondientes responsables, incluso determinadores. Entre los cuales, ni entre los ejecutores materiales, podría incluirse a sus prohijados **GÓMEZ HERNÁNDEZ** y **SÁNCHEZ MEJÍA**, pues el primero simplemente se limitó a presentar ante VICENTE CASTAÑO a los empresarios interesados en el proyecto de marras y a adquirir unas acciones de URAPALMA que le regaló a su cónyuge y, la segunda, se encargó de participar, ocasionalmente en un principio y como gerente al final, en la administración de esa empresa como lo requería su condición de socia.

En efecto, respecto a **HERNÁN DE JESÚS**, explicó que no existen elementos de juicio indicativos de que las AUC, como organización armada ilegal, fueran al mismo tiempo una empresa industrial y comercial; y, por el contrario, el Fiscal desconoce los testimonios demostrativos de que la relación del acusado con los jefes de las AUC sólo persiguieron conducir a esa organización armada ilegal a su desmonte y desactivación en pro de la paz. Asegura que no existe prueba plena o indicio grave acerca de que este procesado haya incurrido en las conductas antijurídicas por las cuales la Fiscalía lo acusó.

En relación con el delito de desplazamiento forzado, descrito en el artículo 180 del Código Penal, sostuvo que no sólo no hay elementos de convicción en ese sentido, sino que la Fiscalía no discriminó los episodios en los cuales se produjo el desplazamiento, señalando fechas exactas o aproximadas, circunstancias de modo y lugar e identificando víctimas, lo cual es necesario no sólo para perfilar adecuadamente la tipicidad y la culpabilidad sino para vincular material y jurídicamente ese tipo de conducta con la posterior apropiación de tierras pertenecientes a los desplazados.

La Fiscalía no diferenció entre los desplazamientos generalizados que el conflicto armado generó y cuya responsabilidad operativa la comparten la guerrilla de las FARC, las AUC y el Ejército Nacional -de los cuales fueron víctimas millares de campesinos y algunos habitantes de poblaciones que por repercusión se vieron en la necesidad o conveniencia de marcharse de sus lugares de habitación y trabajo y cuya motivación única predicable fue la de

eliminar al primero de los dos grupos armados ilegales por estar haciendo presencia y ejerciendo actos ilícitos de autoridad y dominio en amplias zonas del Urabá antioqueño y chocoano- y los desplazamientos singulares, concretos, de obligada identificación, que hayan sido motivados por empresarios palmeros, directa o indirectamente y con conocimiento y voluntad, cuando ya el proyecto palmero se encontraba en etapas de desarrollo.

Respecto del delito de concierto para delinquir, alegó que no fue demostrado que su representado se haya confabulado con VICENTE CASTAÑO GIL, algunos otros comandantes de las AUC o empresarios palmeros para forzar el desplazamiento de personas que tenían posesión de tierras; o para acceder a la posición y dominio de éstas mediante compras a precios irrisorios a través del amedrentamiento de los legítimos poseedores, o compras con suplantación de los verdaderos titulares de dominio o posesión, o compras con pago declarado pero no materializado.

En este sentido, respecto a la creación de URAPALMA, para el defensor se trató de un emprendimiento agrícola que interesó en principio a personas que tenían experiencia en el ramo y que consideraron necesario obtener el padrinazgo de un jefe paramilitar, VICENTE CASTAÑO, que hacía presencia dominante en la región donde podía realizarse la correspondiente empresa.

Así las cosas, el proyecto palmero no puede ser interpretado como lesivo de ninguna norma penal y no debe confundirse la puesta en marcha del mismo como fruto de un propósito delictivo, puesto que no iba a ser adelantado, y efectivamente no lo fue, por individuos pertenecientes a las AUC -con la sola excepción de los tres individuos que fueron elegidos por VICENTE CASTAÑO para adquirir tierras con destino a la estructuración física de URAPALMA y respecto de los cuales se predica que cometieron actos delictivos en desarrollo de esa misión- sino por personas con espíritu empresarial y capacidad administrativa que con su trabajo propiciaron la creación de un polo de desarrollo económico para una región deprimida por el conflicto armado, en cuanto no sólo se estableció una industria con amplias perspectivas de contribución a la economía nacional sino que se creó empleo para muchas personas, en gran parte regresadas de los lugares donde habían estado desplazadas, con el concomitante progreso económico y social de la región ya que, como está indicado, en cierto momento de 2001 y 2002 la población de

Belén de Bajirá, totalmente abandonada por sus habitantes en 1997, se hallaba copada por pobladores antiguos y nuevos.

En consecuencia, la responsabilidad surgida por conductas ilícitas que no eran propias del objeto social de dicha empresa -o sea las maniobras delictuosas que se hayan efectuado para obtener las tierras- requiere de la debida identificación de casos y de autores y víctimas, lo cual en este caso considera que no se hizo, porque los cargos pertinentes a formular serían diferentes a los que se han endilgado hasta ahora y, al no constituir esas conductas, un comportamiento previsto y querido por los socios titulares de URAPALMA no pueden englobarse bajo el tipo del concierto para delinquir.

No obstante, admitió que su defendido mantuvo relaciones con los señores VICENTE y CARLOS CASTAÑO GIL, enmarcó las mismas en la motivación político-pacifista que lo movió a hacerlo según algunos apartes del libro "Mi confesión", elaborado con base en conversaciones que el periodista sostuvo con CARLOS CASTAÑO GIL, quien lo describe como interlocutor político, e incluso contradictor en algunos momentos, de Castaño Gil, pero nunca como miembro de las AUC, o subalterno del jefe paramilitar.

Durante la presidencia Samper Pizano, en un primer intento de pactar la paz con las AUC, se permitió que aquéllas crearan fundaciones para beneficiar de distintas maneras a la población desprotegida, similar a la invitación hecha por VICENTE CASTAÑO a inversionistas particulares para que lo acompañaran en la realización de un proyecto palmero en la región de Urabá que apuntaba a beneficiar a los pobladores de esos territorios y a sacarlos del marasmo creado por el desplazamiento forzado y la lucha armada.

La aserción acerca de que **GÓMEZ HERNÁNDEZ** fue "asesor" de las AUC resulta desmentida por CARLOS CASTAÑO GIL en una entrevista que concedió a periodistas de la revista Cambio, edición del 17 de marzo de 1999, en la que precisó que los asesores de ese grupo eran intelectuales, empresarios, magistrados y políticos, lo cual precisó en el libro "Mi Confesión". La única "asesoría" que se le puede endilgar a su defendido en relación con las AUC es, "para el bien", como lo dijo CASTAÑO GIL, es decir en pro de la reconciliación y la paz. Además, el procesado no volvió a entrevistarse con éste después de 1998.

Insistió en que las AUC no desplazaron personas en Urabá porque tuvieran preconcebido el proyecto de apoderarse de las tierras de los desplazados para destinarlas a proyectos agroindustriales, lo que realmente sucedió fue que VICENTE CASTAÑO vio la oportunidad, que brindó el abandono de las tierras por sus poseedores desplazados, para idear tal proyecto y ponerlo en marcha. Sin embargo no decidieron apropiarse de los terrenos como organización, sino que VICENTE CASTAÑO compró, a través de comisionistas, algunos de esos terrenos y estimuló a inversionistas privados -a los cuales, hasta donde se sabe, no se les exigió ninguna afiliación o simpatía con las AUC- para que adquirieran la mayoría de ellos. Actuó, pues, como cualquier inversionista privado o promotor empresarial. Si en algunos casos personal armado de éstas impuso su voluntad sobre la de los propietarios o titulares de derechos sobre esas tierras, para que les vendieran directa o indirectamente -es decir para que figuraran a su nombre o al de testaferros- ello configuró un abuso personal de su poder.

Además, según el togado, nada indica que VICENTE CASTAÑO haya impedido el regreso de los desplazados para que no pudieran reclamar la devolución de sus propiedades; si no lo hizo Castaño, quien contaba con una fuerza armada a su servicio, menos pudieron haberlo hecho empresarios particulares. No se olvide que éstos se sintieron confiados para trabajar en esa región porque allí se había instalado una base del Ejército Nacional, de manera que no puede predicarse que el manto de protección se lo prestaban única, exclusiva o principalmente las AUC.

Afirma que esta acción penal surgió porque hubo propietarios o tenedores de tierras que las encontraron ocupadas por empresas palmeras cuando pudieron regresar de las regiones a las cuales se habían desplazado forzosamente y los reclamos sólo se han dado -aceptando, en gracia de discusión, que todos ellos han sido justificados y que no ha habido oportunismos al alegar mendazmente posesiones que nunca se tuvieron- respecto de aquellas situaciones en las cuales hubo ventas constreñidas, pagos por valor muy inferior al comercial real de la época o no se realizó pago alguno o los titulares de derechos legítimos fueron suplantados. El que de esa manera se haya materializado el despojo no significa necesariamente que esas personas hayan sido desplazadas una vez

más, ya que pudieron continuar habitando en la región e incluso algunas entraron a trabajar al servicio de algunas de las empresas palmeras.

En este punto, aseguró, se tergiversaron las situaciones de varios declarantes para tratar de encajarlas en el tipo penal de desplazamiento forzado, cuando declararon varias personas que pudieron retornar del desplazamiento y mantenerse en las zonas donde habían sido propietarias o poseedoras de facto, de tierras ocupadas por las empresas palmeras; por ello, reclama que las situaciones anómalas o antijurídicas que realmente se hayan producido, deben juzgarse por otros tipos penales, como usurpación, estafa, modalidades de falsedad, que describen adecuadamente esas conductas.

Aunado a ello, considera que no hay pruebas o indicios acerca de que su prohijado haya promocionado, intervenido o conocido de las maniobras de despojo de terrenos en los cuales se instaló el proyecto palmero de URAPALMA S. A. Además, si se aceptare en gracia de discusión que **GÓMEZ HERNÁNDEZ** tuvo conocimiento del plan ideado por VICENTE CASTAÑO para reinaugurar e impulsar la agricultura en Urabá, pues hasta donde se sabe, su prohijado simplemente relacionó a unos empresarios palmeros con CASTAÑO para que les colaborara en la implementación de su proyecto, pero no se demostró que haya sabido y aceptado que las adquisiciones de tierras se hicieran abusiva, amañada o violentamente.

Arguyó, entonces, que sus defendidos han sido ajenos a los métodos empleados para implementar dicho proyecto. Por consiguiente, el que DONACIANO RIASCOS TORRES le haya propuesto a **GÓMEZ HERNÁNDEZ**, por necesidad financiera o por simpatía hacia él, que hiciera alguna inversión monetaria en ese proyecto no puede acarrearle responsabilidad penal por el hecho de haber aceptado esa propuesta. Analiza que su defendido adquirió unas pocas acciones con dinero propio, y lo hizo para brindarle un poco de seguridad económica a su compañera **SÁNCHEZ MEJÍA**, ya que el estado de salud de él ha sido precario desde hace más de diez años, particularmente debido al estrés que le generó la persecución de CARLOS CASTAÑO GIL.

No obstante HEBER VELOZA presentó al procesado como eficaz agente gestor del proyecto palmero, considera que existen otros elementos de juicio que clarifican la posición de **HERNÁN DE JESÚS** frente a los hechos investigados,

tal como lo declaró RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA al precisar que *"HERNÁN GÓMEZ no maneja negocios ni plata de las AUC, no era miembro de las Autodefensas"*, lo cual corroboraron RICARDO ZAPATA y FREDY RENDÓN HERRERA.

En cuanto al delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, dice el abogado que la producción de este reato exige claridad sobre los siguientes aspectos: a) Cuáles de los predios que llegaron a conformar la masa territorial explotada por URAPALMA S. A. quedaron efectivamente incluidos dentro de la reserva creada por la Ley 70 de 1993, pues ésta excluyó expresamente aquellos predios que con anterioridad a esa fecha ya tuvieran constituida una tradición de dominio legalmente registrada; y b) Cuáles de las personas que tomaron posesiones de tierras entre 1993 y 1999, es decir, entre la fecha de entrada en vigencia de la mencionada ley y los primeros actos posesorios ejercidos por personal de URAPALMA, no tenían derecho a esa tenencia y explotación respecto de terrenos que ya quedaban legalmente incorporados a los consejos comunitarios de los afrodescendientes y luego fueron integrados a URAPALMA y otras empresas palmeras que incautamente los adquirieron por ignorar esa nueva situación jurídica.

De todas maneras, concluye que no existe fundamento probatorio para atribuirle a un simple accionista de URAPALMA, una conducta de cuya supuesta materialización vino a enterarse cuando ya URAPALMA había iniciado sus actividades empresariales. Algunos elementos de juicio existentes indican que el conocimiento de esa restricción legal generó alarma entre los socios de las empresas palmeras porque la desconocían antes de fundar éstas y que se procuró solventarla jurídicamente acudiendo a alianzas con propietarios o expropietarios de los predios ocupados por esas empresas.

Para el defensor la Fiscalía omitió el necesario estudio encaminado a identificar y precisar el dolo que habría movido a estos acusados a incurrir en las conductas delictivas que les imputa y el cual constituye uno de los factores de todo tipo. Además, sus asistidos no incurrieron, ni como determinador, ejecutor material, copartícipe o cómplice, en la comisión de los delitos por los que se les acusó.

En su sentir, no existe prueba del dolo con el cual supuestamente actuó **HERNÁN DE JESÚS**, ya que no se probó que haya querido y propiciado el desplazamiento forzado de personas; que haya tenido conocimiento de que los predios adquiridos por URAPALMA S. A. se encontraban dentro de la reserva creada por la Ley 70 de 1993 en favor de comunidades afrodescendientes; y que se haya asociado con otras personas para cometer esas dos conductas u otras de carácter delictivo.

Entretanto, respecto a **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, alegó que la misma expresó que no tuvo relación con los hermanos CARLOS y VICENTE CASTAÑO GIL, ni participación en la ideación y preparación del proyecto palmero, puesto que las actividades profesionales que para esa época desarrollaba, como empleada de una institución bancaria, ocupaban todo su tiempo.

En su condición de socia, quedó convertida en miembro de la Junta Directiva de URAPALMA, sin embargo, en las reuniones de dicha junta directiva, celebradas entre el 20 de enero de 2000 (acta No. 1) y el 5 de marzo de 2005 (acta No.24), en las cuales aparece que participaron generalmente CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES, CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO y JAIRO ALONSO BRUGÉS y, algunas veces **SÁNCHEZ MEJÍA**, se trataron varios temas que describió. Además, se puntualizó en el acta 1 que los accionistas registrados y sus respectivas participaciones porcentuales eran **SÁNCHEZ MEJÍA** (3,82); ZORAYA MÉNDEZ MOSCARELLA (3); CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ (3); LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES (45,09); y Construcciones Unidas Ltda., representada por CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO (45,09).

Asimismo, CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ en su indagatoria manifestó que las reuniones de la Junta Directiva de la empresa URAPALMA se realizaban ordinariamente en la carrera 55 No. 84-26, oficina No. 1, de la ciudad de Barranquilla y que *"la única persona que no asistía a estas juntas era **KATIA SÁNCHEZ** porque ella vivía en Montería pero el resto de los socios direccionaba nimiamente los pormenores de la sociedad porque aquí estamos en presencia de una sociedad anónima cerrada que funciona como una limitada..."*.

Por su parte, **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ** indicó que conoció a esta justiciable cuando empezó a negociar con **HERNÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ** una casa en Montería, razón por la cual se enteró de que era la cónyuge, pero nunca la vio reunida con **VICENTE CASTAÑO**, que ninguno de los dos intervino en la adquisición de tierras para URAPALMA y que éstas se habían adquirido hacía mucho tiempo, cuando **KATIA PATRICIA** entró a gerenciar esa empresa.

Asimismo, alegó que **SÁNCHEZ MEJÍA** no participó en el desplazamiento forzado, puesto que nunca formó parte de las AUC; a nivel de comando o de ejecución de órdenes, y ni siquiera había podido prever que en el futuro habría de verse involucrada en una empresa industrial patrocinada por uno de los jefes de esa organización armada ilegal. Además, en las actas de las reuniones de la Junta Directiva de URAPALMA se evidencia que en esos encuentros de socios se trataron temas relacionados con la financiación de las actividades de esa empresa, especialmente mediante la obtención de créditos.

En su sentir, **SÁNCHEZ MEJÍA** simplemente fue receptora de unas acciones de URAPALMA que adquirió y le regaló su cónyuge y subsiguientemente realizó algunas labores normales de coadministración de esa empresa. En el 2000 ejercía un cargo de responsabilidad en una entidad bancaria y no tuvo ninguna relación con **VICENTE CASTAÑO**, **ÍTALO CENCI VEGA**, **DIONICIANO RIASCOS** y otros empresarios; se vio involucrada en ese proyecto por el hecho de que su esposo decidió adquirir y regalarle unas acciones en dicha empresa; no tuvo ninguna clase de participación en la adquisición de tierras ni mucho menos en las maniobras dolosas que en algunos casos se emplearon para lograr la posesión de algunos de los predios que entraron a formar parte del patrimonio de URAPALMA; su asistencia a algunas de las reuniones de la Junta Directiva de esa empresa no registra ninguna actuación contraria al funcionamiento lícito, explicitado en los textos de las respectivas actas, es decir, no se encuentra irregularidad en las decisiones que se adoptaron cuando estaba en esas reuniones; y sólo entró a cumplir una función decisoria en la marcha de la empresa cuando en el 2005 -época en la cual la empresa ya había entrado en crisis por los sabotajes de reclamantes de tierras a las actividades de ella y se suspendió la producción, lo cual ocasionó una cesación del pago de los créditos obtenidos y las autoridades comenzaron a investigar lo ocurrido en torno al proyecto palmero en territorios del Urabá chocoano- fue designada gerente para tratar de salvar a esa entidad. No fue integrante de las

FARC ni de las AUC o del Ejército Nacional, ni tenía interés en el tema agrícola en esa zona cuando se produjeron los desplazamientos generados por la confrontación armada entre esos actores bélicos.

Adujo entonces, que la condición de socio de una empresa no apareja necesariamente la participación en la gestión de la misma, puesto que ésta se encarga ordinariamente a un presidente, director o gerente, como ocurrió precisamente en este caso. Al respecto, CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ indicó que **KATIA PATRICIA** no asistía realmente a las reuniones de la Junta Directiva de la empresa URAPALMA, aunque en las actas figura como presente. Es más, no existe ningún elemento informativo acerca de que la justiciable haya realizado desplazamientos forzados; que haya tomado parte en la adquisición de tierras para el proyecto palmero o coadyuvó en su legalización; que haya tenido conocimiento de que los territorios donde se encontraban los predios adquiridos se encontraban fuera del comercio y que, además, constituían una reserva de especial importancia ecológica; y que haya tomado parte de alguna confabulación encaminada a finalidades criminales. Ni siquiera puede decirse que intervino en haber obtenido créditos para apalancar financieramente a URAPALMA y haber realizado gestiones para lograr asociar a esa empresa con campesinos vecinos, algunos antiguos propietarios de las tierras ocupadas por la empresa, pues se trataba de impulsar una entidad industrial y comercial legalmente establecida, cuya finalidad social era el desarrollo agrícola y social de la región y de sus pobladores; el que la asociación haya llegado a realizarse con campesinos miembros de un consejo comunitario sólo puede ser interpretado como una solución que se buscó al problema suscitado por el hecho de estar operando URAPALMA en territorios de las comunidades afrodescendientes, pero ello no comporta ilicitud.

Para el defensor no hay pueba o indicio acerca de que **SÁNCHEZ MEJÍA** haya promocionado, intervenido o conocido las maniobras de despojo ilícito de terrenos en los cuales se instaló el proyecto palmero de URAPALMA S. A. pues, cumplió inicialmente un rol como miembro de la Junta Directiva de esa empresa y sólo asumió su dirección desde noviembre de 2004, cuando ya habían aflorado todos los problemas de tenencia de tierras y no se estaban haciendo nuevas adquisiciones de ellas. Además, no se han desvirtuado las aserciones de sus prohijados acerca de la manera como resultaron involucrados en la fundación de la empresa URAPALMA S. A.

En general, dice que nadie que se involucró empresarialmente en el proyecto palmero tenía conocimiento, al momento de realizar las acciones iniciales de adquisición de tierras y fundación de empresas, de que muchos de los terrenos en los cuales se iba a desarrollar ese proyecto estaban sustraídos legalmente del comercio por haber sido adjudicados a comunidades afrodescendientes, muchos de cuyos integrantes, a la vez, registraban igual ignorancia al respecto, dándose la posibilidad de algunos sí lo supieran pero callaron estratégicamente para poder vender.

Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta, al momento de dictar fallo, la afectación en la salud que le ha generado este proceso a su prohijada.

En este punto debe resaltarse, en cuanto al escrito que remitió el 18 de febrero último el procesado **HERNÁN DE JESÚS**¹⁰, a través de su apoderado, acerca de sus alegatos conclusivos, el mismo no será tenido en cuenta en razón de que en caso de hacerlo se estaría vulnerando el principio de publicidad, como elemento esencial del debido proceso, que garantiza precisamente el ejercicio del derecho de contradicción de los demás sujetos procesales.

En su momento, el procesado **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS** manifestó que los hechos por los que la Fiscalía lo acusó son un montaje de la guerrilla, pues nunca ha sido paramilitar, ya que ningún comandante de ese grupo al margen de la ley lo reconoció como subalterno. Además, no obligó a nadie para que vendiera sus tierras y la gente le daba comisiones voluntariamente.

Entretanto, el doctor Delfredo Segura Baldivia, defensor de **MARIO LEÓN VILLA PACHECO** y **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, solicitó sentencia absolutoria alegando que no existe certeza acerca de su responsabilidad, de conformidad con el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, indicó que, respecto al delito de desplazamiento forzado, la Fiscalía omitió durante toda la etapa investigativa establecer a quien se desplazó, además, no hay prueba de que alguno de los acusados haya incurrido en tal comportamiento.

¹⁰ Folios 82 y ss del C. 91

De otro lado, adujo que no se les debe dar valor probatorio a las pruebas recaudadas en la etapa instructiva porque no hubo contradicción y, además, un testigo dijo ante el Juzgado que no sabía leer ni escribir y firmó sin antes haberle leído lo que decía la denuncia.

Se refirió a la buena conducta de **VILLA PACHECO** y a sus aseveraciones, explicando cómo se vinculó a trabajar con la empresa URAPALMA S.A y que nunca tuvo nexos con paramilitares.

Adujo que **MARIO LEÓN** y **JUAN JOSÉ** no eran empresarios ni compraron terrenos en ese sector, ni se reunieron con personas expertas en modificar el terreno, el primero sólo se dedicó a manejar un vehículo de propiedad de URAPALMA.

Además, su prohijado **MARIO LEÓN** no tenía conocimiento que en esa región se iban a cultivar dichas plantaciones y se demostró que le ofrecieron empleo y, como era una empresa bajo los parámetros legales, decidió aceptar el empleo y fungió como simple conductor.

Alegó que la designación de **MARIO LEÓN** como representante legal de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma del Urabá desde el año 2003, fue por error y aprovechándose otros campesinos de su estado de necesidad, es así que bajo las órdenes y en calidad de subordinado de **JAVIER DAZA PRETELT**, le hizo firmar unos documentos en blanco manifestándole que eran para la adquisición de 10 hectáreas de tierra y luego, en una reunión en la iglesia del corregimiento de Belén de Bajirá, fue elegido representante legal de dicha asociación, elección que fue propiciada por **DAZA PRETELT**, quien indujo a más propietarios para que fueran socios o integrantes de la junta directiva de la asociación. Por tanto, el justiciable quedó como representante legal de la asociación pero nunca asumió el rol que este cargo le imponía porque no sabía, no tenía dominio ni sabía cuál era el objetivo de la misma.

De otra parte, aludió a que el procesado no conoció a **LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO** y nunca viajó a Barranquilla, máxime si se tiene en cuenta que las escrituras protocolizadas en Barranquilla son producto de una falsificación de la firma y huella de **VILLA PACHECO**. Además, nunca firmó la escritura como representante legal en la Notaría Quinta de esta ciudad, nunca tuvo relación

ningún fundamento porque es incoherente e impreciso, además, afirma que se *"hace la víctima para sacar provecho de este proceso"*, por tanto, solicitó que se *"rechace de plano este testimonio"*.

Respecto a la escritura 0364 de abril 22 de 2003, compraventa del lote de terreno "El Tesoro" realizada con el sindicado **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, expresó que estas ventas eran legales, pues no era delito enajenar estas

comercial ni de amistad con la empresa AGROPALMA, ni con su representante legal **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, ni adquirió dinero por esa transacción.

Respecto a la escritura 2556, del 09 de noviembre de 2005, tramitada en la Notaría 8 de Barranquilla, adujo que la defensa en el juicio solicitó un estudio grafológico y se demostró que la firma y huella que aparecen en ella no pertenecen a **VILLA PACHECO**, al punto que también anexan una fotocopia de su cédula adulterada, y la huella de su índice derecho al estamparlo lo corren para que no se diferencie con precisión.

Igualmente, dijo que este justiciable nunca tuvo privilegios al ser representante legal de la asociación, nunca tuvo hectáreas de tierra a su favor, ya que todos los actos jurídicos de adquisición que hacían fueron a sus espaldas, sin conocimiento y dominio de lo que fraudulentamente le adjudicaban. En ningún momento esté acusado, en calidad de representante legal de la asociación,

En fin, el defensor relacionó los testimonios que tuvo en cuenta la Fiscalía para endilgarle responsabilidad a este justiciable, sin embargo, le parece que adolecen de credibilidad porque se basan en indicios que no llevan a la certeza de estas imputaciones.

En tales condiciones, concluye que no hay prueba que lo responsabilice como autor o partícipe de las conductas punibles por las que se le acusó, máxime si la Fiscalía nunca ha tenido en cuenta las declaraciones de reconocidos paramilitares que manifestaron que nunca lo tuvieron en sus filas ni lo vieron vestido, ni con armas de fuego de la estructura militar.

Del mismo modo, la doctora Paola González Henao, defensora de **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, adujo, respecto a la compra de las hectáreas por parte de su prohijado en terrenos colectivos, que no es verdad que la tradición de ese inmueble fuera producto de una resolución del INCORA falsa; al punto que no se le endilgó a ninguno de los partícipes de esta transacción el delito de falsedad en documento público. Al respecto, relacionó los casos de la falsedad en las resoluciones del INCODER.

Aludió a que, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, la empresa Selva Húmeda no desarrolló la actividad palmera y que la extensión de la propiedad es de 199 hectáreas y no de 244. 51, tal como se demostró en la actuación, razón por la cual solicitó que se compulsen copias para que se investigue penalmente al Fiscal por el delito de Prevaricato por acción.

Respecto al delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, arguyó que el verbo rector "invadir" debe ejecutarse respecto de territorios

valorar como un indicio, sin embargo, no cumplen con los parámetros legales para ser tenidas como prueba para endilgar responsabilidad a **MARIO LEÓN**.

Respecto a **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS** especificó que es una persona raizal de las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó, su actividad principal es la ganadería y la agricultura, por tradición y herencia de sus padres posee tierras, de las cuales sobrevive. Su descendencia declaró que éste no tenía ningún conocimiento de la Ley 70 de 1993.

Además, fue víctima del desplazamiento forzado en los años 96 y 97, el cual generó la guerrilla en los predios donde se encontraba. En diligencia de indagatoria negó ser o haber sido integrante de algún grupo paramilitar y desmiente a **JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA** en torno a que lo reconoció como paramilitar, testimonio con respuestas incoherentes y vacías en cuanto a la concreción de la fecha, hora y razones por las cuales dice que perteneció a un grupo paramilitar, sin determinar a qué frente de la AUC pertenecía.

En este punto, el defensor aludió a las exculpaciones del justiciable en cuanto a los hechos que se le endilgaron.

De otra parte, expuso que la declaración de **ENRIQUE PÁEZ PETRO** no tiene ningún fundamento porque es incoherente e impreciso, además, estima que se *"hace la víctima para sacar provecho de este proceso"*, por tanto, solicitó que se *"rechace de plano este testimonio"*.

Respecto a la escritura 0364 de abril 22 de 2003, compraventa del lote de terreno "El Tesoro" realizada con el sindicado **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, expresó que estas ventas eran legales, pues no era delito enajenar estas tierras y, además, **RUIZ COSIO** aclaró como fue la negociación.

En cuanto a la denuncia que hace **GUSTAVO GARCÍA PÉREZ**, al abogado le parece poco creíble porque no denunció los hechos ante ninguna entidad oficial, simplemente presupone que **PALACIOS PALACIOS** realizó estas conductas pero en ningún momento describió situaciones de modo, tiempo y lugar sobre la muerte de la supuesta víctima del homicidio.

En fin, el defensor relacionó los testimonios que tuvo en cuenta la Fiscalía para endilgarle responsabilidad e este justiciable, sin embargo, le parece que adolecen de credibilidad porque se basan en indicios que no llevan a la certeza de estas imputaciones.

En tales condiciones, concluye que no hay prueba que lo responsabilice como autor o partícipe de las conductas punibles por las que se le acusó, máxime si la Fiscalía nunca ha tenido en cuenta las declaraciones de reconocidos paramilitares que manifestaron que nunca lo tuvieron en sus filas ni lo vieron vestido, ni con armas de fuego de la estructura militar.

Del mismo modo, la doctora Paola González Henao, defensora de **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, adujo, respecto a la compra de las hectáreas por parte de su prohijado en terrenos colectivos, que no es verdad que la tradición de ese inmueble fuera producto de una resolución del INCORA falsa; al punto que no se le endilgó a ninguno de los partícipes de esta transacción el delito de falsedad en documento público. Al respecto, relacionó los casos de la falsedad en las resoluciones del INCODER.

Aludió a que, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, la empresa Selva Húmeda no desarrolló la actividad palmera y que la extensión de la propiedad es de 199 hectáreas y no de 244. 51, tal como se demostró en la actuación, razón por la cual solicitó que se compulsen copias para que se investigue penalmente al Fiscal por el delito de Prevaricato por acción.

Respecto al delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, arguyó que el verbo rector “invadir” debe ejecutarse respecto de territorios considerados reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento. Sin embargo, ni su prohijado, ni su socio **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ**, entraron o irrumpieron por la fuerza, a ocupar anormal o irregularmente los terrenos en suelo chocoano, respecto de los cuales, adquirieron derechos de quienes legítimamente los ostentaban. Es más, como argumento de preclusión en relación con los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, la Fiscalía reconoció, como probatoriamente demostrado, que quienes les vendieron esos derechos a estos acusados, esto

es, **JOSÉ LUIS PALACIOS CUESTA, PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ BARAHONA, MARCELO MARCELINO POLO MARTÍNEZ y JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, fueron enfáticos en afirmar que realizaron directamente las negociaciones con **RUIZ COSSIO y PENAGOS GONZÁLEZ**, sin intermediarios, y que esos negocios jurídicos fueron producto de su total y libre voluntad, es decir, que no hubo amenazas, presiones, o actitudes violentas u hostiles de parte de los compradores o de personas enviadas por ellos para que se decidieran a vender sus derechos sobre las tierras. Asimismo, los vendedores recibieron un precio justo por los derechos que tenían sobre los bienes inmuebles y, por tanto, no tienen ningún reclamo.

Argumentó que esas personas ostentaban o poseían, desde varios años atrás, derechos respecto de los terrenos en suelo chocoano, enajenaron libre y conscientemente sus predios, aspecto que se demostró con varios documentos, entre los cuales se encuentran los actos administrativos expedidos por el INCORA, donde se les reconocen a los vendedores derechos sobre esos terrenos.

En tales condiciones, **RUIZ COSSIO y PENAGOS GONZÁLEZ** entraron a poseer dichos terrenos por una negociación que realizaron de buena fe con personas que desde hacía varias décadas habían adquirido derechos respecto de esos terrenos, por tanto, no podría concluirse que invadieron esas tierras, pues no entraron o irrumpieron en las mismas por la fuerza, o de manera anormal o irregular.

Así las cosas, para la abogada se demostró que su prohijado -directamente o como determinador- no realizó maniobra que pueda considerarse constitutiva de la conducta de invadir, razón por la cual concluye que su comportamiento es atípico frente a ese tipo penal. Además, el verbo rector de ese delito no es comprar, sino invadir; y el hecho de comprar derechos sobre un terreno de quien legítimamente los posee, no puede considerarse como una acción arbitraria o ilegítima, así esos terrenos estén ubicados en zonas que posteriormente fueron declaradas por la ley como especialmente protegidas.

De otra parte, en su sentir, la Fiscalía no tiene claro si los terrenos adquiridos por los socios de Selva Húmeda están ubicados o no en áreas especialmente protegidas.

Además, dichos acusados jamás cultivaron palma o ningún producto en esos terrenos, porque cuando intentaron adecuar las tierras para el uso que desde un comienzo se habían propuesto -la reforestación-, se produjo la quema de una maquinaria y el homicidio de un trabajador, lo cual originó que las dejaran abandonadas. Por ende, como no realizaron trabajos de ninguna índole en esas tierras, y no existe prueba en contrario, concluyó que no se les puede imputar haber causado impacto ambiental sobre las mismas, máxime si la Fiscalía aceptó que en esas tierras jamás se cultivó palma y, aunque se precisa que al parecer esas tierras se dedicaron a la ganadería, y que ello pudo haberlas impactado ambientalmente, los testigos aludidos, quienes residen en la zona, manifestaron que antes de que **RUIZ COSSIO** y **PENAGOS GONZÁLEZ** adquirieran derechos sobre ellas, había pasto sembrado y que sus antiguos propietarios cultivaban plátano, yuca, arroz y otros productos, cuyo cultivo no está excluido para el uso de las mismas.

Por lo demás, indicó la togada que ni su defendido ni su socio, han adecuado o utilizado esas tierras para el pastoreo de ganado o para el cultivo de plátano, por lo menos, eso no se demostró dentro del proceso.

Así las cosas, solicitó sentencia absolutoria para **RUIZ COSSIO**, por estar demostrado que la conducta que se le atribuye no se adecúa típicamente en el tipo penal que describe el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica y que no fue causante de daño en el ecosistema o recursos naturales propios de las tierras de que trata este proceso.

Entretanto, el doctor Nicolás de Jesús Marín Gutiérrez, defensor de **ORLANDO MORENO MORA**, solicitó la absolución de este justiciable con fundamento en los siguientes argumentos:

La certificación de existencia de la Asociación de antiguos vecinos de la cuenca del río Curvaradó y zonas aledañas, en la cual aparece **MORENO MORA** como representante legal, no ha sido verificada en varios aspectos, como en la autenticidad de las firmas, al punto de que el acusado en su indagatoria manifestó que no sabía leer ni escribir, incluso ni firmar, sólo aprendió en el centro de reclusión, razón por la cual dicho documento no lo firmó, por tanto, deduce que su defendido fue utilizado por inescrupulosos, máxime si se tiene

en cuenta que carece de capacidad económica e ideológica para desarrollar actividades criminales, pues se trata de un campesino que también fue víctima de desplazamiento. Al respecto, aludió a la declaración de HASBÚN MENDOZA referente a la utilización de campesinos ignorantes para la consecución de sus fines.

Alega que no existe prueba acerca del dolo del procesado y es posible que haya sido utilizado como instrumento, aprovechándose de un error y de su buena fe. Tampoco se demostró que haya existido un acuerdo con otros sujetos para la comisión delictiva, ni que ejerció un codominio funcional para la ejecución criminal.

Considera que las declaraciones de LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA y MANUEL DENIS BLANDÓN no son verosímiles, puesto que se trata de milicianos que participaron activamente en el Frente 57 de las FARC y obligaron a MANUEL MOYA a dejar la representación legal del consejo comunitario y fue amenazado de muerte -proceso radicado 2022-, aspectos que fueron confirmados por varios declarantes en la audiencia, entre ellos, GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA y JAIME BEITAR MENA.

Indicó, además, que no se demostró la propiedad de los terrenos que supuestamente adquirió el procesado como representante legal de dicha asociación. A la Fiscalía le faltaron pruebas para demostrar la responsabilidad del justiciable en los delitos por los que se le acusó. Además, el procesado no está obligado a aportar pruebas que demuestren su inocencia.

Argumentó que el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica exige que el sujeto activo tenga conocimiento de que está invadiendo por la fuerza un espacio geográfico caracterizado por su especial protección. Sin embargo, su prohijado desconocía que la adquisición de su porción de tierra estaba legalmente restringida, error del que no fue sacado por el notario que formalizó la escritura, por tanto, se configura un error de tipo invencible, lo cual excluye su responsabilidad.

Entretanto, el procesado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, en escrito que introdujo a través de su defensor en la audiencia pública, manifestó que el desplazamiento de la población en este asunto fue planeado, ejecutado y

aprovechado por las FARC, tal como lo expresaron varios declarantes, entre ellos, alias Samir, comandante de una facción guerrillera.

En relación con la suscripción de escrituras de ventas de terrenos en representación y como apoderado de CATALINA MÁRMOL, AGUSTÍN MONTALVO QUINTERO, ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA y RENÉ PALACIOS AGUALIMPIA, explicó que en esas escrituras fue el representante de las personas que le fueron presentadas como propietarios, por JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, raizal de esas tierras, descendiente negro, emparentado con los dueños de las mismas, quienes indicaron que no fueron desplazados. Ingenuamente pensó que litigaba en favor de las personas que tenían un título y estaban en situación de desprotección porque sus tierras habían sido compradas a otros propietarios que alegaban posesión.

Asimismo, adujo, luego de relacionar varias pruebas, que en su indagatoria aclaró que a su oficina compareció TORRES HERNÁNDEZ, quien le entregó una documentación, que confirmó con las oficinas de registro y con el INCORA, y los poderes de los vendedores, últimos que no constató en virtud del principio esencial de confianza, y procedió a suscribir las escrituras, con lo cual tan sólo ejerció su profesión.

Así las cosas, no niega su participación en la actividad jurídica que hizo la transferencia de propiedad y dominio de tres inmuebles que existían jurídicamente para esa fecha. Dice que estudió los títulos con apego a la Ley 70 de 1993 y los predios que analizó no hacían parte de territorios protegidos por cuanto tenían matrícula inmobiliaria independiente y ello conlleva la presunción de propiedad privada.

En tales condiciones, considera que no existe ningún elemento que demuestre un acuerdo previo para apropiarse de los predios adjudicados a los consejos comunitarios, ni que hacía parte de la guerrilla o los paramilitares que desplazaron a los moradores de la zona en 1997, o que cohonestaba con las personas naturales o jurídicas que adquirieron terrenos para asentar industrias agrícolas o dañar los recursos ambientales.

Tilda de etérea la acusación, puesto que no se especificó su accionar, simplemente se sustenta en el presunto conocimiento que debió tener de la

situación en la que se encontraban esos terrenos, pero no existe prueba que lo comprometa con los grupos criminales. Su actividad, alega, sólo se limitó a tres ventas que se hicieron más de ocho años después de los actos de desplazamiento.

Además, las afirmaciones de "El Alemán" son meras especulaciones y se trata de un testimonio de oídas, al igual que el de "Pedro Hasbún", quien no tiene conocimiento directo. Sobre la declaración de RODRIGO ZAPATA, quien señaló que TORRES HERNÁNDEZ ofrecía títulos legalizados por el INCORA y el INCODER y era él quien *"planeaba y ejecutaba el negocio de las tierras baldías, no del resguardo, no en posesión de colonos, sino sencillamente desocupados hasta que entraron en posesión de Palmas del Curvaradó S.A."*, indicó que su participación fue sólo recibirle el poder para hacer la titulación, no el negocio de las tierras, porque las mismas ya se hallaban en posesión de **SIERRA MORENO**. Concretó que nunca desplazó a campesinos ni raizales, pues el desplazamiento ocurrió en 1997.

De otra parte, argumentó que el gerente del INCORA lo único que manifestó es que las resoluciones de adjudicación no están en sus archivos, sin embargo, no hay indicio de que él haya sido el autor de tales documentos, es más dichas resoluciones fueron la base fundamental para la apertura de los folios de matrícula inmobiliaria en el 2003, como consta en los certificados de tradición. Los títulos y su posterior uso no pueden ser indicio de su responsabilidad, ya que las resoluciones son auténticas, según la misma entidad que las expidió.

En cuanto a la aplicabilidad de la Ley 70 de 1993, adujo que desconocía sus alcances y erró al entender que los predios de propiedad privada están excluidos del resguardo afrodescendiente, lo cual, aunado al registro de instrumentos públicos, la falta de archivos documentales en el INCODER y la ambigüedad en la alinderación del territorio comunitario y la cantidad de leyes en materia agraria demuestran su ajenidad en la comisión delictiva, máxime si en el juicio se vislumbró que los mismos residentes de la zona vendieron, algunos regresaron y otros ocultaron la naturaleza del dominio sobre los predios.

Igualmente, respecto al delito contra el medio ambiente expresó que requiere el conocimiento de la conducta y la voluntad de invadir la zona de especial

importancia ecológica, por tanto, si en el título de propiedad o en el certificado de matrícula no aparece la limitación de uso no puede saberse que se trata de resguardos forestales, ecológicos o raciales, máxime si hasta se aprobaron planes de manejo ambiental para el cultivo de palma, circunstancias que impiden la elaboración de un juicio previo de antijuridicidad. Así que no invadió tierras protegidas de manera consciente y voluntaria y, además, la explotación posterior es del resorte del comprador.

En su criterio entonces, simplemente ejecutó un mandato profesional, razón por la cual no es vendedor, solamente suscribió las escrituras pero no entregó bienes, no materializó ninguna conducta sobre ellos, ni negoció los términos del contrato, no recibió el precio, ni alteró las condiciones del mandato, tampoco promovió la venta, pues esas actividades las desarrolló el contratante. Por tanto, el simple mandato no constituye ninguna de las conductas por las que se le acusó, máxime si mediante la Resolución 2672, del 6 de diciembre de 2006, expedida por el INCODER, mediante la cual resuelve recursos contra la resolución que inicia el procedimiento de delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras, es decir, que aún no se sabía cuáles eran las zonas especialmente protegidas, se generó la imposibilidad de materializar la antijuridicidad o predicar la conciencia de la misma.

En tales condiciones, solicitó que se le absuelva de los delitos por los que se le acusó.

Entretanto, su defensor, doctor Efraín Tirado Bedoya, también solicitó que se profiera sentencia absolutoria para su prohijado. Luego de referirse al origen del desplazamiento de los pobladores de las regiones de Curvaradó y Jiguamiandó, expresó que **MARIO ALBERTO** no hacía parte del proyecto palmero, en razón de que no hay prueba de ello ni de que hacía parte de las autodefensas, simplemente actuó como abogado litigante, lo cual no lo convierte ni en autor, partícipe o cómplice de las conductas que el cliente despliegue.

Del mismo modo, arguyó que sólo hasta el 2006 el INCORA declaró la nulidad - no la falsedad- de los títulos que le entregó JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ para su estudio, los cuales estaban inscritos desde el año 2003 en el folio de matrícula inmobiliaria con fundamento en unas resoluciones del

INCORA de 1992, por lo que luego de revisarlos y observar que no había ninguna irregularidad, porque, ante la ambigüedad de la legislación agraria, era posible que se hubiesen dado títulos de 800 y hasta de 1.500 hectáreas – permitido por la Ley 34 de 1936- por adjudicatario, mediante los poderes que estaban suscritos ante Notario Público, realizó las tres ventas a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**.

De otra parte, expresó que varios testigos aludieron a la existencia de TORRES HERNÁNDEZ -quien se mostró afín a los poderdantes-, quien tenía contactos con el INCODER y ofrecía a los campesinos legalización de títulos. En la actuación están las resoluciones del INCODER acerca de la adjudicación de los predios a las personas que posteriormente le confirieron poder a su defendido, con la presentación personal ante notaría, y luego se realiza la venta a Palmas del Curvaradó. La Fiscalía no demostró que **MARIO ALBERTO** fuese el artífice de las resoluciones del INCODER, las cuales fueron declaradas nulas después de las ventas. La única prueba de la Fiscalía son esos poderes, los cuales son auténticos, ya que, según el estudio, las huellas de RENÉ PALACIOS AGUALIMPIA, CATALINA MÁRMOL DE LEMUS, BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA coinciden con las que aparecen en la tarjeta de preparación decadactilar, la única que no pudo cotejarse fue la de AGUSTÍN MONTALVO QUINTERO porque no era apta para cotejo.

Es claro que **SIERRA MORENO** le compra las posesiones a los supuestos raizales en el 2004 y despliega su proyecto palmicultor, posteriormente, para el año 2005, **VÉLEZ GIRALDO** le dice que está en unos terrenos que no le pertenecen, cuyos títulos son de sus poderdantes y se entra en una negociación, negociación que **GABRIEL JAIME** dice que la hizo con RODRIGO ZAPATA y que la intervención de su prohijado con RODRIGO ZAPATA, quien decía representar a los dueños de esas tierras, la hizo como simple abogado, aspecto confirmado por **SIERRA MORENO**, quien ya estaba asentado en esos predios.

Así las cosas, piensa que frente al desplazamiento no puede predicarse la responsabilidad de su prohijado, pues dicha conducta fue cometida por la guerrilla en 1997. Además, la elaboración de los títulos de marras fue en 1992 por parte del INCORA, y desde el año 2000 fue cuando empezaron a ingresar las empresas palmicultoras, por tanto, su accionar fue después de que el

proyecto de palma ya se había iniciado, razón por la cual ni el desplazamiento ni el aprovechamiento del estado antijurídico es atribuible a este procesado por que no existe nexo causal. Las escrituras públicas en últimas no tuvieron el efecto de impedir el retorno de los desposeídos porque fueron declaradas nulas en el 2006.

De otro lado, si según la Fiscalía la finalidad del desplazamiento era la siembra de la palma, su defendido no era empresario palmicultor, como tampoco lo eran RODRIGO ZAPATA y TORRES HERNÁNDEZ.

Finalmente, respecto al delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, adujo que los poseedores de los terrenos antes de 1997 ya explotaban los predios de manera agrícola y ganadera y la mera suscripción de las escrituras no prueba el nexo causal frente a esta conducta. Y tampoco se demostró que el justiciable tuviese relación con miembros de las autodefensas.

Por su parte, la doctora María Cecilia Ospina Macías, defensora de **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, solicitó la absolución de la misma con base en los siguientes argumentos:

No se demostró que los parámetros de FUNPAZCOR se asemejaron a ASOPROBEBA y a TULAPAS, porque la primera fue creada por FIDEL CASTAÑO en los años 1989-1990 con el fin de tener un banco de tierras donadas por los hermanos CASTAÑO, las cuales, luego de un proceso de parcelación, la finalidad era repartirlas a todos los campesinos que se encontraban en ese momento en conflicto. Mientras que la segunda fue una asociación de productores de plátano, que se presentó en parte de la región en conflicto y, no obstante en ambas estuvo su prohijada, no se probó que la primera se trasladara a la segunda, pues tenían objetivos diferentes. Además, **SOR TERESA** no tiene ninguna vinculación con TULAPAS.

De otra parte, pide tener en cuenta que JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ dijo que su defendida tan solo manejaba la parte legal de Los Castaño y si bien estuvo casada con uno de ellos -hasta 1984-, eso no significa que haga parte del andamiaje criminal, o que haya sido administradora de las fincas ganaderas y haya estado en Bajirá, pues su finalidad fue fundamentalmente manejar ASOPROBEBA, con la cual se pretendía conseguir la semillas de plátanos para

sembrar y repartirlas a los campesinos que en el momento se encontraban en precarias situaciones económicas. Su proyecto era el del plátano y no el de la palma africana. Las decisiones de FUNPAZCOR eran tomadas por la junta directiva y no por ella.

En relación con la vinculación de la procesada con alias "55", "Palillo" y "Napo", quienes hacían las negociaciones de las tierras, la acusada tan solo entregaba el dinero que VICENTE CASTAÑO le daba a ella para que pagara las compras, nunca tuvo contacto directo con las personas que estaban vendiendo las tierras. Además, HASBÚN MENDOZA indicó que los desplazamientos los realizó "Palillo" y "Napo" y que "Teresita" no tenía nada que ver con eso.

Para la defensora el Fiscal no delimitó las víctimas del desplazamiento ni los autores de los mismos, tal como lo indicó el Tribunal Superior de Medellín.

Luego de relacionar las declaraciones que se encuentran en la actuación, las cuales piensa que poco vinculan a su defendida, excepto las de CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ LEÓN y MANUEL RAMOS HERNÁNDEZ, adujo que la declaración del sujeto apodado Samir y AMADOR CAICEDO, son importantes para su defensa. Asimismo, FREDY RENDÓN, alias El Alemán; RAÚL HASBÚN, y RODRIGO ZAPATA, alias Ricardo, no relacionaron a **SOR TERESA** como parte del andamiaje criminal ni en los desplazamientos.

Señaló que los mismos integrantes de las AUC, como alias El Alemán, HEBER VELOZA, RODRIGO ZAPATA, alias Ricardo, entre otros, tuvieron una gran injerencia en los hechos investigados, muchos de los cuales han relatado y aceptado ante la Fiscalía de Justicia y Paz, lo que conllevó a tomar esta investigación bajo un contexto de macro criminalidad que necesariamente deberá tratarse en forma concatenada dentro del marco de la Ley 975 de 2005, máxime si FREDY RENDÓN dijo que ellos fueron los generadores de violencia en esa región, al igual que grupos armados al margen de la ley como la guerrilla, lo cual admitió el sujeto apodado Samir, quien además relató los enfrentamientos entre el bloque de "El Alemán" con el bloque que lideraba alias "Karina" en la zona; así como también se ha evidenciado que el ejército colombiano tuvo injerencia en los hechos investigados.

Por lo que, si bien la investigación fraccionada de los hechos, ha arrojado sentencias condenatorias en contra de varias personas ajenas al conflicto, éstas se derivan de vínculos esporádicos con los verdaderos generadores del mismo -conocido es que en este caso existen condenas a personas que efectivamente generaron violencia en la zona-, pero ello no significa que su prohijada esté vinculada con la comisión delictiva.

El paradigma diseñado por la Fiscalía, en relación con **GÓMEZ ÁLVAREZ**, consistente en la vinculación de FUNPAZCOR dentro del contexto de la palma africana como ente financiador y como parte de la estructura militar, alega que no corresponde a la realidad. En las declaraciones no se han encontrado elementos que vinculen a FUNPAZCOR con los proyectos de la palma africana. Se ha valoración errada del papel de la sindicada frente a todos los gestores de violencia en la región comprendida en la zona de conflicto. Además, **FREDY RENDÓN** reconoció que muchas de las personas investigadas no tenían conexión con los hechos y que su defendida sólo entregaba el dinero por encomienda de **VICENTE CASTAÑO**, lo cual no significa que la procesada hiciera parte de la organización o que hubiese realizado desplazamientos.

El procesado **JESÚS IGNACIO** manifestó que el dinero que manejaba **SOR TERESA** hacía parte del dinero legal de **VICENTE CASTAÑO**, que provenía de las fincas ganaderas, máxime que el dinero ilegal era manejado por otra persona. Asimismo, dijo que la misión de la compra de tierras fue de alias "55", "Palillo" y "Napo" y que **SOR TERESA** se mantenía en esa región cuando comenzó la oficina de **URAPALMA** y pasó a liderar el proyecto del plátano con las negritudes, proyecto apoyado por el padre **LEONIDAS VARGAS** de la diócesis de Apartadó. E indicó que los Castaño nunca ligaban lo legal con lo ilegal, es decir, que si su prohijada manejaba las empresas legales, todo lo que entraba y los recursos que entraban, eran para los negocios de ganado, finanzas que eran legales; y que no conocía relaciones de actividades entre **SOR TERESA** y el Gordo Pepe, quien manejaba el dinero ilegal. Estos aspectos fueron confirmados por **FREDY RENDÓN**.

Alias "Monoleche" también afirmó que "Teresita" era consciente de que sus patronos eran los comandantes de los grupos armados en Colombia, pero éstos nunca la utilizaron para comandar un grupo ni para realizar desplazamientos, la tenían para representar asuntos legales ante la iglesia, ante un gobernador,

ante un alcalde, era la persona que utilizaban para este tipo de relaciones o conexiones, como lo hizo con el padre LEONIDAS.

Por su parte, CARLOS DANIEL MERLANO, quien ya fue condenado por estos hechos, no mencionó a la acusada.

Respecto a la conducta de invasión de áreas de especial importancia ecológica, adujo que en la zona no existían vallas ni publicidad acerca de la prohibición de la Ley 70 de 1993, ni siquiera en la matrícula inmobiliaria de las propiedades que fueron objeto de venta. Además, muchos pobladores del sector solo vinieron a enterarse de tal normatividad cuando la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz empezó a hacer injerencia en la zona. Por tanto, su prohijada no conocía la prohibición.

Entretanto, el procesado **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, al momento de concederle el uso de la palabra en la audiencia pública afirmó, luego de resumir su vida en Urabá, doliéndose de la inactividad del Estado en ese sector y el dominio de la guerrilla y de los paramilitares, que montó una empresa siguiendo los parámetros legales sin desplazar a ninguna persona, por el contrario, a las 52 familias que estaban desplazadas aseguró que les brindó la oportunidad de trabajar, los vinculó a la empresa y compró tierras que tenían tituladas campesinos desde muchos años atrás y mejoras de otros. Invitó a muchas personas a que invirtieran en el sector, sin conocer de la Ley 70 de 1993. El Estado los invitó a invertir allí por medio del Ministerio de Agricultura. Presentaron los papeles a FINAGRO y, según él, todo lo hicieron bajo la premisa de poner como garantía tierras y posesiones de su familia en Medellín. Invertió 16'000.000.000 de pesos que se perdieron y lo dejaron en la ruina. La extractora se hurtó todo el dinero de la producción que se había sacado. Le quemaron la maquinaria y los campamentos. Reforestó las orillas de los ríos, las ciénagas y los cerros.

Adujo que nunca tuvo que ver con miembros de las AUC, ni en el montaje ni en la impulsión del proyecto, lo extorsionaron con unos títulos avalados por el Estado, compró las tierras dos veces. Además, leyó un escrito que envió al Ministerio de Agricultura.

De la misma manera, el doctor Luis Eduardo Agudelo, defensor de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, arguyó que no obstante la responsabilidad penal es personalísima, en este asunto, a partir de un contexto general se predicó la autoría de todos los implicados bajo la figura de los aparatos organizados de poder. En este sentido, el abogado sintetizó el análisis contextual que de los hechos hicieron la fiscalía y la parte civil.

En tales condiciones, si bien el contexto relatado por la Fiscalía acerca del origen del desplazamiento de las comunidades afrodescendientes mestizas lo admite como cierto, considera que no todos los acontecimientos violentos que se suscitaron en el bajo y medio Atrato chocoano se derivan de hechos concretos demostrados, y en esa medida, para demostrar la responsabilidad penal subjetiva era necesario individualizar la responsabilidad de cada uno de los sujetos, por tanto, se tenía que probar que cada uno de los empresarios desplazó o impidió que las supuestas víctimas retornaran a la comunidad para poder apropiarse de su territorio y así implementar el proyecto agroindustrial.

En relación con este aspecto, aludió a que en principio es cierto que el territorio de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó es habitado por comunidades negras y que se encuentran incluidos entre las cuencas susceptibles de ser tituladas de modo colectivo, pero hay sectores que eran habitados en su mayoría por comunidades mestizas de origen cordobés - chilapos-, tal como la comunidad asentada en Caño Claro, comunidad conformada por familias mestizas, las cuales salieron desplazadas en el éxodo ocurrido entre los años 1996 y 1997, cuatro años antes de la constitución de los territorios colectivos de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó. Al respecto, recordó que el proceso de constitución colectiva de estos territorios se realizó, incluso, con gran parte de la población aún en estado de desplazamiento, población negra y mestiza que por su condición no participó en dicho proceso.

Alegó que, si estas poblaciones mestizas que ocupaban dichos predios con antelación a la declaratoria de territorio colectivo tienen ocupaciones anteriores de buena fe, tienen derecho a que se les reconozca sus mejoras y a que el INCODER se las adquiera a través del trámite administrativo de saneamiento de los territorios colectivos, lo que le reduce a las comunidades negras su derecho adquirido con antelación a su condición de desplazados.

Al respecto, afirmó que la cultura se construye de manera dinámica con el paso del tiempo, y en tal sentido es posible y válido que personas ajenas a una cultura asuman e interioricen parámetros de otra cultura, pero ello tiene que ser expreso, porque una persona foránea a la cultura negra para poder entregar su predio a la comunidad y hacerse parte del Consejo tiene que ceder dicha mejora -Decreto 1745 de 1995-, de lo contrario, dicho terreno simplemente se delimitará y, posteriormente, a través de un trámite administrativo, el INCODER deberá adquirirlo para poder entregarlo definitivamente a las comunidades afrodescendientes. Y en el caso de las comunidades desplazadas de Caño Claro, ellas por su condición de desplazados no hicieron valer su derecho adquirido sobre sus predios, pero tampoco lo cedieron de manera voluntaria para que integraran el Territorio Colectivo de Comunidades Negras.

En este punto, advirtió el abogado que su prohijado compró unas posesiones de personas que se encontraban ubicadas en territorios adjudicados en el año 2000 como colectivos y que fueron desplazadas en 1997, a 52 familias en total, que son comunidades mestizas, ninguna negra. Entonces, no es cierto que todo el desplazamiento se dio frente a comunidades negras o mestizas que hacían parte del territorio colectivo.

Del mismo modo, se refirió a la violencia sistematizada, violación de los DDHH y el DIH y desplazamiento forzado en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, al que se refirieron la Fiscalía y el apoderado de la parte civil, argumentando que si bien es cierto, ello generó un pronunciamiento por parte de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede concluirse que todos los actos de desplazamiento fueron dados por parte de los paramilitares, ni que todos hayan realizado actos ilícitos para adquirir los predios, ni que todos los empresarios estuviesen vinculados con paramilitares, ya que se demostró que en ese sector el éxodo de 1997 fue promovido por las FARC como mecanismo de presión ante la entrada inminente de los paramilitares a la zona y la implementación de operativos militares por parte del Ejército Nacional en la Operación Génesis, aspecto en relación con lo cual declaró alias El Alemán.

Afirmó que las 52 familias a las que les compró sus predios su defendido salieron en 1997, a partir del éxodo impulsado por las FARC. El desplazamiento

ocurrió en 1997 y según la declaración de los paramilitares la idea del proyecto de la palma surgió en 1998, no precisamente por VICENTE CASTAÑO, sino por los empresarios HERNÁN GÓMEZ, ÍTALO CIANCI y LUIS RIASCOS, quienes le proponen al primero, a través de "Monoleche", la implementación del proyecto palmero, el cual se hace efectivo desde el año 1999.

En su criterio, entonces, es paradójico que si el origen del desplazamiento era el cultivo de palma, la fecha de su ideación sea posterior a la comisión de los desplazamientos.

En cuanto a la responsabilidad de **SIERRA MORENO**, explicó que respecto al primer señalamiento de la Fiscalía, esto es, *"...como comprador de terrenos baldíos de gran extensión adjudicados irregularmente por el antiguo INCORA, actuando como su vendedor indefectiblemente el abogado Jaime Alberto Vélez Giraldo..."*, admite la compra de los predios; incluso, y en gracia de discusión, la presunta irregularidad del proceso de adjudicación administrativa de dichos predios baldíos a las personas naturales representadas por el abogado **VÉLEZ GIRALDO** en el proceso de venta a dicha empresa, según la prueba que de manera indiciaria así lo permite inferir.

Pero, en tal sentido afirmó que, ninguno de esos títulos ha sido declarado "no válido" porque el INCODER no puede declarar la nulidad de dichos actos, ello tendría que ser por vía judicial. Esos predios aún están registrados a nombre de las personas de las cuales se predica su dominio.

Sin embargo, en cuanto a la aserción de la Fiscalía, en el sentido de que el procedimiento de adquisición de los predios La Sierpe, La Casita y El Rubí, por parte de la empresa Palmas del Curvaradó, corresponde a una estrategia jurídica orientada a dar visos de legalidad a los predios sobre los cuales se materializó el desplazamiento forzado de manera antecedente y de esta manera perfeccionar el despojo, cumpliendo con un acuerdo previo que en ese sentido se había celebrado entre las AUC y los empresarios, situación que al traste viabilizaría el crédito, que como parte de la estrategia solicitara Palmas del Curvaradó a FINAGRO; alegó que, con base en el artículo 9º del Código Penal, la atribución jurídica del resultado no se satisface por la sola acreditación o explicación fenomenológica del proceso causal. El juicio de peligrosidad que se realiza en sede de la tipicidad objetiva, se propone establecer si la conducta,

siendo previsible, representó un riesgo jurídico desaprobado para el bien jurídico, de esta manera, dicho juicio debe soportar una valoración jurídica que supera la mera causalidad o explicación fenomenológica, o en otras palabras, que la conducta es causa natural de un fenómeno, se exige la imputación jurídica y no causal.

Así las cosas, puntualizó, no basta con afirmar que el acusado compró esos predios para endilgar de ese simple hecho causal responsabilidad penal.

Del mismo modo, el abogado afirmó que es cierto que Palmas del Curvaradó, a través de su representante legal **GABRIEL JAIME**, adquirió los predios La Casita, El Rubí, y La Sierpe, ubicados en el bajo Atrato chocoano, Curvaradó y Jiguamiandó, entre los meses de febrero y mayo de 2005, fungiendo como representante judicial de los vendedores, el abogado **VÉLEZ GIRALDO**; que para el ejercicio de dicha representación judicial dicho abogado acreditó poder debidamente conferido por sus titulares; que previamente a la negociación y como título de adquisición, los citados predios fueron adjudicados por el INCORA a los poderdantes del abogado **VÉLEZ GIRALDO**, a través de varias resoluciones administrativas, debidamente inscritas en la oficina de registro e instrumentos públicos de Ríosucio (Chocó); que para la fecha de la negociación las tierras que comprendían los referidos títulos ya se encontraban en posesión material, pública y pacífica por parte de Palmas del Curvaradó; terrenos sobre los cuales -610 hectáreas- se encontraban sembradas de palma de aceite, en virtud de que habían sido compradas como mejoras a 52 familias desde el 2003; que las referidas tierras, como consecuencia de la acreditación de los títulos de propiedad por parte de los representados de **VÉLEZ GIRALDO**, fueron pagadas nuevamente por la exigencia económica que se les hizo; aspectos que siempre fueron aceptados por su prohijado en sus indagatorias.

Empero, en relación con estas situaciones, manifestó que el acto jurídico se materializó en virtud de la acreditación de la titularidad jurídica del derecho real de dominio por parte de los representados de **VÉLEZ GIRALDO**, y la presunción de legalidad del mandato a éste conferido y de los actos precedentes de adjudicación, mediante los cuales los vendedores adquirieron la propiedad. Además, respecto a los términos del requerimiento del cual estaba siendo víctima Palmas del Curvaradó, al acusado no le quedaba otra alternativa que pagar, máxime si se tiene en cuenta la presunción de legalidad que

evidenciaban los títulos de propiedad de los predios, los cuales aparecían registrados ante los diferentes estamentos del Estado competentes para el efecto; adicional a ello, estaba la procedencia de las exigencias de pago de los títulos, la probabilidad de que sobrevinieran consecuencias negativas que amenazaran la seguridad de la empresa y de **SIERRA MORENO**, en el evento de no aceptar los requerimientos económicos y, además, estaba en juego el esfuerzo económico y laboral de la empresa y las comunidades.

De la misma manera, justificó el proceder de su prohijado, en el sentido de que, fuera de la aserción del INCODER mediante el informe, con relación a la irregularidad de los títulos, no se sabía sobre los pormenores de la adquisición de los mismos. Además, las exculpaciones de su prohijado estima que están respaldadas en otros medios de convicción, particularmente testimoniales, de los cuales se puede decir son protagonistas los entonces comandantes de las AUC en la zona, RAÚL HASBÚN, El Alemán y RODIGO ZAPATA.

En tales condiciones, pide tener en cuenta que a RODIGO ZAPATA se le vinculó formalmente mediante indagatoria debido a la credibilidad que la Fiscalía le dio a las declaraciones de **SIERRA MORENO**. Además, la primera intervención de aquel en indagatoria, negó haber tenido negociaciones directas con su defendido, al punto de verse obligado a suspender la diligencia, precisamente cuando se le interrogaba sobre las aserciones hechas por el justiciable en su contra. Posteriormente, aceptó los cargos y fue condenado por los delitos por los cuales igualmente se le acusó a **GABRIEL JAIME**. Respecto, a que aquél fue llamado a juicio como prueba de cargo de la fiscalía en contra de su pupilo, arguyó que, en relación con su declaración, si bien **SIERRA MORENO**, para el primer semestre del año 2005 celebró contrato de compraventa con el fin de adquirir los títulos de propiedad de los predios El Rubí, La Sierpe, y La Casita, nunca tuvo que ver con el procedimiento de titulación que legitimara el dominio que de manera precedente se lograra por los vendedores representados por el abogado **VÉLEZ GIRALDO**, el cual, según las pruebas, confirman probablemente la irregularidad vaticinada por el INCODER mediante informe que se rindiera para este proceso.

En consecuencia, argumentó que su prohijado no administró, dominó, coadyuvó o participó directa o indirectamente del riesgo generado a través del proceso causal que desató la conducta de JORGE ANTONIO TORRES en ayuda de

IMER RAMOS, con ocasión de la irregularidad que irradiaba los títulos que se le ofrecían en venta. Dicho proceso de riesgo fue desatado con anterioridad al mismo acto de intervención sobre la zona por parte de **SIERRA MORENO**, a través de la empresa Palmas del Curvaradó. Adicional a ello, se cuestionó qué interés tendría el procesado en pagar dos veces un mismo predio sino fuese condicionado por un acto de coerción insuperable, las calidades de las personas de las cuales procedía el requerimiento de pago de los títulos, que indudablemente permitían pronosticar el riesgo de no atender lo solicitado, según lo dijeron **SIERRA MORENO** y HASBÚN MENDOZA, y la probabilidad de tener que abandonar los cultivos que se encontraban sobre esas tierras.

Por tanto, aún bajo la afirmación de que los predios adquiridos adolecían de irregularidad ideológica y/o material, no son imputables a una conducta de **SIERRA MORENO**, ya que si bien éste participó en la adquisición de dichos títulos para Palmas del Curvaradó, para ese momento los mismos ya habían sido creados con suma anterioridad, y la consolidación del riesgo ya se había materializado de manera precedente bajo el control de JORGE TORRES HERNÁNDEZ e IMER RAMOS; dominio y administración del proceso causal que se hizo ajeno a cualquier injerencia de su prohijado, lo cual no se conocía para el momento de compra de las mejoras, dos años antes a la negociación de los títulos, y mucho menos para la compra misma de los títulos en sí, ya que su autenticidad se presumía y fue constatada a través de la fe pública de diferentes entidades competentes, presunción que por el solo hecho de haber conocido de la calidad y antecedentes sociales de los intermediarios de la venta, no condicionaba de pleno derecho la invalidez de los títulos. Además, bajo las condiciones de apremio y coerción en que se encontraba el procesado, difícilmente podía elegir entre adquirirlos o no.

Adicionalmente, expresó que, en términos de la imputación expansiva del tipo, tal y como lo propuso la Fiscalía, a la luz de la autoría mediata, al señalar a **SIERRA MORENO** de hacer parte de una forma de instrumentalización de terceras personas, a través de un aparato organizado de poder o empresa criminal conjunta, afirmó que realmente se puede inferir que **SIERRA MORENO** no hacía parte de estas estructuras de dominio en una cadena de mando, pues las AUC ejerció actos de violencia y coerción en contra de **SIERRA MORENO** para alcanzar un provecho económico, de lo cual se beneficiaron estructuras de mando medio, RODRIGO ZAPATA, Gordo Pepe o El Negro, JORGE TORRES

HERNÁNDEZ, al igual que su cúpula en cabeza de VICENTE CASTAÑO. Dice que, contraría las reglas de la lógica y la experiencia, afirmar que el acto de comprar los títulos de propiedad de los predios a la cúpula de la organización, bajo la coerción y la amenaza, tenía como finalidad cumplir los fines de la organización. El acto de **SIERRA MORENO** difícilmente puede calificarse como un acto orientado a satisfacer los fines de la organización.

En relación con el aspecto de que el justiciable fue el comprador de múltiples predios pequeños, pues le compró a 52 familias desplazadas, aprovechándose de dicha situación antijurídica para ubicarlos y negociar con ellos, para lo cual se sirvió de la intermediación de MANUEL DENNIS, alegó que efectivamente Palmas del Curvaradó, a finales de 2003, entonces representada por CARLOS MARIO AGUINAGA, adquirió el derecho sobre las mejoras que ostentaban 52 familias que para el año 1996 habitaban la zona del Curvaradó y Jiguamiandó, en un globo de terreno colindante de más de 4.000 hectáreas. Sin embargo, ello no obedeció a finalidades criminales, ya que ello no puede presumirse del hecho de coincidir territorial y temporalmente, y en su objeto comercial y empresarial, con el proyecto ejecutado por otras empresas que probablemente eran parte de las estructuras de poder organizado.

Menciona que, HASBÚN MENDOZA, en torno a establecer qué empresas se vieron comprometidas con la finalidad del aparato organizado de poder del que hacía parte, se refirió a un área denominada "El Triángulo", en la cual se albergaban las empresas que según él eran beneficiarias de la actividad de la estructura ilegal, territorio en el cual no se encontraban los predios explotados agroindustrialmente por Palmas del Curvaradó. Además, el testigo indicó que dicho proyecto se encontraba bajo el aval y promoción de la administración del Estado.

En relación con este aspecto, el abogado también aludió a la declaración de FREDY RENDÓN HERRERA, respecto a que no es cierto que existiera una relación directa con los paramilitares, es más de los dos comandantes de la zona, HASBÚN y El Alemán, solamente el primero conocía a su prohijado por razones familiares. Además, respecto a la contribución a la agrupación delincuencial, no se refirió a la palma sino al sector ganadero, empresarios que tenían obligatoriamente que pagar. Igualmente, aludió a que ni siquiera alias

Monoleche, guarda de seguridad de VICENTE CASTAÑO, conocía a **GABRIEL JAIME**.

En cuanto a que, según el Fiscal, el acusado se aprovechó de la situación antijurídica en la que se encontraban las 52 familias, alegó que ello no tiene soporte demostrativo, pues ni siquiera los comandantes de dicha estructura de poder admitieron tal afirmación. Igualmente, los integrantes de las 52 familias manifestaron que dicho acto de disposición de sus mejoras fue realizado libre y conscientemente, que el acusado siempre les proporcionó ayuda y que los beneficios acordados con ocasión de las alianzas estratégicas eran una expectativa llamada a cumplirse por parte de la empresa Palmas del Curvaradó, en torno a favorecer la economía y retorno a sus tierras de los integrantes de dicho grupo.

Analizó que, si bien el acusado realizó el proceso agroindustrial de siembra de palma de aceite en el bajo Atrato chocoano, el cual venía desarrollándose en el sector por otras empresas, para lo que procuró adquirir las tierras a través de la intervención de comisionistas, dichas coincidencias por si solas no permiten suponer un vínculo con la organización ilegal, pues de ello dan cuenta HASBÚN, HERRERA y ZAPATA, quienes informaron cómo se desarrolló el proyecto palmero en la zona, cómo participaron los diferentes empresarios, dentro de los cuales seguramente señalaron a algunos como directamente vinculados a esta organización, pero frente a otros indicaron no tener vínculos con la misma, a pesar de coincidir en términos de la ejecución del objeto social, ya que según estas personas allá podía ir cualquier empresario, para lo cual el Estado jugó un papel determinante. Estos declarantes manifestaron que **SIERRA MORENO** no era parte de la organización, ni era auspiciador, instigador, ni prestaba ayuda, sólo excepcionalmente pagaba un aporte económico que, según RAÚL HASBÚN, era referente a la actividad ganadera y no a la palma, objeto de imputación fáctica y jurídica en este proceso.

Respecto a la participación de utilidades que en últimas no se constató por parte de las 52 familias, para el togado ello se explica con los acontecimientos externos que impidieron que la compañía arrojara utilidades y continuara en el ejercicio del objeto social. Uno de ellos fue que no se acreditara el pago de la primera y única producción del cultivo, por parte de la extractora Bajirá, lo cual condicionó a que Palmas del Curvaradó demandara ejecutivamente a dicha

empresa, al punto de generarse medidas cautelares sobre la misma, que a la fecha se mantienen; aspecto que pone en entredicho los vínculos de su prohijado con las AUC.

Asimismo, otros hechos que marcaron la imposibilidad de materializar las utilidades, y que dice fueron demostrados, son los atentados terroristas que padeció la empresa, generándole grandes pérdidas por la quema del campamento, maquinaria, insumos, lo cual se constató con la denuncia aportada, y fue corroborado por MANUEL ENRIQUE PETRO, quien dio cuenta de lo sucedido.

En definitiva, lo que condicionó el cese de actividades y la quiebra de la compañía fue la suspensión de los desembolsos por parte de FINAGRO, de los créditos aprobados para la implementación del cultivo, con ocasión de la presente investigación, aunado a que hubo de pagarse dos veces por los predios.

Por tanto, considera que no es coherente afirmar que el compromiso de partición de utilidades fue mentira y se propuso para lograr que se suscribieran los acuerdos.

En efecto, precisó que la empresa se quebró y nunca tuvo utilidades, porque los préstamos de FINAGRO fueron interrumpidos a partir de este proceso. De los \$1.700'000.000 de pesos prestados a Palmas del Curvaradó, en la actualidad se encuentra a paz y salvo con FINAGRO, pues les tocó pagarle \$3.500'000.000 de pesos, sin embargo tiene una deuda con la extractora de palma, lo que desnaturaliza el vínculo con los paramilitares.

Respecto a que fue instigador y ejecutor directo de actos de desplazamiento forzado, afirmó que las declaraciones señaladas por la Fiscalía fueron amañadas, puesto que muchos de esos testigos ni siquiera ocupaban los terrenos que ocupó GABRIEL JAIME, ni pertenecían a la comunidad de Caño Claro en Curvaradó, ni tampoco señalaron a SIERRA MORENO como protagonista de actos de coerción o violencia dirigidos a lograr el desplazamiento o perpetuar el mismo. Además, la Fiscalía, ni siquiera en las alegaciones conclusivas, realizó un análisis sistemático y crítico de estos testimonios en torno a definir su credibilidad. Por tanto, el defensor se refirió a

los testimonios de LUZ MARI CABEZAS, en relación con lo cual explicó que al momento de los hechos vivía en la vereda Apartadocito de Ríosucio (Chocó), por tanto, no podía conocer a su prohijado y no mencionó al justiciable como autor de los desplazamientos bajo amenaza o coacción dados en las zonas en cuestión.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de PABLO CUESTA DENIS, DOMINGO ROMANA ROMANA, LUIS EDUARDO COGOLLO HOYOS, MEDARDO ANTONIO ACOSTA PADILLA, DANILO VERGARA FLORES, ERASMO CUADRADO PATERNINA, EFRÉN ROMANA CUESTA, ARLEDIS HERNÁNDEZ, FÉLIX ANTONIO ALVARADO ZABALETA, ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA, EMILSEN GALLEGU MESTRA, JOSÉ ANTONIO CORREA PÉREZ, JORGE ELÍAS LÓPEZ, EDILMA ROSA JULIO, MIGUEL ENRIQUE PÁEZ PETRO, ELISEO PÉREZ MENDOZA, los cuales controvertió al parecerle que venían preparados con anterioridad dada su similitud.

Respecto a estas declaraciones, excepto las de JOSÉ ANTONIO CORREA PÉREZ, MIRIAN DE JESÚS NARVÁEZ HERNÁNDEZ y ENRIQUE MANUEL PETRO, adujo que no hacen parte de las 52 familias a las que le compró el justiciable, se duele de que se dieron en la etapa de investigación preliminar, en abril de 2007, ante varios investigadores criminalísticos y el apoderado de la parte civil, quienes no son competentes para poner de presente tal diligencia, teniendo en cuenta que para ese momento los procesados no conocían de una investigación en su contra, imposibilitándoles el derecho a controvertir la prueba, lo cual viola el derecho al debido proceso.

De otra parte, indicó que probatoriamente no hay posibilidad de demostrar las conductas punibles, por tanto se utiliza la teoría de los aparatos organizados de poder. La entrada de los paramilitares fue en 1996-1997, el desplazamiento se realiza hasta el 2000, año en que empiezan a entrar los empresarios, quienes se establecen hasta el 2005, por tanto los empleados no son autores del desplazamiento.

Respecto a que el desplazamiento forzado es un delito de ejecución permanente, adujo que, para demostrar el concierto para delinquir, se tuvo que haber demostrado la vinculación, el acuerdo previo en 1997, si este es posterior, en el mejor de los casos sería un partícipe en los desplazamientos o

habría un favorecimiento por encubrimiento. Por tanto, se utilizó la figura de los aparatos organizados de poder, como extensiva de la coautoría para acusar a todos los empresarios como coautores del tipo penal. Sin embargo, para que exista autoría tanto del hombre de atrás como del de adelante, es necesario que ambos hagan parte del aparato organizado de poder, lo cual no es predicable a partir de un simple contexto.

Así las cosas, dijo que el desplazamiento ocurrió en 1996-1997, pero no es claro que haya sido por los paramilitares sino por las FARC o por una situación de conflicto armado. El empresario **GABRIEL JAIME** llegó a la zona en el 2003. Además existe una denuncia penal por parte del hermano de su prohijado, quien además es parte integrante de Palmas del Curvaradó, en contra de **FREDY RENDÓN**, alias El Alemán, aspectos que, aunados a los que dijo con antelación, desdibujan la vinculación de la empresa y de su defendido con el grupo paramilitar.

Del mismo modo, afirmó que la Fiscalía tampoco demostró cuáles fueron las víctimas ni los victimarios y luego dice que no va a demostrar los aspectos dogmáticos del artículo 180 sino del canon 159 del Código Penal, sin embargo, indicó que iba a aplicar el primero de ellos por favorabilidad.

Respecto al delito de concierto para delinquir manifestó que no se probó el acuerdo previo, lo cual era necesario. Por tanto, no podía endilgarse responsabilidad en esta ilicitud.

Entretanto, en relación con el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, anteriormente denominado ocupación ilícita (contradicción jurídica), manifestó que invasión significa irrumpir por la fuerza, lo que debió ser probado por la Fiscalía, siendo subsidiario el daño ambiental producido con la conducta. Sin embargo, su asistido no irrumpió por la fuerza, pues ello no se probó, y no obstante la compra de esos predios son objeto de ilicitud civilmente, ello no significa que haya responsabilidad penal, porque el justiciable tan solo compró unos predios que estaban por fuera del comercio. La compraventa en sí misma no significa el dolo.

En tales condiciones, solicitó que se absuelva a su prohijado por los delitos por los que se le acusó.

De otro lado, el doctor Diego Corredor Beltrán, defensor de **JAVIER DAZA PRETELT**, solicitó que se absuelva a este acusado.

En primer lugar, indicó que el procesado intervino una sola vez en indagatoria, debiendo luego salir del país por amenazas, por tanto, su defensa quedó supeditada a la presentación de unas pruebas documentales y a su ampliación de indagatoria para hacer claridad sobre algunos aspectos, sin embargo, ni siquiera se presentaron alegatos precalificatorios, lo cual evidencia la orfandad defensiva, lo que en su sentir, le permitió a la Fiscalía acusarlo sin ninguna resistencia. Además, no obstante no desconoce la ola de violencia, siendo una realidad incontrovertible para esa época, la Fiscalía, a partir de esa crónica genérica y abstracta, imputó varios delitos no atribuyendo juicios de responsabilidad específicos o concretos sobre los comparecientes, irregularidad que fue advertida por el Juzgado en la audiencia preparatoria.

En segundo término, se duele de que en los alegatos conclusivos, ni la Fiscalía ni el Ministerio Público, analizaron la prueba documental y testimonial que existe a favor de este acusado, por tanto, solicitó que se analicen las pruebas que demuestran la ajenidad del procesado en la comisión delictiva, las cuales respaldan sus exculpaciones en indagatoria.

Aludió a que su prohijado fue contactado en el segundo semestre de 1999 por LUIS DONACIANO RIASCOS, importante personaje de la Costa Atlántica, con el objeto de ofrecerle la gerencia administrativa de un proyecto de palma en Urabá y como tal entró a URAPALMA, haciendo parte de dicha sociedad ANTONIO y CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA, LUIS RIASCOS, Construcciones Andinas y JAIRO ALONSO BRUGUÉS. En consecuencia, el acusado no fue socio de la compañía, sólo que luego de su vinculación se le ofreció participación accionaria que nunca se concretó, es decir, que siempre fue empleado de URAPALMA, al punto de que el 1º de octubre de 2005, el justiciable recibe una comunicación de **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, en ese momento representante legal de URAPALMA, donde le notifica que esa representación ha procedido a anular los títulos de acciones 20 y 26, documento que aportó.

De otra parte, arguyó que CARLOS DANIEL MERLANO se encargaba de la parte jurídica de la empresa como abogado experto en derecho privado, quien tenía la capacidad de erigir estrategias afectas a la organización. Enfatizó en que su representado era gerente administrativo y no gerente general, y en ese momento no tenía la representación legal de URAPALMA, y su profesión la de administrador de empresas y no abogado, cumpliendo las funciones de mirar los rendimientos administrativos, mirar los costos de campo, calcular los costos de producción, encabezar las reuniones en la región relacionadas con la empresa palmicultora. De ahí que los trámites sobre los créditos con FINAGRO fueron a instancias de PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS y no de su asistido.

Según el organigrama de URAPALMA, **DAZA PRETELT** solamente fue un empleado hasta el año 2003; más aún, tan solo hasta comienzos del 2000 conoce la región, ni siquiera salía con frecuencia a los cultivos, eran otras las personas al mando de dicha actividad, siendo LUIS RIASCOS quien tenía el manejo de las tierras, sus posesiones, usufructos, tal como lo manifestó HERMEN MUÑOZ GONZÁLEZ, alias Diomedes, en audiencia pública del 14 de marzo de 2013, en el sentido de que fue intermediario en la adquisición de tierras, a instancias de LUIS RIASCOS, ANTONIO ZÚÑIGA y **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, sin que mencionara a su prohijado, en relación con el cual dijo que nunca adquirió tierras a nombre de éste, y que sólo se dedicaba a la logística.

Del mismo modo, expuso que en el 2002 regresaron los nativos y vieron sus tierras cultivadas de palma, por tanto reclamaron ante URAPALMA y fueron atendidos por **DAZA PRETELT**, quien alertó a las directivas de dicha empresa para que comparecieran a la oficina que manejaba el tema de las negritudes en el Ministerio del Interior, a fin de que se les diera instrucciones acerca de lo que debía hacerse, máxime que en ese momento estaba en vigencia la Ley 70 de 1993, aspectos que fueron relatados por el justiciable en su indagatoria.

La doctora LUZ MARÍA VALDERRAMA, directora de la oficina de comunidades negras del Ministerio del Interior de febrero de 2001 a septiembre de 2002, aceptó haberse reunido con JAIRO BRUGUÉS, representante legal de URAPALMA, y avaló lo manifestado por el procesado, a quien conoció en noviembre de 2002 en Apartadó y luego brindó asesoría a la empresa palmera

en el año 2003, cuando **DAZA PRETELT** fue gerente, y crearon la oficina de quejas y reclamos; estas circunstancias fueron aceptadas por los directivos de URAPALMA y por SOLEDAD CABALLERO.

De otro lado, el abogado destacó la distancia considerable que existe entre los distintos sembrados de palma, en tratándose de inmensidades de territorios, lo cual fue corroborado por varios declarantes. Ello demerita, según él, la inferencia de que **DAZA PRETELT** era el dueño de los mismos. Se refirió a algunas actas atinentes a reuniones entre URAPALMA y el Consejo de las comunidades negras para tratar de encontrar solución al conflicto a instancias del procesado; documentos que a su juicio corroboran las exculpaciones de su prohijado.

A pesar de todo, adujo, su defendido se retiró de URAPALMA no en los mejores términos, en razón a que la realidad era desbordante, pues las UPA (Unidades Productivas de Pequeños Agricultores) empezaron a molestar a los dueños de las empresas por sus tierras. De otra parte, recibió amenazas de las FARC que lo llevaron a desentenderse del tema debiendo abandonar la zona. Además, tomó la vocería de las comunidades negras en varias reuniones, respecto a lo cual hay un cd contentivo de una deliberación del Consejo Comunitario en Turbo, en el cual su prohijado hizo ver, al entonces Presidente de la República, la necesidad de que el Estado respetara la titulación de las tierras en las comunidades, que debía avalarse la vigencia plena de la Ley 70 de 1993, que las comunidades negras debían ser destinatarias del crédito oficial y que el Estado debía llevar a los empresarios, dedicados a la actividad palmicultora a colaborar con las mismas.

De otra parte, aludió a varias declaraciones que según estima demuestran la ajenidad de su prohijado en los delitos por los que se le acusó, entre ellas, las de HERMEN MUÑOZ GONZÁLEZ, NEMESIO CUESTA ROMAÑA, LUZ MARÍA VALDERRAMA, HERNANDO OLIERT PAUTT, ADELFO CÓRDOBA, SOLEDAD CABALLERO PACHECO, GERMÁN MARMOLEJO RENTERÍA, GILBERTO ROMERO CÓRDOBA, todos provenientes de las comunidades, quienes al unísono se refirieron a que el acusado no intervino en la comisión delictiva, que el generador del desplazamiento fue las FARC, que URAPALMA, a instancias del procesado, fueron proactivos en buscar soluciones al conflicto, que no participó en despojo o desplazamientos, no coaccionó a nadie para la

adquisición de tierras, ni obtuvo beneficios, ni perturbó el medio ambiente. Además, el acusado no fue propietario de ninguna área de tierra.

Asimismo, se refirió al testimonio de MANUEL MOYA LARA -Rdo. 1032836-, en el cual relató que él y su familia fueron víctimas de desplazamiento por parte del frente 57 de las FARC, entre otros aspectos. Lo anterior para significar que desde los inicios de los años 90 fue la guerrilla la autora de los desplazamientos y que ninguno de estos testigos señalaron a **DAZA PRETELT** como autor o partícipe de los mismos.

En cuanto a las atestaciones de JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias "Monoleche", destacó que allí ni siquiera se anunció el nombre de su defendido, lo cual evidencia que era un empleado más, pero sin injerencia en la empresa. Respecto al testimonio de RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, indicó, en relación con su señalamiento respecto a la adquisición de tierras, de acuerdo con los comisionistas, éstos actuaban por solicitud de LUIS RIASCOS. Dicho señalamiento seguramente era para obtener beneficios.

En síntesis, arguyó que la acusación no abarcó la comisión del delito con prueba idónea, con la adecuación de las normas penales, se hizo en forma genérica y, por ello, no se sabe por qué tipo penal se acusa y de cuál debe defenderse -no se dijeron cuáles fueron las víctimas de desplazamiento, los lugares de desplazamiento, etc.-. Fue edificada con una motivación anfibológica, pues la imputación subjetiva debió ser clara, debiéndose determinar cada uno de los elementos de la conducta y las razones de configuración del dolo. Se violentó el principio de congruencia. Además, la acusación adolece de calificación jurídica, en razón de que no se hizo ningún análisis de los aspectos objetivos, subjetivos y cuál fue la participación del procesado **DAZA PRETELT**.

También asegura que se desconoce si el justiciable se debe responder como autor o coautor -propio o impropio- y sobre qué acciones, sin que se tenga demostrado para su pupilo la comisión del concierto para delinquir, lo que no puede soportarse en sospechas o indicios, que no surgen siquiera de los supuestos testigos de cargos, quienes aunque aludieron a que se reunieron, ello de por sí no puede llevar a pensar que se reunieron para cometer delitos, por el contrario, las reuniones se dieron para conocer cómo iba el negocio de la

palma, pero de ninguno se escuchó que su prohijado hubiese dado su asentimiento para delinquir o desplazar a los moradores de la zona, antes bien, su asistido fue aliado de las negritudes para que las tierras volvieran a sus manos.

De otra parte, adujo que, según las aseveraciones de CARLOS DANIEL MERLANO en relación con que su prohijado le ayudaba en la estructuración y escrituración de las minutas, en el adelantamiento de los documentos que llevaban a la adquisición de terrenos, al englobe de posesiones, reiteró que el justiciable era un administrador de empresas, por tanto, no podría atribuírsele una colaboración jurídica a un experto en derecho. Tampoco se especificó, en relación con el delito de concierto para delinquir, en qué pudo haberse concretado el peligro de las comunidades.

Por último, respecto al delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica alegó que su defendido, desde su indagatoria, precisó que no tenía conocimiento de la Ley 70 de 1993 y con los concejos comunitarios se efectuó el acuerdo de la mano del Plan de manejo ambiental sin que se recibieran multas o sanciones, sin que exista prueba que lo refute, ni prueba sobre la infracción a la ley ambiental de la destrucción del medio ambiente. Además, son los mismos habitantes del sector quienes dijeron que no se ha presentado devastación del medio ambiente, que ellos mismos hicieron algunas devastaciones para el "*pan coger*". Constatación efectuada a través de un ingeniero agrónomo.

Corolario de lo expuesto, ante la indeterminación de las conductas, pues para el togado ninguna de ellas se atribuyó con el estricto rigor jurídico y con base en la prueba, deprecó que la decisión sea absolutoria.

De otro lado, el doctor Gabriel Ángel Salazar Gaviria, defensor de **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA**, solicitó sentencia absolutoria para el acusado. En principio consideró que si el concierto para delinquir se originó en la operación génesis en 1997, al igual que los desplazamientos, no hay prueba que vincule a los acusados con la brigada y el grupo paramilitar que intervinieron. Además, el Fiscal acusó a los justiciables por la simple presencia en la zona y convocó a juicio a su defendido sin la práctica de todos los medios probatorios, infringiéndose la constitución y la ley.

No obstante, le parece indiscutible que en Curvaradó y Jiguamiandó hubo unos desplazamientos, se cuestiona cuáles fueron las circunstancias, el tiempo, pues son diferentes las fechas que la prueba refiere sobre ellos. No se constató el modo de actuar de cada uno de los implicados ni existe ninguna prueba al respecto. Asimismo, aludió a los elementos estructurales del delito, esto es, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía, especialmente respecto al delito de concierto para delinquir.

En su criterio, respecto a la variación de la calificación, la Fiscalía desconoció un mandato judicial. *

Respecto a los industriales que construyeron empresa, los indicios de responsabilidad consistieron en que les faltaba conocimiento en agricultura y que se necesitaba contar con la "Casa Castaño" para la negociación de los predios, sin embargo, a su juicio ello constituye una falsedad interpretativa, porque sí se podía llegar a la zona sin vínculos con los paramilitares, máxime si se tiene en cuenta que éstos tenían allí un triángulo para su designio de cultivo de palma. Además, la falta de conocimiento en agricultura no es un indicio para señalarlos como responsables de los delitos, pues esa ignorancia puede suplirse con estudio o asesoría. Aunado a ello, no obstante su prohijado compró tierras, las dejó tal como las había adquirido, porque requería financiarse a fin de cultivarlas con palma africana, plantación que no fue hallada en el terreno de su propiedad.

De otra parte, arguyó que respecto a **CLAUDIO ADOLFO** no existe mención en el proceso diferente a que RAÚL EMILIO HASBÚN dijo que escuchó de su pupilo como quien adquirió unos terrenos, en los que no inició cultivos y tuvo que salir de allí porque llegó al denominado "*triángulo de los Castaño*", pero ningún otro testimonio aludió a su empresa o a su prohijado. Ningún campesino, chilapo, negro o habitante de la zona dijo que su asistido estuviere vinculado con grupos al margen de la ley.

La responsabilidad penal que se le atribuyó a su defendido deriva de la prueba indiciaria y el hecho indicador lo basa la Fiscalía en que conocen ampliamente de las actividades criminales de los paramilitares y estos a su turno tuvieron

relaciones con estos empresarios y con la clase dirigente; haber invertido en tierras del Atrato antioqueño; y la instalación de la extractora de aceite en el municipio antioqueño de Mutatá que ameritó la vinculación procesal de todos los socios.

No obstante lo anterior, el defensor indicó que no se demostró que su pupilo tuviese algo que ver con esa organización criminal y el procesado llegó a la zona cuando el desplazamiento ya se había generado, además, la siembra de palma fue auspiciada por el mismo Estado. Su representado no le compró a los nativos de la zona sino a terceros, y por eso se le vincula, sin embargo, no se hizo lo mismo con aquellos que inicialmente habían comprado. Y en todo caso, la compra de tierras no puede ser un hecho indicador. Igualmente, el acusado **FREGNI OCHOA** no fue socio de la extractora de aceite.

Entretanto, respecto al delito descrito en el artículo 337 del Código Penal, arguyó que la conducta es atípica, ya que su verbo rector es "*invadir*", esto es, irrumpir o entrar a la fuerza u ocupar irregularmente un lugar, sin embargo, su prohijado llegó al sector con un título y modo lícitos, pues el título fue inscrito en la oficina de instrumentos públicos y no ha sido tachado de falso y, no obstante fue anulado, ello se debió a otras razones. No hubo pues tal invasión sino que llegó lícitamente, con escritura de venta e inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó. Además, no hubo permanencia ilícita en el lugar, pues físicamente no se quedó allí, tan sólo hizo dos o tres viajes antes de que los paramilitares le dijeran que tenía que salir porque estaba dentro del llamado "*triángulo*".

En cuanto al "*uso indebido de los recursos naturales*" descrito en el tipo penal, si se aceptare en gracia de discusión que **FREGNI OCHOA** estaba haciendo drenajes, según lo dijo **HASBÚN MANDOZA**, lo cual dañó los recursos naturales, ello debía estar vinculado con terrenos de propiedad colectiva y el justiciable no conocía la condición de esos predios, pues no estaban delimitados. Los terrenos no tenían prohibición por particulares para realizar trabajos sobre ellos y menos cuando era el propio gobierno el que los auspiciaba. Por tanto, reiteró, la conducta es atípica, razón por la cual solicitó la absolución de su prohijado.

Por su parte, el doctor Carlos Eduardo Pardo Casallas, defensor de **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ**, solicitó sentencia absolutoria, pues la conducta respecto al delito de invasión de áreas de especial protección ecológica, la encuentra atípica.

Luego de indicar que los alegatos de conclusión que presentó la Fiscalía, tanto oral como por escrito, son disímiles, adujo que su defendido no invadió zonas catalogadas como propiedad comunitaria o colectiva sino que compró terrenos de propiedad individual, refiriéndose únicamente a las tierras de Curvaradó porque, de estar en un régimen comunitario las tierras que compró su pupilo, estaban en ese sector, máxime que los títulos constitutivos de dichas tierras son las resoluciones de adjudicación expedidas por el otrora INCORA, actualmente INCODER. El Decreto 1745 estableció que se deben mencionar las veredas sobre las cuales ejercen ocupación esas comunidades y la ocupación tiene que ser ancestral.

Adujo que en la cuenca del Curvaradó solamente debe haber aproximadamente 46.000 hectáreas adjudicadas como comunitarias, sin embargo, en dicha extensión no se encuentran los predios de **RAÚL ALBERTO**, y no se puede asumir que todas las tierras limítrofes del río Curvaradó que desembocan en Río Seco son comunitarias.

Señaló que en la resolución de 2007 están los predios que se excluyeron por ser de propiedad individual en Curvaradó, y dentro de esas zonas hay ocupaciones individuales que no registraban título al momento de expedirse las resoluciones, no hicieron los trámites ante el INCORA para hacerse adjudicar, por tanto, son ocupantes de buena fe que tienen derechos sobre esa zona y que podían o no tener unas prácticas tradicionales de producción, ser negros y estar adscritos a esa ocupación ancestral comunitaria, pero si ellos querían mantenerse individualmente pues tenían todo el derecho.

Que se presenta otra situación y es la que excluyeron mediante esas resoluciones, porque si estaban ocupando individual y no colectivamente, y se hicieron adjudicar los predios como baldíos de manera individual, entonces tienen su resolución de adjudicación.

Y una tercera situación es la de los que, expedida la Ley 70 de 1993, llegan a ocupar el territorio, entonces ellos son ocupantes de mala fe porque ya la ley ha definido unos derechos comunitarios.

En relación con las tierras ubicadas en zonas forestales mencionó que tienen dos formas de dominio, público o privado, entonces se puede comprar zonas definidas desde 1953 en el Decreto 2887 y actualmente en la Ley 2ª de 1959. Esas áreas jamás fueron reglamentadas por el Estado colombiano, no las administró y, por tanto, si no sustraen de esas áreas las aptas para agricultura y ganadería, el mismo Estado otorga adjudicaciones privadas que permiten esas destinaciones. Es más, si el acusado realmente se hubiese dedicado a la ganadería ello no afecta las zonas del pacífico.

Respecto al informe final del INCODER, de junio de 2009, en el que se dice que 189.67 hectáreas están en tierras comunitarias, alegó que las propiedades de su prohijado están por fuera, pues si se compara con las resoluciones de adjudicación de la propiedad comunitaria, allí no están las veredas Caracolí y la Florida, ni tampoco están en las coordenadas. Además las zonas forestales no tienen las características del artículo 63 de la Constitución Nacional, esto es, no son inembargables, imprescriptibles e inalienables, características que tienen las tierras comunales de grupos étnicos.

Igualmente, manifestó que la ocupación ancestral, según el artículo 55 de la Constitución Nacional, la hacen las comunidades negras en los terrenos baldíos, razón por la cual el Consejo de Estado dijo que hay propiedad individual por fuera de esas comunidades negras en esa zona.

De otra parte, manifestó que quienes le vendieron los predios al acusado declararon que no pertenecían a ninguna comunidad negra, que allá no habían consejos comunitarios, que es un requisito para la adjudicación, se sentían como titulares de dominio privado, que su posesión era de hace 40, 50 y 60 años y nadie les disputaba su posesión y eran reconocidos como propietarios, es decir, que en esa zona no hubo una ocupación ancestral, por ello la resolución de adjudicación constitutiva no contiene esas veredas y esos predios.

Afirmó que las tierras de su prohijado están abandonadas desde el año 2003, en razón de un atentado que se sufrió por parte de los paramilitares, el cual frustró el proyecto que tenían y, por tanto, no alcanzaron a hacer nada sobre el terreno, por ello, no se le puede atribuir ninguna actividad, aspecto que corroboraron varios testificantes.

Además, dijo que demostró que no hubo ningún desplazamiento en la zona, no hubo reclamación de comunidades negras, por tanto los habitantes del sector ocuparon pacíficamente e ininterrumpidamente, razón por la cual hubo de decretarse la preclusión de la investigación en favor de este acusado.

La Fiscalía sostiene que las resoluciones del INCODER son falsas, sin embargo, para el abogado no existe prueba de ello. Además, existen varias resoluciones en las que se dice que en esos terrenos está permitida la agricultura y la ganadería, al punto de que se especifica que años atrás había 64 cabezas de ganado.

Seguidamente, se refirió al dictamen -informe final del año 2009- en el que se parte de una información que le entregaron mediante un informe de 2004 del INCODER, el cual ya hace parte de una prueba y no se puede someter al tamiz de la contradicción y publicidad, además no se dijo de dónde se sacaron los datos, y se acogieron a un mapa, lo cual desdibuja la georeferenciación a la que aludieron.

En efecto, manifestó que en ese informe se dejó constancia de que se parte de los datos suministrados en el pasado por el INCODER, de las peticiones de adición de la Fiscalía para que se incluyeran dentro del área de estudio *“las demás áreas de palma de aceite y ganadería localizadas en el área de Carmen del Darién, Ríosucio y Mutatá aledaños a los mencionados territorios colectivos”*; y que la delimitación de las fincas corresponde a la efectuada por la UNAT (Unidad Nacional de Tierras Rurales) porque lamenta la ausencia del plano elaborado a instancias del Ministerio de Agricultura porque el Viceministro se negó a suministrarlo, a pesar de los requerimientos del Ministerio del Ambiente, así como queda declarado que existen diferencias en las áreas facilitadas por las empresas palmeras y las consignadas en el mapa del INAT y, lo que es más importante, que no existe sistema DATUM de referencia para el cubrimiento territorial de Mutatá, Ríosucio y Carmen del Darién.

De acuerdo al defensor, el hecho concreto que facilita detectar que esa comisión de "peritos" que elaboró ese informe final no realizó medición, ni geo referenciación, es que dice que de las 244.51 hectáreas, 189.67 hectáreas están localizadas en "Tierras de las Comunidades Negras". No obstante, una buena parte de esas tierras está ocupada por un cuerpo de agua, hecho que determina que la superficie de tierra sea de 199 hectáreas, luego, si esa comisión hubiera realizado inspección física a los inmuebles habría constatado esa cabida real y habría concluido que esa es su superficie y no las 244.51 hectáreas que figuran en los títulos.

Adicionalmente, del total de hectáreas que figuran en los títulos de compraventa, o de las que realmente resultaron utilizables, habría que restar las tierras con título individual (adjudicadas antes de la ley 70 de 1993 y con fundamento en la Ley 200 de 1936 y 160 de 1994) o sea, el área correspondiente a los predios Mis Delicias y El Tesoro. Ambas propiedades suman 74.65 hectáreas, por tanto, si se toma como total de la compra las hectáreas que figuran en títulos se tendría que 244.51 hectáreas menos 74.65 hectáreas resultaría un total de 169.86 hectáreas, que serían las que hipotéticamente estarían en el título colectivo de la comunidad negra del Curvaradó y no las 189.67 que relacionó el informe. Por tanto, el informe no es serio.

En cambio, si tomamos la cabida real y restamos el área de los predios con título individual, resultaría 199 hectáreas menos las 74.65 hectáreas arrojaría un total de 124.35 hectáreas, que tendrían la potencialidad de pertenecer a las comunidades negras. Por tanto, estimó que esa disparidad en las cifras resulta muy reveladora de la falta de procedimientos y mediciones reales sobre los predios de **RAÚL ALBERTO**.

En la resolución del 20 de diciembre de 2007, mediante la cual se decretó la apertura de instrucción, se ordenó dicha prueba pericial, pues se solicitó al Ministerio del Medio Ambiente la designación de peritos expertos con el fin de adelantar los estudios de impacto ambiental en la zona, criticando el defensor lo lacónico e insulso del decreto de esa prueba, sin cuestionario, tal como lo exige la normatividad para tal efecto. Con todo, aludió a que se dispuso una geo referenciación que no se ordenó allí, por tanto, se actuó sin competencia.

Además, quien terminó ordenando la prueba fue el mismo perito, porque el cuestionario lo definió el Ministerio del Medio Ambiente y no el funcionario instructor. Por ello, según consideró ese dictamen no se puede estimar, máxime si se tomaron en cuenta solamente las conclusiones sin analizar el método para llegar a ellas, lo que se evidencia con las diferencias en cuanto a las áreas de los terrenos, si se tienen los documentos públicos que se encuentran en el expediente. Si se hubiese aplicado el sistema Datum y los peritos idóneos no habría errores. Una cosa es la cifra en títulos y otro el valor producto de una medición, lo que demuestra que no la hubo.

Además, alegó que el territorio debe resultar afectado para que se configure el tipo penal por el que se acusó a su prohijado. En relación con la teoría de Roxin, respecto a la cual forman parte del tipo objetivo el sujeto, la acción típica y el resultado, aplicada por la Fiscalía, la misma no es aplicable en nuestro medio, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, pues faltaría la relación de causalidad y la imputación del resultado.

De otro lado, arguyó que la actividad ganadera no está prohibida en las zonas forestales y en ese sector siempre ha habido actividad ganadera. Además, el acusado abandonó esa zona desde el 2003, a raíz de un atentado, razón por la cual no hay nexo causal.

Por último, analizó el contenido del artículo 337 del Código Penal, resaltando el verbo rector de "invadir", que según la Real Academia de la Lengua Castellana, significa entrar por la fuerza y ocupar irregularmente un lugar. Sin embargo, en la resolución de acusación no se definió la acción del justiciable, porque lo único que hizo éste fue comprar, lo cual no es un acto de invasión. En efecto, no se aprecia cómo el acusado haya podido incurrir en la conducta por el solo hecho de "comprar" propiedades en el bajo Atrato chocoano, menos, cuando el mismo funcionario reconoció que esas compras fueron legales y a precio justo. Por tanto, ha tenido que deducir o inferir el núcleo de la acusación en contra de su prohijado para poder ejercer la defensa.

Si fuera cierto que parte de los terrenos comprados en el Bajirá chocoano por **PENAGOS GONZÁLEZ** y **RUIZ COSSIO** pertenecieran a las comunidades negras, como infundadamente lo afirmó el Fiscal, las compras de esos terrenos no serían legales, porque habría objeto ilícito en ellas (Arts.1502, 1519 y ss. del

Código Civil) es decir, serían nulas por tener objeto ilícito y tratarse de un contrato prohibido por las leyes colombianas. Por el contrario, si en realidad esos terrenos no se encuentran ubicados en zonas de propiedad colectiva (como en efecto lo es) esos negocios jurídicos son perfectamente válidos y lícitos.

Concluyó, no puede haber antinomias o contradicciones de ese nivel entre dos ramas del derecho dentro de un mismo ordenamiento jurídico sin desafiar los principios de coherencia, racionalidad y complitud. En el caso concreto, las compras de terrenos de **RAÚL ALBERTO** son lícitas, como lo reconoció el Fiscal, precisamente por no estar en zonas de prohibida enajenación (comunidades negras) y, por tanto, es disparatado convertir un simple acto de "compra" en un acto de "invasión". Además, las comunidades negras jamás ocuparon esas tierras, ni hay reclamaciones sobre las mismas.

En tales condiciones, reiteró que la conducta del justiciable es atípica, por tanto solicitó su absolución.

De otra parte, el doctor Germán Navarrete Riveros, defensor de la doctora **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, solicitó sentencia absolutoria en su favor, por considerar, en primer término, en el expediente obran supuestas pruebas que deben ser rechazadas de plano o desatendidas por mandato del artículo 235 de la Ley 600 de 2000, y por el artículo 29 constitucional, pues fueron recaudadas con violación al debido proceso y ante autoridad diferente a la obligada legalmente a obtenerla, entre ellas, las versiones de ENRIQUE PETRO, LUZ MARY CABEZAS MARTÍNEZ, ROBINSON RENTERÍA MARTÍNEZ, CAMILO TORRES y muchas más. Por tanto, solicitó que se evalúen las condiciones de validez y existencia, o de simple aducción al proceso para no vulnerar los derechos de los procesados.

Respecto al concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, adujo que es un delito genérico y autónomo, no requiere de la existencia de otros delitos para su consumación y por tratarse de tipo de peligro tampoco exige el resultado, empero no se puede asumir su existencia con hechos de diversa índole que se amparan en teorías plasmadas desde su posición políticamente sesgada y conveniente por el alemán Roxin, alegando la existencia de estructuras organizadas de poder y responsabilidades vagas derivadas de las

posiciones de comandancia o dirección de esas organizaciones delincuenciales, o quizá vínculos de sangre inexistentes.

Alegó que no es un secreto que RAÚL EMILIO HASBÚN, alias "Pedro Bonito", FREDY RENDÓN HERRERA "El Alemán" y RODRIGO ZAPATA, alias "RICARDO", son comandantes de autodefensa, y JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias "Monoleche", es un desmovilizado que desempeñó cargos de escolta y seguridad y a veces mensajero o estafeta del clan Castaño, sin embargo, éste no tiene los alcances que pretende darle al Fiscalía, que lo señala como comandante del grupo, enviado a asesinar a CARLOS CASTAÑO. Además, estas circunstancias solo evidencian el concierto para delinquir de las autodefensas para lograr el dominio territorial de la zona en contra de las **FARC**, la cual utiliza los corredores de Urabá para hacerse a la salida del Darién.

No obstante lo anterior, alega que **SOR ENID** no tuvo nada que ver en dicha guerra, pues apenas era una funcionaria pública del área jurídica cuando la guerra llevaba años. Tampoco estuvo en Urabá cuando la guerrilla pretendió evitar el avance de las tropas de la brigada militar con los desplazamientos de personas, en su mayoría afectas al grupo delincencial y a campesinos.

Citó la declaración de alias "Samir", quien actor directo de esos desplazamientos y comandante de las FARC, contó cómo planearon con sus propios informantes infiltrados en el ejército, desplazar a las comunidades de esas zonas para impedir que la fuerza pública tomara el control de sus corredores hacia Panamá, aspecto corroborado por los comandantes de las autodefensas, antes que entraran en combate con tropas del Estado o con agrupaciones de extrema derecha. Por tanto, la orden de desplazar a la población civil fue del estado mayor guerrillero, no de las AUC, ni del ejército, ni de los comerciantes palmeros, que para esa fecha ni siquiera estaban en ciernes de invertir. Concluye que la génesis de los desplazamientos masivos corresponde a las FARC.

De otra parte, el abogado se duele de que el apoderado de la parte civil junto con la Fiscalía y algunos auxiliares investigativos asistieron a la zona de concentración de desplazados y recogieron versiones que, en su sentir, son acomodadas, mentirosas e incontrovertidas, para fundar una conspiración

criminal en contra de personas que tenían cultivos de palma en la zona. Sólo se tuvieron en cuenta las quejas insólitas de los representantes divinos en la tierra, sus testigos y sus teorías sobre el negocio de palma y la protección de las poblaciones negras raizales. No se incluyó a la verdadera comunidad negra asentada en la zona, la gran mayoría empobrecida y desplazada hacia las cabeceras municipales por la guerrilla, dicha comisión judicial se conformó con adquirir prueba de los residentes de las comunidades de paz, dominados por la parte civil admitida en este proceso por asuntos más políticos que jurídicos, y en últimas, económicos para la guerrilla. Por tanto, algunos de los supuestos miembros de la comunidad desplazada, en su mayoría no raizales sino invasores de baldíos conocidos como "chilapos", procedentes de la costa atlántica y especialmente del departamento de Sucre, repitieron como lección que habían sido desplazados por los paramilitares, que sus tierras habían sido apropiadas por esas facciones para sembrar palma aceitera y, se cimentó la acusación en esas falacias sin otra confirmación.

En tal sentido, mencionó que **HASBÚN, RENDÓN, ZAPATA y ROLDÁN PÉREZ** coincidieron en que nunca hubo una orden para desplazar personas, no la dieron ni la recibieron. Aceptaron, además, de manera detallada y profusa, que fueron agentes violentos en la zona, y los comandantes aceptaron ejercer fuerza militar en el Urabá, aún compartida con las FARC, empero nunca recibieron una orden directa de desplazar personas para adquirir tierras, y ni siquiera participaron de esa actividad porque no era misión encargada a sus ejércitos irregulares. Asimismo, aceptaron que quizá algunos de sus miembros de manera individual delinquieron para obtener beneficios en el tráfico de inmuebles abandonados, pero no por órdenes del colectivo criminal y mucho menos en cumplimiento de directrices antisubversivas. Reconocieron que ellos mismos se quejaron por el comportamiento de algunos miembros de las AUC, extralimitados en sus funciones y órdenes, y hasta abrieron una oficina de quejas para atender estos asuntos y controlar actividades delictivas en contra de la población o abusos de poder de sus integrantes.

En tales condiciones, para el defensor quedó claro que no tenían como objeto los desplazamientos en la zona, su actuar se limitaba a la guerra y seguramente a la extorsión de ganaderos asentados allí, y otras maromas delincuenciales que servían de fundamento financiero, razón por la cual le resulta absurdo pensar en los desplazamientos como interés criminal del concierto para

delinquir, el desplazamiento ya se había materializado. De hecho, la guerrilla tenía por costumbre delinquir de esa manera, usando escudos humanos para evitar la acción de la justicia.

La entrevista periodística de VICENTE CASTAÑO en la que se apoyó la Fiscalía, resalta el togado no fue rendida bajo la gravedad del juramento y no pudo ser controvertida en juicio, además, sus manifestaciones en ningún caso podrían referirse a que CASTAÑO llamó a los acusados a formar parte de un concierto delictivo, solo apuntan a noticiar la existencia de un negocio urdido por el líder de las AUC, como lo relataron sus subalternos en el juicio, limitado seguramente y como se probó, a la adquisición de tierras para la siembra de palma de aceite. No obstante, de lo narrado allí no puede concluirse más, porque los gestores del proyecto que en determinado momento se aliaron para constituir URAPALMA S.A. y algunas asociaciones de cultivadores, están plenamente identificados, dependientes y amigos de CASTAÑO, traficantes de narcóticos e industriales agrícolas, dinero y experiencia, necesarios para constituir un negocio.

De otro lado, aludió a que después de adquirir las tierras se encontraron con que aquellas zonas del país no estaban tituladas debidamente, es decir, algunos solo les vendían posesiones, porque así se demostró, solo se vendieron derechos relativos que tienen un valor muy inferior al pleno derecho de propiedad.

Igualmente, expresó que, de las versiones vertidas en juicio, incluida la de **ENRIQUE PETRO**, se puede aseverar que vendieron posesiones, posteriormente, debido a la falta de pago y los atrasos en el mismo, y seguramente la intervención de las organizaciones eclesiales, decidieron acudir a denunciar despojos inexistentes en su mayoría, pero rentables de todas formas, porque nadie manifestó que hubiera devuelto el dinero que le dieron por la tierra. En cuanto a la declaración de **ENRIQUE PETRO**, quien afirmó que fue desplazado por paramilitares y denunció el hecho con papeles que el "pasó en limpio", alegó que lo insólito es que este testigo no sabe leer ni escribir, sin embargo afirma que tenía una lista que ha mostrado a todo el mundo en busca de protección, lo cual lleva a concluir que otras personas le armaron la versión y las pruebas, que tampoco aportó a este proceso siquiera para acreditar su autenticidad, y simplemente nos remite a que la comisión de justicia y paz lo

asesoró en esas gestiones. Además, sus múltiples yerros en fechas evidencia que no parece haber vivido las situaciones que refiere y se nota que la guerrilla si le era benéfica, pues viviendo en una zona bajo su control nunca fue siquiera visitado.

Asimismo, aludió a que este declarante nunca dijo que lo obligaran a vender, lo citaron en un batallón militar para darle seguridad al negocio, protección al vendedor quizá, a sabiendas que no vendería una propiedad sino un derecho discutible, el de posesión, pero quedó claro que el vendió antes de regresar, en el 2003, a invadir nuevamente las propiedades que ya no eran suyas, retomar sus posesiones por las vías de hecho. Este declarante no fue testigo de nada de lo que dijo, y así lo confesó en su versión al final. Además, siempre defiende a la guerrilla, al punto de no aceptar lo evidente y probado, como que los desplazamientos de 1997, fueron promovidos por esa facción criminal y se los achaca a las autodefensas, quienes aún no llegaban al sitio. Sin embargo, con su declaración quedó claro que muchos de los vecinos vendieron sin amenazas, que los terrenos vendidos de manera arbitraria fueron vendidos por las personas que obraban como comisionistas, y que no conoce a **SOR ENID OSPINA**, ni siquiera de oídas, menos para señalarla de responsable de sus cuitas.

Entretanto, el abogado criticó a los demás deponentes, presuntas víctimas de los paramilitares, quienes mostraron para él mentira, confusión, exageración y coincidencia tal en algunos aspectos que parecería fruto de una previa concertación.

Así las cosas, manifestó que si en gracia de discusión se aceptare el concierto para delinquir, el mismo se referiría a sanear unos títulos, con estrategias diversas, pero no a desplazar a nadie. Lo que se probó es que atrajeron a la zona personas ajenas a su plan de inversión, utilizaron a otras para legalizar el dominio de las posesiones, ocultaron la existencia de limitaciones exhibiendo documentos que así lo hacían sentir, aprovecharon las oficinas de registro garantes de la fe pública registral. En tal sentido, se refirió a la declaración de MERLANO, quien reconoció ser el gestor y artífice del fraude notarial. Además, se encuentra la resolución mediante la cual se aprueba el plan de manejo ambiental para las siembras que ejecutaba URAPALMA S.A., la cual no fue objetada de falsa, y es acompañada por documentos de verificación que le dan

firmeza y credibilidad oficial a la situación jurídica del predio, y obra informe de visita técnica al predio por funcionarios de la misma entidad ambiental que corroboran la existencia del permiso.

La corporación ambiental CODECHOCÓ, en respuesta a una petición, afirmó que le concedió aprobación al plan de manejo a URAPALMA S.A., pero que esos territorios no forman parte del resguardo entregado a las comunidades negras, afrodescendientes y ahora inmigrantes sucreños. Tampoco las entidades públicas podrían detectar irregularidad en esa titulación. Es sabido que los cultivos de palma se entregaron en garantía a un banco con crédito subsidiados, pero no todos.

En tales condiciones, luego de referirse a los aspectos tenidos en cuenta por la Fiscalía en contra de su prohiada, en relación con lo cual arguyó que en los folios señalados por el ente acusador, no hay conversaciones, allí obra un informe de policía judicial que contiene resúmenes, conceptos, especulaciones e inferencias ilógicas, por lo tanto encuadran fácilmente en los argumentos jurisprudenciales de la sentencia C-392 del 6 de abril de 2000, se trata de un mero informe que ni siquiera reúne los requisitos del artículo 251 del C. de P.P., al cual la defensa no tuvo acceso, además, los informes de policía no tienen valor probatorio.

Para el abogado no se puede ahondar en la licitud o existencia de la orden de interceptación para el control constitucional de su legalidad, menos aceptarla como prueba trasladada (sin el trámite legal pertinente no hay constancia de autenticidad ni siquiera es prueba admisible), razón por la cual solicitó rechazarla de pleno derecho en su integridad, ya que se interceptaron llamadas del procesado con su entonces defensora, y en el informe se utilizan esas conversaciones sujetas a reserva y protección legal, para confirmar los vínculos entre su cliente y el procesado **JESÚS IGNACIO**. La violación al precepto constitucional y la vulneración al derecho que conculca, hacen excluible la totalidad del documento, por cuanto su contenido es inescindible. Al respecto, se refirió a la sentencia C-301 de 2012, en relación con el secreto profesional.

De otra parte, afirmó que una estación de gasolina no es un negocio que solamente exista en Belén de Bajirá ni es ilícito tenerlo, empero quedó demostrado que la estación de servicio automotriz se forjó a instancias de una

compra que hiciera el hermano de **OSPINA RENDÓN**, quien manifestó haberla adquirido y ser el propietario del establecimiento. La propiedad de la estación de servicio no fue discutida, investigada o cuestionada en esta investigación, por tanto, no puede dubitarse por simples coincidencias. El indicio debe formarse con hechos probados sin partir de coincidencias que refieren al azar, a la similitud, a la existencia de otros asuntos similares. La coincidencia señalada por el Fiscal en la acusación no conlleva a la certeza de que se trata de un negocio de propiedad de **ROLDÁN PÉREZ**.

La versión de **SOR ENID** es clara, en el sentido de que recibió la parcela pagándole deudas que tenía la sociedad URAPALMA S.A. por concepto de combustibles con la estación de servicio, circunstancia que no se desvirtuó, por el contrario, es una afirmación razonablemente cierta y coincidente con el testimonio de JAIRO OSPINA, propietario de la estación de servicio, máxime si existe una carta enviada a la empresa URAPALMA S.A. exigiendo la escrituración.

En ninguna prueba se afirma que **JAVIER DAZA** fue mentor de **SOR ENID** en el negocio palmero, simplemente pagó la deuda con el lote ya sembrado, con la palma avanzada en crecimiento y en el juicio se demostró que URAPALMA S.A. atravesaba una difícil situación financiera. La falta de pago a los proveedores y el no pago de la extractora de Bajirá había quebrado a los productores en la región. La prueba no indica una unión de URAPALMA y Agropalma, la asesoría técnica de la primera era necesaria porque los **OSPINA RENDÓN** no eran agricultores de palma aceitera, eran comerciantes de combustibles en la zona.

Asimismo, manifestó que no puede exigírsele a un inexperto en tierras que detectara alguna irregularidad, razón por la que concluyó que caer en el engaño no es participar de la estafa o de sus delitos antecedentes, ni es indicio de concierto. La venta, que en realidad era una dación en pago, se la hizo URAPALMA S. A., pero la escritura aparece suscrita por una asociación de cultivadores de palma regida por **MARIO LEÓN VILLA**, y eso resulta ser indicio de asociación entre **SOR ENID** y el concierto para delinquir.

De otro lado, indicó que RAÚL HASBÚN dijo lo que se imagina, no le consta que la estación de servicio sea de **ROLDAN PÉREZ** y, en cuanto a la

aseveración de que cree que son hermanos, ello tampoco lo afirmó categóricamente, máxime si ni siquiera son de la familia.

Argumentó que la prueba indiciaria, ya que no hay prueba directa, ni siquiera supone que los desplazamientos se hubieren dado para obtener el terreno en que se asentaba la plantación de Agropalma. En efecto, cuando su defendida aparece en la escena de Urabá, en Belén de Bajirá, los desplazamientos denunciados en 1997 ya se habían concluido por parte de la guerrilla, y ésta era una simple comerciante ajena a las plantaciones. Además, la Fiscalía tiene la información más que suficiente para determinar que la tierra de Agropalma solamente estuvo hipotecada al banco BVVA, en un crédito sin subsidio que fue pagado en su integridad por la familia Ospina, aunque la anotación de hipoteca hubiera sido cancelada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, según resolución 2125, del 1º de abril de 2008.

CONSIDERACIONES

Los presupuestos que el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal exige para que en un proceso se pueda proferir una decisión condenatoria son la certeza acerca de la materialidad de la conducta punible e idéntico grado de conocimiento en relación con la autoría material y la consecuente responsabilidad de los procesados.

Así las cosas, se analizarán los elementos de juicio que existen en la actuación a fin de determinar los referidos aspectos. Eso sí, cabe precisar, en cuanto a la las pruebas relacionadas en esta sentencia, que este Despacho, luego del respectivo análisis y valoración del voluminoso expediente, sólo aludirá a las que tuvieron el suficiente poder suasorio en esta Funcionaria para tomar las decisiones que pasarán a relacionarse. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el principio de selección probatoria, en Auto del 11 de diciembre de 2013, radicado 42.611, con ponencia del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, indicó:

"Además, constituye un despropósito pretender que de la totalidad del aporte probatorio arrimado a la actuación, se tenga que realizar algún tipo de valoración, pues, ello implicaría un estudio sumamente dispendioso e innecesario, como el que se consigna en la demanda, toda vez que para

adoptar la decisión, es suficiente con que el operador judicial, en virtud del principio de selección probatoria, tome los elementos de juicio y los apartado de ellos que considere importantes para el pronunciamiento a dictar.

En la sentencia del 29 de octubre de 2003(Radicado No 19.737), la Corte se refirió al principio de selección probatoria de esta manera:

*"Verdad es que en el análisis que realizó luego de la prueba, ninguna referencia directa hizo a dicho aserto, pero esto no quiere decir que no hubiera **sido tenido en cuenta. Lo que ocurre es que el juzgador, en virtud del principio de selección probatoria, no está obligado a hacer un examen exhaustivo de todas y cada una de las pruebas incorporadas al proceso, ni de todos y cada uno de sus extremos asertivos**, porque la decisión se haría interminable, sino de aquello que considere importantes para la decisión a tomar, de suerte que solo existirá error de hecho por omisión o mutilación de prueba, cuando aparezca claro que el medio, o un fragmento del mismo, fue realmente ignorado, siendo probatoriamente relevante".*

Materialidad:

Concierto para delinquir y Desplazamiento Forzado:

Estos hechos no remiten a dudas en la presente actuación. La existencia fáctica de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (A.C.C.U.), gestadas por lo que en Justicia Transicional se ha denominado como "La Casa Castaño" y del Bloque Élmer Cárdenas, comandando en su momento por FREDY RENDÓN HERRERA, alias "El Alemán", para octubre de 2002, se determinó no sólo con los testimonios de un sinnúmero de víctimas de dicha organización, quienes se refirieron a algunos pormenores de las actividades ilícitas que sus integrantes ejecutaban en la región de Urabá, concretamente en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, al igual que en zonas aledañas del municipio de Ríosucio del departamento del Chocó, sino también con las atestaciones de los mismos dirigentes, cabecillas o líderes de varios bloques que integraban el Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOMIL); entre ellos, el aludido FREDY RENDÓN HERRERA, alias "El Alemán"; JOSÉ EVER VELOZA GARCÍA, alias "H.H", "Hernán Hernández" o "El Mono Veloza", quien comandaba el Bloque Bananero, y RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, alias "Pedro Bonito" o "Pedro Ponte", comandante del Frente "Alex Hurtado", que hacía parte del Bloque Bananero.

En efecto, los declarantes dieron cuenta de diversos homicidios, desalojos forzados y masacres en el sector de influencia de la organización. También se

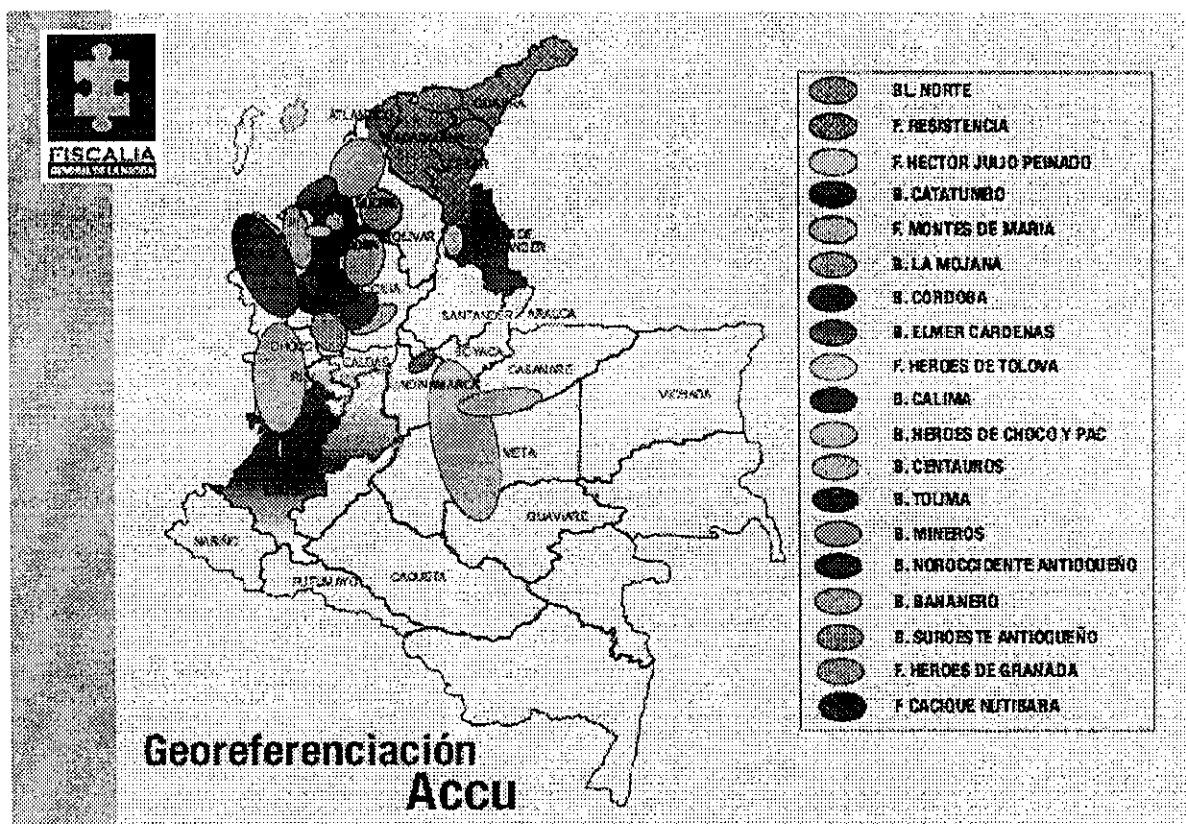
refirieron al desplazamiento forzado de la mayor parte de los habitantes de territorios colectivos, para su apropiación violenta y control, según ellos, al liberarlo de la insurgencia, movidos por intereses económicos y militares, entre los cuales está que el sector constituye un corredor estratégico para la concreción de negociaciones ilícitas y la obtención de recursos financieros, a partir de la posible construcción de la vía panamericana que conectaría a Colombia con Panamá.

En ese orden de ideas, emerge de manera inconcusa la existencia de la organización delincriminal paramilitar y, de contera, la presencia del bloque que tenía plena injerencia en el lugar de los hechos; aserción que se avizora, aún más, debido a que, precisamente, la mayoría de sus integrantes hubieron de desmovilizarse con ocasión de las negociaciones realizadas con el Gobierno Nacional bajo los parámetros establecidos por la Ley 975 de 2005, mediante la cual se dictaron disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional; razón por la cual varios de sus comandantes, en acatamiento a los principios que inspiran dicha normatividad, es decir, los de verdad, justicia y reparación, se han referido ante dicha jurisdicción especial a la estructura paramilitar, lugares de operatividad, jurisdicción de cada uno de los bloques y frentes, estructura de mando, crímenes ejecutados, etc., lo cual ha contribuido al esclarecimiento de incontables hechos, no sólo ante la Justicia Transicional, sino también en sede de Justicia Ordinaria.

Ciertamente, las versiones libres de los desmovilizados que se han postulado a la referida Ley, varias de las cuales constituyen prueba en esta actuación, han aportado datos importantes para el esclarecimiento de su estructura militar y zonas de injerencia en cada uno de los bloques y frentes que integraban la organización; circunstancia que permitió a la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, establecer una georreferenciación¹¹ de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (A.C.C.U.)¹²:

¹¹ Según Wikipedia es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado.

¹² Gráfica tomada de "JUSTICIA Y PAZ, TIERRAS Y TERRITORIOS EN LAS VERSIONES DE LOS PARAMILITARES", Informe del Centro de Memoria Histórica, Fecha de publicación 2012, autor institucional: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia), versión digital.



Del mismo modo, en la actuación se determinó que en el accionar de esa estructura paramilitar hizo parte o coadyuvaban diversos actores como miembros de la Fuerza Pública, otros pertenecientes al sector empresarial y particulares, a fin de lograr propósitos económicos y expansivos de la organización, debido al gran potencial de explotación económica de la región que, en el caso concreto, se puntualizó en el cultivo de palma africana o aceitera en el bajo Atrato chocoano y en la ganadería extensiva, razón por la cual unieron esfuerzos, a efectos de la consecución, a como diera lugar, del territorio propicio para tales cultivos y su posterior cuidado y protección, a partir, se itera, de la connivencia de dichos actores; finalidades para las cuales utilizaron diversos mecanismos, tales como el desplazamiento forzado de la población asentada en los territorios que le eran de interés a la agrupación armada y los restantes complotados, que como se verá más adelante se constituyó en una de las finalidades del delito contra la seguridad pública, y como delito autónomo.

En efecto, en cuanto a los propósitos y actividades desarrolladas por el grupo paramilitar, se establecieron varias operaciones militares, entre ellas, una de marcada relevancia ocurrida en la región en el año 1997, la cual fue denominada "Operación Génesis", coordinada con la Brigada 17 del Ejército

Nacional, a fin de abatir la subversión que se encontraba asentada en el sector; sin embargo, con la misma generaron el desplazamiento de un gran cúmulo de pobladores que atemorizados, ya sea por las amenazas y señalamientos de ser colaboradores de la guerrilla o por el mismo desarrollo del conflicto armado presentado en la zona, se vieron obligados a abandonar sus tierras y desplazarse.

En este sentido cabe precisar, que si bien es cierto para la suscrita es evidente que en la región existieron varios desplazamientos, realizados tanto por grupos guerrilleros como por los paramilitares, y que puede hablarse, inclusive, que algunos de ellos fueron acciones coincidentes en el tiempo, precisamente como estrategia de los primeros para evitar la incursión de sus opositores, ello no desvirtúa la real ocurrencia del éxodo masivo generado por las autodefensas en abierta connivencia con miembros de las fuerzas armadas en desarrollo de la referida operación génesis; lográndose así el desarraigo de centenares de habitantes de la región y el consecuente abandono de sus tierras, las cuales, en su mayoría, las poseían a título colectivo debido a su uso ancestral y a la adjudicación, en calidad de tierras de las comunidades negras, mediante resoluciones 02801 del 22 de mayo de 2000 y 02809 del 22 de noviembre de 2000, expedidas por el INCODER; tierras que, posteriormente, fueron aprovechadas por aquellos que generaron los desplazamientos (paramilitares) y por los empresarios con quienes se concertaron para su explotación económica, impidiendo el retorno de sus legítimos dueños.

Del mismo modo, es indiscutible que existieron actos posteriores, por parte de empresarios y paramilitares, que evitaron el retorno de varias víctimas a sus territorios, durante los años ulteriores, consolidándose así la permanencia en el tiempo de la conducta de desplazamiento forzado.

Así las cosas, en este asunto se evidencian los elementos estructurantes del tipo penal de concierto para delinquir, valga decir, el acuerdo de voluntades de un número plural de personas que convienen la comisión de diversos delitos indeterminados, que para este caso se concretó en el acuerdo para cometer el delito de desplazamiento forzado -descrito en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, que son modalidades específicas que agravan el concierto para Delinquir- desarrollados dentro de un ámbito territorial y con ánimo de permanencia en el tiempo, elementos estructurantes que se deducen de la

pluralidad de testimonios recopilados en el proceso, tales como los de EFIGENIA GONZÁLEZ MORELO, SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO, LUZ MARY CABEZAS MARTÍNEZ, PABLO CUESTA DENIS, MARTHA REGINA SERNA BENÍTEZ, DOMINGO ROMANA ROMANA, EPIFANIO CÓRDOBA BORJA, LUIS EDUARDO COGOLLO HOYOS, MEDARDO ANTONIO ACOSTA PADILLA, HUGO RENTERÍA DURÁN, MARÍA BLANCA QUEJADA, LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DANILO VERGARA FLOREZ, JHON JAIME ROMANA DENIS, CRUZ MARY URIBE GÓMEZ, EFRÉN ANTONIO AREIZA GÓMEZ, ERASMO LUIS CUADRADO PATERNINA, MARIO MANUEL CASTAÑO BRAVO, entre otros.

Dichos declarantes se refirieron a la participación de paramilitares en las amenazas de muerte, saqueos, hurtos, destrucción de bienes, desplazamientos forzados y homicidios de conocidos y seres queridos, actos indiscriminados y sistemáticos en contra de la población civil de los cuales fueron víctimas directas, al grado que varios de ellos aludieron a que la operación militar denominada "Génesis", desplegada conjuntamente por la Brigada 17 del Ejército Nacional y los paramilitares en el año de 1997, aspecto que se tratará más adelante, se constituyó en uno de los mecanismos utilizados no sólo para combatir a la subversión en el departamento del Chocó, para el caso concreto en las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, sino para obtener el dominio de la región y generar el éxodo masivo de población civil.

En tales condiciones, en cuanto al elemento del acuerdo previo, no es necesario que existan elementos de convicción que lo evidencien de una manera material o física, tales como fotos de reuniones, videos con miembros de grupos paramilitares, actas de acuerdos, documentos escritos que lo sustenten, por manera que así como estas pruebas, por sí solas, no conducirían a establecer un concierto para delinquir, la ausencia de ellas tampoco desdibuja su tipificación, pues para eso existen otros elementos de convencimiento, como testimonios, lo palmario de la presencia de la agrupación en la zona, la connivencia de los diferentes actores con la organización delincriminal al margen de la Ley, no sólo para lograr los desplazamientos y/o mantenerlos en el tiempo, sino para aprovecharse de las tierras, de lo cual puede inferirse razonadamente que se incurrió en la conducta delictiva referida.

En cuanto se refiere al punible desplazamiento forzado, para la suscrita funcionaria tampoco hay duda alguna en relación con la materialidad del mismo, ya que debido a la presión y amenazas de varios integrantes de la agrupación al margen de la ley, varias personas y/o familias tuvieron que desocupar sus fincas, al verse compelidas a abandonar sus tierras; desplazamientos que obviamente no fueron de manera voluntaria, pues hubieron de trasladarse a otros sectores del país, en precarias condiciones, al punto que, a raíz del desplazamiento masivo y la consecuente conculcación constante de los derechos humanos de las víctimas, posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y dispuso medidas cautelares para su protección y muchos de ellos tan solo pudieron retornar al sector bajo la protección de zonas humanitarias, en las cuales aún varios de los testigos se han sentido hostigados para su desalojo.

Como prueba de ello, se encuentra, por ejemplo, los hechos que se relataron mediante escrito del 23 de octubre de 2006, en los cuales la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció nuevas intimidaciones en contra de ENRIQUE MANUEL PETRO HERNÁNDEZ, quien facilitó 5 hectáreas de su posesión para la instalación de una de las zonas humanitarias, siendo convocado en varias ocasiones, valga decir, 20 y 25 de agosto, 5 y 6 de septiembre de 2006, por algunos empresarios, y colaboradores de los mismos, entre ellos un paramilitar, a reuniones en la sede de Palmas del Curvaradó, con el propósito de hacerle una propuesta en cuanto a sus predios, a la que finalmente PETRO HERNÁNDEZ nunca accedió; sin embargo, en el último escrito a través del cual lo citaron a la oficina de la empresa aludida, anexaron la oración a la sangre de Cristo, circunstancia que evidentemente se traduce en una amenaza de muerte¹³. Aspectos que en efecto fueron corroborados por el mismo testigo ENRIQUE MANUEL¹⁴.

En el mismo sentido, LUIS EDUARDO COGOLLO HOYOS¹⁵, quien también hubo de desplazarse hacia Pavarandó a raíz de la operación génesis en el año 1997, manifestó que a su retorno en el año 1999, encontró cultivos, viviendas destruidas y empresas plantando la palma africana. A partir del año 2000 comenzaron a cultivar su "*pan coger*", pero desde el 2001 iniciaron nuevamente los ataques de militares y paramilitares en contra de la población a lo largo de

¹³ Folios 76 y ss del C. 5

¹⁴ Folios 94 y ss del C. 6

¹⁵ Folios 187 y ss del C. 5

toda la región, asesinaron y lesionaron miembros de la comunidad, quemaron caseríos, dañaron los cultivos y cometieron múltiples hostigamientos en contra de los pobladores, porque supuestamente eran guerrilleros, al punto que cuando se estaba repartiendo una ayuda humanitaria, *"la mayoría de esa ayuda se la llevaron, lo demás lo dañaron o lo botaron al río"*, situaciones que lo obligaron a continuar con su desplazamiento. Además, cuando se encontraban asentados en una zona humanitaria, tanto el Ejército como los paramilitares ingresaron en diversas fechas, los agraviaron, se apropiaron de unos víveres y dañaron otros. Finalmente, señaló que en el 2006 los paramilitares invadieron aún más su territorio, prestando seguridad a moto sierristas que van explotando la madera de la zona colectiva y a quienes preparan el lugar para la siembra de la palma y la ganadería.

En tales condiciones, con las declaraciones recaudadas en el expediente y las versiones libres de los jefes paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz, audios que fueron incorporados a la actuación, se demostró el real desplazamiento de un sinnúmero de pobladores del sector a partir del accionar paramilitar y los continuos actos arbitrarios de zozobra e intimidación para mantener a la población en dicha condición de desplazados.

Al respecto, también es importante resaltar, en atención a que varios defensores de los procesados han puesto en tela de juicio la materialidad de este delito, que si bien es cierto el éxodo masivo forzoso ocurrió a partir del año 1997 – si en gracia de discusión se aceptare que la idea e implementación del cultivo de palma surgió con posterioridad–, y que apenas en el año 1999 empezaron a establecerse las empresas palmicultoras en la región, se trata de un delito de ejecución permanente y, por ello, las conductas que se ejercieron con posterioridad al desplazamiento y que estaban claramente orientadas a restringir a las víctimas la posibilidad de retornar a sus predios, estructura la comisión permanente de la conducta delictiva, tal como se dijo con antelación.

En este sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 26 de marzo de 2014, con ponencia del doctor José Luis Barceló Camacho, en el radicado 38.795, expuso lo siguiente:

"La descripción típica de la conducta le permite a la Corte precisar, como así mismo lo hace la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal en su concepto, que el desplazamiento forzado es un delito permanente, pues pone a

las víctimas en condición de desarraigados, y se sigue cometiendo mientras esa condición se perpetúe en virtud a que la conducta del sujeto activo mantenga vigentes los factores de amenazas, miedo, muertes o atentados vinculados con el conflicto que obligan a los habitantes de un específico grupo humano a estar alejados de sus predios. De allí que cualquier acción que actualice tales temores, originada en el obrar voluntario de un sujeto concertado con el actor armado del conflicto que ha generado el desplazamiento, se subsume en tipo penal en comento.

Cuando ocurre que frente a un determinado grupo de ciudadanos -como en el caso que ocupa la atención de esta Corporación- se siguen ejerciendo acciones tendientes a que no retornen a sus predios, el delito se hace permanente por el lapso de tiempo en que tales actualizaciones se concreten y se continúa ejecutando en calidad de coautores por todos aquellos que actualizan para las víctimas las condiciones generadoras del desalojo."

Por tanto, todos los actos tendientes a que propietarios o poseedores permanecieran fuera de sus tierras, bien sea como agresiones, presiones o amenazas de cualquier tipo, a las que se refirieron varios de los testificantes, para coaccionarlos a vender sus predios o fincas, al punto de que los contactaban en diversos lugares del país, con las consignas de que "si el hombre no vendía la viuda vendía más barato, el que no vendía decían que no respondían"¹⁶, que viniera a vender la finca porque si no la cogían o mataban un familiar"¹⁷ o que "si no les vendía hacían posesión de la tierra"¹⁸, entre muchas otras, indudablemente constituyen la fuerza o elementos coactivos que estructuran el delito de desplazamiento forzado.

Es más, el solo hecho de que se enviara a "negociar" a comisionistas que eran reconocidos en el sector como paramilitares o que las mismas empresas palmicultoras estuviesen protegidas por éstos, es suficiente para amedrentar a los lugareños y conminarlos a vender sus tierras.

Pues no en vano se formó el denominado triángulo de protección, descrito por RAÚL EMILIO HASBUN MENDOZA, precisamente para garantizar la seguridad suficiente a las empresas que desarrollaban el proyecto palmicultor en la zona, con aquiescencia, por supuesto, del grupo ilegal benefactor.

Por lo demás, la existencia de la agrupación armada ilegal y la materialidad del desplazamiento forzado no requieren una prueba particular ni una demostración específica, por su condición de hecho notorio, al punto de que hubo de crearse

¹⁶ Declaración de Enrique Manuel Petro Hernández, sin fecha, folios 94 y ss C. 6.

¹⁷ Declaración de Jorge Elías López Florez del 13 de abril de 2007, folios 135 y ss del C. 6.

¹⁸ Declaración de Pedro Cortés Fabra del 13 de abril de 2007, folios 138 y ss del C. 6.

las Leyes 782 de 2002, 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, a efectos de lograr la desmovilización y *facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición*¹⁹, circunstancias que, además, evidencian la existencia de un conflicto armado interno.

En virtud de lo anterior, como viene de verse, precisamente varios de los exintegrantes de las huestes paramilitares, en este caso con alto grado de jerarquía en la organización, reconocieron y describieron los detalles de sus incursiones en Jiguamiandó, Curvaradó y sectores aledaños y los desplazamientos a los que se sometieron una gran cantidad de pobladores, al grado que, según RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, finalmente hubo de crearse, por orden de JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL, alias El Profe, uno de los máximos líderes del grupo armado, una oficina de quejas y reclamos en el parque de Bajirá, llamada "*Proyecto social comunitario del Urabá antioqueño y chocoano*"²⁰, para atender los requerimientos de los habitantes por abusos y excesos que estaban cometiendo los miembros de la estructura delincriminal en las compras de los terrenos, los cuales evidentemente estaban generando la prolongación y continuidad del desarraigo de los reales propietarios o poseedores, y sus correspondientes familias, de los predios que estaban siendo utilizados para la palmicultura.

Ello, por supuesto, demuestra que CASTAÑO GIL no sólo era consciente de las presiones y consecuentes desplazamientos a los que estaban sometiendo a la población, sino que dicha medida surgió, seguramente, para mitigar de alguna manera las denuncias que pudiese impetrar la comunidad ante estamentos estatales, y así tener un control sobre los quejosos, sin arriesgar el proyecto agroindustrial, lo cual finalmente fue inevitable.

En otras palabras, para la época, en nuestro medio fue evidente la existencia y actuaciones violentas, sucesivas y sistemáticas de los grupos armados, concretamente los paramilitares, los cuales operaron en todo el territorio nacional, razón por la cual el Estado Colombiano hubo de realizar ingentes esfuerzos para lograr su dejación de las armas y reincorporación a la vida civil,

¹⁹ Artículo 1º de la Ley 975 de 2005

²⁰ Declaración de Raúl Emilio Hasbún Mendoza del 4 de junio de 2010, registro 10.

a efectos de alcanzar el cese de hostilidades, que finalmente han dejado enormes cicatrices y consecuencias funestas para la población colombiana.

No obstante lo anterior, respecto al delito en contra de la libertad individual, se partirá del hecho de que se trata de un solo desplazamiento forzado, haciendo uso, por supuesto, de la expresión del artículo 180 del Código Penal, en el sentido de que se trata de actos violentos o coactivos dirigidos “*contra un sector de la población*”.

En efecto, si bien a la fiscalía le correspondía determinar con suficiente claridad y precisión el número de conductas imputadas, la cantidad de víctimas exactas de la comisión delictiva, el lugar y la fecha concreta de cada uno de los desplazamientos, para la real estructuración del concurso homogéneo y sucesivo de atentados contra la autonomía personal, al que aludió tanto en la resolución de acusación como en sus alegaciones finales, lo cierto es que no lo hizo.

Dicho de otro modo, si bien la suscrita tiene el convencimiento de que, bajo las circunstancias aludidas en el principio de este acápite, hubo un sinnúmero de desplazamientos forzados, pues la disparidad temporo-espacial del desalojo forzado, genera indubitavelmente un concurso homogéneo, si bien es cierto la decisión final no pudo conducir a la impunidad tampoco podría soslayar principios fundamentales, por ello, se reitera, se partirá de la premisa de que se trata del desplazamiento de *un sector de la población*, a raíz de las actividades mancomunadas de paramilitares y empresarios palmicultores.

De otro lado, tampoco sería posible hacer un conteo de las víctimas, con las respectivas fechas y lugares, relacionados en la resolución de acusación, no sólo porque no se sabe si, debido a las expresiones utilizadas en la misma, se hace referencia a título ejemplificativo o excluyente, sino que ello podría dar lugar a equivocaciones y a que el juzgador se inmiscuya en funciones que no le fueron atribuidas por la Constitución Política ni por el legislador, lo cual generaría una afectación de principios de carácter constitucional.

En relación con el hecho de que la resolución de acusación es ley del proceso y el marco dentro del cual se desarrolla el juicio y se pronuncia el juzgador, la Sala Penal de la Corte de Justicia, en sentencia del 23 de marzo de 2011,

radicado 30.287, con ponencia del doctor José Leonidas Bustos Martínez, en la cual, a su vez, se hace referencia a otras decisiones de la misma Corporación, indicó:

"(L)a resolución de acusación constituye el presupuesto y el límite del juzgamiento, porque así como con ella se da inicio al juicio penal también es la pieza procesal mediante la cual se concreta la imputación al procesado de la conducta en sus aspectos fáctico y jurídico; lo cual obliga al juez a proferir el fallo en consonancia con los cargos allí formulados, sin que pueda entonces condenar o absolver por hechos distintos a los previstos en ella.

Por esa razón, el principio de congruencia en su carácter de regla estructural del proceso y de garantía, demanda entre la sentencia y la resolución de acusación la existencia de una adecuada relación de conformidad en los aspectos personal, fáctico y jurídico.

De ahí que el proceso tenga una estructura formal y una estructura conceptual. La formal relacionada con el conjunto de actos que lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico jurídica, y la conceptual con la definición progresiva y vinculante de todos los extremos objeto del debate, de lo cual se concluye que el principio de congruencia es la expresión de esa estructura conceptual, en donde el acto por excelencia definidor del mismo en sus ámbitos personal, material y jurídico, es la resolución de acusación.

Este acto procesal – se ha sostenido reiteradamente por esta Corporación – fija las reglas de juego para el juicio y delimita el terreno dentro del cual debe desarrollarse el debate pues: "...concreta las personas contra las cuales se dirigen los cargos, precisa los hechos y circunstancias constitutivas de la imputación fáctica, y señala los delitos y normas que integran la imputación jurídica. Las precisiones e imputaciones que aquí se hagan constituyen ley del proceso y se erigen en frontera inquebrantable para todos los sujetos procesales, y también para el juez. Esa es la regla. Cualquier variación o modificación requiere el cumplimiento de un procedimiento especial, en los términos señalados en la ley y la jurisprudencia..."²¹.

"O lo que es lo mismo, las imputaciones fáctica y jurídica que allí se eleven constituyen ley del proceso, la que solo y salvo que en la audiencia pública se invoque una variación o modificación de la calificación jurídica en los términos del artículo 404, puede ser removida..."²².

Así las cosas, como finalmente la Fiscalía en las alegaciones finales no varió ni modificó la calificación jurídica, según lo estableció la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en decisión del 4 de mayo de 2012, como "*mecanismo de solución*"²³, sino que el Fiscal insistió en un concurso homogéneo y sucesivo indeterminado, en este punto cabe precisar, que si bien es cierto en dicha decisión se le otorgó la posibilidad al Fiscal para que variara la calificación jurídica, al indicar "*si lo estima pertinente*", de las expresiones utilizadas en

²¹ Casación del 29-05-05 Rad.23914

²² Sentencia de segunda instancia del 28-05-08. Rad. 29384.

²³ Folios 259 del C. 71

dicha providencia, se vislumbra que realmente también los Magistrados observaron esa necesidad, esto es, "**aclarando y agregando** que se trata, en todos los casos ya individualizados, de un concurso de desplazamientos forzados..."²⁴, se impartirá condena por un solo delito.

Tipicidad objetiva:

Se trata, entonces, del delito de *concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado*, que prevé el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal, aplicable por favorabilidad, sin la modificaciones de que tratan las Leyes 733 de 2002, 890 de 2004 y 1121 de 2006:

"ARTÍCULO 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Quando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir."

Asimismo, concurre el delito de *desplazamiento forzado*, descrito en el artículo 180 del Código Penal, sin la modificación de la Ley 890 de 2004:

"ARTÍCULO 180. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12), multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.

No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional."

²⁴ Negrilla fuera de texto

Invasión de áreas de especial importancia ecológica:

La materialidad de este delito contra los recursos naturales y el medio ambiente también se demostró en esta actuación. En efecto, en el proceso se probó que varios sujetos invadieron territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, en este evento con propósitos económicos y, en la mayoría de los casos, se afectó gravemente el medio ambiente.

En primer término, cabe precisar que la condición de territorios colectivos deviene, por supuesto, de la adjudicación que el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- realizó a las comunidades negras de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó -con una extensión de 54.973 hectáreas y 8.368 m²²⁵- y Curvaradó -con un área de 46.084 hectáreas con 50 m²²⁶-, mediante resoluciones 02801 y 02809 del 22 de noviembre de 2000, respectivamente, respecto a terrenos baldíos ocupados colectivamente en el municipio de Ríosucio en el departamento de Chocó, Consejos Comunitarios que están constituidos por las siguientes veredas:

JIGUAMIANDÓ:	CURVARADÓ:
Puerto Lleras	Bocas de Curvaradó
Pueblo Nuevo	Andalucía
Uradá	No Hay Como Dios
Apartadocito	Costa de Oro
La Laguna	San José de Jengadó
Nueva Esperanza	Buena Vista
Santa Fe de Jiguamiandó	Corobazal
Caño Seco	Jengadó Medio
El Vergel	Las Camelias
Bracito	La Laguna
Bella Flor Remacho	Villa Luz
	El Guamo
	Despensa Baja
	Despensa Media

²⁵ La cual quedó finalmente en 46.459,08 hectáreas, luego del deslinde de la propiedad privada realizada mediante Resolución 2159 del 24 de agosto de 2007.

²⁶ La cual quedó finalmente en 34.209,91 hectáreas, luego del deslinde de la propiedad privada realizada mediante Resolución 2159 del 24 de agosto de 2007.

Entretanto, la Ley 2ª de 1959 estableció que el sector donde se desarrolló el proyecto de la palma africana es de reserva forestal:

"Artículo 1. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el [Decreto legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación:

a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico..."

En tales condiciones, contrario a lo que aludieron varios defensores, si bien es cierto que de dicha norma se concluye que el Legislador no sancionó el mero tránsito por los territorios señalados en el tipo, que en el caso *sub examine* se reduce a territorios colectivos o de reserva forestal, sí punió, para la época de los hechos, la sola invasión como verbo rector, la cual se refiere al acto de apoderamiento, irrupción, incursión, penetración u ocupación en una zona protegida.

Así las cosas, si en gracia de discusión se aceptare que algunos procesados adquirieron los predios contenidos en sectores colectivos por ventas voluntarias y, sin ningún tipo de apremio por parte de sus poseedores legales, ello no desdibuja la configuración delictual, puesto que la invasión no está necesariamente ligada a la fuerza, violencia o coacción para la realización del negocio jurídico, sino que puede consistir en la mera apropiación o apoderamiento de bienes que por su naturaleza protegida, en aras de garantizar los derechos de negritudes ancestrales o poseedores de buena fe, o los derechos de la colectividad por su interés como recurso natural, está

prohibida su incursión, la cual debe ser entendida desde el punto de vista de mera adquisición que es lo que precisamente protege el legislador, si dicha normatividad se concatena con la Ley 70 de 1993 y 2ª de 1959, que impide su enajenación, ocupación y/o explotación sin permisos especiales.

Además, es menester precisar que como en algunos de los casos coexistieron *actitudes violentas* y diferentes actos que llevaron ínsito el constreñimiento para lograr la adjudicación de los predios, al mismo tiempo se tipificó, sin lugar a dudas, el desplazamiento forzado, según se explicó con antelación, y no solamente esta conducta.

Dicho de otra manera, la palabra "invasión", entendida por los abogados como "violencia", no son sinónimos y, por ende, no pueden confundirse, porque este vocablo tiene varias acepciones y no puede elegirse la más acomodada a sus intereses sino la que propenda a una interpretación lógica y sistemática de dicha regulación normativa de acuerdo a los fines que buscaba proteger el legislador, que a juicio de esta funcionaria es la posesión, entre otras, de las comunidades amparadas por títulos colectivos, precisamente para buscar el desarrollo cabal del artículo 55 transitorio de la Constitución Nacional y, por ende, de la Ley 70 de 1993, armonizada con un uso sostenible del suelo por tratarse de zona de reserva forestal, por lo que se pretende punir a quien se apropie, sin tener los requisitos que la ley exige para ello, de bienes de tal naturaleza.

En relación con los significados de la palabra invasión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de abril de 2010, radicado 30.028, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, se refirió a múltiples de sus significados, en un delito que si bien no es exactamente al que se está aludiendo en este asunto, tiene que ver con la invasión de tierras, al punto que la Corte Constitucional lo tuvo en cuenta posteriormente, en sentencia C-456 de 2012, para declararse inhibida para decidir en relación con la demanda de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 337 del Código Penal:

*"De acuerdo con lo anterior, el delito de invasión de tierras o edificaciones lo comete quien **ocupa, penetra, o se introduce de manera fraudulenta, clandestina, arbitraria o violenta en bienes inmuebles que no le pertenecen** (tierras o edificios ajenos), con la intención de alcanzar un*

provecho para sí o para un tercero, ingrediente subjetivo que no necesariamente entraña apropiarse en todo o en parte del bien (como se exige en el tipo anterior), sino que puede constituirlo, por ejemplo, una intrusión temporal y parcial con el fin de establecerse allí por algún tiempo o para ejercer una forma de explotación del inmueble." (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, se reitera, la invasión no se reduce, como parecen entenderlo la mayoría de abogados, a una intervención violenta o mediante la fuerza por parte del sujeto activo para su punición por el legislador, sino que se trata de una ocupación arbitraria, esto es, ilegal, condición que se la da el hecho de que se contravenga o transgreda la Ley 70 de 1993 en cuanto a la prohibición de su enajenación, o en algunos de los casos, porque se realice una apropiación con fines de explotación sin los permisos especiales requeridos para ello.

De otro lado, tampoco puede entenderse la ocupación como una permanencia en el lugar de marras, puesto que dicha permanencia hace parte de otro de los verbos rectores dispuestos por el legislador ulteriormente y, por tanto, no podrían asimilarse.

Pues bien, en relación con la invasión de territorios colectivos, a partir de la declaración de PEDRO CAMILO TORRES²⁷ se supo que la empresa pionera en la siembra de palma, realizó dichos cultivos en predios colectivos de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Posteriormente, y en igual sentido, también declararon EFIGENIA GONZÁLEZ MORENO²⁸, SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO²⁹, LUZ MARY CABEZAS MARTÍNEZ³⁰, PABLO CUESTA DENIS³¹, DOMINGO ROMAÑA ROMAÑA³², EFRÉN ANTONIO AREIZA GÓMEZ³³, LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA³⁴, ELADIO BLANDÓN ROMAÑA³⁵, EFRÉN ROMAÑA CUESTA³⁶, WILLINTON CUESTA CÓRDOBA³⁷, EUSTAQUIO POLO RIVERA³⁸, ARLEDIS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ³⁹, ENRIQUE MANUEL PETRO HERNÁNDEZ⁴⁰, entre otros, quienes

²⁷ Folios 41 y ss del C. 5

²⁸ Folios 159 y ss del C. 5

²⁹ Folios 162 y ss del C. 5

³⁰ Folios 165 y ss del C. 5

³¹ Folios 177 y ss del C. 5

³² Folios 185 y ss del C. 5

³³ Folios 222 y ss del C. 5

³⁴ Folios 243 y ss del C. 5

³⁵ Folios 248 y ss del C. 5

³⁶ Folios 270 y ss del C. 5

³⁷ Folios 275 y ss del C. 5

³⁸ Folios 8 y ss del C. 6

³⁹ Folios 16 y ss del C. 6

⁴⁰ Folios 94 y ss del C. 6

obviamente en su calidad de propietarios o poseedores de los terrenos de los que fueron despojados, se refirieron, la mayoría de ellos, a la condición ancestral de sus territorios y la forma de adjudicación o posesión de los mismos, esto es, como títulos colectivos, y a que en los mismos se cultivó palma.

Del mismo modo, las circunstancias de siembra en territorios de la colectividad fueron confirmados por CECILIA NARANJO BOTERO⁴¹ y el sacerdote JESÚS ADALBERTO FRANCO⁴², de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quienes se dedicaron al acompañamiento de las comunidades desplazadas, e indicaron que en dicha condición han percibido, tanto por comentarios de los desplazados como por sus vivencias, la implantación de cultivos de palma aceitera en terrenos colectivos.⁴³

Asimismo, en el expediente se encuentra el informe final de la comisión de peritos⁴⁴, de julio de 2009, en el cual se identificó el impacto ambiental ocasionado por el establecimiento de cultivos de palma de aceite y ganadería en los municipios de Carmen del Darién, Ríosucio (Chocó) y Mutatá (Antioquia), en relación con el que, a partir de una análisis multi temporal sobre la cobertura boscosa en la zona de estudio, adelantado por un periodo de 8 años, por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pudo hacer un cotejo del escenario inicial, esto es, antes del proyecto palmicultor o ganadero, y del escenario al momento del estudio.

En efecto, en dicho informe se identificaron, describieron y cuantificaron los impactos ambientales ocasionados por cada una de las empresas que se encuentran ubicadas en el entorno de los Consejos Comunitarios de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en relación con lo que tuvieron en cuenta que el INCODER reportó 17.175,15 hectáreas utilizadas por empresas palmeras y/o ganaderas, de las cuales *"9.886 ha se encuentran en tierras colectivas del Curvaradó (28,9% del territorio colectivo) y 6.905 ha de las empresas se ubican en el título colectivo de Jiguamiandó (14.9%)"*.

⁴¹ Folios 103 y ss del C. 5

⁴² Folios 110 y ss del C. 5

⁴³ Folios 103 y ss del C. 5

⁴⁴ Folios 45 y ss del C. 30

Además, concretamente respecto a cada empresa asentada en el sector, en el informe final se especificaron los impactos ambientales negativos, tales como los daños en los recursos hídricos, en el suelo y la biodiversidad, causados en el lugar en el que cada una de ellas desarrolló sus actividades agropecuarias y/o ganaderas:

“URAPALMA: ...Uso actual Cultivo de palma de aceite, en producción y con presencia de pudrición del Cogollo... Recurso hídrico: Afectación de los siguientes cuerpos de agua: Caño el Cerrao (taponamiento y disminución de caudales); disminución de caudales en Quebrada La Morroca (alimenta el caudal del caño El Cerrao), Q. La Pradera (alimenta caudal del caño Claro), Q. La Nevera (alimenta caudal Caño Claro), Q. La Iguana (desemboca en Ciénga La Cristalina), Q. La Madre (alimenta la Q. Cristalina y la Ciénaga Los Cativos), Q. La Cristalina (recibe aguas de la Q. La Madre y Ciénaga Alvarado y alimenta caudal del caño Claro), Ciénaga Alvarado (recibe aguas de la Q. La Nevera y alimenta la Q. Cristalina), Ciénga Los Cativos (recibe Agua de la Q. Cristalina y la Q. La Madre y aporta una parte de sus aguas a la Ciénaga La Cristalina), Ciénaga La Cristalina (recibe aguas de la Q. La Iguana y parte de las aguas de la Q. La Cristalina). La afectación fue resultado de acciones como taponamiento de caños, construcción de drenajes artificiales, eliminación de la cobertura boscosa protectora de los cuerpos de aguas, construcción de vías que requerían el desvío de áreas. Se identificó una red de drenajes construidos para el desarrollo de actividades de la empresa en una longitud de 738.19 km.

Recurso suelo: Identificación de la realización de las siguientes tres acciones que ocasionan e incrementan la erosión en las riberas del río Curvaradó: 1. Taponamiento del Caño El Cerrao. 2. Extracción material de arrastre para la adecuación de vías. 3. Eliminación cobertura vegetal riberas río Curvaradó. El nivel freático natural de los suelos se vio alterado por el desarrollo de cinco tipo de acciones identificadas en el área de Urapalma: construcción red de drenajes, canalización, taponamiento de caños, desvío de cuerpos de agua, eliminación de la cobertura vegetal protectora

Biodiversidad: la eliminación de la cobertura vegetal, la construcción de la red de drenajes, construcción de carreteras y cable vías se traducen en la deforestación de 1.589,78 hectáreas, la destrucción de un ecosistema acuático y la afectación de 14 ecosistemas acuáticos. Dichas acciones fueron realizadas para introducir 3.508,43 hectáreas de palma de cera asociado a Kudzu, las cuales se considera especies exóticas que por sus características restringen y reducen la propagación de las especies nativas y por ende se reduce la biodiversidad. Así mismo la reducción de cobertura boscosa, presenta estrecha relación con el servicio ambiental asociado a la captura de dióxido de carbono, que para la zona ocupada por Urapalma se traduce en una reducción de la captura de CO2 en una cantidad de 9534 a 15890 toneladas por año.

Se establecieron 1.063,48 hectáreas de cultivo de Urapalma en el interior de la zona de Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959 de las cuales 22.28 hectáreas cambiaron su cobertura de bosque a cultivos de palma entre el año 2000-2008. Así mismo se identifica un áreas de 3.283.41 hectáreas ocupadas de palma al interior de los territorios colectivos de las comunidades negras.”

"PALMAS DEL CURVARADÓ: ...Uso Actual: Cultivo de Palma de Aceite, en producción y con pudrición del Cogollo... La construcción y adecuación de la red de drenajes y canales (382,1 Kilómetros de canales), así como vías y cable vías alrededor de la ciénaga Andalucía (coordenadas geográficas: X1038029, Y= 1038029), así como la intervención de cobertura boscosa del Cerro Las Menas (de donde provienen sus afluentes que aportan agua a la Ciénaga), generó una notable reducción de la disponibilidad hídrica en dicho ecosistema.

En desarrollo del cultivo de palma se realizó la canalización del canal de las Menas, el cual comunica las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, con esta acción el canal incrementó su caudal.

Recurso suelo: las actividades de establecimiento de la palma, ocasiona cambios en la estructura del suelo y especialmente de los aledaños a la ciénaga Andalucía; así mismo se incrementan la erosión en las riberas del canal de las Menas en atención a la variación del caudal.

En cuanto al nivel freático natural de los suelos, se identificaron 3 acciones que alteraron su condición natural en el área de Palmas de Curvaradó: construcción red de drenajes, canalización y afectación niveles de agua de la Ciénaga de Andalucía.

Biodiversidad: ...Se identificó 1 ecosistema acuático disminuido considerablemente hasta su casi destrucción (Ciénaga Andalucía) con repercusiones directas sobre algunas poblaciones de peces, anfibios, reptiles y aves asociadas a dicho ecosistema.

Con especies exóticas (palma asociada a Kudzu) se estableció un área total de 1.434,44 hectáreas...

Palmado: ...Uso Actual Presenta cultivo de Palma con pudrición del Cogollo y se adelanta el establecimiento de cultivo de *Jatropha*. Secado del Humedal de Guacuco por la intervención sobre la quebrada La Madre que alimentaba el misma junto con otros humedales asociados (como madre viejas -natiagos brazos de ríos o quebradas- charcos y otras ciénagas) secado incrementado con la construcción de la red de canales (270,2 kilómetros de canales), vías y cable vías.

Recurso suelo: Identificación de dos acciones que ocasionaron e incrementan la erosión en las riberas del río Curvaradó (Extracción de material de arrastre para la construcción y adecuación de vías y la remoción de cobertura protectora de márgenes hídricos).

Para el nivel freático natural de los suelos, se identificaron las siguientes acciones que alteraron su condición natural en el área de Palmados:

- Construcción de la red de drenajes aunado a la canalización del humedal el Guacuco generó una reducción del nivel freático tanto de los suelos de la empresa, como los circundantes.

La eliminación de la cobertura vegetal protectora, para adecuar suelos para el cultivo como para adecuar drenajes.

Biodiversidad: Para el periodo 2000-2008 se identificó cambios en la cobertura vegetal en un área de 140,13 hectáreas con lo cual se destruyó el hábitat

natural de varias especies de flora y fauna propias de la zona. Lo anterior incide la reducción de servicio ambiental por captura de CO2 estimado en 840 a 1.401 Toneladas/año para el área de 140.13 ha.

Se identificó 1 ecosistema acuático destruido (Humedal Guacuco) destruyendo el hábitat natural de varias poblaciones de peces, anfibios, reptiles y aves.

Se introdujeron especies exóticas (palma asociada a Kudzu) en un área de 154 hectáreas con el consecuente desplazamiento de otras especies herbáceas propias del ecosistema, que no pueden crecer debido al carácter agresivo de las especies exóticas.

En la zona de Reserva de Ley 2ª se establecieron 1.346,72 hectáreas de cultivo de palma y adicionalmente de Jatropha, sin identificar áreas deforestadas para el periodo de estudio. Dentro del Territorio Colectivo se identificaron 1.346.72 hectáreas, es decir la totalidad del cultivo.

PALMAS S.A.: Uso actual: cultivo de Palma con pudrición del Cogollo y en proceso de abandono.

Recurso hídrico: Canalización de la ciénaga Los Bartolos y contribuyó con la fragmentación de la quebrada La Madre y de humedales cercanos, lo cual se dio como consecuencia de la construcción de la carretera principal de 20 kilómetros; con estas acciones de intervención se generó el secado irreversible de la ciénaga y la disminución en la disponibilidad hídrica de la quebrada la Madre.

Recurso suelo: la eliminación de cobertura vegetal y la extracción de material de arrastre para la construcción de vías ocasiona e incrementa la erosión en las riberas del río Curvaradó.

Con la eliminación de la cobertura vegetal protectora se afectó la estructura y composición de los suelos, induciendo a una importante pérdida de nutrientes, con reducción del nivel freático del suelo de la empresa y circundantes.

La construcción de una amplia red de drenajes aunado a la canalización y secado de la ciénaga los Bartolos por parte de la empresa Palmas S.A., generó una reducción considerable del nivel freático del suelo de la empresa y los circundantes.

... Se identificó 1 ecosistema acuático destruido (Ciénaga Los Bartolos) y 1 ecosistema considerablemente disminuido (humedales asociados). Con el secado irreversible de la ciénaga los Bartolos, se destruyó el hábitat natural tanto de especies florísticas como fáunicas. En cuanto a flora se destaca el caso del arracacho, especie asociada estrechamente a los humedales.

Se introdujo un área total de 1.019,62 hectáreas de especies exóticas (palma asociada a Kudzu). Se reporta una reducción de servicio ambiental por captura de CO2 estimado en 2.829 a 4.713 Toneladas/año.

En la zona de Reserva de Ley 2ª se establecieron 1019,62 hectáreas de cultivo de palma y se identifican como áreas deforestadas un total de 29,92 hectáreas. Dentro del Territorio Colectivo se localiza la totalidad del cultivo de palma (1019,62 hectáreas).

INVERSIONES FREIGNE OCHOA: *Uso actual: es una empresa proyectada para cultivo de palma de aceite.*

Recurso hídrico: Empresa proyectada pero sin desarrollo de actividades de siembra observadas en campo.

Recurso suelo: En cuanto al nivel freático de los suelos, se identificaron 2 acciones que alteraron su condición natural en el área de Palmas SA: construcción de drenajes y eliminación de cobertura vegetal...

349,38 hectáreas se localizan en zona de Reserva de Ley 2ª de 1959, en territorio colectivo de comunidades negras se localizan 349,38 hectáreas".

En este punto, cabe advertir que, en relación con **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ** y **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, si bien la defensa en principio atacó la estructuración de la tipicidad de su conducta, ello se dilucidará en el ítem de la responsabilidad.

Tipicidad objetiva:

Por tanto, se trata del delito de *invasión de áreas de especial importancia ecológica*, de que trata el artículo 337 del Código Penal, sin las modificaciones de la Leyes 890 de 2004 y 1453 de 2011, obviamente por razones de favorabilidad.

"ARTICULO 337. INVASION DE AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLOGICA. *El que invada reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena señalada en este artículo se aumentará hasta en una tercera parte cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente, sin que la multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie o dirija la invasión o se aproveche económicamente de ella, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de ciento cincuenta (150) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

Responsabilidad

Este aspecto subjetivo de la conducta punible también quedó demostrado en esta actuación en relación con **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ, GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, SOR ENID OSPINA RENDÓN, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ, NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA, REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO y ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ**, pues existe prueba directa que los compromete en los delitos por los cuales la Fiscalía los acusó.

Pues bien, respecto a **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT y KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, quienes fungieron como representantes legales de la empresa URAPALMA, pionera en el cultivo de la palma en la región, en el proceso se demostró, además de su vínculo con la compañía, que ejercieron actividades de las cuales se evidencia que no fueron simples empleados, como quiso hacerlo ver el defensor del primero, ni una simple accionista minoritaria ajena al manejo de la empresa, como parece creerlo el abogado de la segunda, obviamente como estrategia defensiva para exonerarlos de la responsabilidad que les corresponde en este asunto.

En cuanto al origen de la empresa Unión de cultivadores de palma de aceite en el Urabá -URAPALMA S.A.-, constituida en la Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 1999, es menester precisar que en el proceso se probó con las afirmaciones de **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA⁴⁵**, alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”, **JOSÉ EVER VELOZA GARCÍA**, alias “Hernán Hernández”, “HH” o “Carepollo”, **RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA⁴⁶**, alias Ricardo; y **FREDY RENDÓN HERRERA**, alias “El Alemán”, líderes de la organización paramilitar -que además se encuentran como postulados a la Ley de Justicia y Paz-, que pertenecía a **JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL**, gestor principal del proyecto agroindustrial en la zona, y los tres primeros se refirieron a que su establecimiento obedeció a una propuesta de empresarios del Magdalena.

⁴⁵Declaración de Raúl Emilio Hasbún Mendoza del 4 de junio de 2010, registro 10.

⁴⁶ Declaración en audiencia pública del 5 de diciembre de 2012

Dicho proyecto, según HASBÚN MENDOZA, estaba compuesto por unas empresas y una extractora, sin embargo, también participaron particulares o civiles que invirtieron en el mismo y que tenían **pleno conocimiento** de que éste era impulsado por las autodefensas, al punto que *"el que entraba en la zona y compraba un metro de tierra en el sector sabía que había detrás de todo eso, de quien estaba detrás impulsando todo el proyecto macro en general"*.

Concretamente, este testigo señaló que el gerente de dicha empresa fue inicialmente **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** y posteriormente terminó bajo la dirección de **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, circunstancias que coinciden con las actas de nombramiento, en las cuales se evidencia que el primero fue nombrado el 6 de marzo de 2003, como gerente y representante legal de la empresa⁴⁷, en reemplazo de JAIRO ALONSO BRUGES; y la segunda fue nombrada el 30 de octubre de 2004, en reemplazo de **DAZA PRETELT**. Estos aspectos también se evidencian de las actas de reuniones de la junta directiva, los certificados de existencia y representación de la Cámara de Comercio y de la declaración de PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS⁴⁸, quien laboró en dicho lugar.

En el mismo sentido, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias "Monoleche", involucró a **JAVIER JOSÉ** en el inicio y progreso de URAPALMA, de la cual también indicó que pertenecía a CASTAÑO GIL, situación que era conocida por aquél.

Para el desarrollo del proyecto, CASTAÑO GIL encomendó a los sujetos apodados "Palillo", "55", "Napo" o "Móvil 8" y a "la señora Teresita", esto es, **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, la compra de las tierras en las que se cultivarían las palmas, las cuales el mismo JOSÉ VICENTE se encargó de inspeccionar, junto con HASBÚN MENDOZA y los empresarios ITALO GIOVANNY CIANCI⁴⁹ y LUIS DONACIANO RIASCOS y el acusado **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, a efectos de determinar, por las características de los

⁴⁷ Folios 168 y ss del cuaderno 7

⁴⁸ Folios 41 y ss del C. 5

⁴⁹ De quien se supo por informe de policía judicial del 27 de diciembre de 2010, folios 143 y ss del C. 53, que tanto él como su hijo *"financiaban al grupo de MINCA que lideraba alias 60, con alimentación, mensualidad del grupo, Baterías y demás accesorios"*. Además CIANCI VEGA estuvo vinculado al tráfico de estupefacientes e hizo parte del *"cartel de la costa"*, organizado por otro narcotraficante llamado ALBERTO ORLANDEZ GAMBOA, alias Caracol, quien fungió como su socio principal.

suelos, entre otros aspectos, la viabilidad del proyecto, en los que finalmente se instalaron las plantaciones de palma⁵⁰.

Ahora bien, en razón de las denuncias del testigo PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS⁵¹ empezaron a evidenciarse las actividades delictivas de **JAVIER JOSÉ** y **KATIA PATRICIA**, ya que, tanto en el oficio que suscribió en febrero de 2007, dirigido al entonces Fiscal General de la Nación, como en sus posteriores declaraciones, mencionó pormenores de las irregularidades que se estaban cometiendo al interior de dicha empresa en la tramitación y adjudicación de créditos de fomento para la siembra de palma, para lo cual se constituyeron unas asociaciones de cultivadores, que realmente eran empresas fachada, a raíz de las cuales las empresas palmicultoras obtuvieron incentivos de capitalización rural.

Además de ello, señaló a **DAZA PRETELT** y a **SÁNCHEZ MEJÍA** como asistentes a las juntas de socios realizadas el 27 y 28 de junio de 2004, en las que se discutieron aspectos que demuestran no sólo su conocimiento y voluntad acerca de las artimañas utilizadas para conseguir dichos incentivos, sino su participación directa en las mismas, al punto de que el mismo **DAZA PRETELT** propuso una treta para la consecución de tales beneficios.

Además de ello, el postulado **HASBÚN MENDOZA** manifestó que aproximadamente en los años 2000 o 2001, los miembros de la organización paramilitar involucrados en el plan palmífero se percataron de la existencia de las prohibiciones y restricciones de enajenación que tenían los predios donde se desarrolló el proyecto, por tratarse de terrenos colectivos de comunidades afrodescendientes, por tanto, **VICENTE CASTAÑO**, como líder del sector palmero, designó a **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, a fin de que buscara solución a dicha problemática, quien finalmente, junto con el abogado **CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ**, diseñó dos alternativas como estrategias jurídicas para la legalización de los fundos que habían adquirido, esto es, realizar acuerdos con los consejos comunitarios de las comunidades negras y la implementación de la figura de la accesión, obviamente entendida como una manipulación ilegal y no como un hecho generado de manera natural.

⁵⁰ Declaración de Raúl Emilio Hasbún Mendoza del 4 de junio de 2010, registros 9 y 10.

⁵¹ Mediante oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, folios 274 y ss del C. 4

Estas circunstancias, por supuesto, son las que desdibujan la ajenidad de los procesados **JAVIER JOSÉ** y **KATIA PATRICIA** en la comisión delictiva y, por el contrario, evidencian su concertación con la estructura paramilitar, lo cual no sólo se vislumbra por su condición "laboral" en URAPALMA, ya que la experiencia indica que los reales propietarios de las empresas, que en este caso es un líder paramilitar, no dejan las funciones de dirección, que finalmente son cargos de confianza, al azar; sino porque estos procesados ejercieron actividades ilegales tendientes a desarrollar, a toda costa, el objeto social de la misma, de lo cual se percibe el acuerdo de voluntades y su ánimo de ejercer actos dirigidos a lograr el desplazamiento de la comunidad y posterior invasión de territorios que tienen la condición, en gran parte, de ser colectivos y/o de reserva forestal.

En efecto, dichas actividades se descubrieron con los señalamientos directos de la mayoría de víctimas del desplazamiento, las cuales se refirieron a que varios sujetos, a quienes algunos de ellos denominaron "comisionistas", los buscaron en diferentes regiones del país, entre ellos, alias "Palillo", "55", "Napo", "El Diablo", entre otros reconocidos paramilitares del sector, y les ofrecieron comprarles su tierra, ofrecimiento que finalmente no fue potestativo, ya que traía insitas presiones o mensajes de riesgo de un mal futuro, por lo cual terminaba siendo una coacción, como es el caso de **SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO**, a quien buscaron en Chigorodó y le ofrecieron \$200.000 por hectárea de la tierra que poseía, valor que no obstante manifestó que no le servía, el comisionista le dijo que independientemente de si vendía o no, la tierra la iban a sembrar de palma *"porque no vamos a dejar tierra separada a nadie"*⁵², razón por la que finalmente le *"tocó acceder a la proposición"*.

Asimismo, **CRUZ MARY URIBE GÓMEZ**⁵³ expuso que tenía una casa en Belén de Bajirá, empero, en el año 1995 hubo de salir del pueblo porque llegó una carta con amenazas y extorsiones a los comerciantes, motivo por el cual se fue y dejó a su padre encargado de la misma, sin embargo, luego llegaron los paramilitares armados y se apoderaron del lugar. Por tanto, luego de enterarse de que se trataba de URAPALMA, enfrentó a **DAZA PRETELT** y le reclamó su casa, pero éste se la negó y le mostró una escritura falsa.

⁵² Folios 162 y ss del C. 5.

⁵³ Folios 215 y ss del C. 5

Igualmente, JULIO CÉSAR ARRIETA CÁRDENAS⁵⁴ indicó que vendió su tierra por presión de los paramilitares, quienes comandados por alias "Palillo", le dijeron que el que no vendiera sería asesinado y así le comprarían a la viuda más barato, aspecto que fue relatado por el testigo de manera gráfica al pasarse la mano por el cuello. Además, adujo que el personal armado les dijo que tenían que vender las tierras a URAPALMA, cuyo gerente era **JAVIER DAZA**, quien finalmente le compró la finca denominada "Los Laureles", sin embargo, a este acusado *"después del compromiso se le veía la maldad desde lejos conmigo, hablábamos que me compraba a \$200.000.00 de contado que no era el precio de la tierra porque valía más, pero por las amenazas tuvimos que vender a ese precio"*. Posteriormente, no los volvieron a dejar entrar a su propiedad. Del mismo modo, manifestó que le vendió a este procesado otra finca llamada "No hay como Dios", pero *"siempre con amenazas, no podíamos salir del pueblo"*.

Entretanto, GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA⁵⁵ explicó que residió en la cuenca de Curvaradó, vereda Villa Luz, desde 1980, empero, luego de su desplazamiento, encontró sus predios cultivados con palma de aceite, no obstante no había llegado a ningún acuerdo con el sujeto apodado "Palillo", quien lo contactó para que le vendiera sus terrenos. Posteriormente, uno de los comandantes de las autodefensas llamado Lázaro, le ordenó evacuar la región y le indicó que si permanecía allí sería catalogado como auxiliador de la guerrilla y, por tanto, debía atenerse a las consecuencias, razón por la cual, no obstante continuó en Bajirá pendiente de sus tierras, los paramilitares le impidieron el acceso a ellas y fueron amenazados de muerte por dicho comandante paramilitar.

Posteriormente, CARO GARCÍA trató de recuperar sus tierras, por tanto, en el año 2003, se contactó con URAPALMA para dialogar acerca de su retorno, motivo por el que le dieron aproximadamente cinco citas en un año pero no cumplieron con ninguna de ellas. Asimismo, en el 2004 y 2005, buscó nuevamente contactarse con URAPALMA y, no obstante *la asesora jurídica de ese momento llamada KATIA* lo citó tres veces, tampoco cumplió. Por ello, buscó como intermediario al padre LEONIDAS MORENO GALLEG0, y en su

⁵⁴ Folios 256 y ss del C. 5

⁵⁵ Folios 280 y ss del C. 5

oficina se entrevistó con **JAVIER DAZA**, quien quedó de arreglar su problema a los tres días, sin embargo, cuando acudió a su oficina *"me puso a que me atendiera el ingeniero agrónomo"*, quien constató que sus predios estaban dentro de los planos de la empresa, sin embargo, **DAZA PRETELT** le manifestó que la única manera de reconocerle su propiedad era *"si era capaz de llegar al terreno y a ojo identificar los predios, le respondí que era imposible dado que ellos habían destruido los puntos de referencia"*.

Igualmente, JOSÉ ALBERTO VITALINO MOSQUERA⁵⁶ afirmó que quien cultivó en su finca ubicada en Cetino -de 160 hectáreas-, fue **JAVIER JOSÉ**, con quien discutió, ya que *"cuando él llegó a trabajar las fincas le dijimos que nosotros no le vendíamos, con engaño nos dijo que trocháramos el monte, que el monte que estaba trochado no lo sembrara"*, a lo cual procedieron convencidos de ello, sin embargo, este acusado luego dio la orden de que nadie podía cruzar al otro lado del río Curvaradó, donde precisamente se ubicaban sus tierras, por tanto, le hicieron el reclamo directamente a **DAZA PRETELT**, quien les contestó *"que ellos eran dueños de esa tierra por que ellos habían sacado la guerrilla de estos montes"*.

Estas declaraciones entonces, hacen inferir la responsabilidad de los justiciables, pues, se trata de testigos directos, al tener la condición de víctimas no sólo de los desplazamientos y despojos de sus predios, sino de la participación de **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** y **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** en los mismos.

Es más, es tal la magnitud de la participación -a título de coautoría- y del dominio del hecho de **DAZA PRETELT** en el origen y desarrollo del proyecto palmicultor y su concertación con el grupo paramilitar que, en primer lugar, el postulado **HEBERT VELOZA GARCÍA**⁵⁷ manifestó que en muchas oportunidades estuvo presente en reuniones donde **JAVIER JOSÉ** *"le rendía cuentas a VICENTE CASTAÑO sobre el proyecto de la palma, también era el encargado de llegar a acuerdo con comunidades negras para pagarles las tierras que se habían sembrado en palma y les pertenecían a estas comunidades..."*, circunstancia que hace más evidente que los procesados primero se hicieron a las tierras de manera arbitraria y luego, cuando

⁵⁶ Folios 38 y ss del C. 6

⁵⁷ Folios 13 y ss del C. 26

empezaron las reclamaciones y retornos de los pobladores y cuando necesitaron de préstamos y beneficios bancarios, trataron de legalizarlas.

En segundo término, el desmovilizado RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA⁵⁸ relacionó a **DAZA PRETELT** como activo militante de las autodefensas y como un socio que aportó trabajo a la empresa y al plan palmero, pues no tenía capital, a raíz de lo cual fue uno de los que participó, como se dijo con antelación, en la primera visita al sector para la verificación del terreno.

En efecto, luego de que empresarios de la costa le propusieran a VICENTE CASTAÑO GIL el negocio de la palma africana, éste ofreció la zona de Belén de Bajirá para su cultivo, motivo por el que varios de esos empresarios, valga decir, **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, ITALO GIOVANNY CIANCI VEGA y LUIS DONACIANO RIASCOS se trasladaron al sector y recorrieron, guiados por HASBÚN MENDOZA, la zona para revisar la calidad de los suelos, las vías de penetración, etcétera.

Esa participación directa como socio, así no aparezca legalmente como tal, se hace aún más palpable cuando dicho postulado manifestó que, si bien no conoce las escrituras de constitución de las empresas o sociedades, estuvo presente en las reuniones relativas al cultivo de la palma, en las que participaron VICENTE CASTAÑO, **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, LUIS DONACIANO RIASCOS, ITALO GIOVANNY CIANCI VEGA y “Hernancito Gómez”⁵⁹, valga decir, **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ**; y que “*lo bueno y lo malo*” que tenga la sociedad lo hizo **DAZA PRETELT**, ya que “*él era URAPALMA*”.

De otro lado, se refirió a actividades adicionales del acusado en el desarrollo del proyecto, la primera de ellas, es que era el encargado del fondo de gastos compartidos, la cual consistía en recaudar dinero de las empresas que se encontraban ubicadas dentro del sector que denominó “*el triángulo*” para poder realizar vías de penetración, canales y demás obras de infraestructura que fuesen necesarios para el perfeccionamiento de la zona; y la segunda, como el encargado por *el patrón directo de él*, VICENTE CASTAÑO GIL, de conseguir la

⁵⁸ Declaración en audiencia pública del 3 de diciembre de 2012

⁵⁹ Declaración en audiencia pública del 3 de diciembre de 2012.

solución de la problemática ante las prohibiciones establecidas en la Ley 70 de 1993.

En efecto, el abogado CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ⁶⁰, asesor jurídico de URAPALMA, condenado por estos hechos, expuso que **DAZA PRETELT** le ofreció dicho empleo en 1999, razón por la que se reunió con LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES, ANTONIO NEL y CARLOS ALBERTO ZUÑIGA CABALLERO, ITALO CIANCI, **JAVIER DAZA PRETELT** y JAIRO DE JESÚS ALONSO BRUGÉS, donde le mostraron un cúmulo de posesiones que sumaban 5.926 hectáreas y unos títulos de propiedad que sumaban 241 hectáreas, documentos en relación con los cuales el declarante les indicó, en primer lugar, que eran inviables para adelantar un proyecto respecto al apalancamiento financiero, si se tienen en cuenta los requisitos bancarios y, en segundo término, presentaban dificultades para el saneamiento de la propiedad rural.

Luego de varias diligencias que realizó, referentes a lograr métodos legales para la legalización de los predios, decidió retirarse después de advertirles la imposibilidad para ello. Sin embargo, meses después fue contactado por **JAVIER JOSÉ**, se reunió nuevamente con las mismas personas y le propusieron la legalización de los predios a través de la Ley Tocaima, empero, ante lo forzado de la aplicación de dicha normatividad, les propuso utilizar la figura civil de la accesión en las tierras que tenía con título, entre ellas la de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, con las demás que tenían sólo con posesión "*para que quedara un globo de 5.976 hectáreas saneadas*", a lo cual accedieron y, por tanto, ello se efectivizó mediante escritura, la cual se hizo en la Notaría Única de San Jacinto.

En relación con esta declaración, si bien es cierto el testigo aludió a que las posesiones que fueron compradas por varias empresas, entre ellas URAPALMA, fueron adquiridas de manera legítima y que simplemente "*sanearon*" dichas posesiones para adquirir los títulos, esa manera de proceder evidencia su afán por legalizar posesiones que indudablemente habían adquirido de manera turbia e ilegal, máxime si resulta contradictorio que el condenado MERLANO RODRÍGUEZ hubiese insistido en tratar de defender la legitimidad o legalidad de las compraventas de las posesiones que tenían los

⁶⁰ Declaración en audiencia pública del 19 de diciembre de 2012

empresarios, cuando en varias ocasiones, en la misma declaración, manifestó desconocer el origen de tales compraventas, pues supuestamente sólo se le entregaron los títulos, los cuales fueron autenticados por Notaría, y dijo que los pormenores de las compraventas debían ser explicados por cada empresario.

Es más, cómo desligar el interés en demostrar la legalidad de la consecución de posesiones de un propósito delictivo, si existieron actos tanto antecedentes como posteriores a dicha consecución que demuestran la intención criminal del montaje que se urdió, como los casos elementales de poderes de compraventa suscritos por supuestos vendedores que ya se encontraban fallecidos para la fecha de suscripción, o ventas ficticias a asociaciones de pequeños cultivadores creadas por los mismos palmeros con propósitos económicos, cuando los empresarios, por ejemplo los de URAPALMA, realmente eran los propietarios de dichos predios.

Con todo, no obstante este testigo trató de sustraer a la empresa URAPALMA de un origen y manejo paramilitar, y trató de hacer creer que tanto él como los socios de la misma, desconocían los desplazamientos, el conflicto interno, la existencia de territorios colectivos de comunidades negras, etc., *- desconociendo de paso la realidad palpable como que varios comandantes paramilitares aceptaron el vínculo fehaciente y públicamente conocido de CASTAÑO GIL con URAPALMA-*, reconoció que su actividad en la empresa consistió en idearse la manera de legalizar, o en palabras suyas "sanear", los predios que necesitaban pero que no tenían ningún tipo de título, que era necesario para el desarrollo del objeto social de URAPALMA, pues requerían de préstamos bancarios, entre otros aspectos.

Como prueba de ello, está el acta de la junta directiva 001⁶¹, del 7 de enero de 2000, que este testigo aportó en ampliación de indagatoria del 26 de julio de 2010, reunión en la cual MERLANO RODRÍGUEZ les expuso a los directivos asistentes de URAPALMA, que los bienes inmuebles rurales en los que se proyectaba desarrollar el proyecto de la siembra de la palma carecían de título inscrito que acreditara la propiedad, porque se trataban de meras posesiones, razón por la cual se presentarían inconvenientes en cuanto a que ningún intermediario financiero aceptaría meras posesiones como garantías de créditos

⁶¹ Folios 285 y ss del C. 38

24 mayo de 2000, de la Notaría de San Jacinto (Bolívar)⁶³, mediante la cual no sólo se aclaró la extensión del inmueble debido a la supuesta ocurrencia de la accesión, sino que también se realizó la compraventa del terreno, cuya extensión final quedó en 5.927 hectáreas, entre DANILO PACHECO DE LA HOZ, como supuesto apoderado de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, y la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, representada en ese momento por JAVIER MORALES ESTRADA, por valor de \$2'000.000 millones.

Posteriormente, dicha asociación también realizó la Escritura Pública 095, del 24 mayo de 2000, en la misma Notaría⁶⁴, mediante la cual la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá desenglobó ese terreno en cuatro lotes con extensiones de 1.391 hectáreas con 6.450 m2 (predio 1), 1.531 hectáreas con 1.250 m2 (predio 2), 1.507 hectáreas con 1.100 m2 (predio 3) y 1.497 hectáreas con 1.200 m2 (predio 4).

Luego de lo anterior, JAVIER MORALES ESTRADA, como representante de dicha asociación, mediante Escritura Pública 0866, del 1 de junio de 2000, de la Notaría 8ª de Barranquilla⁶⁵, otorga poder general a DANILO JOSÉ PACHECO DE LA HOZ, para que, en nombre y representación de la persona jurídica que representa, *"verifique toda clase de actos y facultades administrativas, dispositivas"* con los lotes 1, 2, 3 y 4, entre ellos, actos de desenglobe, compraventas, permutas y escrituras de aclaración.

En virtud de dicho poder general, PACHECO DE LA HOZ suscribió la Escritura Pública 964, del 17 de junio de 2000, en la Notaría 8ª de Barranquilla⁶⁶, mediante la cual desenglobó el predio 2, de 1.531 hectáreas y 1.250 metros, en siete predios distinguidos con los rótulos 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2B, 2C y 2D. Asimismo, firmó la Escritura Pública 0965, del 17 de junio de 2000, de la misma Notaría⁶⁷, con la cual la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá vendió a URAPALMA S.A. los predios 2-A-1, de 150 hectáreas; 2-A-2, de 150 hectáreas; 2-A-3 de 150 hectáreas; 2-A-4, de 150

⁶³ Folios 66 y ss del C. 11

⁶⁴ Folios 58 y ss del C. 11

⁶⁵ Folio 137 y ss del C. 15

⁶⁶ Folios 154 y ss del C. 15

⁶⁷ Folios 104 y ss del C. 15

hectáreas, todos ubicados en la vereda Caño Claro, Llano Rico, de Riosucio (Chocó).

Del mismo modo, DANILO JOSÉ firmó la Escritura Pública 0966, del 17 de junio de 2000, de la misma notaría⁶⁸, por medio de la cual la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá vendió a Inversiones La Cabaña Limitada, el predio 2-C, de 750 hectáreas, ubicado en la misma municipalidad.

Posteriormente, JAVIER MORALES ESTRADA suscribió la Escritura Pública 729, del 26 de diciembre de 2001, de la Notaría de Chigorodó, a través de la cual la asociación que representa desenglobó el predio 3, de 1.507 hectáreas y 1.100 mts², de la vereda Caño Claro, Llano Rico, de Riosucio (Chocó) en los predios 3A, de 860 hectáreas; y 3B de 547 hectáreas y 1.100 mts². Ese mismo día, firmó la Escritura Pública 730, mediante la cual la asociación de marras también desenglobó el predio 3A que se acaba de mencionar, de 860 hectáreas, en los predios 3-A1, de 685 hectáreas y 3-A2, de 175 hectáreas.

El 28 de diciembre de 2001, en la misma Notaría suscribió la Escritura Pública 738, por medio de la cual la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá vende a favor de URAPALMA S.A. los predios 3-A-1, de 685 hectáreas; y el predio 3C, de 100 hectáreas.

Igualmente, mediante Escritura Pública 0965, del 17 de junio de 2002, de la Notaría 8 de Barranquilla, MORALES ESTRADA, a través de su apoderado PACHECO DE LA HOZ, vende a URAPALMA los predios 2A1, 2A2, 2A3 y 2A4, cada uno de 150 hectáreas, ubicados en la vereda Caño Claro, Llano Rico, de la misma municipalidad.

Posteriormente, el representante legal de la asociación de pequeños cultivadores de palma en el Urabá, mediante Escritura Pública 2.778, del 13 de octubre de 2004, realizada en la Notaría 5 de Medellín, vende a la empresa Agropalma un terreno de 254 hectáreas, ubicado en las veredas Caño Claro y Llano Rico, de Riosucio (Chocó), predio que había sido desenglobado en la escritura 729 de 2001, como predio 3B cuyo precedente notarial eran las escrituras públicas 94 y 95 del año 2000.

⁶⁸ Folios 132 y ss del C. 15

Finalmente, mediante Escritura Pública 2.556, del 9 de noviembre de 2005, realizada en la Notaría 8 de Barranquilla, la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma en el Urabá vendió a PALMURA S.A., representada por ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, un lote de terreno de 1.391 hectáreas y 6.450 Mts², ubicado en la vereda Caño Claro y Llano Rico Riosucio (Chocó), correspondiente al lote 1, descrito en la Escritura Pública 095 de 2000.

Entretanto, respecto al predio de SIXTO PÉREZ DÍAZ, quien falleció el 14 de junio de 1999, HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ⁶⁹, con fundamento en el supuesto poder conferido por el primero, el 7 de octubre de 2002, protocolizó en la Notaría de Carepa (Antioquia), la Escritura Pública 735, del 8 de octubre de 2002, en la cual, en primer lugar, aclara la cabida del predio a raíz de la accesión y, en segundo término, vende las 4.241 hectáreas, como extensión final del terreno, a la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas y a la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite -ACOPALMA-.

Mediante esta escritura pública dividieron el predio en cuatro lotes, los cuales se distribuyeron entre la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas, que quedó con los lotes 2, 3 y 4; y la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite -ACOPALMA-, que quedó con el lote 1.

Posteriormente, mediante Escritura Pública 767, del 10 de octubre de 2004, de la Notaría Única de Carepa (Antioquia), la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas vendió a la empresa PALMADÓ el lote 4.

Finalmente, ACOPALMA realizó un contrato de comodato, respecto del lote 1, con la empresa Palmas S.A., de las cuales se utilizaron 500 hectáreas para la siembra de palma.

En cuanto al predio "Bella Vista" de JEREMÍAS DURANGO GUISAO, mediante la Escritura Pública 740, del 8 de octubre de 2002, de la Notaría de Carepa (Antioquia), el entonces representante legal de la Asociación de Antiguos

⁶⁹ Conductor de la empresa URAPALMA

Vecinos de la Cuenca del río Curvaradó y Zonas Aledañas se lo compró al supuesto apoderado de DURANGO GUISO, HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, alias Diomedes, empleado de URAPALMA.

Mientras tanto, en relación con el terreno "*Para qué más*" de LUIS URANGO QUINTERO, dicha asociación, mediante Escritura Pública 742, de las mismas fecha y notaría, se la compró al primero.

En este punto es menester resaltar, en relación con los poderes que aparecen suscritos por LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO y SIXTO PÉREZ DÍAZ, que se demostró en la actuación la falsedad de los mismos obviamente debido a que ambos murieron años antes de la supuesta suscripción, ya que, el primero de ellos falleció por ahogamiento el 6 de noviembre de 1995, según lo corroboraron sus hijos VÍCTOR ENRIQUE DÍAZ TAPIAS⁷⁰, MATILDE DÍAZ TAPIAS⁷¹, LUIS VICENCIO DÍAZ OSPINA⁷², y su yerno MANUEL SERAFÍN AGUILAR DORIA⁷³.

Además, se encuentra el informe de laboratorio, acerca del estudio antropológico, médico y odontológico forense con fines de identificación⁷⁴, por la exhumación realizada el 8 de octubre de 2007, en el cual se concluyó que se trata de un cadáver de sexo masculino, quien en vida correspondía al nombre de LINO ANTONIO DIAZ ALMARIO, que por los cambios pos mortem tiene un tiempo de muerte mayor de 10 años. Estimación de edad de 50 a 55 años.

El segundo falleció el 14 de junio de 1999, aspecto que constató su hijo ADRIÁN PÉREZ CAVADÍA⁷⁵, quien aportó copia de la historia clínica de su padre y declaraciones, del 17 de agosto de 2006, de MIGUEL PÉREZ CAVADÍA -hijo-, GUSTAVO GARCÍA PÉREZ -nieto- y LUIS FERNANDO CANO HERNÁNDEZ -trabajador y vecino- ante el Inspector de Policía Municipal de Belén de Bajirá, referente a la muerte de SIXTO PÉREZ DÍAZ.

⁷⁰ Folios 72 y ss del C. 12

⁷¹ Folios 79 del C. 12

⁷² Folios 173 y ss del C. 15

⁷³ Folios 169 y ss del C. 15

⁷⁴ Folios 210 y ss del C. 16

⁷⁵ Folios 126 y ss del C. 21

Por lo demás, las circunstancias de los fallecimientos y las fechas de los mismos, no fueron objeto de controversia en la audiencia pública ni en los alegatos finales.

En cuanto al poder que aparece suscrito por JEREMÍAS DURANGO GUISAO, éste manifestó⁷⁶ que no obstante alias "Palillo" le ofreció \$200.000 por hectárea, por su finca ubicada en Llano Rico, de 30 hectáreas, y al parecer vendió en el año de 1998, nunca firmó ninguna documentación.

De otra parte, resulta innegable que los terrenos de URAPALMA se compraron por orden de VICENTE CASTAÑO GIL y no con su mero permiso o venia, como trató de hacerlo ver el testigo CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ⁷⁷, pues, como viene de verse, se trataba de su propio proyecto y empresa, lo cual a estas alturas resulta inocultable e incuestionable precisamente por las mismas declaraciones de varios de sus subalternos, las cuales ya se relacionaron con antelación.

Igualmente, el compromiso de **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** con la gestación y expansión del proyecto de la palma africana, se percibe con las afirmaciones de algunos empresarios que aseguraron que el conocimiento del procesado en cuanto a la semilla que debía utilizarse era tal, que fue quien finalmente los asesoró en tal sentido, tal como lo indicó, en la audiencia pública, IVÁN PATIÑO PATIÑO⁷⁸, representante legal de Palmas S.A.⁷⁹, condenado por estos hechos, quien manifestó que **DAZA PRETELT** era el encargado de manejar la parte logística y de ilustrar qué tipo de semilla se estaba utilizando en el proceso de siembra de palma y les prestó colaboración con ello.

Dicha afirmación concatena perfectamente con el hecho de que RAÚL EMILIO⁸⁰ dijo que URAPALMA le llevaba mucha ventaja a las demás empresas palmicultoras, porque fueron los pioneros, "*los que lideraron el proceso palmero en la zona de Urabá por orden de Vicente Castaño*", los que determinaron el tipo de semilla a sembrar y también la vendían.

⁷⁶ En declaración del 12 de abril de 2007, folios 122 del C. 6

⁷⁷ En declaración en audiencia pública del 19 de diciembre de 2012

⁷⁸ Declaración en audiencia pública del 22 de noviembre de 2012

⁷⁹ Cuya propiedad se estableció en la actuación que era de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Adolfo Paz" o "Don Berna".

⁸⁰ Declaración en audiencia pública del 3 de diciembre de 2012.

Es más, también ANTONIO NEL ZUÑIGA CABALLERO⁸¹, representante legal de PALMURA y socio de ésta y de URAPALMA desde su origen en 1999, aludió a que **JAVIER JOSÉ** dirigió un equipo, que fue el encargado de la adquisición de las tierras para el desarrollo del proyecto de la palma.

De otro lado, varios desplazados involucraron a **JAVIER JOSÉ** con paramilitares y como el causante de varios apoderamientos de predios y de desplazamientos, entre los declarantes están ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA⁸², quien manifestó que este acusado y alias Palillo, comandante paramilitar, fueron los responsables de invadirle la finca a la familia Rentería y cultivarla en palma; MIRIAM DE JESÚS NARVÁEZ HERNÁNDEZ⁸³ indicó que, como gerente de URAPALMA, en una reunión, en la que había presencia de paramilitares armados, le propuso a su *marido* venderles los terrenos -de él y de su suegro- pero éste no aceptó y le recalcó que no fueran a tocar ninguna de las fincas porque iban a regresar, sin embargo, invadió las tierras y las destruyeron completamente.

En el mismo sentido, ANDRÉS BABILONIA CUADRADO⁸⁴, quien también vendió sus predios bajo presiones, lo ubicó en la finca El Congo, junto con **TERESA CASTAÑO**, alias "Palillo" y un grupo de civiles armados, lugar al que asistió a efectos de que le pagaran las tierras. A su vez, MIGUEL ÁNGEL HOYOS RIVAS⁸⁵ indicó que lo conoció como el jefe de trabajo de URAPALMA, y que tiene vínculos con los paramilitares. Entretanto, LUIS ALBERTO RENTERÍA MOSQUERA⁸⁶ expuso que en el año 2000 empezaron a trabajar 26 hectáreas de monte de la finca "Rosa Gladis", que pertenece a su padre, empero, luego **JAVIER DAZA** y alias Palillo llamaron a su padre LUIS OVIDIO RENTERÍA, lo llevaron para otra finca y le dijeron que ya esas tierras eran de ellos y que *"el que cruzara a este lado y no fuera trabajador de las palmas era declarado objetivo militar"*, razón por la que no pudieron volver a cruzar para la finca, la cual finalmente fue adecuada para el vivero central de la empresa y, posteriormente, se la vendió a Agropalma.

⁸¹ Versión libre, folios 127 y ss del C. 14

⁸² Folios 274 del C. 11

⁸³ Folios 286 y ss del C. 11

⁸⁴ Folios 296 y ss del C. 11

⁸⁵ Folios 53 y ss del C. 12

⁸⁶ Folios 64 y ss del C. 12

Asimismo, este testigo señaló que su padre le reclamó a **DAZA PRETELT**, pero éste le indicó que si no estaba de acuerdo buscara un abogado, que él tenía los suyos.

Así las cosas, no obstante el declarante **HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ**⁸⁷, alias "Diomedes", quien ya fue condenado por estos hechos por haber reconocido, entre otros aspectos, que era comisionista de tierras, trató de exculparlo en este asunto, aludiendo a que el acusado **DAZA PRETELT** no tuvo ninguna participación ni provecho en la compra de las tierras, pues sólo se encargaba de la parte administrativa de **URAPALMA**⁸⁸, las pruebas demuestran lo contrario, pues, como viene de verse, su participación fue más allá de un simple administrador, ya que desplegó actos tendientes a desarrollar y favorecer el objetivo de la organización paramilitar, como por ejemplo, el efectivo desplazamiento de pobladores y la invasión de territorios colectivos para la siembra de palma africana, aspecto que finalmente demuestra su real concertación.

Del mismo modo, tampoco se trata de que la empresa **URAPALMA** simplemente colaboró con las fuerzas armadas para que los resguardaran de la inseguridad, como trató de hacerlo creer el procesado **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** en su indagatoria⁸⁹, sino que tanto los paramilitares como los miembros del Ejército Nacional que operaban en el sector, actuaban mancomunadamente para la obtención de los territorios y cuidado de sembradíos de palma, y para evitar el retorno de los reales propietarios o poseedores, quienes trataron de hacerlo en reiteradas ocasiones.

Es más, varias de las víctimas, como **EFREN ROMANA CUESTA**⁹⁰, **MARTA CECILIA VARGAS NAVAS**⁹¹, **JUAN IGNACIO VÉLEZ MONTIEL**⁹², **JULIO CESAR GONZALEZ MADERA**⁹³, **EUDOSIA MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ**⁹⁴, **MIGUEL ENRIQUE PAEZ PETRO**⁹⁵, **WALTER ATENCIO GARAY**⁹⁶, **ELISEO**

⁸⁷ Declaración en audiencia pública del 23 de noviembre de 2012

⁸⁸ Declaración en audiencia pública del 23 de noviembre de 2012

⁸⁹ Folios 271 y ss del C. 15

⁹⁰ Folios 212 y ss del C. 11

⁹¹ Folios 218 y ss del C. 11

⁹² Folios 223 y ss del C. 11

⁹³ Folios 227 y ss del C. 11

⁹⁴ Folios 247 y ss del C. 11

⁹⁵ Folios 250 y ss del C. 11

⁹⁶ Folios 264 y ss del C. 11

FERNANDO PEREZ MENDOZA⁹⁷ HIPÓLITA ISABEL DIAZ GONZALEZ⁹⁸, LUIS ROBERTO CASTRO LÓPEZ⁹⁹, CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ LEÓN¹⁰⁰, LUIS ALBERTO RENTERÍA MOSQUERA¹⁰¹, entre otros, manifestaron que miembros del Ejército Nacional y los paramilitares andaban “*revueltos*” o actuaban juntos, al punto de que algunos de ellos sólo los diferenciaban por los brazaletes que llevaban puestos.

Esa cooperatividad entre las dos fuerzas armadas también se deduce de los testimonios de varios pobladores desplazados, entre ellos, ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ RUEDA¹⁰², quien manifestó que miembros del Ejército le dijeron que quien fuera colaborador de la guerrilla o tuviera antigüedad en la región se fuera porque iba a haber una limpieza.

Por lo demás, este aspecto de la concurrencia de autodefensas-militares fue confirmado por el comandante paramilitar RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA¹⁰³.

De otro lado, debe precisarse que los hechos a los que aludieron los anteriores testigos, se enlazan con la empresa URAPALMA, y en consecuencia con JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA y SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ, no sólo porque los declarantes señalaron directamente a KATIA PATRICIA y a su gerente o representante legal, sino porque precisamente el comisionista, esto es, alias “Palillo”, fue el que HASBÚN MENDOZA relacionó, al igual que a GÓMEZ ÁLVAREZ, como los encargados directamente por VICENTE CASTAÑO GIL, propietario real de dicha empresa, obviamente a través de testaferros, para la compra de las tierras que se necesitaban para el desarrollo del proyecto palmero.

Aunado a lo anterior, el conocimiento y el ánimo de concertación de KATIA PATRICIA y su participación en los desplazamientos también se percibe de las actividades que ejerció directamente como representante legal de URAPALMA, tales como, solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-,

⁹⁷ Folios 274 y ss del C. 11

⁹⁸ Folios 10 y ss del C. 12

⁹⁹ Folios 38 y ss del C. 12

¹⁰⁰ Folios 45 del C. 12

¹⁰¹ Folios 64 y ss del C. 12

¹⁰² Folios 30 y ss del C. 12

¹⁰³ Declaraciones en audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012

mediante escrito del 11 de julio de 2006, en relación con las Resoluciones 702 y 703 del 22 de marzo de 2006¹⁰⁴, la confirmación de los derechos que supuestamente fueron adquiridos de buena fe sobre los predios que fueron segregados del predio total de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, esto es, luego de que fue aumentado exorbitantemente con la figura jurídica de la accesión, ya que, en su sentir, se trata de un acto administrativo cuya presunción de legalidad no había sido desvirtuada.

Estas afirmaciones, entonces, lejos están de demostrar el desconocimiento y ajenidad de **SÁNCHEZ MEJÍA** en este asunto y que su vinculación a esta actuación se debió solamente a la relación sentimental que tenía con **HERNÁN DE JESÚS**, como trataron de hacerlo creer los declarantes HASBÚN MENDOZA y MERLANO RODRÍGUEZ, ya que, por el contrario, prueban que tenía pleno conocimiento del origen paramilitar de la empresa y de los actos ilegales que se gestaban al interior de la misma, pues no puede dejarse de lado, en primer lugar, el hecho de que precisamente su compañero permanente **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ** fue una pieza clave en la creación de URAPALMA, como pasará a verse, y en segundo término, que su accionar en la misma siempre tendió a tratar de ocultar e insistir en defender, aún siendo evidente tal irregularidad, la artimaña jurídica que se entretejió para legalizar los predios.

Es tan clara su participación, que VÍCTOR ENRIQUE DÍAZ TAPIAS¹⁰⁵, hijo del occiso LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, propietario de la finca Santa Teotista, uno de los predios en los que se utilizó la accesión como modo de adquirir el dominio de manera ilegal de heredades colindantes, manifestó que reclamaron a la empresa URAPALMA las tierras de su padre, y hablaron *con la doctora KATIA SÁNCHEZ y con el doctor CARLOS MERLANO*, quienes les propusieron que fueran socios de la palma, a lo que no accedieron porque realmente lo que querían era que les compraran las tierras.

Posteriormente, los parientes de DIAZ ALMARIO les ofrecieron a estos empresarios algo más de 18 hectáreas, sin embargo estos últimos les propusieron darles *"diez hectáreas de tierra sembradas en palma, más otras*

¹⁰⁴ Dicha situación fue descrita en la Resolución 2672, del 6 de diciembre de 2006, expedida por el INCODER, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 702 del 22 de marzo de 2006.

¹⁰⁵ Folios 73 y ss del C. 12

diez, y nos ayudaban a sembrar ocho hectáreas más”, lo que tampoco aceptaron y, en cambio, como contrapropuesta, les pidieron \$4'000.000 para vendérselas “pero ellos nos pusieron una condición, que nosotros debíamos reconocer que se había dado una negociación entre mi papá y la empresa de URAPALMA”, condición que finalmente no aceptaron por tratarse de una falsedad.

En tales condiciones, no obstante VÍCTOR ENRIQUE al finalizar la declaración, adujo que **KATIA PATRICIA** no estuvo presente en la propuesta final, valga decir, acerca de la supuesta negociación entre LINO ANTONIO, quien ya se encontraba fallecido cuando se realizaron el cúmulo de negociaciones sobre su predio, y URAPALMA, el contexto general de las reuniones, la participación en las mismas del abogado CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, encargado directo de las artimañas ilegales, y la insistencia en lograr un acuerdo con los parientes de DÍAZ ALMARIO, evidencia, sin lugar a dudas, el conocimiento directo por parte de la acusada, de tal proposición ilegal, al punto que se encuentra en el expediente documentación relativa a que la acusada les hizo varias propuestas a los hijos del occiso, a fin de que los herederos reconocieran que entre su padre LINO ANTONIO y la empresa URAPALMA se efectuó una negociación del terreno Santa Teotista.

Ciertamente, a raíz de la exhumación realizada al cadáver de DÍAZ ALMARIO, el 8 de octubre de 2007, en el cementerio de Llano Rico (Chocó), a fin de realizar los respectivos estudios identificativos, los funcionarios de policía judicial que participaron en dicho acto también recaudaron los testimonios de MANUEL SERAFÍN AGUILAR DORIA¹⁰⁶ y LUIS VICENCIO DÍAZ OSPINA¹⁰⁷, yerno e hijo del occiso, respectivamente, quienes se refirieron a la fecha -en noviembre de 1995- y los pormenores que rodearon la muerte de LINO ANTONIO y, además, el último aludió a que su padre no vendió sus tierras ni otorgó poder para ello, sin embargo, los empresario de URAPALMA, JAVIER DAZA y KATIA PATRICIA, lo llamaron a negociar. Asimismo, este deponente aportó copia de dos actas de “PROYECTO DE ARREGLO”¹⁰⁸, el primero de los cuales está suscrito por los hijos de LINO ANTONIO y SÁNCHEZ MEJÍA y un “PODER ESPECIAL PARA TRANSIGIR”¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Folios 169 y ss del C. 15

¹⁰⁷ Folios 173 y ss del C. 15

¹⁰⁸ Folios 178 y ss del C. 15

¹⁰⁹ Folios 182 y 183 del C. 15

En tal sentido, son tan claras e indudables las maniobras fraudulentas en cuanto a la adquisición de varios terrenos, que la gerencia general del INCODER solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante oficios radicados el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2006, la revocatoria directa de las anotaciones realizadas en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, SIXTO PÉREZ DÍAZ y JEREMÍAS DURANGO GUIASO, correspondientes a la inscripción de las escrituras públicas 094, del 24 de mayo de 2000, y 735 y 740 del 8 de octubre de 2002¹¹⁰, mediante las cuales se declararon las accesiones, circunstancia que se explicitó en la Resolución 2672 de 2006¹¹¹, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 702, del 22 de marzo de 2006¹¹², por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Defensoría del Pueblo y dos particulares.

Así las cosas, si bien es cierto la responsabilidad penal es personalísima y la procesada tiene derecho a no denunciar a su compañero permanente, ello no conlleva a que una simple relación sentimental la obligase a ser parte de URAPALMA, empresa montada por VICENTE CASTAÑO, en un cargo de dirección y confianza, ni mucho menos a ejercer actos ilegales, con los cuales obviamente incurrió en las conductas contra la seguridad pública, la libertad individual y el medio ambiente que le endilgó la Fiscalía.

Respecto a este último delito, es menester resaltar que, no obstante URAPALMA contaba con permiso de CODECHOCÓ para la siembra de palma en 1.660 hectáreas, ello no significa que con su actuar, en primer lugar, no hubiesen incurrido en tal conducta delictiva, pues, como viene de verse, estos acusados, al igual que los que se relacionarán más adelante, invadieron territorios de propiedad colectiva para lo cual se valieron de las argucias que se han relacionado en esta sentencia, cuyo conocimiento también se evidencia con la insistencia tanto de **DAZA PRETELT** como de **SÁNCHEZ MEJÍA** al INCODER, en cuanto a la procedencia legal e individual de los terrenos, para procurar el deslinde de los mismos y; en segundo término, no hubiesen

¹¹⁰ Lo referente a la revocatoria directa, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, de las inscripciones relativas a las escrituras públicas 735 y 740 del 8 de octubre de 2002 se puede observar en las Resoluciones 6523 y 6525, del 26 de septiembre de 2007, folios 24 y ss del C. 77.

¹¹¹ Folios 129 y ss del C. 9

¹¹² Mediante la cual el INCODER ordenó iniciar el proceso de delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras organizadas en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó de los predios de propiedad privada de particulares, conforme a la Resolución 2809, del 22 de noviembre de 2000.

deteriorado en demasía el medio ambiente, tal como lo señaló el peritaje, máxime si se tiene en cuenta que en dicho permiso se le hicieron varias exigencias para la conservación del medio ambiente, las cuales no se cumplieron.

De otra parte, en cuanto a la participación de **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, se tiene que en la mayoría de las negociaciones de predios también participó esta procesada, quien era conocida en el sector como “doña Teresa”, “doña Tere”, “Teresita” o “Teresa Castaño”, precisamente por sus vínculos con los hermanos Castaño Gil -*situación que fue corroborada por RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, FREDY RENDÓN HERRERA, entre otros*-, quien era la encargada, según el mismo RAÚL EMILIO¹¹³, de pagar los terrenos a los vendedores por órdenes de VICENTE CASTAÑO GIL, pues la función que prestaba la acusada en la organización paramilitar era como “*contadora*” porque manejaba los recursos de los CASTAÑO GIL.

Por su parte, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ¹¹⁴, alias “Monoleche”, otro postulado de la Justicia Transicional en su condición de paramilitar y desmovilizado del Bloque Casa Castaño, cuya actividad principal era ser el encargado de la seguridad de los hermanos CASTAÑO GIL, expuso que VICENTE CASTAÑO encomendó a la “*señora Teresa*”, quien administraba las empresas ganaderas, darle el dinero a los individuos apodados “55” y “Palillo” para pagar las tierras que se compraran.

Asimismo, indicó que la procesada era la encargada de conseguir las semillas de plátano en un proyecto que también fue establecido por VICENTE CASTAÑO, acerca del cual HEBERT VELOZA GARCÍA¹¹⁵, alias “HH”, explicó que, más que un proyecto benefactor o de obras sociales¹¹⁶, con este tipo de corporaciones se trataba era de mantener a “*la gente calmada para poder seguir con el proyecto de la palma*” precisamente para que las personas tuvieran donde trabajar y tuvieran comida. Además, este paramilitar adujo que este proyecto, en parte, se realizó con dinero proveniente del Banco Agrario.

¹¹³ Declaración en audiencia pública del 3 de diciembre de 2012

¹¹⁴ En audiencia pública del 23 de julio de 2012

¹¹⁵ En diligencia ante la justicia transicional, del 14 de agosto de 2008

¹¹⁶ Como lo refirieron los paramilitares JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ y RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA respecto a proyectos como ASOPROBEBA

Otro paramilitar que se refirió a las actividades de **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ** en la organización al margen de la ley, fue RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA¹¹⁷, alias "Ricardo" o "Caremonda", quien manifestó que los encargados de las compras de las tierras por parte de Vicente Castaño, alias "El Profe", fueron "Palillo" o "Armando" y "Campeche" o "55", quienes le pasaban la relación de las compras a **SOR TERESA GOMEZ**, alias "Teresita", y ésta era la que pagaba las tierras con dinero, *"me imagino"*, de los negocios de los Castaño.

De la misma manera, este declarante manifestó que conoció a **SOR TERESA** la primera vez que fue a la finca Las Tangas, era *"como la administradora, la que llevaba las cuentas y la tenían encargada de llevar como los movimientos de ganados y esos gastos de las fincas"*.

Entretanto, FREDY RENDÓN HERRERA, alias "El Alemán", expuso que conoció a **SOR TERESA** aproximadamente desde 1996, quien fue cónyuge de un hermano de ellos que había muerto años atrás, pero que finalmente era conocida como hermana de los CASTAÑO GIL, y era la encargada de manejar una fundación que tuvo FIDEL CASTAÑO en Córdoba que se llamó FUNPAZCOR, cuando el proceso de desmovilización de los primeros grupos de autodefensas, FIDEL CASTAÑO regaló esas tierras a campesinos cercanos a las autodefensas, al EPL y a las FARC en esa época, **SOR TERESA** era la que lideraba el programa.

De otra parte, también como prueba directa en contra de esta enjuiciada, está el testimonio de PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS¹¹⁸ ex empleado de la empresa URAPALMA, quien dentro de sus funciones tuvo la de tramitar créditos de fomento para la plantación de palma, para lo cual manifestó que con la colaboración de *"doña Tere"* se constituyeron asociaciones de pequeños cultivadores *fictas o de papel* para hacerse a importantes incentivos.

En relación con las compras irregulares de tierras, varios declarantes que vendieron sus predios refirieron que, luego de la supuesta negociación, les pagaba una señora llamada "Doña Teresa", bien sea porque aparecía esporádicamente, como por ejemplo lo indicó GABRIEL ÁNGEL CARO

¹¹⁷ En audiencia pública del 5 de diciembre de 2012

¹¹⁸ Folios 41 y ss del C. 5

GARCÍA¹¹⁹, o porque debían dirigirse a una finca, custodiada por paramilitares armados, en la que les pagaban parte del precio ofrecido, como es el caso de PEDRO CORTÉZ FABRA¹²⁰, quien manifestó que luego de que fue desplazado en octubre de 1997, le informaron a su padre que las tierras las estaban comprando y que la única opción era vender. Por ello, su padre viajó a Bajirá, se contactó con “Palillo”, quien le confirmó dicha obligación, razón por la cual hubo de vender a \$150.000 la hectárea, dinero que le dieron en una finca ubicada en Barranquillita y cuando llegaron allí *“había una señora pagando que tenía mucha plata en costales”*. Posteriormente, indicó que “Teresa Castaño” citó a reunión a fin de negociar las tierras. Del mismo modo, JUAN BARTOLO PÉREZ BENITEZ¹²¹ y GUILLERMO ANTONIO AGUDELO¹²² expusieron que escucharon mencionar que “Teresa Castaño” compraba tierras, hecho que coincide con que era justamente la encargada de pagarlas.

En tal sentido, también se encuentra la declaración de MANUEL RAMOS HERNÁNDEZ¹²³, quien expuso que fue desplazado, junto con su familia y demás habitantes de la vereda, en 1996 por los paramilitares de su finca “La Tormenta”, de la vereda Caño Manso de la cuenca del río de Curvaradó, quienes los amenazaron y los bloquearon económicamente. Luego entró “TERESA CASTAÑO, hermana de VICENTE Y CARLOS CASTAÑO” con el padre LEONIDAS, parcelaron las tierras y los dejaron sin nada. Cuando intentó retornar recibió amenazas de muerte por parte de los paramilitares, pese a ello, logró regresar a su finca y *“trabajar en ella hace 2 años”*.

Igualmente, MARTHA MARGIT MARTÍNEZ GIRALDO¹²⁴, residente en Belén de Bajirá, aludió a que en 1997 salieron desplazados de la vereda Caño Manso, de Curvaradó, por amenazas de autodefensas, y al regresar nadie podía entrar sin el permiso de los paramilitares, quien lo hiciera era bajo su responsabilidad y más de uno murió por ello. Su tierra está en propiedad de una asociación que se llama ASOPROBEBA. Como propietarios de las tierras aparece una resolución del INCORA a nombre de HUGO FENEL BERNAL, quien se la vende a **SOR TERESA**, que es la representante de la asociación.

¹¹⁹ Folios 280 y ss del C. 5

¹²⁰ Folios 138 y ss del C. 6

¹²¹ Folios 155 y ss del C. 6

¹²² Folios 158 y ss del C. 6

¹²³ Folios 1 y ss del C. 12

¹²⁴ Folios 192 y ss del C. 11

También indicó que en el 2001 intentaron regresar a los predios, que eran de su padre, pero ya no les fue permitido porque encontraron las tierras ocupadas por paramilitares y por la asociación que se encuentra actualmente, predios que se encontraban a 10 kilómetros de un sembradío de palma perteneciente a Palmas S.A y URAPALMA. Al regresar a sus fundos encontraron terrenos llenos de palma, les tocó buscar partes húmedas para refugiarse, pues *"yo también estoy metida en un cambuche"* y ni siquiera pueden sembrar *"palcoger"* porque *"si se siembra se muere"*.

Acerca de los comisionistas de tierras, esta deponente manifestó que éstos reunían a la comunidad y les decían que vendieran las tierras porque, de lo contrario, de todas maneras las iban a perder y que *del "ahogado al menos el sombrero"* y que *"si no vendían ellos lo hacían las viudas o huerfanitos"*. Además, arguyó que pese a que se escuchó que había trabajo para el campesino y desarrollo para la región, lo que hubo fue menos trabajo y más pobreza, porque ellos no sabían nada de palma, *"solo cultivar nuestra alimentación"*.

Asimismo, aludió, respecto a los daños que se presentaron en el medio ambiente, que con el cultivo de palma africana se cambiaron los ríos de cauce, se tumbaron los bosques, al punto que los animales ya no se encuentran.

En este punto cabe precisar, que las atestaciones de esta testigo coinciden con el contrato de comodato, del 9 de agosto de 2003¹²⁵, realizado entre **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, como representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajira -ASOPROBEBA-, constituida el 28 de junio de 2001, como comodante; y **MANUEL VILORIA ROQUEME**, como comodatario. Contrato con base en el cual la comodante da en comodato 6 hectáreas -de 1.100 hectáreas-, adquiridas mediante escritura pública 949, del 14 de diciembre de 2002, mediante la cual **HUGO FENEL BERNAL MOLANO** vende a ASOPROBEBA.

En el mismo sentido, declaró **ANDRÉS BABILONIA CUADRADO**¹²⁶, quien indicó que fue desplazado en 1997, de la finca "Cielito", ubicada en Caño Claro, por presión de los paramilitares. Sin embargo, en el 2001, fue contactado en el

¹²⁵ Folios 251 y ss del C. 22

¹²⁶ Folios 296 y ss del C. 11

municipio de Bajirá por **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, alias "El Diablo", quien vive en dicha municipalidad, le manifestó que si no vendía le invadían la tierra, puesto que él no se podía comprometer a cuidar la tierra del que no vendiera, ya que todos estaban vendiendo. Para ello hacían reuniones, a una de las cuales fue y, este individuo, a quien señaló como integrante de las autodefensas, tenía la vocería. Además, les preguntaron por la ubicación y extensión de los predios y la documentación que tenían respecto a los mismos.

De la misma manera, indicó que en la reunión que tuvieron en la finca El Congo, a efectos de pagarles las tierras, se encontraba **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, "Teresa Castaño", alias "Palillo, a quien reconoció como jefe paramilitar, y un grupo de gente vestida de civil portando armas cortas.

Entretanto, **MANUEL RAMOS HERNANDEZ**, residente en Bajira en la finca La Tormenta, ubicada en la vereda Caño Manso, manifestó que en 1996, cuando residía allí con su familia, llegaron los paramilitares y les quitaron la entrada de mercado, los amenazaron y les dijeron que tenían que abandonar su negocio y las tierras, razón por la cual se fue con su familia para Bajirá, al igual que los demás habitantes de esa vereda, quienes tuvieron que abandonar las tierras. Luego, entró "*TERESA CASTAÑO, hermana de VICENTE Y CARLOS CASTAÑO*" con el padre **LEONIDAS**, parcelaron las tierras y los dejaron sin nada. Cuando intentó retornar recibió amenazas de muerte por parte de los paramilitares, pese a ello, logró regresar a su finca y trabajar en ella hace aproximadamente 2 años para el momento de la declaración.

Del mismo modo, **CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ LEÓN**¹²⁷, residente en Bajirá, quien vivió en Caño Manso, expresó que en 1997 se metieron los paramilitares y los mandaron a desocupar. Sus tierras -135 hectáreas- hacen parte de los territorios colectivos y las tienen los paramilitares porque hubo de negociarlas en el año 2000 por amenazas, ya que si no vendía, vendía la viuda, por tanto, le vendió a **SOR TERESA**.

En relación con los pormenores de la venta de los fundos, expresó que los comisionistas lo amenazaron, entre los cuales estaba "*René Palacios*", quien le dijo que debía vender *porque esa gente no admitía a nadie de por medio*, dinero

¹²⁷ Folios 45 y ss del C. 12

que fue a recibir a la finca El Congo, donde estaba "la señora Teresa" y los guarda espaldas.

En fin, en la actuación se hallan un cúmulo de declaraciones que asocian a la procesada con la estructura paramilitar, cuya función fue precisamente hacer parte de las negociaciones que se realizaron de los terrenos de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, además que algunos de los testigos la relacionaron con fundaciones de las cuales era propietario VICENTE CASTAÑO GIL, como ASOPROBEBA y FUNPAZCOR, aspecto que evidencia aún más la cercanía con la Casa Castaño, al punto que varios integrantes paramilitares, como viene de verse, la señalaron como la persona que manejaba parte del dinero y negocios importantes del líder paramilitar conocido como "El Profe", tanto así que el comandante FREDY RENDÓN HERRERA¹²⁸, alias "El Alemán", indicó que tuvo la oportunidad de conocer a **SOR TERESA**, a quien los Castaño le decían "La Negra", como su cuñada, muy allegada y que siempre trabajó con ellos en temas sociales¹²⁹.

Es más, este deponente manifestó que tuvo una conversación con CARLOS CASTAÑO GIL, en la que éste le dijo que cuando terminase el proceso de paz se desmovilizaría con el Bloque Élmer Cárdenas, al igual que su gente cercana, como "La Negrita Castaño", lo cual se hizo efectivo, según las mismas aserciones de este declarante y conforme al oficio 106, del 27 de enero de 2008, suscrito por el comandante del departamento de policía de Urabá. Estas circunstancias, sin lugar a dudas, prueban la pertenencia de la enjuiciada a la organización criminal de las autodefensas y, por supuesto, las actividades que como miembro, dentro del designio común, le correspondía ejecutar.

Acerca de las funciones de esta acusada también están las declaraciones de SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO¹³⁰, MARIO MANUEL CASTAÑO BRAVO¹³¹, JULIO CÉSAR ARRIETA CÁRDENAS¹³², BERNARDO DE JESÚS

¹²⁸ Folios 186 y ss del C. 15

¹²⁹ Temas sociales que obviamente tenían un propósito delictivo como se dijo con anterioridad

¹³⁰ Folios 162 y ss del C. 5

¹³¹ Folios 231 y ss del C. 5

¹³² Folios 256 y ss del C. 5

DURANGO OSORIO¹³³, GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA¹³⁴, LUIS ALBERTO RENTERÍA MOSQUERA¹³⁵, entre otros.

En tales condiciones, en este asunto se demostraron los delitos por los que se enjuició a esta procesada, máxime si se tiene en cuenta que el accionar de **SOR TERESA** contribuyó en gran medida -en calidad de coautora- al desplazamiento de la mayor parte de pobladores del sector, al punto de que varios de ellos trataron de retornar a sus predios, sin embargo, ello no fue posible no sólo porque la mayoría de terrenos estaba invadido por la siembra de palma, sino porque el accionar de la agrupación delincuencial estaba dirigido al impedirlo, como en el caso de BERNARDO DE JESÚS DURANGO OSORIO¹³⁶, quien indicó que cuando regresó a su finca estaba ocupada por la compañía que era de las AUC, fue a reclamarla y el administrador, que le decían “*Alambrito*”, le dijo que era mejor que recibiera lo que le dieran porque esas tierras “*las iban a coger ellos en globo*” y lo remitió a la “señora Teresa”.

Otro de los casos, es el ya mencionado de GABRIEL ÁNGEL CARO GARCÍA¹³⁷, quien explicó que residió en la cuenca de Curvaradó, vereda Villa Luz, desde 1980, empero, luego de su desplazamiento, encontró sus predios cultivados con palma de aceite, no obstante no había llegado a ningún acuerdo con el sujeto apodado “Palillo”, quien lo contactó para que le vendiera sus terrenos. Posteriormente, uno de los comandantes de las autodefensas llamado Lázaro, le ordenó evacuar la región y le indicó que si permanecía allí sería catalogado como auxiliador de la guerrilla y, por tanto, debía atenerse a las consecuencias, razón por la cual, no obstante continuó en Bajirá pendiente de sus tierras, los paramilitares le impidieron el acceso a ellas siendo amenazado de muerte por dicho comandante paramilitar.

Estos casos evidencian tan solo unos de los innumerables obstáculos que los propietarios o poseedores tuvieron para acceder a sus predios, lo cual muchos de ellos nunca lograron -*de no ser por las zonas humanitarias en las que algunos se resguardaron*- pues, como puede verse, la mayoría de ellos

¹³³ Folios 268 y ss del C. 5

¹³⁴ Folios 280 y ss del C. 5

¹³⁵ Folios 64 y ss del C. 12

¹³⁶ Folios 268 y ss del C. 5

¹³⁷ Folios 280 y ss del C. 5

vendieron obligados sus fundos¹³⁸ o hubieron de abandonar los mismos por la misma zozobra que les infundieron los paramilitares.

En relación con las zonas humanitarias, debe resaltarse la labor de ENRIQUE MANUEL PETRO HERNÁNDEZ¹³⁹, quien indicó que de sus 150 hectáreas tan sólo le dejaron 20 sin cultivar palma, pese a que no vendió, y que posteriormente empresarios de URAPALMA, entre ellos "Teresa Castaño", trataron de negociar con él, empero tampoco cumplieron el contrato. Asimismo, indicó que, no obstante los continuos hostigamientos, entró a trabajar a sus tierras, y cuando varios desplazados iniciaron procesos de retorno, prestó 5 hectáreas de sus predios para crear una de las zonas humanitarias que se estableció en Curvaradó, en la cual se resguardaron un sinnúmero de campesinos para poder resistir, ante la evidente invasión de las empresas palmicultoras de los terrenos, el asedio a los pobladores, aspecto que evidencia con mayor claridad la pretensión de los últimos de regresar a sus fundos y el accionar delincencial de los empresarios y demás procesados, al punto que dichos campesinos tuvieron que recurrir a este tipo de medidas provisionales precisamente con base en la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 15 de marzo de 2005.

Con todo, deberá absolverse a **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ** por el delito de Concierto para delinquir, en virtud del principio de cosa juzgada, previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, en razón de que en la actuación se demostró que ya fue condenada por haber pertenecido a las autodefensas, según sentencia de primera instancia del 17 de enero de 2011, proferida por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca¹⁴⁰, la cual fue confirmada, el 21 de junio de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca¹⁴¹, decisión que quedó ejecutoriada el 21 de octubre de 2011, según constancia secretarial de dicha corporación¹⁴².

En efecto, en los hechos que sirvieron como base de esas decisiones se aludió a que la víctima en ese asunto, junto con otros individuos, "*gestionaban constantemente las labores sobre la tierra que se les había donado en los años*

¹³⁸ si en gracia de discusión se acepta que se trata de una compraventa y que realmente les pagaron, pues en la mayoría de casos no lo hicieron

¹³⁹ Folios 94 y ss del C. 6

¹⁴⁰ Folios 41 y ss del C. 70

¹⁴¹ Folios 10 y ss del C. 70

¹⁴² Folios 122 y ss del C. 70

de 1990 por la llamada Fundación para la paz de Córdoba FUNPAZCOR, creada por los hermanos CARLOS y VICENTE CASTAÑO GIL, se les venía amenazando desde el mes de noviembre de 2006....". Asimismo, se anotó como fundamento de la condena que el homicidio "fue realizado por los miembros de las Autodefensas de Córdoba, pertenecientes a la casa CASTAÑO o frente desmovilizado ELMER CÁRDENAS, con el interés de despojar a los parceleros de las tierras que les estaban siendo devueltas... se estableció que ésta trabajaba para la familia CASTAÑO, intimidó a los campesinos para que devolvieran las tierras que les fueron donadas a través de FUNPAZCOR, entidad que representaba, amenazó tanto a la hoy occisa y a MANUEL ARGEL HERRERA ya que éstos trabajaban para que las tierras fueran devueltas a los campesinos..."

Así las cosas, como ésta procesada ya fue condenada a cuarenta (40) años de prisión y multa de dos mil setecientos diez (2.710) salarios, por varios delitos, entre ellos el de **concierto para delinquir agravado**, el cual está relacionado con su pertenencia a la estructura paramilitar, en el mismo interregno temporal al investigado en este asunto, se le absolverá, se reitera, por el delito contra la seguridad pública.

En lo que se refiere a **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ**, para esta funcionaria también es innegable su responsabilidad en los delitos por los cuales la Fiscalía lo acusó, ya que existen pruebas directas acerca de su vinculación a la organización paramilitar, su participación en la creación de URAPALMA y consecuente intervención en los actos que se desarrollaron para el establecimiento de la misma, como desplazamientos, falsedades, invasión de territorios colectivos, entre otros.

Pues bien, acerca de la participación de **GÓMEZ HERNÁNDEZ** y de su compañera permanente en URAPALMA y en general en el proyecto de palma, en principio **KATIA PATRICIA** manifestó en la indagatoria¹⁴³, que su intervención en el proyecto palmicultor -tanto en URAPALMA como en la Extractora de Bajirá- se debió a que en 1999, el ya mencionado LUIS RIASCOS, conocido de la familia de su compañero, tenía tradición palmera en el Magdalena y le propuso a **GÓMEZ HERNÁNDEZ** "la vinculación de nosotros como socios", por lo que efectivamente se creó la empresa URAPALMA en

¹⁴³ Folios 1 y ss del C. 28

1999, de la cual fungió como accionista inicialmente con el 3.75% y posteriormente pasó al 4%.

No obstante lo anterior, la participación de estos acusados, especialmente de **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS**, en el proyecto de palma africana, va más allá de una simple propuesta esporádica que le hizo otro empresario, tal como se dilucidará con los testimonios de cabecillas paramilitares que lo relacionaron como un integrante más de la organización paramilitar y como uno de los promotores del plan palmífero en la región.

En efecto, según el comandante RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA¹⁴⁴, quien siempre lo trató como "*Hernancito Gómez*", éste tuvo gran injerencia en el proyecto por su amistad con los empresarios palmeros, aunado a la rentabilidad del cultivo de la palma, ya que para la época de los hechos el valor del barril de petróleo estaba muy alto, lo que influyó en la creación del proyecto debido a que se trataba de un biocombustible. Por ello, "*Hernancito Gómez*" fue una de las personas que intervino en la creación de URAPALMA, para lo cual participó en reuniones con VICENTE CASTAÑO GIL, junto con **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, LUIS RIASCOS e ITALO GIOVANNY CIANCI.

Así las cosas, si bien puede que este procesado no aparezca en las actas de constitución de la empresa, el mismo testigo adujo que el acusado **GÓMEZ HERNÁNDEZ** era socio de URAPALMA, "*si no en papeles en la realidad sí*", y era un miembro de las autodefensas, "*muy amigo*".

En tales condiciones, en el proceso se demostró la real participación del justiciable en el engranaje criminal y, no obstante no hay víctimas que lo señalen directamente como autor de desplazamientos o empresario generador de los mismos, su asocio con los demás procesados para delinquir no se desvirtúa con el solo hecho de que no ejerciera amenazas sobre los pobladores, no empuñara un arma o no participara directamente en los hostigamientos o en las compras ilegales o despojos de tierras.

Ciertamente, la estructuración del concierto para delinquir exige el acuerdo de voluntades, un propósito de comisión plural de delitos indeterminados y una vocación de permanencia en el tiempo; por tanto, los concertados incurren en

¹⁴⁴ Declaración de audiencia pública del 3 de diciembre de 2012.

dicha conducta, independientemente de las funciones o labores que hayan ejercido al interior de la organización criminal, que en este caso son las autodefensas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de septiembre de 2013, con ponencia de la doctora María del Rosario González Muñoz, indicó:

"En cuanto a la comisión del referido comportamiento es suficiente acreditar que la persona pertenece o formó parte de la empresa criminal, sin importar si su incorporación se produjo al ser creada la organización o simplemente adhirió a sus propósitos con posterioridad, y tampoco interesan las labores que adelantó en punto de cumplir los cometidos delictivos acordados".

En tal sentido, el mismo HASBÚN MENDOZA aludió a que **GÓMEZ HERNÁNDEZ** era un miembro de la organización, precisamente porque no todos los integrantes de las autodefensas *"voleaban bala, había unos políticos, unos asesores, como en toda organización, era un miembro del ala política de la organización"*.

Asimismo, como prueba que corrobora su participación en la estructura paramilitar y en el establecimiento del proyecto de la palma africana, está también la declaración del comandante paramilitar FREDY RENDÓN HERRERA, alias "El Alemán", quien manifestó que conoció a **HERNÁN INIGO DE JESÚS** por ser asesor de CARLOS CASTAÑO y ser amigo de éste y de VICENTE CASTAÑO, y que también tenía relación con el plan palmífero:

"... en una oportunidad me invitó el señor CARLOS CASTAÑO a una comida y en esa comida estaba el señor HERNÁN GÓMEZ y la esposa, su señorita, y hablaron del tema de la palma... era una comida en un cumpleaños de CARLOS CASTAÑO, en uno de sus campamentos, en la zona límite entre Antioquia y Córdoba, en la zona del 21 y allá estaba, entre otras personas que habían, estaba el señor Hernancito y su esposa Katia... fue antes del 2000"¹⁴⁵.

Además, este testigo no sólo lo vinculó como socio de URAPALMA y empresario, al igual que a su cónyuge o compañera permanente, sino que se refirió a este acusado como un líder más de la organización, al punto que tenía alto grado de influencia en las decisiones que tomaba uno de las cabecillas máximos de la Casa Castaño, como lo era CARLOS CASTAÑO GIL y, en su sentir, debió desmovilizarse y postularse a la Ley de Justicia Transicional, a fin de aportar mayores detalles acerca del histórico devenir de las autodefensas:

¹⁴⁵ En audiencia pública del 6 de diciembre de 2012

"... en una reunión o en una comida de un cumpleaños del señor CARLOS CASTAÑO yo me entero que él y su esposa son socios de la palma... yo podría manifestar que el señor Hernancito Gómez debiera estar en nuestro proceso como cabeza del mismo para que contextualizara un poco sobre la historia del movimiento de autodefensas en Colombia, entendido esto, por la responsabilidad que pudiese acaer (SIC) sobre él por línea de mando, porque yo no solamente lo veía pegado a la computadora en las oficinas de CARLOS, sino que le hablaba a su oído, y muchas decisiones de CARLOS lo escuchó a él, y que además estuvo delegado a reuniones muy importantes por el señor VICENTE CASTAÑO tanto a Europa como en América con altas personalidades para tratar temas concernientes a las autodefensas, sino que para operaciones financieras también fue delegado él, en compañía de otras personas, que seguramente habrán mencionado ya en los procesos de justicia y paz las personas que conocen en detalle eso, yo no las conozco en detalle, pero por ejemplo cuando se reunieron con los empresarios del Valle del Cauca para llegar el grupo de autodefensas al Valle del Cauca, Hernancito Gómez estuvo en esa comisión con otro señor que se llamaba CARLOS SPATH, entre otros..."¹⁴⁶.

Así las cosas, no se trata de un simple interventor o asesor de paz, como lo quiso hacer ver su defensa y el mismo acusado, pues son varios los líderes paramilitares que coinciden en su relación con los hermanos CASTAÑO GIL, sus vínculos con la organización paramilitar y su intervención en la empresa URAPALMA, aspecto que finalmente se corrobora con la participación accionaria de su compañera permanente en la misma, que si bien en la documentación de constitución aparece en un aproximado del 4%, lo cierto es que tanto su participación en la creación de la empresa de marras, su grado de confianza y proximidad con la Casa Castaño y paramilitares de alto grado de jerarquía, como lo son RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA y FREDY RENDÓN HERRERA, al punto de que se refieren a él como "*Hernancito*"; y el cargo de confianza que desempeñaba su compañera **SÁNCHEZ MEJÍA** en URAPALMA, desdican su ajenidad al proyecto de la palma y, por el contrario, demuestran su gran aporte en la empresa criminal y en los hechos delictivos que desarrollaron para la instalación de los sembradíos de palma aceitera, como por ejemplo, utilizar fictamente la figura de la accesión para la adquisición, titulación y, por ende, la legalización de un sinnúmero de terrenos.

En relación con este aspecto, HASBÚN MENDOZA aceptó que se concertaron con CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ para arreglar el problema que tenían con los terrenos, razón por la cual utilizaron mecanismos *no santos*, como el de la accesión, acerca del cual "*todos sabíamos que era un fraude*,

¹⁴⁶ En audiencia pública del 5 de diciembre de 2012

todo el mundo sabía que era un fraude, todo el mundo sabía que era ilegal y todos estuvimos de acuerdo en utilizarla”.

En tales condiciones, si bien puede ser cierta la participación del enjuiciado en procesos de paz, tal como lo refirieron varios declarantes, su comportamiento no se circunscribió solamente a ello sino a favorecer el objetivo propuesto por las autodefensas, concretamente por JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL, referente al establecimiento del proyecto de palma en Belén de Bajirá, respecto a lo cual HEBERT VELOZA GARCÍA¹⁴⁷, alias “HH”, “Carepollo” o “El Mono Veloza”, desmovilizado de las AUC y postulado a la Ley de Justicia Transicional como comandante del Bloque Bananero, manifestó que la instalación de cultivos de palma en el Urabá chocoano fue iniciado, establecido y liderado por VICENTE CASTAÑO.

A partir de esa proyección de la palma, es que, como viene de verse, se reunieron varios sujetos, entre ellos **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS**, obviamente para establecer aspectos referentes a dicho designio, situación que fue mencionada por varios testigos como HASBÚN MENDOZA y el mismo VELOZA GARCÍA, último que se refirió a este justiciable y a CARLOS SPATH, como emisarios de VICENTE CASTAÑO en las negociaciones de las autodefensas con algunos empresarios azucareros del Valle del Cauca, acerca de lo cual le rendían informes¹⁴⁸.

Tampoco se trata de un simple padrinazgo del jefe paramilitar VICENTE CASTAÑO, como aludió el defensor de este procesado, sino de un verdadero acuerdo de voluntades con el mismo, para el desarrollo del proyecto palmicultor, tanto así que el coacusado JESUS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ¹⁴⁹, alias “Monoleche”, quien aceptó ser militante de la casa Castaño desde 1988 y se autodenominó como *hombre de confianza* de CARLOS y VICENTE CASTAÑO GIL, al punto de que manejaba el tema de su seguridad, señaló a **GÓMEZ HERNÁNDEZ** como uno de los propulsores del proyecto palmicultor, y no sólo como socio capitalista o accionista minoritario, sino como uno de los determinadores, junto con CASTAÑO GIL, del proyecto palmero.

¹⁴⁷ En declaración ante Justicia Transicional del 14 de agosto de 2008

¹⁴⁸ C.d., sesión del 28 de agosto de 2008

¹⁴⁹ En audiencia pública del 23 de julio de 2012

Ciertamente, este deponente manifestó que en una ocasión, aproximadamente en los años 1998 o 1999, en San Pedro de Urabá, cuando se dirigía desde Santa Catalina hacia la finca Las Tangas, por una carretera privada que hizo VICENTE CASTAÑO, a la altura de un campamento de CARLOS CASTAÑO, se encontró, entre otros sujetos, a ITALO GIOVANNI CIANCI, a quien se refirió como narcotraficante de Santa Marta; a su suegro, a RAMON PUPO FRAGOZO, funcionario de FUNPAZCOR; y a **HERNÁN GÓMEZ**, último que le preguntó por VICENTE CASTAÑO, pues lo necesitaban *"urgente porque hay unas personas que quieren comprar tierras en Bajirá para sembrar palma, es un proyecto muy bonito, son personas de Santa Marta, el señor Italo tiene empresas de palma en Santa Marta y sé que este proyecto le va a sonar a VICENTE porque a VICENTE le gustan estos proyectos..."*.

Por ello, se dirigió a donde VICENTE CASTAÑO, le comentó acerca de la propuesta de **HERNÁN GÓMEZ**, razón por la cual aquel lo ubica y se hace una reunión con ITALO GIOVANNI CIANCI, quien se comprometió a aportar dinero para empezar a comprar las tierras en Bajirá para sembrar la palma, que consistió en \$600'000.000, que el declarante recibió personalmente.

Asimismo, indicó que luego de que VICENTE CASTAÑO se reunió con ellos, organizó una visita a la región de Belén de Bajirá, pasaron por el pueblo, al cual se refirió como *"pueblo fantasma"*, porque no tenía habitantes, y posteriormente VICENTE CASTAÑO observó las tierras que iba a comenzar a comprar para sembrar la palma, al otro lado del Riosucio, y aproximadamente ocho meses después, cuando las Autodefensas habían combatido y retirado a la guerrilla, CASTAÑO GIL dispuso a alias "55" o "Campeche", "Palillo" y "Napo", pertenecientes a la organización paramilitar, para que compraran esas tierras.

Del mismo modo, indicó que, luego de la adquisición de 1.000 hectáreas de tierra, se creó la empresa URAPALMA. Adujo que **HERNÁN GÓMEZ**, junto con su esposa **KATIA PATRICIA**, eran unos de los socios para conformar la empresa.

Adicionalmente, para el cumplimiento del objetivo trazado por las empresas palmicultoras, se establecieron la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, representada legalmente por **MARIO LEÓN VILLA PACHECO** (quien reemplazó en el cargo a JAVIER MORALES ESTRADA); la



Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y zonas Aledañas, cuyo representante legal era **ORLANDO MORENO MORA**; la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite - ACOPALMA-, representada por **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**; y la Asociación Regional de Pequeños Cultivadores de Palma Africana, que tiene como representante a **LUIS ALBERTO FLÓREZ PÉREZ**. Obviamente, estas asociaciones también fueron utilizadas como estrategia, para poner a su nombre los predios que ya hubiesen legalizado, y para cumplir requisitos que estaban siendo exigidos por FINAGRO y los establecimientos bancarios, aspecto que se deduce, entre otras pruebas, del escrito de 24 de julio de 2002, dirigido a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma, firmado por el entonces representante legal de URAPALMA S.A., **JAIRO ALONSO BRUGÉS**¹⁵⁰:

"De acuerdo con las condiciones especiales con la cual fue aprobado el crédito por el Banco Agrario - Línea FINAGRO, programa especial de fomento y desarrollo agropecuario y según el convenio de alianza estratégica entre URAPALMA S.A. y la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CULTIVADORES DE PALMA EN EL URABÁ, le comunicamos que hemos abonado a su cuenta la suma de \$249.168.032 (doscientos cuarenta y nueve millones ciento sesenta y ocho mil treinta y dos pesos m. cte.) correspondiente a la proporción de incentivo de la capitalización rural que les corresponde..."

En relación con este aspecto, **LUIS ALBERTO FLÓREZ PÉREZ**¹⁵¹, quien para el momento de su declaración trabajaba en URAPALMA, reconoció que era el representante legal de la Asociación Regional de Pequeños Cultivadores de Palma Africana, la cual fue constituida el 17 de septiembre de 2001¹⁵², por disposición del gerente **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, con quien se reunieron en varias ocasiones, y se les explicó que su objetivo era prestarle servicios a los campesinos y trabajadores de la empresa, pues a cada uno de los asociados se les iba a dar 5 hectáreas de tierra cultivada para que cada uno la trabajara, entre otros beneficios, lo cual hasta el momento no se ha hecho efectivo.

Igualmente, expresó que la asociación no tramitó los créditos, sino que lo hizo directamente URAPALMA, a través de la misma; que no obstante **JAVIER DAZA** le entregó una solicitud bancaria, en la cual **FLÓREZ PÉREZ** decía que

¹⁵⁰ Folio 17 del C. 16

¹⁵¹ Folios 119 y ss del C. 12

¹⁵² Folios 125 y ss del C. 12

como representante legal de la asociación aprobaba la solicitud del préstamo, nunca le entregaron el dinero, pues fue reclamado por el gerente **DAZA PRETELT**; y que en alguna ocasión el gerente del banco le preguntó que si tenía alguna propiedad o era socio de URAPALMA, y al responderle de manera negativa, señalándole que era un simple trabajador de la empresa, él mismo se sorprendió y le indicó que él esperaba que *"yo fuera otra persona, una persona adinerada"*.

Aunado a ello, aludió a que posteriormente se conformó la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, cuyo representante legal es **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**.

Estas atestaciones, entonces, hacen colegir no sólo la participación directa de **JAVIER JOSÉ** en la creación de las asociaciones, sino la verdadera intención en la implementación de las mismas, esto es, para alcanzar la financiación de las actividades de producción y comercialización por parte del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario -FINAGRO-, cuyo intermediario financiero es el Banco Agrario de Colombia, y adicionalmente obtener beneficios económicos, tales como los Incentivos de Capitalización Rural -ICR-, para lo cual, por supuesto, debían cumplir con los requerimientos establecidos tanto por el fondo como por la entidad bancaria de marras, circunstancias que ponen nuevamente al descubierto los intereses económicos que a toda costa quisieron alcanzar los empresarios pertenecientes a URAPALMA, PALMAS DEL CURVARADÓ y PALMADÓ, que alejan cualquier propósito altruista con sus trabajadores, quienes, en su mayoría, tan solo fueron utilizados con base en engaños.

Al respecto, se encuentran inicialmente las declaraciones de HENRY GIRÓN PINO¹⁵³, PEDRO PABLO CAUSIL SALAS¹⁵⁴, PEDRO ANTONIO CARDONA¹⁵⁵, MANUEL ESTEBAN MONTALVO VILORIA¹⁵⁶, RAMÓN GONZÁLEZ LOPERA¹⁵⁷, YENIS MARÍA MIRANDA RIVERA¹⁵⁸, WILSON MANUEL NIETO REBOLLEDO¹⁵⁹, YONIS JAVIER DORIA LÓPEZ¹⁶⁰, JUAN FRANCISCO

¹⁵³ Folios 128 y ss del C. 12

¹⁵⁴ Folios 131 y ss del C. 12

¹⁵⁵ Folios 135 y ss del C. 12

¹⁵⁶ Folios 140 y ss del C. 12

¹⁵⁷ Folios 143 y ss del C. 12

¹⁵⁸ Folios 147 y ss del C. 12

¹⁵⁹ Folios 156 y ss del C. 12

ESPITIA LUGO¹⁶¹, EVER BARRIOS PÉREZ¹⁶², entre otros, empleados de URAPALMA e integrantes, unos de la Asociación Regional de Pequeños Cultivadores de Palma Africana y, otros, de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, quienes coincidieron en afirmar que, no obstante el acusado **DAZA PRETELT**, uno de los impulsores de las constituciones de las asociaciones, les ofreció varios beneficios, tales como, hectáreas sembradas con palma, porcentajes de descuento o de ganancias, vivienda, préstamos, estudio para sus hijos, etc., los mismos nunca se materializaron.

Es más, algunos de ellos se refirieron a varios pormenores que para la suscrita resultan aún más irregulares y que, por supuesto, develan los intereses mezquinos y, por ende, la mala fe de los acusados **JAVIER JOSÉ** y **KATIA PATRICIA**, como el hecho de que pusieran a los supuestos asociados a llenar solicitudes de crédito incompletas, lógicamente para ellos completarlas con lo que les interesaba y mantener con falsas expectativas a los empleados, pues recuérdese que a varios de ellos también les prometieron préstamos de \$ 3'000.000: *"... lo que si me consta es que a todos los socios nos dieron un formato de solicitud de crédito del banco agrario, nos lo entregó OMAIRA CARDONA y nos dijo que llenáramos los requisitos y buscamos codeudor, porque era para tramitar crédito por tres millones cada uno para mejorar viviendas, solo que la parte del monto del crédito no la llenábamos nosotros, del resto diligenciamos todo y esos formatos se entregaron a URAPALMA ya firmados y luego nos dijeron que el préstamo no lo habían hecho..."*¹⁶³.

Estas aseveraciones fueron confirmadas por EVER BARRIOS PÉREZ, quien también aludió, a que: *"... al ver que ellos nos retiran de la empresa, decidimos pasar la carta de renuncia como miembro de la asociación, la empresa se nos niega a recibirnos la carta de renuncia a la asociación, y nos llama a un proceso de negociación y conciliación con la empresa lo cual en todo el tiempo nos ha tenido engañados, utilizándonos para el bien de la empresa y no cumplirnos a nosotros como socios, en los deberes estipulados en los artículos de los estatutos de la asociación, violando todos los derechos que nos*

¹⁶⁰ Folios 159 y ss del C. 12

¹⁶¹ Folios 162 y ss del C. 12

¹⁶² Folios 165 y ss del C. 12

¹⁶³ Declaración de Yenís María Miranda Rivera, folios 147 y ss del C. 12

corresponden... Adicionalmente la empresa URAPALMA aún sigue utilizando la asociación para sus beneficios y nosotros los miembros no recibimos nada...".

Lo anterior, por supuesto, también pone al descubierto, en primer término, la condición de meras fachada de las asociaciones, valga reiterar, simplemente para la obtención fraudulenta de créditos y demás beneficios bancarios y, en segundo lugar, la preponderancia de los intereses de los empresarios, quienes se valieron de supuestas alianzas estratégicas, que finalmente tan sólo los favorecían a ellos, precisamente porque, se reitera, dichas figuras se utilizaron con el fin de darle visos de legalidad a actuaciones que no lo eran, como por ejemplo, para comprar tierras y luego fraccionarlas y posteriormente realizar diversos tipos de contratos.

Acerca del propósito de la obtención de créditos, el mismo ANTONIO NEL ZUÑIGA CABALLERO¹⁶⁴, socio de URAPALMA, no obstante hizo ajena a esta empresa a la manipulación de las accesiones y a la creación de las asociaciones, aceptó que la asociación de pequeños cultivadores fue creada para cumplir los requisitos que exigía FINAGRO para aplicar al 40% del incentivo de capitalización rural -ICR- y para acceder a los créditos del Banco Agrario.

Asimismo, respecto al objetivo de la creación de las asociaciones, el abogado CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ¹⁶⁵ manifestó que la tierras fueron vendidas a la asociación de forma simbólica o simulada, pues no querían que la empresa URAPALMA apareciera con *"ese pocotón de tierras"*, pretendían darle visos de legalidad. Además, indicó que las tierras se pusieron a nombre de las asociaciones porque FINAGRO exigía que el 20% de la tierra estuviera en manos de asociaciones, es decir, que para hacer el proyecto palmero se necesitaba que el 80% de tierras estuviera en manos de los capitalistas y el 20% en manos de las asociaciones, por ello decidieron poner todas las tierras en manos de las asociaciones para no estarle haciendo ventas, *"la asociación era como un banco de tierras por decirlo así"*.

De otra parte, cabe precisar que varios de los trabajadores de URAPALMA, como YENIS MARÍA MIRANDA RIVERA y EVER BARRIOS PÉREZ, también

¹⁶⁴ Folios 127 y ss del C. 14

¹⁶⁵ En audiencia pública del 19 de diciembre de 2012

señalaron a **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** como participante activa en las reuniones, puesto que también los invitó y animó a asociarse, obviamente, como viene de verse, cautivándolos con beneficios que finalmente nunca se concretaron porque simplemente era la manera de que firmaran la documentación para la constitución y demás papeles necesarios para la consecución de créditos bancarios.

Igualmente, se reveló con estas declaraciones los actos de desplazamiento en los que incurrieron estos procesados, puesto que si bien es cierto varios de los empleados de URAPALMA coincidieron en afirmar que las tierras donde se cultivó la palma se encontraban abandonadas por los campesinos debido a la violencia y al conflicto armado que se presentó anteriormente, la declarante **MIRANDA RIVERA** expuso que a *"un señor PETRO, si le sembraron palma, él decía que por favor no le sembraran palma, que no le cortaran la madera y el señor JAVIER DAZA, decía que la orden era sembrar esas tierras y el solo mandaba que las sembraran, aún estando ese señor PETRO ahí mostrando los papeles y diciendo que él era el dueño"*.

Acerca de este tópico, **MARIO DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ**¹⁶⁶, quien inicialmente fungió como contratista de URAPALMA y luego se vinculó como empleado a la misma, dijo que conoció el caso *"del señor PETRO, quien decía que no le tumbaran la montaña, y el señor JAVIER DAZA PRETELT, y BORIS PITALUA, trabajador de la empresa URAPALMA, mandaban incluso a sacar al señor PETRO de la finca, esa finca hoy por hoy, se encuentra sembrada de palma y no se la han devuelto al señor..."*.

Otro de los casos fue el de **SACRAMENTO MOSQUERA**, respecto al cual **ELIÉCER MANUEL CASTILLO GONZÁLEZ**¹⁶⁷, quien se desempeñaba como cargador de madera al servicio de URAPALMA y también perteneció a una de las asociaciones, expuso que aquél iba a las oficinas de URAPALMA insistentemente porque no le pagaron la totalidad de sus predios, sin embargo, **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** le dijo *"que dejara de chimbiar –sic- tanto, que él se iba a mamar era dos tiros"*. Además, este testigo adujo que varias personas se acercaban con sus títulos y le reclamaban sus tierras a **DAZA PRETELT** y a un individuo apellidado **ZUÑIGA**, pero como ya habían algunas

¹⁶⁶ Folios 179 y ss del C. 12

¹⁶⁷ Folios 221 y ss del C. 12

tierras sembradas con palma, las vendían; y otros nunca las vendieron pero aún así sus predios fueron cultivados con palma africana.

En tales condiciones, tanto la concertación para delinquir como los desplazamientos son un hecho cierto que no admite dudas ni discusión, principalmente si se tiene en cuenta que se trata de declarantes diferentes a los desplazados, y hasta con vínculos laborales con la empresa URAPALMA y, por tanto, ajenos a cualquier intriga o manipulación, ni vinculados a ninguna ONG de las que finalmente se convirtieron en la excusa de muchos defensores y procesados para tratar de hacer brumosa su responsabilidad.

El hecho de que varias víctimas del desplazamiento hubiesen tenido que acudir a cualquier tipo de apoyo o colaboración para poder retornar a sus tierras, como se percibe del caso de PETRO HERNÁNDEZ, el cual coincide precisamente con el señalado por la testigo YENIS MARÍA MIRANDA RIVERA, en el sentido de que, a raíz de la imposibilidad de regresar a sus predios por las talanqueras y obstrucciones que le pusieron los empresarios, concretamente de URAPALMA, hubo de solicitar la protección de una ONG para cercar parte de su territorio y tratar de establecerse allí junto con otras familias que tampoco han podido retornar a sus fundos debido a las presiones, hostigamientos, amenazas¹⁶⁸ y a la invasión de las empresas palmicultoras, refrenda la existencia del delito contra su autonomía personal.

Por lo demás, se vislumbra de las aseveraciones de algunos empleados de URAPALMA, entre ellos ISMAEL DE JESÚS ARROYO MEDINA¹⁶⁹, la participación directa de paramilitares en dicha empresa, puesto que afirmó que alias EL GAGO, apodo perteneciente a JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, según se determinó en la actuación debido a la inspección judicial practicada en las oficinas de URAPALMA y a otras pruebas, era paramilitar, al punto que lo observó inicialmente uniformado y con fusil cuidando las palmas junto con otras personas, sin embargo, posteriormente se quitó el uniforme y lo ubicaron como vigilante en las oficinas y escolta de las directivas de la empresa, como **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**.

¹⁶⁸ Esta circunstancia también fue manifestada por Yenis María Miranda Rivera, folios 147 y ss del C. 12

¹⁶⁹ Folios 186 y ss del C. 12

Ello, entonces, también denota no sólo relaciones o vínculos con paramilitares sino su actuar mancomunado, ya que deja claro que sí había paramilitares al cuidado de los cultivos de palma, pues si bien es cierto la condición paramilitar o subversiva de un empleado no conlleva necesariamente a que la misma la esté desempeñando en la empresa, en este caso es evidente que se valían de su posición como paramilitares para prestar seguridad en los viveros de URAPALMA, puesto que precisamente fue avizorado por este testigo dotado de uniforme y fusil.

De otra parte, pese a que las directivas o socios de URAPALMA se aprovecharon de la ingenuidad y hasta del analfabetismo de la mayoría de empleados que fueron involucrados en las asociaciones, se percibe de las actividades realizadas por algunos de ellos, tanto su conocimiento como intención de hacer parte del engranaje criminal.

En efecto, en primer lugar, la suscrita vislumbra que el procesado **MARIO LEÓN VILLA PACHECO** no se quedó en su simple calidad ficta o aparente de representante legal de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, como la mayoría de asociados, a quienes ilusionados con la promesa de préstamos bancarios y un pedazo de tierra, entre otros beneficios, prestaron su nombres y fotocopias de sus cédulas de ciudadanía y firmaron inadvertidamente solicitudes de crédito; sino que realizó diversos actos notariales que conllevaron a la concreción de negocios jurídicos sobre predios o fincas que provenían de accesiones ilegales, a favor de distintas empresas que también se dedicaron al cultivo de la palma africana y que obviamente también resultaron involucradas en la concertación para delinquir.

Ciertamente, mediante Escritura Pública 2.778, del 13 de octubre de 2004, protocolizada en la Notaría 5ª de Medellín¹⁷⁰, **VILLA PACHECO** vendió a la empresa Inversiones Agropalma, representada legalmente por **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, un terreno de 254 hectáreas, ubicado en las veredas Caño Claro y Llano Rico del municipio de Carmen del Darién (Chocó), por valor de 785'242.980, predio que deviene del desenglobe realizado en la Escritura Pública 729 de 2001¹⁷¹, como predio 3B, que tiene como antecedente las Escrituras Públicas 094 y 095, del 24 de mayo de 2000, con ocasión a la

¹⁷⁰ Folios 227 y ss del C. 14

¹⁷¹ De la Notaría Única del Circuito Notarial de Chigorodó

accesión declarada por un supuesto apoderado de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO.

Acerca de este acto notarial, el procesado reconoció en indagatoria, del 18 de abril de 2008¹⁷², que firmó dicha documentación, aserto que prueba su conocimiento y voluntad en la ejecución delictiva, y no obstante manifestó que se trataba de un terreno respecto del cual desconocía su origen, pues **DAZA PRETELT** le indicó que era de la asociación y que iban a venderlo para adquirir fondos para continuar con la siembra de palma, dichas justificantes resultan inverosímiles en atención a que escapa a la lógica y a los criterios de la sana crítica que el acusado hubiese intervenido como vendedor de un predio del cual desconocía su origen, pues cómo suscribir una venta si desconozco que el bien se encuentra a nombre de la persona jurídica que represento, principalmente si se trata de un terreno cuyo precio se estableció en un monto muy elevado - \$785'242.980- y que, por ende, por lo menos ese aspecto debía generarle algún tipo de aprensión o suspicacia, máxime si posteriormente aludió a que la asociación que representa es propietaria de 150 hectáreas, lo cual no concuerda con el hecho de que en dicha escritura vendiera 254 hectáreas.

Es tal su conocimiento y dominio del tema, que en la misma indagatoria el acusado manifestó que la creación de la asociación que representa fue idea de **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, lo cual hicieron *"para coger un incentivo que estaba lanzando el Gobierno, eso lo hicieron lo que es la unión de las empresas y las asociaciones para poder acceder al incentivo ese que tenía FINAGRO"*.

En otros términos, la suscripción de esta compraventa no puede tratarse de un simple engaño, como trató de hacerlo ver en su indagatoria, puesto que el mismo condenado CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ¹⁷³ señaló que a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite se le puso inicialmente como representante legal a JAVIER MORALES ESTRADA y luego a **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**, porque se necesitaba a una persona de confianza, pues se trataba de varias tierras que habían comprado todos los socios, y la persona que se había ganado la confianza de los accionistas de URAPALMA era **VILLA PACHECO**.

¹⁷² Folios 266 y ss del C. 16

¹⁷³ En audiencia pública del 19 de diciembre de 2012

Igualmente, mediante Escritura Pública 2.556, del 9 de noviembre de 2005, de la Notaría 8ª de Barranquilla, dicha asociación vendió a Palmas de Urabá S.A., PALMURA, un lote de terreno de 1.391 hectáreas y 6.450 mts², ubicado en la vereda Caño Claro y Llano Rico Riosucio de la misma municipalidad, por \$140'000.000, correspondiente al lote 1 señalado en la escritura 095, del 24 de mayo de 2000, las cuales se relacionaron con antelación.

En relación con esta compraventa, no obstante el justiciable inicialmente manifestó en su indagatoria que no intervino en esta negociación, se encuentra en el expediente un contrato de colaboración empresarial realizado entre el acusado y ANTONIO NEL ZUÑIGA CABALLERO, del 25 de octubre de 2005, como representante legal de PALMURA S.A., documento que se halla luego de un escrito presentado por el procesado **VILLA PACHECO**, en el cual solicitó ampliación de indagatoria por eventuales inconsistencias, de lo cual se deduce que el mismo procesado aportó dicho contrato.

Esa deducción, por supuesto, está avalada en un escrito que remitió el enjuiciado **VILLA PACHECO** con posterioridad¹⁷⁴, en el que indicó que al contestar el cuestionamiento de la Fiscalía referente a la firma de esta última escritura pública, manifestó que no recordaba haber comparecido a la Notaría 8ª de Barranquilla para la suscripción de la misma, sin embargo, contestó equivocadamente porque no recordaba en ese momento, por tanto, precisó que sí suscribió el acto notarial de marras y ninguna persona lo suplantó, aspecto que confirmó en indagatoria del 15 de enero de 2009¹⁷⁵.

Estas negociaciones, por supuesto son de las que se deduce la responsabilidad de **VILLA PACHECO**, pues si bien en principio podría pensarse que está dentro del grupo de empleados incautos que firmó documentación sin ningún tipo de conocimiento, el cargo que desempeñó como representante legal de una asociación a nombre de la cual se titularon cuantiosas hectáreas, devela no sólo la confianza que directivas y asociados de URAPALMA depositaron en él, sino el conocimiento que debió tener para suscribir diferentes actos jurídicos en diversas notarías.

¹⁷⁴ Sin fecha, se encuentra a folios 37 y 38 del C. 21

¹⁷⁵ Folios 86 y ss del C. 24

Efectivamente, este procesado debió trasladarse hasta las ciudades de Medellín y Barranquilla, a fin de protocolizar las escrituras de marras, aspecto que por sí solo le debió generar algún tipo de intriga o prevención, máxime si se trata de una persona que estudió hasta noveno grado de bachillerato, lo que evidencia un mínimo de educación, y que, debido a sus habilidades, ascendió rápidamente en la empresa URAPALMA, pues inició laborando en el vivero y, posteriormente, se desempeñó como mensajero y conductor de la empresa.

No se trata entonces, de que los empresarios y los paramilitares se aprovecharon de su ingenuidad para hacerlo firmar indistintamente documentos notariales, pues a diferencia de los demás empleados de URAPALMA que firmaron ilusionada e inadvertidamente solicitudes de constitución y de préstamos, este procesado ejerció actos de los que, como viene de verse, se vislumbra su conocimiento y, en consecuencia, su ánimo criminal, máxime si se tiene en cuenta que su calidad de representante legal lógicamente lo ubica como una persona de confianza de la organización, precisamente porque tiene a su nombre, en virtud de la persona jurídica que representa, un gran cúmulo de terrenos de los cuales podría disponer libremente.

De otra parte, en relación con la participación, en calidad de autores, de **ORLANDO MORENO MORA, REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL y JUAN JOSÉ PALACIO PALACIOS** se estableció con las declaraciones de varios desplazados su condición de paramilitares y comisionistas de tierras en las supuestas negociaciones que realizaron con poseedores o propietarios de heredades en el sector, labor que obviamente desempeñaron a favor de las empresas también involucradas en las comisiones delictivas que finalmente generaron la investigación por parte de la Fiscalía en este asunto.

Respecto al primero de ellos, esto es, **MORENO MORA**, se estableció que participó directamente, como representante legal de la Asociación de Antiguos vecinos de la cuenca del río Curvaradó y zonas aledañas, en la compraventa que se realizó a través de la Escritura Pública 740, del 8 de octubre de 2002, de la Notaria de Carepa (Antioquia), mediante la cual compró a **JEREMÍAS DURANGO GUISAO**, a través de apoderado, la finca "Bella Vista", ubicada en la vereda Caño Claro del municipio de Riosucio (Chocó), luego de ser aumentada, mediante accesión ficta, pues inicialmente constaba de 23

hectáreas y 6.846 mts², y finalmente quedó midiendo 2.603 hectáreas y 5.000 mt².

Asimismo, mediante la Escritura Pública 742, de 8 de octubre de 2002, de la Notaría de Carepa (Antioquia), el justiciable **MORENO MORA**, también como representante legal de dicha asociación, compró a LUIS URANGO QUINTERO, a través de apoderado, la finca "*Para qué más*", ubicada en la vereda Sapayal del municipio de Riosucio (Chocó), terreno que también fue aumentado en su extensión, mediante la misma modalidad, pues inicialmente tenía una cabida de 55 hectáreas y 4.187 mts² y ulteriormente se convirtió en un predio de 5.000 hectáreas.

Es menester resaltar que, respecto al predio de URANGO QUINTERO, la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución 6524 del 26 de septiembre de 2007¹⁷⁶, dejó sin valor ni efecto las anotaciones correspondientes a la inscripción de la escritura pública 742, de 8 de octubre de 2002, de la Notaría de Carepa (Antioquia), valga decir, la declaratoria de accesión, la compraventa aludida de la Asociación de Antiguos vecinos de la cuenca del río Curvaradó y zonas aledañas y la división del terreno entre la Asociación de Antiguos vecinos de la cuenca del río Curvaradó y zonas aledañas y la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite - ACOPALMA-, ya que dicha entidad fue advertida "*del error relacionado con la información irregular como medio ilegal que presenta las anotaciones 02, 03 y 04 del folio 180-18214*". Lo mismo ocurrió con las inscripciones segregadas de dicha escritura pública, precisamente por tratarse de una "*falsa tradición*".

Del mismo modo, se determinó que el predio que perteneció a SIXTO PÉREZ DÍAZ, denominado "La Nevera", al cual también se le aplicó la accesión por aluvión y, por ende, pasó de ser un predio de 33 hectáreas y 5.186 mts², a uno de 4.207 hectáreas con 4.814 mts², actuación jurídica que realizó HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ¹⁷⁷, como supuesto apoderado del propietario, pues se recuerda que el poder fue conferido cuando PÉREZ DÍAZ ya estaba fallecido; fue vendido por parte del mismo apoderado a la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas, representada por **MORENO MORA**, y a otra asociación, por \$2.000.000.

¹⁷⁶ Folios 2 y ss del C. 77

¹⁷⁷ Mediante Escritura Pública 735, del 8 de octubre de 2002, de la Notaría de Carepa (Antioquia), folio 183 del C. 10

En este punto cabe precisar, que a través de esta escritura pública también se dividió el predio en cuatro lotes ubicados en el sector Camelias, en la vereda Caño Claro de Riosucio:

- * Lote 1: 1.021 hectáreas.
- * Lote 2: 600 hectáreas.
- * Lote 3: 1.220 hectáreas.
- * Lote 4: 1.400 hectáreas.

Estos lotes fueron repartidos entre la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas, la cual quedó con los lotes 2, 3 y 4; y la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite – ACOPALMA-, con el lote 1.

Posteriormente, mediante Escritura Pública 767, del 10 de octubre de 2004, de la Notaría Única de Carepa¹⁷⁸, la primera de las asociaciones, valga decir, la representada por **ORLANDO MORENO MORA**, vendió a la Promotora Palmera de Curvaradó Ltda. PALMADÓ, representada por **HÉCTOR DUQUE ECHEVERRI**, quien ya fue condenado por estos hechos, el lote 4, por valor de \$565.164.000.

Este actuar, entonces, determina la responsabilidad de **MORENO MORA** en la concertación para delinquir y, lógicamente, en los desplazamientos que hubo de realizar la organización delincuencial precisamente para apoderarse de los terrenos en los que finalmente se desarrolló el plan palmicultor, fondos sobre los cuales, se reitera, se aplicaron figuras jurídicas para ampliarlos de manera intempestiva y así lograr la legalización de los terrenos accedidos, pues el terreno al que se están accediendo sus colindantes, fueron titulados individualmente por el INCORA y, por ende, al no ser parte de la colectividad, podían negociarse libremente, utilizarse como garantía en los préstamos bancarios y en la adquisición de múltiples beneficios agrarios, ya que no sólo podían evadirse las prohibiciones que trae la Ley 70 de 1993 sino que justificaban el origen de terrenos que fueron despojados arbitrariamente a sus legítimos propietarios.

¹⁷⁸ Folio 193 y ss del C. 13

Adicionalmente a estas negociaciones realizadas por **ORLANDO MORENO MORA**, en el expediente se encuentran diversas declaraciones que lo señalan como comisionista de las empresas palmicultoras y con vínculos paramilitares, como es el caso de la víctima JUAN IGNACIO VÉLEZ MONTIEL¹⁷⁹, quien expuso que este procesado fue un comisionista de la empresa Palmadó, y lo señaló como aliado del paramilitarismo.

Del mismo modo, JULIO CESAR GONZALEZ MADERA¹⁸⁰, quien también se refirió a los pormenores de su desplazamiento y el de su familia en mayo de 1997 por parte del ejército y paramilitares, razón por la cual hubieron de abandonar la finca que le heredó a sus padres en la vereda El Guamo, sin embargo, luego retornaron a la misma pero sus tierras ya estaban en poder de la empresa Palmadó. Pese a ello, decidió empezar a trabajar sus predios, puesto que no las habían vendido, sin embargo, los empresarios le mandaron a parar sus actividades y le manifestaron que **MORENO MORA**, que era el comisionista, les dijo que sus padres les había vendido, pero el testigo insistió en que no, por tanto un ingeniero de Palmadó, le ofreció negociar la tierra, a lo cual se rehusó y sembró sus propios cultivos de *pan coger* en la finca.

Posteriormente, en el momento en que fue a vender sus productos a *Puerto de Brisas* fue interceptado por dos sujetos, entre ellos alias Diomedes, apodo perteneciente a HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ según se conoció en la actuación, quien lo tachó de guerrillero, aspecto que evidentemente denota una persecución por rehusarse a negociar sus fundos, principalmente si se tiene en cuenta que dicho individuo le indicó que hacía parte de Palmadó y que, además, debido a ese señalamiento uniformados del Ejército le solicitaron sus documentos de identificación, de quienes le consta que andaban *junto con los paramilitares*.

De igual manera, respecto a **MORENO MORA** adujo que lo conoció como "*colaborador de los empresarios de Palmadó*".

De otra parte, MIGUEL ENRIQUE PAEZ PETRO¹⁸¹, quien fue desplazado de la comunidad de El Guamo en 1997 debido al conflicto entre los grupos armados en el sector, manifestó que conoce a **ORLANDO MORENO** como comisionista,

¹⁷⁹ Folios 223 del C. 11

¹⁸⁰ Folios 227 y ss del C. 11

¹⁸¹ Folios 250 y ss del C. 11

cuyo padre es ANDRÉS MORENO LEMUS, *"trabajador mando de las palmas"*, quien estuvo en El Guamo con unos repobladores enviados por los empresarios para que *"vivieran con nosotros y trabajaran una tierras colectivas"*. Igualmente, en cuanto al tema de la intención de varios pobladores de retornar a sus predios, aludió a que tiene conocimiento de que a PRIMITIVO JIMÉNEZ, habitante de su comunidad, **ORLANDO MORENO** le dijo que no regresara porque él no tenía nada en ese territorio.

Asimismo, JORGE LEANDRO BERRIO MASS¹⁸², también desplazado de la comunidad de El Guamo (Curvaradó), expuso que ha visto en muchas ocasiones a **MORENO MORA** porque fue a trabajar a su finca ubicada en dicho lugar, se comenta que era informante de la guerrilla *"después se torció y fue informante de los paramilitares"*, vendió tierras de los campesinos de esa localidad y le vendió a los palmeros de la empresa Palmadó.

En el mismo sentido, la víctima WALTER ATENCIO GARAY¹⁸³ declaró, los días 14 y 15 de agosto de 2007, que él junto con su familia fueron desplazados aproximadamente en 1996 por parte de los paramilitares *"acompañados del Ejército"* de la finca de su padre, ubicada en la vereda El Guamo, y que no obstante trataron de regresar a la misma en el 2004 lo *pararon* porque esa finca aparecía vendida a CLAUDIA ARGOTE, alias La Guajira, y **ORLANDO MORENO** y otro sujeto llamado MARCELINO le advirtieron que *"si yo no sabía que esa finca tenía problemas o si quería que entrara la gente y me tirara al río, yo me asuste y me fui otra vez"*. Además, mencionó que pese a que nadie de su familia autorizó o vendió su finca, la misma aparece vendida.

Asimismo, indicó que **ORLANDO MORENO** tiene vínculos con las palmas y fue comisionista de esas tierras; y que **JUAN JOSÉ PALACIOS**, alias "El Diablo", tuvo vínculos con los paramilitares y aún anda armado.

Por su parte, ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA¹⁸⁴ expresó que abandonó su finca en El Guamo, por el temor que le generaron varios actos violentos, entre ellos la masacre en Brisas y la desaparición de dos sujetos del sector y no ha podido retornar. Además, respecto al proceso de adquisición de tierras, manifestó que cuando vieron la región desolada comenzaron las

¹⁸² Folios 257 y ss del C. 11

¹⁸³ Folios 264 y ss del C. 11

¹⁸⁴ Folios 274 y ss del C. 11

compras masivas de terreno, inclusive a él lo invitaron a una reunión referente a la compra de tierra, "en la casa de **ORLANDO MORENO** ubicada en Bajirá, donde llegaron 3 o 4 individuos que iban a comprar terrenos, por tanto, reunieron el personal, y les indicaron que el valor de compra era de \$200.000 pesos por hectárea, pagaderos en 4 cuotas cada 6 meses, a lo cual accedieron muchas personas debido a su mala situación, generada por el sufrimiento y por no poder entrar a trabajar sus tierras.

No obstante dicho ofrecimiento, el declarante indicó que no accedía a vender sus predios "*porque eso estaba muy barato y era mucho plazo*", a lo cual le respondieron que si no vendía "*de igual manera ellos necesitaban la tierra para sus cultivos y que campesinos no querían por ahí*", razón por la que finalmente le tocó vender sus tierras.

Concretamente, el testigo señaló a **MORENO MORA** como comisionista de la empresa Palmadó, quien amenazó a sus compañeros **WALTER ATENCIO** y **MANUEL BILORIA**; y a **PALACIOS PALACIOS**, alias El Diablo, como paramilitar, "*quien también hizo desastres en estas tierras le mató el papá a la familia*" llamado **ISAAC TUBERQUIA**.

Entretanto, **SANTANDER DE JESÚS PEÑA GUZMÁN**¹⁸⁵, desplazado inicialmente por la violencia que generaban tanto la guerrilla como los paramilitares, manifestó que vendió a \$200.000 la hectárea de tierra de su finca -de 75 hectáreas- a **LUIS FERNANDO ZEA MEDINA**, pues pese a que rebatió el precio, ya que le parecía "*muy barato*", el comisionista **ORLANDO** le dijo que ese era el precio y que "*si no vendíamos no respondían por la tierra, o sea que si uno quedaba encerrado ya después no le daban a uno vía para salir*".

Además, manifestó que la mayor parte de su predio estaba en selva virgen porque solo había desmontado 10 hectáreas, sin embargo, "*se sacaron toda la madera, había CEDRO, GUINO, BÁLASAMO, CHOIBA, CARACOL, HOYETO y de otras clases de madera que servían, madera fina...*" y, entre los que talaron el bosque estaba el hijo de **MORENO MORA**, quien "*metió como cuatro o cinco máquinas para sacar madera*".

¹⁸⁵ Folios 137 y ss del C. 21

Así las cosas, no obstante este testigo indicó que no fue amenazado para vender sus predios, las expresiones que utilizaba este enjuiciado con los poseedores iban tendientes a generar una presión precisamente para minar la voluntariedad y libre elección de los mismos.

Por lo demás, HÉCTOR DUQUE ECHEVERRY¹⁸⁶, socio y representante legal de la empresa Palmadó, manifestó que **ORLANDO MORENO**, colono del sector, les colaboró en el proceso de adquisición de tierras, pues en su casa ubicada en Belén de Bajirá reunió a los pobladores para conversar y concretar los términos de las negociaciones que hicieron respecto a sus predios, situación que prueba aún más la condición de comisionista de este justiciable.

Del mismo modo, LUIS FERNANDO ZEA MEDINA¹⁸⁷, también socio de Palmadó, expuso que a través de este justiciable buscaron personas que estuviesen interesadas en vender en la zona y, por ello, cobraba el 3% del valor total de la compraventa. Asimismo, ZEA MEDINA¹⁸⁸ también se refirió a la labor que desempeñó este acusado **MORENO MORA** en la adquisición de los predios, y además aludió a un aspecto que evidencia aún más tanto la existencia de la empresa criminal como las finalidades de la misma para la adquisición de créditos y/o beneficios:

"PREGUNTADO: Manifestó usted que finalmente quien vendé (sic) los terrenos a la empresa Palmadó, es la asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del río Curvaradó y zonas aledañas, supo usted quien fue quien creó esa asociación, quien era el representante legal y por que tuvieron que crear la asociación y más bien, porque no figuraron directamente las personas que vendieron las posesiones y mejoras. CONTESTÓ: No tengo conocimiento quien creo la asociación, me enteré por la escritura pública que firmó Héctor Duque, que el representante legal era ORLANDO MORENO, eso hace parte dentro de la figura que nos ofreció Javier Daza y Merlano, para presentar a Finagro; nosotros no llevamos a nadie para crear esa asociación, desconozco la creación de esas asociaciones..." (Negrilla fuera de texto)

"... Me reitero en que el ofrecimiento que hicieron DAZA y MERLANO consistía en englobar las compras y mejoras por las 1400 hectáreas; cuando HÉCTOR DUQUE se presentó a firmar la escritura nos dimos cuenta que aparecía la figura de la accesión..."

¹⁸⁶ Indagatoria, folios 149 y ss del C. 16

¹⁸⁷ Folios 94 y ss del C. 23

¹⁸⁸ Folios 204 y ss del C. 53

En tal sentido, si bien es cierto, en principio, el sólo hecho de que una persona haga conexiones o enlaces entre quienes estén interesados en vender sus predios y los empresarios que desean comprarlos, no comporta delito, son los bemoles en la negociaciones, los que lo convierten en una conducta criminal, ya que hubo, como se ha venido sosteniendo, actuaciones irregulares que no sólo afectaron el libre albedrío de los campesinos sino que trataron de aparentar la legalidad en la adquisición de los predios o en la titulación de los mismos.

Al respecto, el mismo deponente DUQUE ECHEVERRY expresó que a raíz de la problemática que se presentaba en la titulación de los terrenos, el doctor CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ, asesor jurídico de URAPALMA, *"nos hizo los títulos que actualmente la empresa Palmadó tiene"* a través de una fórmula de asociación, referida a la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas, mediante la que se hace el título de propiedad privada *-trámite que calificó como ilegal-*, de la cual **MORENO MORA** es miembro y representante legal, lo que le generó tranquilidad, puesto que se trataba de una de las personas a las que le habían comprado las mejoras.

De la misma manera, CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ¹⁸⁹, en su indagatoria aludió a que la participación de **MORENO MORA** como directivo se debió a una solicitud directa de uno de los empresarios y aunque este procesado dijo en su indagatoria que *"él estaba de presidente de la asociación por consejo mío"*, ello simplemente fue para eludir responsabilidad pues *"1.- Si la inversión del costo de esa tierra superaba los dos mil millones, es equivocado pensar que una persona extraña, lejana, iba a dar el nombre de un gente (sic) que era el dueño de esa tierra..."*, inferencia lógica que la suscrita también comparte.

Estos pormenores, entonces, denotan el conocimiento y ánimo delictivo del acusado **ORLANDO MORENO MORA**, ya que, como viene de verse, se trataba de una persona de confianza de uno de los empresarios concertados, razón por la cual fue designado como representante legal, pues dicha condición ponía en su cabeza la propiedad de un sinnúmero de inmuebles. Además, debe tenerse en cuenta que no es mera contingencia que este enjuiciado participe en el proceso de adquisición de tierras para la empresa Palmadó S.A. y también le

¹⁸⁹ Folios 181 y ss del C. 38

venda mediante Escritura Pública 767, del 10 de octubre de 2004, de la Notaría Única de Carepa¹⁹⁰, como representante legal de la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y Zonas Aledañas, el lote 4 -de 1.400 hectáreas-, por valor de \$565.164.000, procedente del fraccionamiento del predio que perteneció al fallecido SIXTO PÉREZ DÍAZ, denominado "La Nevera", al que se le aplicó la accesión por aluvión ficta y, por ende, pasó de ser un fundo de 33 hectáreas y 5.186 mts², a uno de 4.207 hectáreas con 4.814 mts².

Por lo demás, respecto a sus actividades criminales también se encuentra el testimonio de EUSTAQUIO POLO RIVERA¹⁹¹, el cual manifestó que salieron desplazados en 1997 debido a las advertencias de que debían desocupar. Sin embargo, posteriormente retornó a sus predios pero el Ejército les dijo que salieran de las comunidades porque detrás de ellos venía unos sujetos "*mochando las cabezas*". Luego, cuando iban a regresar, unos comisionistas les dijeron que las tierras las necesitaban para los proyectos de palma, entre los cuales estaba **ORLANDO MORENO**, y les decían que si no vendían "*igual los empresarios iban a coger todas las tierras*", pero como él no vendió empezaron las amenazas de parte de este enjuiciado, quien decía que la demora era que él "*diera papaya*" para sacarlo.

Por tanto, no es aceptable la conclusión de su abogado en cuanto a que **MORENO MORA** fue utilizado por inescrupulosos y que su condición de campesino sin recursos, tanto económicos como intelectuales, le impidió cometer este tipo de ilicitudes; ya que, por el contrario, con las pruebas que se acaban de relacionar, se demostró que este procesado se concertó con la finalidad de contribuir directamente en la invasión de territorios colectivos y/o de reserva forestal y participó en el desarraigo de sus pobladores.

Respecto a **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, quien ya aceptó los cargos por el delito de concierto para delinquir¹⁹², su responsabilidad en cuanto a los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, también deviene inconcusa para la suscrita, debido a su accionar como representante legal de la Asociación de Pequeños Cultivadores

¹⁹⁰ Folios 193 y ss del C. 13

¹⁹¹ Folios 8 y ss del C. 6

¹⁹² Lo cual consta en el acta de formulación y aceptación de cargos para sentencia anticipada del 17 de diciembre de 2010, folios 217 y ss del C. 52

de Palma de Aceite -ACOPALMA-, desde el año 2000, asociación que quedó con el lote 1, de 1.021 hectáreas, segregado del predio de SIXTO PÉREZ DÍAZ, como se expuso con anterioridad.

Ciertamente, **ÁLVAREZ VERTEL**, como representante de dicha asociación, suscribió contrato de comodato con la empresa Palmas S.A. respecto a dicho predio, la cual finalmente utilizó 500 hectáreas para la siembra de palma, comodato que se pactó por el término de 6 años, vencido el cual, supuestamente los asociados obtendrían el 30% de las utilidades que percibiera la sociedad por la explotación de esas plantaciones.

En este sentido, se tienen las declaraciones de IVÁN PATIÑO PATIÑO¹⁹³, representante legal y socio de Palmas S.A., quien indicó que llegó a invertir en los cultivos de palma a la zona de Curvaradó por invitación de LUIS DONACIANO RIASCOS, luego conoció a **REMBERTO MANUEL** como representante legal de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, quien para el año 2000 ingresó a la zona negociando terrenos de los colonos en compañía de la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del Curvaradó y Zonas Aledañas y, posteriormente, realizó el contrato de comodato con este acusado¹⁹⁴.

Por tanto, la responsabilidad de este procesado deviene precisamente de que, al igual que sus antecesores, realizó negociaciones jurídicas sobre el predio "La Nevera", puesto que se trata de actuaciones jurídicas realizadas con fundamento en un poder falso, ya que SIXTO PÉREZ DÍAZ, quien no obstante falleció el 14 de junio de 1999, supuestamente, el 7 de octubre de 2002, se presentó y autenticó en la Notaría 6ª de Barranquilla un poder que confirió a HERMEN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, alias "Diomedes", para que hiciera un sinnúmero de trámites con el título de propiedad.

A partir de allí, fue que se generaron varias negociaciones respecto a dicho predio y muchos otros que le colindaban, valga decir, accesiones fictas, desenglobes, compraventas y permutas.

¹⁹³ Folios 249 y ss del C. 15 y en audiencia pública del 22 de noviembre de 2012

¹⁹⁴ Folios 266 y ss del C. 15

Así las cosas, como precisamente esas actividades hicieron parte de las finalidades de la organización delincriminal para la obtención y legalización de los predios que pertenecían a las comunidades negras, que si bien se aceptó desde la materialidad, se desplazaron inicialmente a raíz del conflicto armado, posteriormente varios pobladores trataron de retornar y asentarse en sus heredades, pero ello no fue posible debido a las obstrucciones y hostigamientos que se generaron directamente por las directivas, socios o empleados de URAPALMA, y demás empresas palmicultoras que se han relacionado en esta sentencia, lo cual se ha relacionado a lo largo de este acápite, en cuanto a las diferentes declaraciones de desplazados que han intentado regresar a sus predios.

En tales condiciones, para la suscrita no son creíbles las atestaciones de este procesado en cuanto a que las negociaciones que realizó sobre los bienes en comento las hizo con fundamento en la asesoría y visto bueno que dio el abogado ÁLVARO TOUS, puesto que si bien las reglas de la experiencia indican que la asesoría de un experto en determinada materia puede generar cierta confianza, ello no puede llegar al extremo de realizar inconscientemente todo lo que el abogado indique y, por ello, firmar indiscriminadamente contratos, a raíz de los cuales obviamente se generan obligaciones legales, con la simple excusa de que *"para eso nosotros le pagamos unos honorarios"*¹⁹⁵.

En otras palabras, no resulta lógico que una persona letrada, si se tiene en cuenta que tiene estudios universitarios, según lo manifestó en su indagatoria¹⁹⁶, confíe ciegamente en un abogado, con el cual ni siquiera suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales, con base en que éste *"solamente nos comentaba que eso estaba legalmente y que no había problema para la adquisición de los mismos predios"*, y en razón de ello firme actos notariales referentes a compraventas de bienes de significativa extensión y valor, pues se trata de predios cuyo valor se concretó, según dijo en su indagatoria, en \$204.000.000 el de 1.021 hectáreas, con lo cual estaba adquiriendo, como representante legal de la asociación, obligaciones pecuniarias importantes que, valga decir, una persona con sus recursos económicos no podría solventar si se tiene en cuenta que el mismo justiciable aludió en su indagatoria que sus ingresos mensuales eran de \$800.000

¹⁹⁵ Folios 21 y ss del C. 20

¹⁹⁶ Folios 21 y ss del C. 20

aproximadamente, respondía económicamente por su cónyuge y dos hijos menores y hacía parte de FUNPAZCOR *"porque era una persona pobre"* de estrato uno y vivía en un barrio marginado de Montería, entidad a la que, por lo demás, también pertenecían las 30 familias que constituyeron la asociación¹⁹⁷.

Además, también resulta sospechoso que, conociendo los términos de los contratos y escrituras públicas, lo cual se infiere del pleno dominio que demostró acerca de los mismos y que aceptó que los firmó, no le generara prevención la accesión abrupta que se describió en la primera de las escrituras que suscribió *-735 del 8 de octubre de 2002-*, que compre una extensión de 2.355 hectáreas sin ni siquiera conocerla ni tener los recursos para su adquisición, no sólo por las condiciones económicas particulares que acaban de mencionarse de este acusado, sino porque la asociación la componían meros empleados asalariados y, por ende, no existía la posibilidad monetaria para que adquirieran esa obligación, aspectos que ponen al descubierto la verdadera intencionalidad en la suscripción de tales escrituras.

En este aparte también es menester resaltar, que si bien **ÁLVAREZ VERTEL** adujo que los recursos para la compras de las tierras fueron conseguidos a través de FUNPAZCOR, por un supuesto crédito¹⁹⁸, ello tampoco es verosímil en atención a que en la actuación se demostró que dicha corporación finalmente también hacía parte de los hermanos Castaño Gil, pero no como una entidad filantrópica que procuraba la igualdad social entre los habitantes, en especial de la población víctima de la violencia, sino como una argucia que finalmente buscaba poner a nombre de terceros sus bienes, obviamente a efectos de proteger los mismos de requerimientos legales, entre otros fines. Al respecto, el postulado JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias "Monoleche", expresó:

"lo mismo que hizo FIDEL CASTAÑO con una cantidad de campesinos cuando creó a FUNPAZCOR, lo mismo iba a hacer ADOLFO, por medio del doctor FRAGOSO que ya había hecho lo mismo cuando FIDEL CASTAÑO que la Fiscalía le iba a confiscar sus tierras, lo que hizo fue coger una cantidad de campesinos que no saben leer, no saben escribir y donarle sus tierras, las mejores tierras que tenía FIDEL CASTAÑO en la región, cogió a estos campesinos y les colocó de a 5 hectáreas, estos campesinos eran testaferros de FIDEL CASTAÑO y nunca lo supieron..."

¹⁹⁷ Según lo manifestó el procesado en su indagatoria, folios 21 y ss del C. 20

¹⁹⁸ En ampliación de indagatoria del 27 de agosto de 2010, folios 289 y ss del C. 41

Obviamente **REMBERTO MANUEL** no hace parte de esos campesinos ingenuos e ignorantes sino que es un militante más de la organización paramilitar, hecho que aceptó y por el cual ya fue condenado, cuya función indudablemente propendía por la obtención de los fines de la organización criminal, situación que se vislumbra de sus actividades como la conformación de FUNPAZCOR, de ACOPALMA, como representante legal de esta última -aspecto que denota el grado de confianza que tenía dentro de la agrupación, pues se trata de una persona en cuya cabeza iba a quedar la titularidad de grandes extensiones de tierra-, y posterior suscripción de actos notariales relacionados con predios conseguidos mediante fraudes, desplazamientos y barbarie.

Además, debe tenerse en cuenta que este justiciable aceptó la conformación de la asociación de cultivadores y de FUNPAZCOR como un hecho consciente y voluntario, pues nunca aludió a que fuese engañado respecto a la dación de su firma o cédula de ciudadanía, como sí ocurrió con un sinnúmero de declarantes, entre ellos trabajadores de URAPALMA, que así lo afirmaron. Asimismo, se reitera, este procesado refirió plena consciencia y voluntad en la suscripción de las escrituras públicas que se relacionaron con anterioridad.

De otro lado, cabe recordarle al defensor, en cuanto a los supuestos vicios del consentimiento que mediaron en la aceptación de **REMBERTO MANUEL** por el concierto para delinquir, que en el proceso penal las etapas son preclusivas y, por ende, no puede pretender a estas alturas, y en un proceso diferente, cuestionar una decisión que se encuentra ejecutoriada o subsanar con unos alegatos finales la eventual inoperancia en cuanto a interposición de recursos o solicitud de nulidad a las que se refiere.

En lo que atañe al justiciable **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, se tiene que la víctima **JUAN IGNACIO VÉLEZ MONTIEL**¹⁹⁹ expuso que **PALACIOS PALACIOS** era un jefe paramilitar, y si bien el declarante aludió simplemente a su apodo como El Diablo, en la actuación se dilucidó que dicho alias pertenece a este acusado, máxime que la descripción que hizo el testimoniante concuerda con la señalada por la Fiscalía en la diligencia de indagatoria y el mismo acusado aceptó que ese era su apodo²⁰⁰.

¹⁹⁹ Folios 223 del C. 11

²⁰⁰ Folios 125 y ss del C. 21

De otra parte, MIRIAM DE JESÚS NARVÁEZ HERNÁNDEZ²⁰¹ manifestó que les tocó salir obligados de la cuenca del río Curvaradó porque los miembros de los grupos paramilitares, entre los cuales estaba alias El Diablo, les dijeron que tenían que desocupar los terrenos. Además, luego de describirlo morfológicamente como grueso y bajo de estatura, manifestó que lo vio uniformado, portando armas largas y que andaba con un grupo de sesenta hombres, quienes en una ocasión fueron a su casa y le dijeron a su hijo que no eran soldados sino paramilitares *"de los que mochaban cabezas"*.

Igualmente, ANDRÉS BABILONIA CUADRADO²⁰², indicó que fue desplazado en 1997, de la finca "Cielito", ubicada en Caño Claro, por presión de los paramilitares. Sin embargo, en el 2001, fue contactado en el municipio de Bajirá por **JUAN JOSÉ PALACIOS**, alias El Diablo, quien vive en dicha municipalidad y su padre se llama JUAN ESTEBAN PALACIOS, le manifestó que si no vendía le invadían la tierra, puesto que él no se podía comprometer a cuidar la tierra del que no vendiera, ya que todos estaban vendiendo. Para ello hacían reuniones, a una de las cuales fue, y este individuo, a quien señaló como integrante de las autodefensas, tenía la vocería. Además, les preguntaron por la ubicación y extensión de los predios y la documentación que tenían respecto a los mismos.

De la misma manera, indicó que en la reunión que tuvieron en la finca El Congo, a efectos de pagarles las tierras, se encontraba **JAVIER DAZA**, **TERESA CASTAÑO**, alias Palillo, a quien reconoció como jefe paramilitar, y un grupo de gente vestida de civil portando armas cortas. A su vez, el desplazado EUCLIDES DE JESÚS TREJOS²⁰³ también reconoció a El Diablo como comisionista de tierras, relacionado con las compañías palmeras.

Por su parte, ANDRÉS CARMONA PADILLA²⁰⁴, también desplazado en 1997 por parte de los paramilitares, motivo por el cual tuvo que abandonar su finca Los Robles, ubicada en la vereda La Cristalina, la cual en ese momento se encontraba sembrada de palma, señaló a **JUAN JOSÉ**, alias El Diablo, luego de describirlo, como la persona que les decía que *"vendiéramos o si no que"*

²⁰¹ Folios 286 y ss del C. 11

²⁰² Folios 296 y ss del C. 11

²⁰³ Folios 22 y ss del C. 12

²⁰⁴ Folios 241 y ss del C. 11

perdíamos la finca, porque más tarde no había quien comprara". Finalmente, manifestó su deseo en saber si les van a devolver la tierra para poderla trabajar "porque estamos pasando necesidades", circunstancia que, además, demuestra que a la fecha de su declaración, valga decir, el 15 de agosto de 2007, aún no había podido retornar a su territorio, no sólo porque su predio estaba invadido de palma sino porque no podían movilizarse libremente debido a la presencia de paramilitares en el sector.

Mientras tanto, el desplazado LUIS CARLOS FERIA CONDE²⁰⁵ por causa de las AUC, si bien adujo no ser propietario de ningún lote o finca, declaró que conoce a **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS** como alias "El Diablo", quien andaba uniformado camuflado, con arma larga y acompañado de otros individuos que también estaban vestidos de camuflados y armados; además la descripción que hizo el testigo coincide con la realizada por sus antecesores.

Entretanto, ANTONIO JOSE RODRIGUEZ RUEDA²⁰⁶ expresó que fue desplazado por la violencia en 1996, sin embargo, tiene una finca llamada Las Palmitas, ubicada en la vereda Cetino de Carmen del Darién, razón por la cual le avisaron a través de su hermana, a quien autorizó para asistir a las reuniones que estaban realizando los empresarios de URAPALMA en la región, que le pagaban a \$100.000 la hectárea, ofrecimiento ante el cual su hermana manifestó que éste no iba a aceptar, por tanto, el individuo apodado "El Diablo", a quien su pariente calificó como paramilitar y comisionista, le dijo que *"si su hermano no acepta esos cien mil pesos, le tocará recibirlos a la viuda"*. Posteriormente, cuando retornó a su finca, la encontró sembrada palma africana en su totalidad y de propiedad de URAPALMA, pese a que nunca vendió sus tierras.

Las afirmaciones referentes a la calidad de paramilitar de **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, alias El Diablo, su labor como comisionista y relación con los palmicultores, son corroboradas por los desplazados MANUEL VIVENTE OVIEDO BEGAMBRE²⁰⁷, LUIS ALBERTO RENTERÍA MOSQUERA²⁰⁸, GUSTAVO GARCÍA PÉREZ²⁰⁹, entre otros, último que indicó

²⁰⁵ Folios 244 y ss del C. 11

²⁰⁶ Folios 30 y ss del C. 12

²⁰⁷ Folios 26 y ss del C. 12

²⁰⁸ Folios 64 y ss del C. 12

²⁰⁹ Folios 157 y ss del C. 21

que este enjuiciado hacía daño en la zona, *"como quitar el ganado a la gente de Caño Claro"*, entraba con la gente de "Palillo" y asesinó a varias personas.

En relación con **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, alias "El Retro" o El "Cúcho", **GABRIEL SEGUNDO FÉRNANDEZ NAVARRO**, y **ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ**, alias "Choco", miembros de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, se conoció con el informe de policía judicial del 25 de septiembre de 2007, suscrito por los funcionarios **CARLOS MALAGÓN BELTRÁN** y **OCTAVIANO CASAS SÁNCHEZ**²¹⁰, que los mismos son desmovilizados de las autodefensas.

Pues bien, respecto a **MONTIEL MERCADO** y **CALONGE ALCALÁ**, pese a que el primero de ellos en indagatoria manifestó que su desmovilización como paramilitar, tan sólo se debió a un interés en recibir un salario pero que realmente nunca fue integrante de las autodefensas, las afirmaciones de otro de los coacusados desvirtúan su inocencia y ajenidad, puesto que los ubica en la zona y los relaciona como trabajadores de los máximos líderes paramilitares, aspecto que, conjugado con los demás elementos de prueba, como el hecho de que **DAGOBERTO ANTONIO** y **ROBIN MANUEL** hacían parte de una de las asociaciones utilizada por URAPALMA para diversos propósitos ilegales, como se explicó anteriormente, demuestra su conocimiento y ánimo delictivo.

En efecto, **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**²¹¹, representante legal de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite - ACOPALMA-, expresó que llegó a Belén de Bajirá en el 2000 con **HECTOR ORLANDO HENAO**, quien los invitó a él y a otros asociados para que conocieran las tierras. Posteriormente, **LUIS DONACIANO RIASCOS**, pionero en la siembra de palma en ese sector, se reunió con un grupo de amigos que tenían la idea de sembrar palma y constituyeron en el año 2000 dicha asociación, por sugerencia de **LUIS DONACIANO**, y entre sus integrantes estaba **DAGOBERTO ANTONIO**, quien fungió como secretario de la asociación, y que también hizo presencia en la zona, en la que estuvieron aproximadamente 20 días conociéndola.

²¹⁰ Folios 59 y ss del C. 14

²¹¹ En indagatoria, folios 21 y ss del C. 20

Posteriormente, **ÁLVAREZ VERTEL**²¹² corroboró sus afirmaciones iniciales, en el sentido de que para crear una empresa palmera en Belén de Bajirá, se buscó a unas personas de Córdoba, concretamente residentes de Villanueva, para montar dichas empresas, entre quienes se encontraban **MONTIEL MERCADO** y **CALONGE ALCALÁ**, a quienes conoció en una finca ganadera perteneciente a FIDEL CASTAÑO, en la que estaban *"boleando machete y fumigando"*.

Estas afirmaciones fueron corroboradas de alguna manera por el coacusado **JOSÉ IGNACIO ROLDÁN PÉREZ**²¹³, alias "Monoleche", quien manifestó que conoció en los años de 1988 o 1989 a **DAGOBERTO ANTONIO** y **ROBIN MANUEL** en la finca Jaraguay, cuyo administrador era JHON HENAO, de quien era escolta, finca que pertenecía a FIDEL CASTAÑO, *"voleando machete, fumigando en las fincas de FIDEL CASTAÑO"*. Y aunque pretendió el declarante afirmar que ellos no eran parte de la organización paramilitar, no empuñaron armas ni desplazaron a ningún campesino, principalmente si se tiene en cuenta que los desplazamientos fueron generados, en su decir, por el Ejército Nacional, las autodefensas y la guerrilla y que *"lo mismo que hizo FIDEL CASTAÑO con una cantidad de campesinos cuando creó a FUNPAZCOR, lo mismo iba a hacer ADOLFO, por medio del doctor FRAGOSO que ya había hecho lo mismo cuando FIDEL CASTAÑO que la Fiscalía le iba a confiscar sus tierras, lo que hizo fue coger una cantidad de campesinos que no saben leer, no saben escribir y donarle sus tierras, las mejores tierras que tenía FIDEL CASTAÑO en la región, cogió a estos campesinos y les colocó de a 5 hectáreas, estos campesinos eran testaferros de FIDEL CASTAÑO y nunca lo supieron..."*, es claro que sí eran miembros activos del grupo de autodefensas y de confianza de sus líderes como para ser utilizados en el desarrollo del proyecto palmero.

Ciertamente, no obstante las aseveraciones de ROLDÁN PÉREZ, las cuales propenden por exculpar a **MONTIEL MERCADO** y **CALONGE ALCALÁ**, aunado al hecho de que el primero de ellos, adujo que no perteneció a la agrupación delincuencia, es menester precisar que dentro del engranaje de las agrupaciones paramilitares, como verdaderas estructuras dedicadas a la macro-criminalidad, no todos sus componentes cumplen labores eminentemente

²¹² En audiencia pública

²¹³ En audiencia pública del 23 de julio de 2012

guerrillistas, ya sea fungiendo como patrulleros, comandantes militares de escuadras, frentes, etc., tanto en el ámbito rural como urbano, sino que también existen personas que conforman las alas política y financiera, encontrándose dentro de esta última, por ejemplo, aquellos militantes que se dedican al desarrollo de diversas actividades que permiten la consecución de recursos para el cabal funcionamiento y pervivencia de la organización delincriminal.

Además, si bien es cierto las organizaciones al margen de la ley realizan actividades evidentemente ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, entre otras, también ejecutan otras que si bien se arropan con un supuesto manto de legalidad, pues se conforman de la manera prevista en la ley, lo cierto del asunto es que en el fondo se utilizan para la facilitación en el logro de sus fines delictivos, como en este caso se hizo con las asociaciones de pequeños cultivadores, las cuales se implementaron, entre otras cosas, para acceder a créditos de fomento agrario e incentivos, pero que realmente eran fictas.

Al respecto, el abogado CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ²¹⁴, quien aceptó en indagatoria que cometió fraude procesal precisamente por "*sanear*" posesiones de manera fraudulenta, expresó que las asociaciones de URAPALMA fueron creadas para articularse con dicha empresa, aspecto que contraría aún más el animus societatis que supuestamente tenían los empleados de URAPALMA y demás campesinos para fundar las asociaciones y, por el contrario, deja entrever que simplemente se trató de una artimaña para acceder a los beneficios mencionados.

Así las cosas, no obstante existe la posibilidad de que estos procesados no empuñaran un arma ni ejercieran presiones directas en los pobladores, ello no se traduce en que fueran ajenos a la coacción, al desplazamiento forzado y al terror generado en la población civil por la agrupación ilegal, pues su actividad, como pertenecientes a dichas asociaciones, fue suficiente para hacer parte del designio criminal.

En otras palabras, las labores desplegadas por los acusados, dentro de ese engranaje paramilitar, no era ajena a los fines de la organización misma, la cual, se reitera, no eran solamente del orden bélico, sino que también confluían otros

²¹⁴ Folios 181 y ss del C. 38

componentes, máxime si se tiene en cuenta que desde la óptica de la coautoría impropia, existe una necesaria división de funciones para la consecución del fin criminal, de ahí la división en los aludidos campos de acción.

Por tanto, la ajenidad a la agrupación delincuencia, que aseveró **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, pese a haberse desmovilizado como integrante de la misma, no es conteste con los demás actos que ejecutó, como su participación en la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite -ACOPALMA-, aspecto que, por ende, desdice su desconocimiento, máxime si se tiene en cuenta su estrecha cercanía a la los CASTAÑO GIL como trabajador.

Por lo demás, ante la prueba directa que existe en esta actuación respecto a su desmovilización, valga decir, el informe de policía judicial del 25 de septiembre de 2007, **DAGOBERTO ANTONIO** debió aportar pruebas tendientes a demostrar tal afirmación, pues en este caso opera la carga dinámica de la prueba, que consiste en que *"quien esté en mejores condiciones de aportar una prueba debe hacerlo, así en principio ello no le corresponda"*²¹⁵, máxime si se trata de quien generó la controversia sobre un hecho que en principio se tiene como cierto precisamente porque fue el mismo enjuiciado quien admitió su militancia en la organización paramilitar, de lo cual dio fe el respectivo jefe de bloque, lo cual no se traduce solamente en beneficios o prerrogativas, como el eventual salario otorgado por el Gobierno Nacional, sino en obligaciones, como su sometimiento a la justicia.

A estas alturas, entonces, el procesado ni su defensor pueden pretender con una simple afirmación desvirtuar un proceso de desmovilización que estuvo ceñido a ciertos parámetros legales, como la aceptación del comandante del respectivo bloque de las autodefensas acerca de la militancia del desmovilizado en la organización al margen de la ley, en relación con lo cual presenta un listado con la relación de desmovilizados, listado que obviamente se entiende rendido bajo la gravedad de juramento.

Así las cosas, para esta funcionaria no son suficientes las atestaciones de JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias "Monoleche", acerca de que aproximadamente el 15% de los desmovilizados nunca pertenecieron a las

²¹⁵ Revista Ratio Juris Vol. 5 N° 11 • Unaula

autodefensas, lo cual se debió a una simple disposición de VICENTE CASTAÑO referente a desmovilizar parte de sus trabajadores para que el Gobierno Nacional les siguiera pagando y así evitar pagarles ellos mismos, disposición que supuestamente aceptó el comisionado de paz y que este postulado aplicó con una trabajadora suya.

Afirmaciones que carecen de un soporte probatorio válido, por lo menos en cuanto a estos procesados se refiere, puesto que este postulado aludió a una simple generalidad sin que pueda aducirse que ese es el caso de **MONTIEL MERCADO**, máxime si existen otras circunstancias de las cuales se infiere su responsabilidad en la vinculación a la organización paramilitar.

En efecto, existe una conexión directa entre su condición de paramilitares, su intervención en las asociaciones y las negociaciones que se hicieron respecto de los terrenos que fueron agregados mediante accesión ficta²¹⁶ al predio del fallecido SIXTO PÉREZ DÍAZ, en relación con el cual HERMÉN JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ también lo vendió a la Asociación de antiguos vecinos de la cuenca del río Curvaradó y zonas aledañas, representada por **ORLANDO MORENO MORA** y a la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite -ACOPALMA-, en la cual fungen como representante legal **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, y como secretario **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**.

Posteriormente, esta última asociación suscribió con la empresa Palmas S. A., representada legalmente por IVÁN PATIÑO PATIÑO, un contrato de comodato respecto de uno de los lotes que fueron segregados del anterior, el cual quedó con una extensión de 1.021 hectáreas, parte de las cuales -462 hectáreas- fueron finalmente cultivadas con palma de aceite.

En tal sentido, se encuentran las afirmaciones de IVÁN PATIÑO PATIÑO, condenado por estos hechos, de las cuales se evidencia el conocimiento de **DAGOBERTO ANTONIO**, cuando manifestó que conoció a **REMBERTO** como desplazado, que estuvo como secretario auxiliar de FUNPAZCOR y a un *señor* **MONTIEL**, que tuvieron alguna relación directa con las tierras que finalmente ellos compran y le entregan en comodato a Palmas SA. Además, indicó que

²¹⁶ Mediante escritura pública 735 del 8 de octubre de 2002

nunca estuvo en esa fundación, la relación la tuvo directamente con *el señor REMBERTO*, que figuraba como secretario, y un *señor MONTIEL*.

En cuanto a la compra de tierras, este declarante expuso que no participó en la compra de tierras a los campesinos, eso lo hizo ACOPALMA, quienes tenían su aval con FUNPAZCOR.

En tales condiciones, al ser esta asociación precisamente una de las creadas y utilizadas por URAPALMA para realizar diversas maniobras fraudulentas, para lo cual necesitó de otros concertados para la consecución de los objetivos ilegales, como estos procesados, se tiene que tanto **DAGOBERTO ANTONIO** y **ROBIN MANUEL** actuaron conforme a las funciones que les correspondían para ello, lo cual se hizo más factible por su condición de militantes de las autodefensas, el primero de ellos precisamente del Bloque Héroes de Tolová, cuyo máximo comandante es DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, conocido como "Don Berna" o "Adolfo Paz", de quien RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA²¹⁷ aludió como propietario de Palmas S.A. y de las fincas que se encontraban sembradas con palma, al punto que seguidamente indicó:

"... en una oportunidad se presentó un inconveniente con esa finca y me pide el favor el señor Vicente que hable con el doctor Patiño, ya don Berna estaba en la cárcel, lo tenían en Itagüí, y a través del doctor Patiño nos desplazamos a la cárcel de Itagüí a solucionar un problema sobre esa finca..."

Este aspecto ya había sido mencionado por el postulado HASBÚN MENDOZA ante justicia transicional, en versión libre del 4 de junio de 2010, en la cual señaló a IVÁN PATIÑO PATIÑO como la persona que representaba la empresa palmera de "Adolfo Paz" o "Don Berna", valga decir, Palmas S.A.

Además, acerca de la participación del paramilitar "Adolfo Paz" en el proyecto de la palma aceitera y su titularidad en una de las empresas, FREDY RENDÓN HERRERA, alias "El Alemán", expuso:

"En el año 2004, el señor VICENTE CASTAÑO visitó la zona y yo me encontré con él en Pavarandó y me invitó y fuimos e hicimos el recorrido por la zona de las palmas en carro, en garrucha, a pie, caminamos, y ahí es donde yo veo los letreros y él me dijo vea esta es URAPALMA, es una empresa mía con otros

²¹⁷ En audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012

socios, está también don ADOLFO que tiene aquí palma, está Carepollo que tiene palma y otras personas que tienen palma en esta zona”.

De otro lado, respecto a **CALONGE ALCALÁ**, también se tiene que aceptó haber pertenecido a las AUC desde el año 2000 hasta el 2005, agrupación en la cual fungió como conductor de los CASTAÑO GIL.

En tales condiciones, el hecho de que a los justiciables se les vincule con los paramilitares no es de manera fortuita, ya que existe prueba directa e irrefutable acerca de su desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley, a raíz de la Ley 975 de 2005, esto es, en primer lugar, el informe de policía judicial del 25 de septiembre de 2007, suscrito por los funcionarios CARLOS MALAGÓN BELTRÁN y OCTAVIANO CASAS SÁNCHEZ y, en segundo término, las aseveraciones del coacusado **REMBERTO MANUEL** de que los acusados **-DAGOBERTO y ROBIN MANUEL-** fungían como empleados de los CASTAÑO GIL, máxime si se tiene en cuenta que ambos hacían parte de la Fundación para la Paz de Córdoba -FUNPAZCOR-, la cual pertenecía a VICENTE CASTAÑO, y en último lugar por la aceptación que el mismo **CALONGE ALCALÁ** realizó sobre su pertenencia a las autodefensas.

Así, pues, el conocimiento de los acusados respecto a la ilicitud de su conducta deviene inicialmente de que en ningún momento negaron su pertenencia a la asociación de marras ni aludieron a que hubiesen sido presionados o engañados por empresarios o superiores, que fue lo que ocurrió con varios empleados de URAPALMA y campesinos o pobladores en general, quienes prestaron sus firmas y copias de documentos de identidad por la promesa de beneficios que nunca se concretaron.

Finalmente, no obstante el Fiscal en sus alegatos de conclusión²¹⁸ solicitó en la parte conclusiva la condena de los enjuiciados **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO** y **ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ** por el delito de *Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica*, que prevé el artículo 337 del Código Penal, la suscrita no se pronunciará respecto a este delito por cuanto a los mismos se les precluyó la investigación por esta conducta punible mediante resolución de acusación del 5 de julio de 2011²¹⁹, razón por la cual, a

²¹⁸ Folios 1 y ss del C. 85

²¹⁹ Folios 160 y ss del C. 65

estas alturas no podría reabrirse ese debate, por cuanto ello conculcaría los derechos de defensa y al debido proceso.

Por lo demás, las consideraciones del Fiscal en las alegaciones iban dirigidas a pedir la absolución de los enjuiciados por este delito. Al respecto, en cuanto a **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO**, manifestó:

*"Finalmente, en lo que respecta al delito de **invasión de áreas de especial importancia ecológica**, consagra el artículo 337 de la ley penal, se consumará cuando se invada reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento.*

En el presente caso, se ha venido imputando a otros procesados esta conducta penal, por haber invadido terrenos de propiedad de las comunidades negras, apartadas por la ley 70 de 1993. Sin embargo, en el caso del procesado cuya conducta nos ocupa, encuentra el despacho que pese haber fungido como secretario de una asociación que sirvió como medio para la adquisición de fundos rurales, de manera irregular, lo que a la sazón generó actos de desplazamiento, no sucede lo mismo con el delito de invasión de áreas ecológicas, pues, figura como comprador directo de dichos terrenos, para considerarlo autor de esta conducta penal..."²²⁰.

Entretanto, en relación con **ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ**, el Fiscal no se refirió a la conducta contra el medio ambiente cuando concluyó:

"... Así, el conocimiento o conciencia de la voluntad que el procesado tuvo de la comisión de las conductas, deriva precisamente del dicho de su injurada, cuando asevera que se hizo miembro de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite "ACOPALMA". De modo que el actuar realizado por el procesado fue a título de dolo, es decir, tuvo conocimiento de la ilicitud y quiso realizar los punibles de concierto para delinquir y desplazamiento forzado..."²²¹.

Por tanto, se reitera, ante la evidente confusión de la Fiscalía, este Despacho no hará ningún pronunciamiento referente a la responsabilidad de estos acusados respecto al delito en contra los recursos naturales y el medio ambiente, pues, al habérseles precluído la investigación por el mismo, se debe dar aplicación al principio rector de cosa juzgada, pues la decisión quedó ejecutoriada y, por ende, tiene fuerza vinculante, al no demostrarse las salvedades dispuestas por el legislador en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal.

²²⁰ Folios 267 y 268 del C. 85

²²¹ Folio 272 del C 85

De otra parte, respecto a **GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO**, este procesado también aceptó haber militado en las autodefensas, sin embargo existe una inconsistencia en cuanto al bloque de militancia, pues mientras el informe de policía judicial indica que se desmovilizó del Bloque Héroes de Tolová, el acusado en su indagatoria manifestó que perteneció al Bloque Norte liderado por JORGE CUARENTA.

No obstante dicha divergencia, se partirá de la base de que este justiciable perteneció al Bloque Héroes de Tolová de las autodefensas, pues así lo informaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, informe que es rendido bajo la gravedad de juramento, según lo prevé el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, y conforme a actividades investigativas previas.

Ahora bien, como prueba directa de su participación en la agrupación paramilitar está no sólo su aceptación sino el informe de policía judicial de marras y, además, como prueba de sus actividades tendientes a favorecer el proyecto palmicultor, está el hecho de que hizo parte de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite -ACOPALMA-, una de las asociaciones utilizadas por URAPALMA para realizar diversas maniobras ilegales, como por ejemplo, poner a su nombre predios que inicialmente eran agrandados en su extensión mediante una accesión fingida y luego segregados para realizar diversas negociaciones como compraventas, comodatos, etc., con otros concertados, entre ellos varios empresarios, y con ello lograr no sólo el apoderamiento de terrenos colectivos y/o pertenecientes a pobladores que nunca los habían vendido, sino la consecución de beneficios bancarios y/o agrarios.

En efecto, al igual que los coacusados **DAGOBERTO ANTONIO** y **ROBIN MANUEL**, este justiciable actuó conforme a las funciones que le correspondía como integrante de la empresa criminal, lo cual obviamente se hizo más factible por su condición de militante de las autodefensas, concretamente del Bloque Héroes de Tolová, cuyo máximo comandante era DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, alias "Don Berna" o "Adolfo Paz", de quien, como se dijo

con antelación, RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA²²² aludió como propietario de Palmas S.A., aspecto que había sido referido por el postulado HASBÚN MENDOZA ante justicia transicional, en versión libre del 4 de junio de 2010, en la cual señaló a IVÁN PATIÑO PATIÑO como la persona que representaba la empresa palmera de “Adolfo Paz” o “Don Berna”, valga decir, Palmas S.A., paramilitar cuya participación en el proyecto palmicultor también fue dilucidada por FREDY RENDÓN HERRERA, alias “El Alemán”, tal como se relacionó con anterioridad.

Así las cosas, pese a que esta funcionaria es consciente, tal como se dijo con anterioridad, de que hubo un sinnúmero de campesinos y empleados engañados por los empresarios de URAPALMA, tales como **JAVIER JOSÉ DAZA PRETEL** y **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, a fin de que prestaran sus nombres, firmas y fotocopias de cédulas de ciudadanía, para que figuraran como miembros de las asociaciones creadas por dicha empresa, como le sucedió a PEDRO PABLO PALACIO CUESTA²²³, quien indicó que cuando se produjo el primer sembradío de palma, dicha empresa invitó a *“los campesinos a que sembrara, que ellos hacían un afiliamiento por persona, para sembrar 10 hectáreas por persona, entonces, hicimos lo siguiente, nos pidieron fotocopia de la cédula y la firma, nos hicieron firmar un documento que dizque para lo de la siembra de palma, pero cuando ya recogieron la firma, ya no se mencionó más nada de campesino sembrando palma, sino que ellos siguieron sembrando su palma, ellos mismos, o sea, que eso fue mentira, nunca nos entregaron esas 10 hectáreas para sembrar...”*; estos acusados, que figuran como miembros y/o representantes legales de las asociaciones de m̃arras, ejecutaron actos adicionales que dejan ver su conocimiento y su intencionalidad de consumir los ilícitos.

Acerca de la ilicitud del proceder de los enjuiciados en general y de la creación falaz de las asociaciones, este mismo testigo manifestó que las asociaciones de campesinos eran un engaño, ya que las mismas nunca existieron, respecto a lo cual aunó que cuando los empresarios de URAPALMA *“se vieron apretados, se imaginaron, creo yo que algo les iba a pasar, y entonces, se apresuraron a reunirse con los campesinos, con aquellos a los que ellos no le habían comprado tierras, y se inventaron la Asociación”*.

²²² En audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012

²²³ Folios 13 y ss del C. 21

También debe precisarse, en cuanto a las manifestaciones de RÁUL EMILIO HASBÚN MENDOZA referentes a que los justiciables **GABRIEL SEGUNDO, DAGOBERTO ANTONIO, ROBIN MANUEL y REMBERTO MANUEL** *"son idiotas útiles de un propósito o de un objetivo"*, que hubiese sido factible, viable o por lo menos verosímil la justificación de una mera utilización de estos enjuiciados para la consecución de unos fines ilegales, si ellos no hubiesen sido, en principio, militantes que posteriormente se desmovilizaron de la organización paramilitar, por lo menos en lo que se refiere a los tres primeros, y que sus actuaciones no hubiesen demostrado su conocimiento.

Por ejemplo, si bien **ROBIN MANUEL** manifestó en indagatoria²²⁴ que no participó en ninguna reunión de la Asociación Colombiana de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite -ACOPALMA-, también indicó que conocía al coacusado y también miembro de la asociación **REMBERTO MANUEL**, porque cuando *"uno estaba ahí en la Organización de las autodefensas la gente llegaba a vender las parcelas, él era intermediario para comprar las parcelas, él hablaba, él llamaba y decía esperen, la gente que iban a vender las parcelas llegaban y entonces él buscaba la plata y él hablaba, intermediaba por eso... intermediario entre los parceleros y las autodefensas, era el comisionista"*, a lo cual aunó que a veces lo recogía en la Finca La 15 y que en ese tiempo las parcelas las vendían a \$7.000.000, circunstancias que evidencian la cercanía de ambos en actividades propias de la organización delincuencia, como la compraventa de predios, una de las finalidades que finalmente también tuvieron las asociaciones de cultivadores, pues, a través de ellas, también se hicieron efectivas la ventas de un cúmulo de terrenos provenientes de accesiones simuladas con terrenos de propiedad colectiva.

Asimismo, **DAGOBERTO ANTONIO** aceptó pertenecer a la asociación de cultivadores, a la cual también perteneció **REMBERTO MANUEL**, la cual se financió con un préstamo de FUNPAZCOR, y HERMEN DE JESÚS MUÑOZ GONZÁLEZ *"fue quien le vendió las tierras a la asociación, unas mil veintiuna hectáreas de tierra"*.

Así las cosas, respecto a las alegaciones del doctor Pacheco Izquierdo, en cuanto a que sólo mediante Resolución 2809, del 22 de noviembre de 2000, el

²²⁴ Folios 203 y ss del C. 37

entonces INCORA efectivizó lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, en el sentido de adjudicar expresamente a la comunidad negra, organizada bajo el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, determinados territorios y que el INCODER mediante la Resolución 702, del 22 de marzo de 2006, procedió a la delimitación de los predios de propiedad privada existentes dentro de esos territorios que quedaban excluidos de los efectos de dicha ley; cabe precisarle al abogado que el trámite de adjudicación es un proceso que debe adelantarse por fases o etapas, lo cual no quiere decir que si las resoluciones de adjudicación se proferieron con posterioridad a la adquisición e implantación de los cultivos de palma, los mismos no se encuentren en terrenos de propiedad colectiva, por ello, no en vano los empresarios se valieron de varios artilugios para tratar de legalizar los terrenos.

En relación con **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, representante legal de la compañía Palmas del Curvaradó, la cual se constituyó ante la Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2003, para la suscrita también emerge inconcusa su responsabilidad en este asunto, en calidad de autor, de los delitos que se le endilgaron.

En principio, cabe precisar que al revisar los documentos que fueron hallados en la inspección judicial realizada por funcionarios de policía judicial, el 18 de julio de 2007²²⁵, a la oficina de dicha compañía, ubicada en la calle 49B # 64B-54, oficina 202 del edificio San Pablo, de esta ciudad, se encuentran un total de 52 escrituras públicas, elaboradas en la Notaría Única de Chigorodó, por el Notario Ramsés Escobar Henao, mediante las cuales el entonces representante legal de la compañía Palmas del Curvaradó S.A. y un cúmulo de beneficiarios de las tierras de comunidades negras organizadas en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, formalizaron su intención de asociarse *"en un convenio de alianza estratégica para iniciar un proyecto productivo de siembra de palma africana, que se regirá por las normas legales que regulan la materia, ley 70 de 1993..."*.

En razón de ello, y ante la adjudicación de terrenos que realizó el INCORA, mediante Resolución 02809, del 22 de noviembre de 2000, y *"las facultades de asignación y distribución de la Junta del Consejo comunitario del Río Curvaradó"* los adjudicatarios aportaron sus predios para que fuesen explotados

²²⁵ Acta de inspección judicial: folios 206 y ss del C. 8.



De la misma manera, el hecho de que se especifique en dichos contratos que el vendedor venía poseyendo el bien de forma ininterrumpida y pacífica finalmente lleva a pensar que no hay título individual y que, por tanto, el terreno hace parte



por Palmas del Curvaradó, a fin de cumplir con su objeto social, a cambio de una suma dineraria, que fluctúa según la extensión de la tierra, "*a título de arrendamiento de las tierras*" que casi en su totalidad fue por el valor de \$300.000 la

de los baldíos pertenecientes al territorio colectivo, razón por la que no podía venderse, como trató de hacerse en dichos contratos, precisamente por las prohibiciones que trae la Ley 70 de 1993 y, por ello, se fraguaron este tipo de argucias.

Además, respecto a la afirmación que traen las escrituras públicas referentes a las "*facultades de asignación y distribución de la Junta del Consejo Comunitario del Río Curvaradó*" y posterior firma del entonces representante legal del mismo, como si de un visto bueno se tratara, no obstante el inciso segundo del artículo 5º de dicha normatividad permite a los Consejos Comunitarios la delimitación y asignación de áreas al interior de las tierras adjudicadas, ello no los habilita de ninguna manera a la disposición arbitraria de los fundos, ni mucho menos su consenso o cohesión da visos de legalidad a un acto totalmente contrario a derecho.

En otras palabras, dicha ley tiene como objeto reconocer a las comunidades negras, por la ocupación ancestral que se ha venido transmitiendo de generación en generación, el derecho a la propiedad colectiva, justamente para garantizar su sostenimiento con sus prácticas de producción y el fomento de su desarrollo económico y social, conforme lo prevé el artículo 1º de la Ley 70 de 1993, por tanto, pese a las atribuciones que el legislador le dio a los Consejos Comunitarios, entre las mismas no está autorizar la realización de negocios jurídicos traslativos de dominio sobre los predios adjudicados por el Estado, pues ello contrariaría la intención proteccionista del legislador.

Del mismo modo, continuando con las irregularidades de los actos de marras, se encuentra la escritura pública 1.752, del 13 de noviembre de 2003²²⁶, entre el entonces representante legal de Palmas del Curvaradó, CARLOS MARIO ÁLVAREZ BARRERA y JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ, referentes a la concesión para la explotación por parte de este último de 145 hectáreas al primero, ubicadas en la vereda Las Menas del municipio de Riosucio (Chocó) y alinderada por el oriente con propiedad de Gabriel Anaya y Genaro Maldonado, por el occidente con la propiedad de Antonio León, por el norte con la propiedad de Valentín Causil y por el sur con propiedad de Elena Mestra; cuya procedencia del terreno, y en consecuencia la titularidad del mismo por parte del "*beneficiario de las tierras*", se soporta posteriormente en un contrato de

²²⁶ Folios 20 y ss del C. 9

compraventa del terreno, realizado entre JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ y ARTURO GARCÉS CASTRO, sin embargo, a esta funcionaria le parece extraño que dicho contrato está contenido en papel documentario de "formas minerva"²²⁷, cuya revisión data de junio de 2001²²⁸, empero el mismo fue suscrito supuestamente el 12 de febrero de 1987, esto es, en una formato revisado o actualizado casi 14 años después de la supuesta suscripción del contrato, papel documentario que, además, también fue utilizado en todos los contratos de compraventa de posesiones y mejoras realizados por Palmas del Curvaradó S.A.

Asimismo, se perciben inconsistencias en cuanto a varias de las resoluciones de adjudicación que se adjuntaron como sustento del origen de la adquisición por parte del beneficiario de los fundos, en el sentido de que la extensión del terreno que se relaciona allí no coincide con la que finalmente se puso en las escrituras públicas, la cual resulta muy superior a la realmente adjudicada. Tales son los casos de las escrituras 1.719, del 13 de noviembre de 2003²²⁹, entre Palmas del Curvaradó y JOSÉ PATRICIO VÉLEZ ALMARIO, respecto a 100 hectáreas que éste entrega para la explotación a la primera, como parte de la alianza estratégica, empero, en la resolución expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, el 26 de febrero de 1990, se adjudicaron fue 34 hectáreas y 8.671 mts²; las escrituras 1.722 y 1.751, de la misma fecha, en las que se habla de 135 hectáreas y 80 hectáreas con 2.700 mts², cuando realmente fueron adjudicadas 47 hectáreas con 5.061 mts²²³⁰ y 25 hectáreas con 7.323 mts²²³¹, respectivamente. En el mismo sentido, se encuentra la 1.716, del 13 de noviembre de 2003, en la que se alude a 30 hectáreas cuando realmente fueron adjudicadas 16 hectáreas.

En relación con estos predios, es que precisamente se desvanece completamente la presunción de inocencia que desde los albores de esta investigación resguardó a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, pues si bien es cierto éste inició, según el acta de constitución, como presidente y representante legal de Palmas del Curvaradó S.A., el 25 de junio de 2004²³², él mismo reconoció inicialmente en versión libre que es el gerente desde que

²²⁷ Línea de producto de Legis

²²⁸ En la parte inferior derecha del folio 22, C. 9

²²⁹ Folios 251 y ss del C. 8

²³⁰ Resolución de adjudicación del 28 de febrero de 1990, expedida por el INCORA, folios 297 del C. 8

²³¹ Resolución de adjudicación del 19 de septiembre de 1989, expedida por el INCORA, folios 10 del C. 9

²³² Según el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, folios 275 y ss del C. 9

Pues bien, inicialmente este justiciable se refirió a las alianzas estratégicas que realizó con 52 familias, a raíz de las cuales las mismas tienen el 20% del área que como empresa tengan sembrada, es decir, que como para ese momento

²³⁶ Artículo 6 de la resolución de marras, folios 187 y ss del C. 9

²³⁷ Folios 76 y ss del C. 14

inició la empresa en el año 2002 y posteriormente en su indagatoria del 11 de marzo de 2008²³³ manifestó que, aunque no era el representante legal para la época, lideró la alianza estratégica o productiva desde el segundo trimestre de 2003 con 52 familias, hecho que coincide con la cantidad de escrituras públicas introducidas en la actuación a raíz de la inspección judicial y que traen consigo

tenían 610 hectáreas de tierra cultivada *"debemos sembrarle a ellos 122 hectáreas, nosotros como avalistas de los préstamos, dándole la asesoría técnica, la provisión de la semilla y el acompañamiento y seguimiento del cultivo"*.

Posteriormente, afirmó que los terrenos le fueron comprados a esas 52 familias, aproximadamente en el año 2006, los cuales tenían los títulos del INCORA y, además, puntualiza que los vendedores fueron *"Elciario Palacios, Balentin Causal, Catalina Mármol Lemus, Benjamín Mosquera Agualimpia"* terrenos en los cuales está sembrada la palma, cuyos cultivos se iniciaron en el 2003 y explicó así el procedimiento:

"Yo en el 2001 reuní las 52 familias ellas me contaron que eran desplazadas de Caño Claro, que habían sido desplazadas de sus territorios por actores armados como yo ya había montado procesos asociativos de plátano en Pozorro, con las comunidades, ellos me propusieron que ya que se estaban adelantando cultivos en la zona de la Palma, que porque no montábamos un proyecto en esas tierras que yo consiguiera los inversionistas y ellos ponían la tierra. Ellos me llevaron al representante legal del Consejo Comunitario, señor Manuel Moya, es del Curvaradó y firmamos en la notaría de Chigorodó la alianza estratégica, con el permiso de su representante legal; en la notaría de Chigorodó, todos los campesinos fueron voluntariamente, llevaron sus documentos que podían aportar en su momento, se realizaron toda las escrituras y se formalizó la alianza, luego entramos al territorio, cada uno de los campesinos mostró su terreno, se midió y se le canceló la suma de trescientos mil pesos la hectárea de tierra..."

En tales condiciones, a fin de cotejar estas aseveraciones, se verificaron las 52 escrituras públicas que se hallaron en la inspección judicial realizada en Palmas del Curvaradó el 18 de julio de 2007:

N.	Escritura Pública	Fecha	Adjudicatario del predio	Valor
1	1.713	13/11/2003	Esther Valeta Oviedo	\$33.000.000
2	1.714	13/11/2003	Ascario José López Beltrán	\$17.000.000
3	1.716	13/11/2003	Santos Manuel Quintana Vélez	\$ 9.000.000
4	1.717	13/11/2003	Marcelino Tordecilla Gutiérrez	\$45.000.000
5	1.718	13/11/2003	Cecilio Tordecilla Maldonado	\$81.000.000
6	1.719	13/11/2003	José Patricio Vélez Almario	\$30.000.000
7	1.720	13/11/2003	Norberto Cabrera VERTEL	\$32.400.000
8	1.721	13/11/2003	Felisa Santos Barrios	\$ 4.500.000
9	1.721	13/11/2003	Feliciano Vargas Ramos	\$21.000.000
10	1.722	13/11/2003	Tomás José Hernández Pérez	\$40.500.000
11	1.723	13/11/2003	Roebollei Torres Solano	\$19.200.000
12	1.724	13/11/2003	Gustavo Manuel Cardozo Montiel	\$51.000.000
13	1.725	13/11/2003	Melvi Antonio Hernández Santos	\$ 9.000.000
14	1.726	13/11/2003	Elis Johana Plazas Recuero	\$33.000.000
15	1.727	13/11/2003	Silfredo Solipaz Rodríguez	\$11.100.000
16	1.728	13/11/2003	Cristóbal Martínez Cuavas	\$42.000.000

17	1.729	13/11/2003	María Isabel Julio Valdelamar	\$30.000.000
18	1.730	13/11/2003	Eber Facundo Díaz Hernández	\$18.000.000
19	1.731	13/11/2003	Pedro Avilio Luna	\$ 9.000.000
20	1.732	13/11/2003	Domingo Otoniel Plaza Acosta	\$ 3.000.000
21	1.733	13/11/2003	Blas Ramos Álvarez	\$21.000.000
22	1.734	13/11/2003	José Antonio Correa Pérez	\$21.000.000
23	1.735	13/11/2003	Juan Suárez Alarcón	\$45.000.000
24	1.736	13/11/2003	Marcelino Suárez Alarcón	\$45.000.000
25	1.737	13/11/2003	Afranio Paz Cuesta	\$111.000.000
26	1.738	13/11/2003	Pedro Manuel Gómez Vargas	\$22.500.000
27	1.739	13/11/2003	Jhon Jairo Ibarquén Palomeque	\$ 9.000.000
28	1.740	13/11/2003	Manuel Esteban Montalvo Flórez	\$36.000.000
29	1.741	13/11/2003	Set Galindo Ibarra	\$24.000.000
30	1.742	13/11/2003	Obed Galindo Ibarra	\$ 6.000.000
31	1.743	13/11/2003	Alfredo Maldonado Beltrán	\$30.000.000
32	1.744	13/11/2003	Hernán Miguel Cardoza Mejía	\$27.000.000
33	1.745	13/11/2003	Luis Fernedis Mena Moreno	\$ 9.000.000
34	1.746	13/11/2003	Edilberto Torres Causil	\$11.400.000
35	1.747	13/11/2003	Luis Alberto Maldonado Altamiranda	\$18.000.000
36	1.748	13/11/2003	Alejandro Anaya Arroyo	\$45.000.000
37	1.749	13/11/2003	Antonio Ibañez Carrascal	\$60.000.000
38	1.750	13/11/2003	Valentín Antonio Causil Hernández	\$24.000.000
39	1.751	13/11/2003	Valentín Antonio Causil Hernández	\$24.081.000
40	1.752	13/11/2003	Julio Carmelo Causil Hernández	\$43.500.000
41	1.753	13/11/2003	Hernando Manuel Pérez Nuñez	\$ 9.000.000
42	1.754	13/11/2003	Marcial Narvaez Pérez	\$12.000.000
43	1.755	13/11/2003	Edelmira Contreras Maldonado	\$22.500.000
44	1.756	13/11/2003	Luis Felipe Peña Cogollo	\$45.000.000
45	1.757	13/11/2003	Emilia Rosa Babilonia Muñoz	\$27.600.000
46	1.758	13/11/2003	Marco Antonio Úsuga Carmona	\$42.000.000
47	1.759	13/11/2003	Jorge Eliécer Hernández Santos	\$10.200.000
48	1.760	13/11/2003	Manuel Esteban Bolaño Pacheco	\$36.000.000
49	1.766	14/11/2003	Francisco Miguel Plaza Acosta	\$60.000.000
50	1.770	19/11/2003	Jorge Elías López Flórez	\$30.000.000
51	1.774	19/11/2003	Pedro Ortega Chala	\$33.000.000
52	082	04/02/2004	Carmen Elena Mestra Hernández	\$14.000.000

Cabe advertir que todas estas escrituras públicas fueron realizadas en la Notaría Única del Círculo de Chigorodó (Antioquia), cuyo titular era el doctor RAMSÉS ESCOBAR HENAO.

Como puede observarse, entonces, tan sólo una de las cuatro personas referidas por el procesado como vendedores de los terrenos, esto es "*Balentin Causil*", que el Despacho entiende como Valentín Antonio Causil Hernández, hace parte de los supuestos vendedores de los terrenos, si es que pudiese equipararse una compraventa con el aporte de sus predios para adelantar el proyecto palmicultor a cambio de una aparente retribución económica y no de un 20% del área que sembrara la empresa Palmas del Curvaradó como lo indicó **GABRIEL JAIME**, último aspecto que, además, ni siquiera se encuentra relacionado en las escrituras públicas suscritas en la Notaría Única de Chigorodó.

Ahora bien, partiendo de la base de que fue una mera equivocación del procesado, pues las compraventas con ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA, BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA y CATALINA MÁRMOL LEMUS no se protocolizaron en la Notaría de Chigorodó ni mucho menos fueron realizadas en el 2003 ni en el 2006, pues las mismas se realizaron en la Notaría 26 de Medellín, las dos primeras mediante Escritura Pública 491, del 28 de febrero de 2005, y la segunda mediante Escritura Pública 1.216, del 10 de mayo de 2005; ello tampoco coincide con la afirmación del justiciable, referente a que los sembradíos de palma se iniciaron en el año 2003 luego de haber comprado los terrenos a 52 familias, que fueron las que supuestamente le propusieron el proyecto palmicultor en el año 2001.

Aunado a lo anterior, si en gracia de discusión se aceptare que dichas alianzas estratégicas o productivas que lideró el acusado **SIERRA MORENO**, según sus aseveraciones, con 52 familias, en relación con lo cual, se reitera, se encuentran el mismo número de escrituras públicas, que aluden a un "*compromiso de participación*", y contratos de compraventas de posesión que se hallaron en la inspección a Palmas del Curvaradó, fueron actos legales, que no buscaban dar apariencia de legalidad a actos que no lo son, y casi que altruistas para llevar desarrollo y progreso a la región y, por ende, a *sus campesinos*, que por años fueron abandonados por el negligente e inoperante Estado; esa benevolencia y generosidad se evaporan al contrastar las declaraciones de algunos de los poseedores o adjudicatarios sobre el origen de la supuesta alianza.

Ciertamente, en varias declaraciones se entrevé que no se trató de una negociación como se quiere hacer ver, sino de una imposición, tal como lo refirió CARMEN ELENA MESTRA HERNÁNDEZ²³⁸, quien aparece como adjudicataria de tierras en la escritura pública 082²³⁹, del 4 de febrero de 2004 y, por ende, como quien entrega su tierra aparentemente de manera voluntaria para la explotación económica por parte de Palmas del Curvaradó, según la escritura notariada el 26 de abril de 2004 y, además, contradictoriamente, como se dijo con antelación, en un contrato de compraventa de posesión en calidad de vendedora.

²³⁸ Folios 281 y ss del C. 11

²³⁹ Folios 267 y ss del C. 8

Esta deponente, quien si bien en un principio afirmó que fue desplazada por la violencia en 1997 y por la llegada de los paramilitares, posteriormente expresó que nunca vendió su finca "Los Robles" al procesado **GABRIEL JAIME**, ya que *"eso fue un cambio de tierras, yo no recibí ni un peso, ese negocio lo hicimos en la notaría de Chigorodó"*, cambio de tierra que consistía en canjear su predio por el de otro poblador llamado ANDRÉS BABILONIA, a quien ellos le habían comprado su finca pero que actualmente está reclamándola porque le dieron un *precio muy bajo*.

Estos pormenores de los hechos también desdicen tanto la veracidad como la legalidad del contenido de los mismos, y por supuesto la buena fe en su suscripción, pues, en primer lugar, el objeto de ambos no concuerda con el señalado en las escrituras públicas y compraventas y, en segundo término, si en gracia de discusión se aceptare que se dio aplicación a la figura de la permuta, la misma tampoco se realizó bajo parámetros legales, pues, por el contrario, con fundamento en la misma también se constituyó un acto de desplazamiento, ya que dicha declarante indicó no sólo que el sobrino de **GABRIEL JAIME**, llamado JUAN PABLO, advirtió a sus hijos CRISTOBAL y LUIS ANAYA que *"los internacionales, no podían decirles nada, porque ellos estaban aquí"*, sino porque unos comisionistas llamados CECILIO TORDECILLAS, MANUEL y JULIO CAUSIL la buscaron y le dijeron que vendiera esas tierras, porque *"si no las vendía se las cogían"*.

Estas advertencias y manifestaciones son las que precisamente dejan de lado cualquier voluntariedad por parte de los pobladores, llámense propietarios o meros poseedores de tierra en la región y, por el contrario, ponen en evidencia las presiones y amenazas a las que fueron sometidos la mayoría de ellos para que de alguna manera cedieran los derechos que tenían sobre los fundos, situación que constituyó, por ende, un verdadero acto de desplazamiento, principalmente si se tiene en cuenta, en este caso, que no obstante la declarante se rehusó inicialmente a hacer cualquier tipo de negociación, posteriormente la llamó JULIO CAUSIL y le dijo que *"ya se habían metido en la finca, que tenían maquinaria en ella"*, motivo por el que fue a Chigorodó, se encontró con JUAN PABLO e hicieron lo papeles, pese a que estaba convencida de que el supuesto canje que iba a hacer no la favorecía: *"No a mi*

no me pareció benéfico, porque esa no era mi tierra yo quería mi tierra, yo hice el negocio porque no me dejaron más alternativa, sino fue cambiarla”.

Es más, resulta tan clara la intención delincuencia de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, que trató de aparentar la realización de diversos negocios jurídicos, lógicamente, a efectos de evadir las prohibiciones de la Ley 70 de 1993, pues la misma **CARMEN ELENA** expresó que no tenía títulos de su finca porque la misma hace parte del título colectivo. Tampoco puede alegarse la ignorancia acerca de la existencia de dicha normatividad, puesto que los mismos empresarios de Palmas del Curvaradó, desde el mismo año de su constitución, valga decir, el 2003, hicieron mención de ella en las escrituras públicas de alianza estratégica que se relacionaron con antelación.

Las afirmaciones de **MESTRA HERNÁNDEZ** coinciden con las aseveraciones de **ANDRÉS BABILONIA CUADRADO**²⁴⁰, desplazado en 1997 de la finca “Cielito”, ubicada en Caño Claro, sobre la presión de los paramilitares, quien indicó que vendió por las presiones que ejerció alias El Diablo, quien le dijo en el 2001 que si no vendía le invadían la tierra, porque él no se podía comprometer a cuidar la tierra del que no vendiera, ya que todos estaban vendiendo. Este deponente también indicó que acudió a la finca “El Congo” para que le pagaran sus tierras, lugar en el que se encontraba **JAVIER DAZA**, **TERESA CASTAÑO**, alias Palillo, a quien reconoció como jefe paramilitar, y un grupo de gente vestida de civil con armas cortas.

En tales condiciones, estos pormenores de los hechos demuestran, en primer término, que ambos declarantes también fueron compelidos, de una u otra manera, para no volver a sus fincas y desapropiarlos de las mismas; y en segundo lugar, la relación directa e inocultable que tenía **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** y, por ende, la empresa que representaba, Palmas del Curvaradó, con empresarios de URAPALMA y las personas vinculadas a la misma.

En efecto, estas declaraciones son prueba de que **GABRIEL JAIME** y sus allegados, tenían plena disposición del predio que le impusieron a **MESTRA HERNÁNDEZ**, a fin de que desalojara el suyo, valga decir, el terreno de **BABILONIA CUADRADO**, el cual, se reitera, fue pagado por la mano derecha

²⁴⁰ Folios 296 y ss del C. 11

de los paramilitares CASTAÑO GIL, en la finca El Congo, señalada, además, por un sinnúmero de declarantes como el lugar en el que alias "*Teresa Castaño*" les pagaba sus predios, sitio en el que también se encontraba el coprocesado **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, gerente de URAPALMA, **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, alias "*Teresa Castaño*", y otros paramilitares, todos los cuales, como se indicó en un principio, tenían un vínculo directo con el comandante paramilitar JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL, alias "*El Profe*".

En otras palabras, los empresarios y trabajadores de Palmas del Curvaradó trabajaron conjuntamente con URAPALMA en el proyecto palmicultor, conclusión a la que se llega fácilmente por la cercanía entre la constitución de URAPALMA -diciembre de 1999- y la iniciación de actividades de implementación por parte de **GABRIEL JAIME** -año 2001²⁴¹-, su cercanía y amistad con el líder paramilitar RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA y, obviamente, por el hecho de que no es posible, a la luz de la sana crítica, que a un sector dominado netamente por los paramilitares en ese momento, llegaran a posesionarse, sin ningún tipo de permiso, venia, cooperación o asociación, otras empresas palmicultoras que finalmente iban a ser su competencia. En conclusión, se trata de un proyecto de paramilitares y para los paramilitares.

No puede pensarse cosa distinta si, como viene de verse, no existía realmente una independencia entre cada una de las empresas asentadas en el sector, que finalmente resultaron involucradas en este proceso, principalmente si todos sus representantes o directivos se unieron a fin de hacer supuestos acuerdos con los consejos comunitarios de las comunidades negras, tal como lo indicó el mismo **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** en su indagatoria. Es más, era tanta la afinidad y cooperación mutua entre los empresarios de URAPALMA y **GABRIEL JAIME** que **DAZA PRETELT** manifestó que en la empresa que el representaba tuvieron dos previveros y viveros de palma, y uno de ellos fue alquilado por un primo hermano de **SIERRA MORENO**²⁴², aspecto que también fue corroborado por este último acusado en ampliación de indagatoria²⁴³, en el sentido de que facilitó "*unas tierras que administraba de Fabio Moreno, mi tío, para que ampliara el vivero y más personas pudieran adquirir la semilla más fácilmente, pues la finca estaba al bordo de la carretera*".

²⁴¹ Según lo indicó en versión libre del 26 de septiembre de 2007, folio 76 y ss del C. 14

²⁴² Folios 271 y ss del C. 15

²⁴³ Del 30 de julio de 2010, folios 152 y ss del C. 39

insistentemente ha aludido el procesado **SIERRA MORENO**, obvio, porque nunca se trató de una alianza, ni de nada que tuviese que ver con el acuerdo de voluntades, sino de una estrategia que se redujo a obligar a los tenedores o propietarios a entregarles sus lotes y luego aparentar la legalidad en la adquisición de los mismos.

En este punto cabe precisar que las aseveraciones de este justiciable en cuanto a que fue de los últimos empresarios en llegar a la región, la cual conoció tan solo en el 2004, cuando se iniciaron los trabajos, porque los negocios se realizaron en Chigorodó, para el Despacho no son verosímiles, puesto que resulta ilógico y absurdo que una persona con tanta experiencia en el campo empresarial y del comercio, decida invertir, y con ello arriesgar el patrimonio familiar, miles de millones de pesos en un proyecto agrícola que está en ciernes, con la mera proposición de campesinos iletrados, y en terrenos que desconoce totalmente, ya que según quiere hacer creer primero hace las negociaciones con los campesinos en noviembre de 2003 y en el 2004 conoce la región.

Finalmente, tampoco es cierta ni posible la afirmación de **SIERRA MORENO**, en el sentido de que al "*mucho tiempo*" de haber iniciado el proyecto palmero en la zona, cuando llegaron al sector las ONG, fue que se enteraron de la existencia de la Ley 70 de 1993, puesto que en las mismas alianzas estratégicas, realizadas en su mayoría en el año 2003 *-por lo menos documentalmente-* se plasmó expresamente dicha normatividad, es más, fue el soporte o fundamento de las mismas. Además, el mismo postulado HASBÚN

Además, también resulta discordante que **SIERRA MORENO** diga que fue contactado por **MANUEL DENIS BLANDÓN**, **EMILIANO ROMAÑA**, **LINKON PAZ**, **EDUARDO RENTERÍA**, **AFRANIO PAZ** y **CLODOMIRO PAZ** con el ofrecimiento de que les ayudara a montar un proyecto productivo en las tierras que ellos poseían en la región del Atrato, desde 30 o 40 años atrás, en unas tierras con título y con resoluciones del INCORA y otras con una posesión en el tiempo pacífica e ininterrumpida y que, luego de hablar con su familia y tener su aprobación, se reunió de nuevo en un hotel con el primero de ellos y las 52 familias; mientras que, por su parte, **MANUEL GREGORIO** indique que un ingeniero donde trabajaba le comentó, después de contarle acerca de su situación de desplazamiento de la cuenca de Jiguamiandó, que tenían unos patrones interesados en comprar "*una tierrita por allá para sembrar palma*", por ello este procesado le manifestó que iba a averiguar con la gente si querían vender algún pedazo de tierra para "*mejorar la forma de vivir*", luego lo contactó **FABIO MORENO** -familiar del empresario²⁴⁷- y lo citó a una finca, en la que también se encontraba su hijo **JUAN CARLOS MORENO**, les mostró parte de la tierra y le dijeron "*que les había gustado mucho, que eran unas tierras excelentes*".

Posteriormente, le dijeron que fuera a Medellín a reunirse con ellos, **FABIO** le dijo que tenía otros familiares y sobrinos a los que podrá gustarle la tierra "*porque les gustaba montar proyectos*", se fueron a una feria de ganado y le presentaron a **GABRIEL JAIME**, a quien le contaron acerca de su

Caño Claro y "se le cambió la tierra que tenía en la mitad del proyecto por una tierra hasta mejor ubicada", sin embargo, la dejaron como integrante de la alianza.

Estas aserciones no sólo contradicen los hechos relatados por MESTRA HERNÁNDEZ y BABILONIA CUADRADO, sino las leyes de la lógica, porque no es verosímil que una persona que **renuncia** a participar en una *alianza estratégica* firme documentos notariales que fundamentan la misma -*escritura pública 082 del 4 de febrero de 2004*-, se le paguen \$14.000.000 y, además, se le entregue una tierra "*hasta mejor ubicada*", simplemente por hacer una permuta, figura que tampoco quedó establecida documental ni legalmente, máxime si CARMEN ELENA en su declaración manifestó que ella quería su tierra, que no deseaba cambiarla, pero finalmente no tuvo más opción.

Además, esa participación forzada del *campesinado* en las alianzas, también se deduce de las afirmaciones del acusado, pues si ella estaba renunciando era porque no quería hacer parte de la supuesta alianza, entonces por qué seguir utilizando su nombre y su predio como parte de las 52 familias a las que insistentemente ha aludido el procesado **SIERRA MORENO**, obvio, porque nunca se trató de una alianza, ni de nada que tuviese que ver con el acuerdo de voluntades, sino de una estrategia que se redujo a obligar a los tenedores o propietarios a entregarles sus lotes y luego aparentar la legalidad en la adquisición de los mismos.

Por lo demás, ni siquiera la versión que dio el acusado acerca de la génesis de su negocio con la palma, concuerda con lo relatado por **MANUEL GREGORIO DENNIS BLANDÓN** en su indagatoria²⁴⁶ y en general con las versiones de todos los vendedores que, si bien manifestaron que vendieron voluntariamente, indicaron, en su mayoría, que fueron contactados por **MANUEL GREGORIO, JUAN PABLO HERRERA y/o CECILIO TORDECILLAS**, y no que se reunieron en un hotel **SIERRA MORENO, DENNIS BLANDÓN** y las 52 familias para acordar la alianza estratégica, es más, algunos de ellos manifestaron que nunca tuvieron trato directo con el acusado **GABRIEL JAIME**, sino que todo lo hicieron a través del respectivo intermediario.

²⁴⁶ Folios 167 y ss del C. 23

Además, también resulta discordante que **SIERRA MORENO** diga que fue contactado por **MANUEL DENIS BLANDÓN**, **EMILIANO ROMANA**, **LINKON PAZ**, **EDUARDO RENTERÍA**, **AFRANIO PAZ** y **CLODOMIRO PAZ** con el ofrecimiento de que les ayudara a montar un proyecto productivo en las tierras que ellos poseían en la región del Atrato, desde 30 o 40 años atrás, en unas tierras con título y con resoluciones del INCORA y otras con una posesión en el tiempo pacífica e ininterrumpida y que, luego de hablar con su familia y tener su aprobación, se reunió de nuevo en un hotel con el primero de ellos y las 52 familias; mientras que, por su parte, **MANUEL GREGORIO** indique que un ingeniero donde trabajaba le comentó, después de contarle acerca de su situación de desplazamiento de la cuenca de Jiguamiandó, que tenían unos patrones interesados en comprar *"una tierrita por allá para sembrar palma"*, por ello este procesado le manifestó que iba a averiguar con la gente si querían vender algún pedazo de tierra para *"mejorar la forma de vivir"*, luego lo contactó **FABIO MORENO** -familiar del empresario²⁴⁷- y lo citó a una finca, en la que también se encontraba su hijo **JUAN CARLOS MORENO**, les mostró parte de la tierra y le dijeron *"que les había gustado mucho, que eran unas tierras excelentes"*.

Posteriormente, le dijeron que fuera a Medellín a reunirse con ellos, **FABIO** le dijo que tenía otros familiares y sobrinos a los que podrá gustarle la tierra *"porque les gustaba montar proyectos"*, se fueron a una feria de ganado y le presentaron a **GABRIEL JAIME**, a quien le contaron acerca de su desplazamiento y que *"porqué no montaban un proyecto para ayudarnos"*, le dijo que iba a hablar con otros familiares para ver si conseguían otros socios en la región, razón por la cual lo mandaron a hablar con la otra gente para ver *"si estaban o no de acuerdo a entrar a esa negociación"*.

Así las cosas, ¿quién contactó a quién? **MANUEL GREGORIO** a **GABRIEL JAIME** o la familia de éste al primero; y ¿de quién surgió la idea del proyecto de la siembra de palma? De **SIERRA MORENO** y su familia, de quienes cabe recordar que son ganaderos y comerciantes desde hace muchos años; o de un poblador que supuestamente se dedicaba a la agricultura del pancoger.

²⁴⁷ Según lo confirmó el mismo procesado en ampliación de indagatoria del 30 de julio de 2010, folios 152 y ss del C. 39

En fin, son tantas las contradicciones, que se hacen inverosímiles las exculpaciones de **SIERRA MORENO**, máxime si se tiene en cuenta que las mismas también se contraponen a la documentación recaudada en el expediente, como lo referente a que mientras que la mayoría de compraventas - por lo menos las que tienen fecha- fueron suscritas en noviembre de 2003, las escrituras públicas acerca de las alianzas estratégicas, en su gran mayoría, son del 13 de noviembre de 2003, lo que se contrapone a que:

"... primero se dio las compraventas, y después hicimos la alianza, no recuerdo al cabo de cuanto tiempo, nos dimos cuenta que las tierras eran de las comunidades cuando vino una doctora MARÍA INÉS que había sido gerente de INCODER... Que yo recuerde el mismo día no se hicieron esas dos cosas, sí se había hablado de eso pero que yo recuerde ese mismo día no..."²⁴⁸.

Y es que realmente este procesado no podía reconocer que se firmaron o suscribieron el mismo día, como realmente sucedió con varias de ellas, porque ello demostraría que realmente sí conocían las prohibiciones de la Ley 70 de 1993 y sus fines ilegales.

De otro lado, retomando las escrituras públicas de "COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN" o alianza estratégica que se acaban de relacionar, debe destacarse que en el informe de investigador de laboratorio, del 22 de octubre de 2008, suscrito por el técnico profesional en documentología de la SIJIN, CARLOS ALONSO MAHECHA GONZÁLEZ²⁴⁹, se pormenorizaron los hallazgos en las escrituras públicas 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.741, 1.742, del 13 de noviembre de 2013, luego del análisis que se realizó a partir de la inspección realizada en la Notaría Única de Chigorodó, referentes a alteraciones supresivas y aditivas.

En efecto, por ejemplo en la escritura pública 1.713, se establecieron, además de otras alteraciones, la siguiente:

"La misma hoja 2003-0041718 en su anverso presenta alteración mediante supresión por enmascaramiento u obliteración, y adición sobreponiendo con máquina de escribir los siguientes grafismos: "TREINTA Y TRES", "DE---",

²⁴⁸ Indagatoria de Manuel Gregorio Denis Blandón, folios 167 y ss del C. 23

²⁴⁹ Folios 104 y ss del C. 21

"33.000.000,00"; área que observada se precisa de los caracteres primigenios o primitivamente impresos: "DIECISEIS", "QUINIENTOS MIL", "16.500.000,00".

Igualmente, en las escrituras 1.714 y 1.715, de la misma fecha, se estableció tal alteración, pues en la primera de ellas se cambia el valor que supuestamente el propietario o poseedor de la tierra recibe por parte de Palmas del Curvaradó S.A., ya que en la primera de ellas se cambia la cifra original de \$8.850.000 por la de \$17.700.000, y en la segunda, se varía la de \$7.500.000 por \$21.000.000.

Asimismo, en todas las escrituras públicas analizadas se encontraron, además de otros enmascaramientos y variaciones -las cuales *"no se encuentran acordes con el Decreto 960 de 1970, estatuto del Notariado"*-, que fueron realizadas en dos o tres tiempos gráficos, esto es, que no se elaboraron en un solo momento.

Estas alteraciones y demás hallazgos de irregularidades, le dan mayor veracidad a las declaraciones de las víctimas del proceder de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, acerca de su arbitrariedad, manejo ilegal y consecuentes despojos de las tierras, ya que, no obstante varios de los que suscribieron las supuestas alianzas estratégicas con este enjuiciado, tales como, RUGERO MANUEL VÉLEZ RAMOS²⁵⁰, WILSON LUNA MALDONADO²⁵¹, JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ²⁵², CRISTÓBAL MARTÍNEZ CUAVAS²⁵³, VALENTÍN ANTONIO CAUSIL HERNÁNDEZ²⁵⁴, entre otros, manifestaron que lo realizaron voluntariamente, otros varios pobladores se dolieron de sus actuaciones y las de sus ayudantes, tal como se ha señalado con antelación y como se verá a continuación.

Además, se debe tener en cuenta que la actuación de **GABRIEL JAIME** no sólo se circunscribió a las familias a las que aludió sino a otros poseedores y/o propietarios.

En relación con este aspecto, en principio a esta funcionaria le parece importante resaltar la participación del sujeto al que aludieron varios de los testigos como JUAN PABLO, a quien también algunos identificaron como

²⁵⁰ Hijo de JOSÉ PATRICIO VÉLEZ ALMARIO, folios 2 y ss del C. 20.

²⁵¹ Hijo de PEDRO AVILIO LUNA, folios 8 y ss del C. 20

²⁵² Folios 14 y ss del C. 20

²⁵³ Folios 19 y ss del C. 21

²⁵⁴ Folios 27 y ss del C. 21

sobrino de **GABRIEL JAIME**. Se trata de JUAN PABLO HERRERA, acerca del cual el mismo acusado reconoció que actuó como su comisionista.

Al respecto, SOFANOR ENRIQUE GARAVITO MERCADO²⁵⁵, quien manifestó que pertenecía a la cuenca de Curvaradó -Andalucía-, sin embargo se desplazó a raíz de la violencia, dijo que en el año 2002, alias "Palillo" lo buscó en Chigorodó y le ofreció \$200.000 por hectárea de la tierra que poseía, valor que manifestó que no le servía, razón por la cual dicho sujeto le dijo que independientemente de si vendía o no, la tierra la iban a sembrar de palma *"porque no vamos a dejar tierra separada a nadie"*²⁵⁶, razón por la que finalmente le *"tocó acceder a la proposición"*.

Del mismo modo, este testigo aludió a que a su suegro ELADIO BARRAGÁN le tocó vender su finca por presiones de un individuo al que identificó como JUAN PABLO, sobrino de **JAIME SIERRA**; que en una ocasión su hermano JUAN MANUEL GARAVITO se encontró a JUAN PABLO y le manifestó sobre la pertenencia del terreno, sin embargo, el mencionado JUAN PABLO le respondió *"que apenas se fueran los americanos iban a acabar hasta con el nido de la perra"*.

Por su parte, LUZ MARY CABEZAS MARTÍNEZ²⁵⁷, cuya finca se situaba en la vereda Apartadocito de Riosucio (Chocó), también salió desplazada en 1997 hacia Chigorodó, por los enfrentamientos entre los grupos paramilitares y la guerrilla. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que les *"estaban robando las tierras"* aparecieron los compradores, por tanto, su padre le otorgó un poder para que vendiera, hizo la negociación con un sujeto llamado JUAN PABLO, empero, al solicitar un certificado de tradición y libertad se percataron de que las tierras estaban a nombre de RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA y JOSÉ DARÍO PAEZ CALLE, no obstante aún no habían vendido, razón por la cual denunciaron esos hechos.

Posteriormente, los llamaron a negociar, **JAIME SIERRA** mandó a JORGE ANTONIO, quien estuvo unos días en Chigorodó, y le manifestó que *"se habían robado las tierras porque la gente había desocupado y pensaron que nunca iban a reclamar"*.

²⁵⁵ Folios 162 y ss del C. 5

²⁵⁶ Folios 162 y ss del C. 5.

²⁵⁷ Folios 165 y ss del C. 5

Igualmente, este testigo indicó que a su hermano ÓSCAR CABEZAS le cultivaron su finca con palmas sin su permiso, cultivo que era de propiedad de **JAIME SIERRA**, quien le propuso que fueran socios. Además, dijo que este acusado es con quien tienen conflictos porque le dijo a su padre que vendiera su finca.

Entretanto, JOSÉ ANTONIO CORREA PÉREZ²⁵⁸, arguyó que tenía una tierra en Curvaradó, salió desplazado por la violencia en 1997 y, cuando se encontraba en Turbo, fue a buscarlo un paramilitar llamado WILSON TORDECILLA, lo llevaron a Bajirá y habló con un sujeto JUAN PABLO, le hicieron firmar un papel en la Notaría de Chigorodó y actualmente su finca está totalmente sembrada de palma.

Como motivo de la negociación de sus predios, adujo que al ver que lo fueron a buscar y veía que el que no vendía, vendía la viuda, le tocó vender. Además, concluyó que vendió obligado *porque traía un paramilitar a la espalda*. Por tanto, indicó que se encontraba en la zona humanitaria para recuperar sus tierras.

Así las cosas, este tipo de tejemaneje es propio de la concertación en la que incurrió el procesado con otros individuos, entre ellos paramilitares, para la obtención de las tierras o para garantizar que las mismas permanecieran en su poder, a fin de asegurar la implementación, el desarrollo y la efectivización de los resultados del proyecto palmero. Por tanto, pese a que el comandante paramilitar RAÚL EMILIO HASBÚN²⁵⁹ trató de separar a **SIERRA MORENO** de las autodefensas *-seguramente por la amistad que él mismo reconoció que tiene con el acusado-*, aludiendo a que los aportes que éste hizo a la organización sólo tuvieron que ver con el sector ganadero y no palmero, las declaraciones de varias víctimas del accionar conjunto de paramilitares, Ejército Nacional y palmicultores, entre ellos este acusado, advierte sin lugar a dudas su concertación y su ánimo de desplazar a varios individuos que, como viene de verse, pese a que trataron de retornar a sus predios, de una u otra manera se lo impidieron.

²⁵⁸ Folios 115 y ss del C. 6

²⁵⁹ Declaración de audiencia pública del 3 de diciembre de 2012.

Así las cosas, no existió una verdadera negociación, una alianza ni un convenio con los campesinos, pues no precedió la voluntad libre y consciente de su parte; tampoco existió legalidad en los actos jurídicos, ya que los mismos fueron prevalidos de amenazas y todo tipo de presiones, y soportados en artificios para su constitución, obviamente para aparentar una legalidad que, como viene de verse, no tienen, máxime si se tienen en cuenta varias declaraciones de pobladores que relataron las diferentes presiones de que fueron víctimas por parte de allegados a Palmas del Curvaradó.

Por ejemplo, ELISEO FERNANDO PÉREZ MENDOZA²⁶⁰, en declaración del 15 de agosto de 2007, expuso que abandonó su finca en El Guamo, por el temor que le generaron varios actos violentos, como la masacre en Brisas y la desaparición de dos sujetos del sector, aunados a la desolación que ello provocó. Sin embargo, en el 2005 trató de retornar a sus fundos pero no pudo entrar por varias razones, entre ellas que llegó el Ejército a molestarlos, al punto de que les tomaron fotos, los filmaron y los amenazaron, circunstancia que le hace inferir los vínculos de los dueños de la palma con los paramilitares y los miembros del Ejército Nacional. Además, respecto a ese amedrentamiento manifestó que JOSÉ DE LA CRUZ MOYA, a quien señaló como escolta de más confianza de **GABRIEL JAIME**, *"era el que más utilizaba para meterle terror a la gente"*.

De otro lado, pese a que el procesado en ampliación de indagatoria, del 17 de agosto de 2008²⁶¹, negó rotundamente conocer *"por algún motivo"*²⁶² o haber tenido algún contacto con VICENTE y CARLOS CASTAÑO y a alias El Alemán o "Monoleche", lo cierto es que el mismo comandante paramilitar HASBÚN MENDOZA lo señaló como aportante, en su calidad de ganadero, a la organización de las autodefensas, específicamente al grupo que él lideraba, y también indicó que tuvo conocimiento que **GABRIEL JAIME** le compró unas tierras al paramilitar RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, alias Ricardo, puesto que, no obstante el justiciable le había comprado primero a unos campesinos directamente, los mismos al parecer también le habían vendido unas tierras a "Ricardo" y a un trabajador suyo llamado JOSÉ ANTONIO o JORGE ANTONIO, las cuales también se las vendieron a **SIERRA MORENO**. Por ello, fungió como intermediario y realizó una reunión en una oficina suya en

²⁶⁰ Folios 274 y ss del C. 11

²⁶¹ Folios 189 y ss del C. 18

²⁶² Expresión utilizada por el Fiscal al momento de preguntar

Medellín, en la cual "Ricardo" y su abogado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** le exigen una plata a SIERRA MORENO para permitirle tomar posesión de esas tierras porque al parecer eran de Ricardo.

Respecto a este tema, RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA²⁶³, desmovilizado del Bloque Calima de las AUC, declaró que un amigo suyo llamado JORGE ANTONIO, alias "El Negro", de quien hubo de decir que era su trabajador, a fin de respaldarlo y de cierta manera protegerlo, apareció, aproximadamente en el año 2000, con unos títulos de unos terrenos ubicados en una zona denominada "Las Menas" en los que estaba entrando **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, por tanto, se reunió con éste en Medellín, no le dijo quién era, y el procesado le manifestó que *"él es el que está encargado de los proyectos productivos de Los Castaño"*, se hizo el desentendido y simplemente le indicó que estaba comprando unas tierras que eran suyas, ello respaldando a JORGE ANTONIO. Posteriormente, se reúnen con RAUL EMILIO HASBÚN MENDOZA y luego se reúnen con VICENTE CASTAÑO en la finca "La Quince", donde **GABRIEL JAIME** se percató de quién es y argumenta que él compró las tierras a los poseedores en la zona de "Las Menas", respecto a lo cual el declarante indica que no discute que **SIERRA MORENO** compró unas posesiones, sin embargo, ellos tenían los títulos.

Con fundamento en ello, VICENTE CASTAÑO dio una solución salomónica que consistía en que **GABRIEL JAIME** le pagara a \$400.000 los títulos de la hectárea de tierras a ZAPATA SIERRA, lo cual hizo en efecto el acusado.

Esa discusión de posesión y titulación, se refiere a tres predios en relación con los cuales el coacusado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, abogado y amigo del paramilitar RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, fungió como apoderado de ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA, BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA y CATALINA MÁRMOL LEMUS a fin de *disponer* de los mismos, en razón de lo cual realizó tres compraventas con **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, que finalmente los compró, predios en los que casualmente, según escrito remitido por este último a la Fiscalía, la empresa Palmas del Curvaradó tiene sembrados con palmas de aceite y *"donde desea desarrollar la totalidad*

²⁶³ En audiencia pública del 5 de septiembre de 2012

del proyecto, tierras que salieron del dominio del Estado antes de que entrara en vigencia la ley 70 de 1993" ²⁶⁴.

En efecto, mediante escritura pública 491, del 28 de febrero de 2005, el acusado adquirió, como representante legal de Palmas del Curvaradó S.A., el predio "La Casita" de 779 hectáreas, ubicado en el municipio de Riosucio (Chocó), que le había sido adjudicado por el INCORA a ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA, mediante resolución 0468 del 5 de mayo de 1992; y el fundo "La Sierpe", cuya extensión es de 643 hectáreas y 7.000 mts², ubicado en la vereda Caño Claro de la misma municipalidad, que dicha entidad también adjudicó a BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA, mediante Resolución 0557 del 8 de junio de 1992.

Asimismo, mediante escritura pública 1.216, del 10 de mayo de 2005, Palmas del Curvaradó compró un predio de 429 hectáreas y 5.000 metros, llamado "El Rubí", ubicado en la vereda Sapayal del municipio de marras, el cual había sido adjudicado por el INCORA a CATALINA MÁRMOL LEMUS, mediante Resolución 0296, del 26 de marzo de 1992.

Sin embargo, respecto a estas compraventas, igualmente se hallaron un cúmulo de anomalías que desdicen también de su inocencia y, por el contrario, prueban su responsabilidad en los delitos por los que la Fiscalía lo acusó, al igual que la del coprocesado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, por circunstancias que pasarán a verse, pero que también se describirán en el acápite de responsabilidad de este último enjuiciado.

En efecto, en su calidad de representante legal, el acusado suscribió estas escrituras públicas, dos de las cuales tienen que ver con adjudicaciones que fueron revocadas por el INCODER por haberlas calificado como irregulares, puesto que superaban la extensión de 450 hectáreas permitidas por las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988.

Ciertamente, en relación con las adjudicaciones a ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA y BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA, ante la denuncia que presentó el doctor RODOLFO JOSÉ CAMPOS SOTO, Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, referente a la detección de

²⁶⁴ Folio 5 del C. 3

irregularidades en las mismas, se evidenció que las resoluciones de adjudicación no se hallaron en los archivos de dicha institución, es más, no obstante en las partes finales de las Resoluciones 468 del 5 de mayo de 1992, y 557 del 8 de junio de 1992, se advierte que en los expedientes 2517 y 2526, respectivamente, del INCORA, se encuentra la información necesaria para la adjudicación, cotejando dichos archivos, ni siquiera coinciden las fechas de aperturas de los expedientes con las de adjudicación, pues en el primer caso el expediente data del 4 de agosto de 1928 y, en el segundo, del 29 de mayo de la misma anualidad²⁶⁵.

Aunado a ello, está el hecho de que el coordinador del grupo de gestión documental del INCODER certificó que, luego de la búsqueda de títulos adjudicados, no se encontró ningún título a nombre de PALACIOS MOSQUERA y MOSQUERA AGUALIMPIA²⁶⁶.

Por tanto, respecto a las Resoluciones 468 del 5 de mayo de 1992, y 557 del 8 de junio de 1992, el INCODER inició los procedimientos tendientes a su revocación, por considerarlas contrarias a las disposiciones legales, según la Resolución 2.672 del 6 de diciembre de 2006.

Asimismo, en relación con dichas resoluciones, referentes a las adjudicaciones de los terrenos denominados "La Casita" y "La Sierpe", la Superintendencia de Notariado y Registro, efectivamente, mediante Resolución 3.617, del 1º de junio de 2007, revocó las inscripciones registrales **por ser ilegales**, ya que las resoluciones de adjudicación a los particulares fueron proferidas en 1991 y 1992 y su solicitud de inscripción se hizo en noviembre de 2003 -casi once (11) años después de su supuesta expedición en la oficina de registro de instrumentos públicos-, esto es, cuando ya habían sido inscritas las adjudicaciones de los territorios colectivos, por lo que esos títulos de dominio particular, al no encontrarse inscritos oportunamente en el registro, no fueron objeto de oposición y, por tanto, no se reconoció sobre ellos propiedad privada, según se indicó en la Resolución 3.247 del 19 de noviembre de 2007, mediante la cual se resolvieron los recursos contra la Resolución 2.424 de 2007²⁶⁷.

²⁶⁵ Informe 334776-07, del 12 de abril de 2007, suscrito por el Profesional Universitario del C.T.I., Héctor Alfonso León Ponguta. Folios 103 y ss del C. 11

²⁶⁶ Informe 334776-07, del 12 de abril de 2007, suscrito por el Profesional Universitario del C.T.I., Héctor Alfonso León Ponguta. Folios 103 y ss del C. 11

²⁶⁷ Folios 273 y ss del C. 17

Estas circunstancias, entonces, demuestran tanto la concertación como el ánimo delincencial de este procesado, pues no puede tenerse como mera casualidad el hecho de que el vendedor, valga decir, **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** haya actuado concertado con un reconocido paramilitar *-como se verá más adelante-*.

Esta funcionaria llega a dicha conclusión por el análisis de las pruebas recaudadas en la actuación, como la declaración de RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA²⁶⁸, alias "Ricardo" o "Caremonda", referentes a que aceptó los cargos que se le imputaron en este asunto porque respaldó a un sujeto JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, como si fuera su trabajador, a quien lo puso a buscarle tierras para la compra, con base en lo cual JORGE ANTONIO actuó de manera *"no muy santa y me hago cargo de las cosas que haya hecho mal hechas"*, calificativo que le mereció porque se trataba de *"títulos chimbos -sic-"*. Además, adujo que aceptó el concierto para delinquir porque se reunió con JORGE ANTONIO y personas del INCODER, a efectos de mirar cómo se podían solucionar problemas de las titulaciones.

Asimismo, con esta declaración se dilucidó que uno de sus colaboradores fue IMMER RAMOS, quien trabajaba en el INCORA, y le dijo que tenía la forma de organizar títulos en la región, fue el encargado de hacer el estudio topográfico de la zona, ayudó a hacer los títulos y le explicó al deponente acerca de las restricciones en territorios colectivos. Además, les dijo que en las tierras solamente se respetaban los títulos a nombre de personas naturales que hubieran estado antes del año de la promulgación de la ley, esto es, 1993.

En tales condiciones, relacionando estos aspectos con las irregularidades mencionadas por el INCODER y las tenidas en cuenta por la Superintendencia de Notariado y Registro para revocar las inscripciones de los fundos, se evidencia, entonces, que realmente dichas resoluciones fueron hechizas y, por ende, ilegales, principalmente si se tiene en cuenta que ZAPATA SIERRA se dolió de que tan solo se dio cuenta a raíz de este proceso penal, de la imposibilidad legal del INCORA de adjudicar extensiones superiores a las 450 hectáreas, ya que no sabe por qué *"llos siendo tan duchos y andando con una*

²⁶⁸ En audiencia pública del 5 de diciembre de 2012

persona del INCORA hicieron títulos de más de 450 hectáreas”, existiendo esas prohibiciones legales.

Otros aspectos que también deben tenerse en cuenta como contrarios a la lógica y a las reglas de la sana crítica, pues no es normal que se contrate a un abogado para que se tramiten unas compraventas²⁶⁹ y las mismas se realicen más de un año después, ya que los poderes supuestamente otorgados por BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA y ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA a **VÉLEZ GIRALDO** fueron firmados el 25 de febrero de 2004²⁷⁰, y presentados y autenticados ante la Notaría Única de Chigorodó el 5 de marzo siguiente; sin embargo, la compraventa de los predios tan solo se hicieron efectivas el 28 de febrero de 2005²⁷¹, esto es, más de un año después de otorgados los poderes que están conferidos expresamente para disponer de los bienes inmuebles.

Lo mismo ocurrió con el poder de CATALINA MARMOL LEMUS a **VÉLEZ GIRALDO**, también suscrito el 25 de febrero de 2004²⁷², autenticado ante la Notaría Única de Chigorodó el 6 de marzo de 2004, pero la compraventa del predio se realizó el 10 de mayo de 2005²⁷³, es decir, más de un año después.

Lo anterior, por supuesto, corrobora aún más el ardid de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** y los demás procesados concertados por hacer un montaje, a fin de demostrar legalidad y buena fe en unas negociaciones que realmente están provistas de fraude, intencionalidad criminal para la consecución de terrenos cuyo origen se circunscribe a invasión, despojos y desplazamientos, pues no obstante desde el año 1991 y 1992 se dictaron las supuestas resoluciones de adjudicación, sólo hasta el año 2003, cuando inicia el funcionamiento de Palmas de Curvaradó, se solicitó la inscripción y, por ello, hasta el año 2005 se efectuaron las compraventas.

Además, como se vio en la declaración de LUZ MARY CABEZAS, para la negociación de las tierras de su padre, aunque inicialmente **JAIME SIERRA** había enviado a JUAN PABLO, al advertir que éstas aparecían en el registro a

²⁶⁹ que es básicamente la exculpación que presenta **VÉLEZ GIRALDO**

²⁷⁰ Folios 20 y 21 del C. 3

²⁷¹ Folio 13 y ss del C. 3

²⁷² Folios 41 frontal y anverso del C. 3

²⁷³ Folios 35 y ss del C. 3

nombre de RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, recibieron amenazas, y luego el procesado **GABRIEL JAIME** la llamó y le envió entonces a JORGE ANTONIO, que según explicó alias "Ricardo" era su "trabajador", quien le dijo que se *"habían robado las tierras porque la gente había desocupado las tierras y pensaron que éstas nunca iban a reclamar"*. Posteriormente, las tierras fueron sembradas por **SIERRA MORENO** sin el consentimiento de la declarante.

Y recuérdese que de acuerdo a las declaraciones del mismo RODRIGO ZAPATA SIERRA alias "Ricardo", fue el propio VICENTE CASTAÑO el encargado de solucionar el problema de tierras que tenía con **GABRIEL JAIME**, por lo que puede decirse que el ingreso de este procesado a la región contó además con el pleno conocimiento, apoyo y consentimiento de "El Profe".

Finalmente, en relación con la invasión de terrenos colectivos, la Fiscalía cuestionó a **GABRIEL JAIME**²⁷⁴ respecto a que si la persona a la que acudieron para el estudio de títulos les informó acerca de la naturaleza colectiva de los terrenos en los que su empresa cultiva la palma, y pese a que éste respondió que siempre estuvieron acompañados del representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, MANUEL MOYA LARA, y contaron con su aval, al punto de que conformaron la alianza estratégica, de ello se infiere, en primer lugar, que tenían conocimiento acerca de que los predios eran colectivos y, en segundo lugar, afianza el hecho de que dichas alianzas simplemente se instituyeron para obviar las prohibiciones de la Ley 70 de 1993.

Es tan claro el detrimento ambiental en la zona en que Palmas del Curvaradó sembró la palma que DANILO MURILLO CÓRDOBA²⁷⁵ manifestó que trabajó para dicha empresa aserrando la madera con su motosierra antes de empezar los cultivos, *"tumbando los bosques... los árboles los cortaban para poder civilizar la tierra"*, para poder sembrar la palma. Además, indicó que la madera era vendible, pues se trataba de roble y cedro y que la tala de bosques se realizó *"como unas 600 hectáreas"*; él sólo alcanzaba a talar cerca de 13 árboles por día, mientras él estuvo que fueron aproximadamente 4 meses, pues luego siguieron otras personas. Esos terrenos eran de propiedad de "don JAIME SIERRA y ADRIANO PINO".

²⁷⁴ En indagatoria del 17 de agosto de 2008, folios 189 y ss del C. 18

²⁷⁵ Folios 157 y ss del C. 19

Asimismo, este testigo indicó que, como la zona era *"muy silvestre"*, al paso que iban talando los árboles, pues había *"una gran cantidad de personal en ese tiempo"*, encontraban animales como culebras, guagua, gurre, venados, los cuales, al verlos, huían hacia la montaña.

Igualmente, SILFREDO SOLIPAZ RODRÍGUEZ²⁷⁶ expresó que se percató de que las tierras que eran ciénagas **GABRIEL JAIME** *"las mandó a secar para sembrar sus cultivos de palmas"*.

Por tanto, la responsabilidad de **SIERRA MORENO** deviene inconcusa para la suscrita, en razón de que, a partir del análisis probatorio se infiere razonadamente que este procesado no sólo hizo parte de la organización armada ilegal, realizó aportes económicos e invadió territorios colectivos, en los que además generó daños ecológicos, sino que realizó actos ilegales, que fueron el eje toral para continuar con los desplazamientos, acerca de los cuales si bien esta funcionaria acepta que en un principio se dieron a raíz del conflicto armado y de la violencia que generaron en el sector tanto los paramilitares y guerrilleros, como el Ejército Nacional, posteriormente los acusados, entre ellos **SIERRA MORENO**, al apoderarse arbitrariamente de los territorios e imposibilitar el retorno de varios de sus propietarios o poseedores, valiéndose de amenazas, hostigamientos, amedrentamientos y hasta artilugios que buscaban dar visos de legalidad a actos que no lo eran, indudablemente para obtener su propio provecho -el cual también fue evidente en esta actuación-, contribuyeron a la perpetuación del desplazamiento forzado de un sinnúmero de personas.

De otra parte, para fundamentar la consecución de estas tierras, obviamente este acusado contó con la participación de dos comisionistas que fueron JUAN PABLO HERRERA VARGAS y **MANUEL GREGORIO DENNIS BLANDÓN**, último que fue señalado por varios testigos precisamente como el encargado de ubicar a los propietarios o poseedores de predios en el sector y enlazarlos o conectarlos con **SIERRA MORENO**, a fin de llevar a cabo las compraventas.

En relación con esa condición, declararon el paramilitar RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, alias Ricardo²⁷⁷, quien adujo que este acusado era el

²⁷⁶ Folios 296 y ss del C. 19

²⁷⁷ En audiencia pública del 5 de diciembre de 2012

encargado de **GABRIEL JAIME** para la consecución de las personas a quienes comprarle las tierras, precisamente porque conocía a los pobladores de la región. Además, indicó que estuvo presente en la problemática que tuvo con el mismo acerca de los predios que alegaba como suyos pero estaban siendo utilizados por aquél.

Asimismo, esa calidad de comprador de tierras fue corroborada por **EFRÉN ROMAÑA CUESTA**²⁷⁸, entonces representante de la cuenca del río Jiguamiandó, experto conocedor de la zona pues al momento de declarar llevaba 43 años allí y fue desplazado en varias ocasiones por el accionar del Ejército Nacional, paramilitares y guerrilleros, y adujo que este justiciable tuvo vínculos con las AUC.

En el mismo sentido **MANUEL MOYA LARA**²⁷⁹, **JUAN PABLO HERRERA VARGAS**²⁸⁰ *-coadyuvante en las adquisiciones de tierras-*, **FLORENTINA GUTIERREZ PÁEZ**²⁸¹, **WILSON LUNA MALDONADO**²⁸², **JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ**²⁸³, **FELISA SANTOS BARRIOS**²⁸⁴, **JUAN SUAREZ ALARCÓN**²⁸⁵, **ESTHER VALETA OVIEDO**²⁸⁶, **ASCARIO JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN**²⁸⁷, **OBED GALINDO IBARRA**²⁸⁸, **ALFREDO MALDONADO BELTRÁN**²⁸⁹, **ROEBOLLEL TORRES SOLANO**²⁹⁰, entre otros, lo mencionaron como intermediario o quien participó en las ventas de los fundos.

Por lo demás, el mismo procesado **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** aceptó que **DENIS BLANDÓN** fue el encargado, junto con **JUAN PABLO HERRERA**, de la adquisición de las tierras, aspecto que también fue confirmado por el mismo acusado **MANUEL GREGORIO** y varias de las personas que finalmente suscribieron las compraventas y supuestas alianzas con el primero.

²⁷⁸ Folios 212 y ss del C. 11

²⁷⁹ Folios 142 y ss del C. 19

²⁸⁰ Folios 151 y ss del C. 19

²⁸¹ Folios 286 y ss del C. 19

²⁸² Folios 8 y ss del C. 20

²⁸³ Folios 14 y ss del C. 20

²⁸⁴ Folios 144 y ss del C. 21

²⁸⁵ Folios 170 y ss del C. 21

²⁸⁶ Folios 2 y ss del C. 23

²⁸⁷ Folios 7 y ss del C. 23

²⁸⁸ Folios 20 y ss del C. 23

²⁸⁹ Folios 41 y ss del C. 23

²⁹⁰ Folios 143 y ss del C. 23

Dilucidada, entonces, tal condición, se encargará el Despacho de establecer los actos que ejerció este justiciable como integrante de la organización criminal, en aras de efectivizar los desplazamientos de los lugareños.

Pues bien, en tal sentido, el deponente MANUEL ENRIQUE PETRO indicó que **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN** llegó a su finca, entró a mirar la palma que estaba sembrada y le dijo que *“yo no mandaba en mis tierras, sino que ahí mandaban los empresarios”*.

De la misma manera, MIRIAM DE JESÚS NARVÁEZ HERNÁNDEZ²⁹¹, habitante de la cuenca del río Curvaradó, desplazada en 1997 porque los grupos paramilitares, entre ellos alias “El Diablo”, le dijeron que tenían que desocupar los terrenos, indicó:

“...Hasta el momento no he recibido amenazas ahora que hemos estado caminando las tierras, solo se escucha de MANUEL DENNIS en Chigorodó, a AGUSTÍN MONTALVO, MARCELO POLO, diciendo que nos van a matar porque estamos luchando por nuestras tierras, porque lo que acá hay dicen ellos como las ONG, que son guerrilleros y que por lo tanto nosotros vamos a tener problemas con los paramilitares, que eso más bien vendan a los palmeros...”.

Además, debe aclararse que no obstante varios declarantes, entre ellos, FLORENTINA GUTIERREZ PÁEZ²⁹², WILSON LUNA MALDONADO²⁹³, JULIO CARMELO CAUSIL HERNÁNDEZ²⁹⁴, FELISA SANTOS BARRIOS²⁹⁵, JUAN SUAREZ ALARCÓN²⁹⁶, ESTHER VALETA OVIEDO²⁹⁷, ASCARIO JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN²⁹⁸, OBED GALINDO IBARRA²⁹⁹, ALFREDO MALDONADO BELTRÁN³⁰⁰, ROEBOLLEL TORRES SOLANO³⁰¹, expresaron que no vendieron sus tierras por presiones o amenazas de los comisionistas o de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, varios de ellos aludieron a circunstancias que evidencian un engaño que finalmente pudo ser lo que los motivó a realizar

²⁹¹ Folios 286 y ss del C. 11

²⁹² Folios 286 y ss del C. 19

²⁹³ Folios 8 y ss del C. 20

²⁹⁴ Folios 14 y ss del C. 20

²⁹⁵ Folios 144 y ss del C. 21

²⁹⁶ Folios 170 y ss del C. 21

²⁹⁷ Folios 2 y ss del C. 23

²⁹⁸ Folios 7 y ss del C. 23

²⁹⁹ Folios 20 y ss del C. 23

³⁰⁰ Folios 41 y ss del C. 23

³⁰¹ Folios 143 y ss del C. 23

las negociaciones, aspecto que consolidó el desplazamiento forzado, y evidencia aún más la mala fe y el ánimo criminal de estos procesados.

Como ejemplo, se encuentra el caso de ESTHER VALETA OVIEDO, quien manifestó que se desplazaron en el año de 1997 por la violencia y por el miedo, posteriormente, la ubicó **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN**, le preguntó que si vendía, porque estaba como comisionista de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**. Trató de comunicarse con su padre que era el dueño de las tierras, sin embargo no pudo ubicarlo, razón por la cual decidió vender "*antes de que se perdiera*" (...) "**MANUEL GREGORIO** sabía que las tierras no eran más". Pero no obstante vendió voluntariamente, tuvo problemas con **MANUEL DENIS** que le dijo que "*para yo poder vender tenía que darle tres millones de pesos...*".

Asimismo, indicó que pese a que **GABRIEL JAIME** "*se comprometió a unas cosas y hasta el momento no las he visto, se comprometió a que nos iba a colaborar con el 20% de la producción y eso no se ha visto, eso hace como 6 años que se negoció y no hemos recibido nada y sé que está produciendo*", además, les prometió ayudarles a *parar una casa* y, al momento de "trochar la tierra", se habló de que a cada vendedor se le descontaban \$500.000 para pagarles a los "trocheros" y, pese a que le descontaron dicho monto, ellos no recibieron nada.

En el mismo sentido, declararon FELISA SANTOS BARRIOS³⁰², ASCARIO JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN³⁰³, PEDRO MANUEL GÓMEZ VARGAS³⁰⁴, OBED GALINDO IBARRA³⁰⁵, entre otros, quienes a una voz manifestaron que no se cumplió lo que les prometieron referente a un porcentaje de producción, vivienda, entre otros beneficios.

En tales condiciones, se probó la responsabilidad del acusado **DENIS BLANDÓN** en los delitos que se le endilgaron, máxime si se tiene en cuenta que este enjuiciado también perteneció a la asociación de Antiguos vecinos de la Cuenca del Río Curvaradó y zonas aledañas, aspecto que, aunado a su calidad de intermediario o comisionista, demuestra su real participación en la

³⁰² Folios 144 y ss del C. 21

³⁰³ Folios 7 y ss del C. 23

³⁰⁴ Folios 16 y ss del C. 23

³⁰⁵ Folios 20 y ss del C. 23

organización delincuencial, a fin de hacer efectivos desplazamientos e invasiones a terrenos colectivos y/o de reserva forestal.

Lo anterior, se reitera, obedece a que existe prueba directa en su contra como coautor de las conductas que la Fiscalía le endilgó, sin embargo, debe resaltarse que, pese a que varios declarantes, entre ellos GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA³⁰⁶, DANILO MURILLO CÓRDOBA³⁰⁷, relacionaron que en algún momento este acusado fue desplazado de su región, ello no es un obstáculo para que con posterioridad se convirtiese en un victimario más de las comunidades afectadas, principalmente si se tiene en cuenta que su conocimiento acerca de los integrantes de dichas comunidades, le facilitó a la organización criminal la fabricación de las "*alianzas estratégicas*" y demás en este asunto.

De otro lado, también como procesado de este asunto se encuentra **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, quien fungió como vendedor de varios predios que se relacionaron con antelación, por poderes que supuestamente le otorgaron los propietarios o poseedores de los mismos, valga decir, los de CATALINA MÁRMOL LEMUS, BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA y ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA y que posteriormente fueron vendidos a la empresa Palmas del Curvaradó, cuyo representante legal es **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**.

Estas negociaciones son prueba directa en contra de **VÉLEZ GIRALDO**, no sólo porque las mismas lo ubican dentro del contexto del proyecto paramilitar y, por ende, en la zona de incidencia de los hechos, sino porque, a raíz de la investigación y del juicio, se estableció su relación directa con el paramilitar RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, alias Ricardo, y con JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, primero de los cuales fue relacionado por FREDY RENDÓN HERRERA, alias El Alemán, comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, que precisamente operaba en el sector de los hechos, como interviniente en el proyecto de la palma junto con **MARIO ALBERTO**.

³⁰⁶ Folios 275 y ss del C. 51

³⁰⁷ Folios 280 y ss del C. 51

Ciertamente, RENDÓN HERRERA expuso³⁰⁸ que VICENTE CASTAÑO GIL lo convocó a un campamento en San Pedro de Urabá, a un lugar donde estaban ZAPATA SIERRA y VÉLEZ GIRALDO, a quien conoció como abogado, y lo reprendió porque no le había prestado seguridad a unos topógrafos que estaban midiendo unas tierras por Las Menas y luego le dijo que le colaborara a los sujetos apodados "Ricardo" y "Gordo Pepe", que ellos tenían una sociedad y que estaban comprando unos terrenos allí para desarrollar unos proyectos de palma "*muy grande*", razón por la cual les dijo que les iba a mandar unas tropas para brindarles seguridad a los topógrafos. Además, acerca de este justiciable, indicó:

"... Yo lo vi con Ricardo, con RODRIGO ZAPATA, donde el señor VICENTE CASTAÑO y en otras parte lo vi, y lo escuchaba hablar de él, que era como socio de Ricardo, yo no sé si era su abogado, yo lo escuché como socio..."

Igualmente, dijo que las mediciones de tierra por parte de los topógrafos se desarrolló entre Las Menas, en la margen izquierda del Río Sucio, hacia el río Uradá, eran como 30.000 ó 40.000 hectáreas, y alias "Moña" fue el encargado de acompañar la comisión de topógrafos. Igualmente, indicó que esas tierras eran de una sociedad que tenía "Gordo Pepe"³⁰⁹, "Ricardo" y **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, y otros, para vendérselas a unos políticos de Envigado, sin embargo, no sabe a quién se las iban a comprar porque muchas de las familias o comunidades, dueñas de las tierras, ya estaban desplazadas.

Acerca de este último aspecto, al deponente le pareció equivocado lo que dicha sociedad estaba haciendo, pues "*se sabía que eran Consejos Comunitarios*". Le parece que entre ellos estaba **MARIO ALBERTO**, que era quien los asesoraba, al punto de que lo observó en Bajirá como dos veces.

Asimismo, este paramilitar indicó que se enteró de una "extorsión" que ZAPATA SIERRA y VÉLEZ GIRALDO le estaban haciendo a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** por unas tierras que había comprado pero "*que no podía comprar*" porque eran de "Ricardo" y su grupo.

³⁰⁸ En audiencia pública del 6 de diciembre de 2012

³⁰⁹ brazo derecho de VICENTE CASTAÑO en temas financieros

Del mismo modo, expuso que vio a RODRIGO ALBERTO y a MARIO ALBERTO como una o dos veces reunidos con VICENTE CASTAÑO GIL en la finca La Quince y hablaban de las medidas de unos terrenos.

En relación con JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, alias “El Negro”, adujo que era un *delincuente* que se soportaba en las AUC, a veces para atropellar a la población civil y, en razón de varias quejas que había de éste, presencié cuando RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA le presentó varias de las mismas a VICENTE CASTAÑO GIL y le pidió autorización para darle de baja. Sin embargo, era un trabajador “en un tema de tierras” de “Ricardo” y de “Gordo Pepe”.

Estas aserciones coinciden con las manifestaciones del mismo RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA³¹⁰, quien indicó que JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ le dijo que estaban vendiendo unas tierras por un punto que se llama La Larga, sin embargo, no las compraron porque no les gustó el terreno ni a él ni a “Gordo Pepe”, último que, según HASBÚN MENDOZA³¹¹, era la mano derecha de VICENTE CASTAÑO.

Igualmente, expresó que en 1998 TORRES HERNÁNDEZ le presentó a un señor IMMER RAMOS, que trabajaba para el INCORA, quien le dijo que tenía la forma de organizar títulos en la región porque hay zonas que están baldías, que entre consejo y consejo dejaron unas franjas de reserva forestal pero nunca las anotaron como reserva forestal sino que quedaron como baldíos de la nación. Además, IMMER RAMOS fue uno de los que trabajó en la comisión de delimitación de los consejos, al punto que aconsejó que los títulos debían ser refutados o demandados porque no se hizo en la zona una visita para un censo y una delimitación física.

Con base en ello, IMMER RAMOS les dijo que podía conseguir unos títulos, por tanto, el declarante mandó a comprar unas planchas que más o menos cubrían entre Pavarandó hasta el punto que se llama Santa Lucía, entre el río Jiguamiandó y el Riosucio o Cetino, a efectos de poderse ubicar cuando le ofrecieran terreno y así saber *si servía o no*. En total compraron unas 250 hectáreas que no sabe finalmente donde quedaron. Posteriormente, JORGE

³¹⁰ En audiencia pública del 5 de diciembre de 2012

³¹¹ Declaración del RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA en audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012.

ANTONIO apareció con unos títulos, acerca de los cuales dijo los había hecho IMMER RAMOS.

Este deponente también declaró que, como JORGE ANTONIO sabía que él trabajaba con VICENTE CASTAÑO, le pedía favores y a raíz de ello JORGE ANTONIO se metió en varios problemas, al punto de que alias "Pedro", apodo perteneciente a HASBÚN MENDOZA, lo iba a matar y *"me tocó hablar con Vicente para que le dijera a Pedro que no tocaran a Jorge Antonio, y decir que Jorge Antonio era trabajador mío para respaldarlo con el nombre y ahí empieza Jorge Antonio a hacer sus pilatunas"*.

Posteriormente, el declarante se refiere a las reuniones que tuvo con **GABRIEL JAIME**, a raíz de unos títulos que tenía JORGE ANTONIO, aproximadamente en el año 2000, pues el primero estaba entrando a la zona denominada Las Menas *-aspecto que fue tratado más detalladamente en el acápite de la responsabilidad de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**-*. Además, RODRIGO ALBERTO deja la constancia de que no obstante en su caso se argumenta que tenía 20.000, 30.000 o 40.000 hectáreas, ello fue por respaldar a JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, diciendo que era su trabajador.

Así las cosas, si se hace un paralelo entre estas dos declaraciones, valga decir, la de FREDY RENDÓN HERRERA, alias "El Alemán", y la de RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, alias "Ricardo", los aspectos relevantes son similares, excepto lo atinente a la intervención de **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** en las reuniones que tuvieron con VICENTE CASTAÑO GIL, circunstancia que para la suscrita resulta lógica si se tiene en cuenta que ZAPATA SIERRA aceptó que **VÉLEZ GIRALDO** es su amigo personal, razón por la cual no iba a involucrarlo en las reuniones ni tampoco iba a señalarlo como perteneciente a la organización paramilitar.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que los señalamientos directos de FREDY RENDÓN HERRERA, referentes a la participación directa del acusado **VÉLEZ GIRALDO** en el proyecto palmicultor y en la organización paramilitar, se confirman con las atestaciones de RAUL EMILIO HASBUN MENDOZA³¹², en cuanto a que conoció a este enjuiciado porque él era una de las personas que tenía parte del manejo de las tierras de alias Ricardo, es decir, RODRIGO

³¹² En audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012

ALBERTO ZAPATA SIERRA, y de "El Negro", que es JORGE ANTONIO, y que el acusado era el encargado de esa sociedad.

En el mismo sentido, este declarante adujo que **VÉLEZ GIRALDO** propuso a varios empresarios y demás compradores, otra figura para la legalización de los terrenos, diferente a la accesión, referente a la Ley Tocaima:

"Yo no conozco de escrituras o algo así, supe que en alguna oportunidad este señor recomendó a otros empresarios o compradores de tierras en la zona de que así como había el fenómeno o la figura de la accesión, que usamos algunos, había otra figura que era por la cercanía al casco urbano o al municipio, una ley creo que existe, oí algo sobre eso, el alcalde es el que titulariza".

Es más, era tal la intromisión o injerencia del procesado **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** en la organización paramilitar que este mismo deponente adujo que éste era muy allegado a alias "Ricardo" o "Caremondada"³¹³, al punto que él empezó a participar como en representación de este paramilitar en muchas reuniones de las autodefensas, reuniones en las cuales también intervino HASBÚN MENDOZA, lo cual evidencia su conocimiento directo. También indicó que en varias oportunidades estuvo reunido con **MARIO ALBERTO** en la finca La Quince, en el año 2002, antes por la cercanía de éste con "Ricardo", pues eran muy amigos, muy allegados; y después por la negociación, cuando empezaron los acercamientos entre el Gobierno y las AUC, ya que uno de los abogados que representó a "Ricardo" fue **VÉLEZ GIRALDO**, quien daba muchas opiniones. Sin embargo, desde antes se relacionaba *"con todos nosotros"*.

Además, acerca de su participación en las autodefensas, este paramilitar expuso que cuando iba a darle de baja a "El Negro", esto es, a JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, *"porque venía haciendo cosas mal hechas dentro del tema de la palma"*, tanto "Ricardo" como **MARIO ALBERTO** lo defendieron, razón por la cual no lo pudo ejecutar.

Acerca de las reuniones que se llevaron a cabo con **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** y **RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA**, a raíz de la problemática que se suscitó con la compraventa de varios predios y sus respectivos títulos,

³¹³ Apodos pertenecientes a RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA

RAÚL EMILIO HASBÚN adujo que **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO** era el que manejaba la reunión y era el que más presionaba sobre la tierra.

Además de estas declaraciones, las cuales, se reitera, concuerdan entre sí, también existen irregularidades en relación con otras compraventas en las que participó directamente el procesado como vendedor, por supuesto poder concedido por el aparente propietario o poseedor del predio.

Tal es el caso de la compraventa de la finca La Esmeralda, cuya supuesta extensión era de 1.187 hectáreas y al parecer pertenecía a AGUSTÍN MONTALVO QUINTERO, sin embargo, éste declaró³¹⁴ que nunca tuvo una propiedad con ese nombre ni de tal extensión y que nunca le concedió poder a **VÉLEZ GIRALDO**, pues ni lo conoce a él ni al terreno de marras.

En tales condiciones, luego de que el Fiscal le exhibiera el poder que aparece supuestamente suscrito por él, expresó que esa no era su firma, acerca de lo cual indicó:

"No me explico, a mi hace por ahí unos cinco años más o menos nos recogieron a nosotros a muchos y nos llevaron a medir unas tierras por esos sectores que usted está diciendo para ver si la compañía les justificaba comprar unos terrenos grandes, eso nos llevó un muchacho JORGE ANTONIO TORRES ÁLVAREZ, nosotros fuimos a medir y ni siquiera nos pagaron, me imagino que nos utilizaron para hacer papeles falsos, no sé quién iba a comprar esas tierras, demás que me cogió la firma para hacer esas cosas a nombre de uno..."

Estas circunstancias evidencian aún más la responsabilidad en la comisión delictiva del justiciable, si se tiene en cuenta que, mediante resolución 0290, del 29 de mayo de 1991, expedida por el INCORA, le fueron adjudicadas 1.187 hectáreas y 6.000 mts³¹⁵, la cual fue registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos de Quibdó, folio de matrícula inmobiliaria 180-22513, del 7 de noviembre de 2003³¹⁶, y posteriormente, el adjudicatario AGUSTÍN MONTALVO QUINTERO supuestamente otorgó poder a **VÉLEZ GIRALDO** "para que en mi nombre y representación dispongan como bien les parezca sobre el derecho de dominio y posesión..."³¹⁷, quien finalmente vendió el predio a TEMÍSTOCLES CARABALLO RODRÍGUEZ, a través de la escritura pública

³¹⁴ Folios 32 y ss del C. 23

³¹⁵ Folio 34 del C. 19

³¹⁶ Folio 33 del C. 19

³¹⁷ Folio 36 del C. 19

716, del 7 de marzo de 2006, en la Notaría 26 de Medellín, por un valor de \$23.740.000³¹⁸.

Respecto al comprador del predio, esto es, TEMÍSTOCLES CARABALLO RODRÍGUEZ, el mismo RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA manifestó en la audiencia pública que *"lo puse a trabajar conmigo con el tema del banano"* cuando quiso exportar banano a Rusia y que *"era amigo de JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ"*.

Por lo demás, cabe recordar que la extensión adjudicada por el INCORA supera con creces la autorizada por las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988 -de 450 hectáreas-, aspecto que tuvo en cuenta el INCODER, respecto a otras adjudicaciones que tenían la misma irregularidad, para adelantar *"los correspondientes procesos tendientes a su revocación directa con fundamento en el incumplimiento de las disposiciones legales que al momento de su expedición gobernaban la titulación de terrenos baldíos de la Nación..."*, tal como se indicó en la Resolución 2672, del 6 de diciembre de 2006³¹⁹.

En efecto, en el mismo sentido, se encuentran las adjudicaciones de los predios relativos, en primer lugar, a ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA, de 779 hectáreas³²⁰, mediante Resolución 0468, del 5 de mayo de 1992, expedida por el INCORA, quien le otorga poder a **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, en razón del cual vende el fundo, mediante escritura pública 491, del 28 de febrero de 2005, de la Notaría 26 de Medellín, a la empresa Palmas de Curvaradó S.A., cuyo representante legal es **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, quien también suscribe dicho acto notarial.

En segundo lugar, está el caso de BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA, a quien mediante Resolución 0557, del 8 de junio de 1992, el INCORA le adjudicó un terreno de 643 hectáreas y 7.000 mts²³²¹ y, posteriormente, MOSQUERA AGUALIMPIA le concede poder al acusado **VÉLEZ GIRALDO**, a partir del cual realiza una compraventa, mediante escritura pública 491, del 28 de febrero de 2005, de la Notaría 26 de Medellín, a la empresa Palmas de Curvaradó S.A., representada por **SIERRA MORENO**.

³¹⁸ Folios 29 y ss del C. 19

³¹⁹ Folios 129 y ss del C. 11

³²⁰ "La Casita"

³²¹ "La Sierpe"

En tercer término, está el fundo de CATALINA MÁRMOL LEMUS, a quien se le adjudicó, mediante Resolución 0296, del 26 de marzo de 1992, expedida por el INCORA, un terreno de 429 hectáreas y 5.000 Mts²³²² y, ulteriormente, la adjudicataria también le otorga poder a **VÉLEZ GIRALDO** para disponer del terreno, lo cual se hace efectivo mediante escritura pública 1.216, del 10 de mayo de 2005, de la Notaría 26 de Medellín, a Palmas de Curvaradó.

En cuarto lugar, está el predio de ACISCLO ROMAÑA MENA, a quien mediante Resolución 0715, del 6 de agosto de 1992, el INCORA le adjudicó 908 hectáreas y 1.000 mts²³²³. Luego, ROMAÑA MENA también le concedió poder al acusado **MARIO ALBERTO**, con base en el que vende el terreno de marras a través de la escritura pública 491, del 28 de febrero de 2005, de la Notaría 26 de Medellín, a CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ FERNÁNDEZ.

En quinto término, está el caso de los fundos de RENÉ PALACIOS AGUALIMPIA, a quien la misma institución, mediante Resolución 0884, de 18 de mayo de 1992, le adjudicó 908 hectáreas y 2.000 mts²³²⁴. Posteriormente, el beneficiario le otorga poder a **MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO**, con fundamento en el que vende el predio, a través de la escritura pública 717, del 7 de marzo de 2003, de la Notaría 26 de Medellín, a OSWALDO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTAMANTE.

Para efectos prácticos y mejor visualización de algunos pormenores que resultan importantes a la hora de establecer la concertación para delinquir -y demás ejecuciones delictivas- y rebatir el pretexto del desconocimiento de su existencia, fundamentado en el cumplimiento de una simple contratación de prestación de servicios profesionales, al que aluden tanto el procesado como su defensor, se elabora el siguiente cuadro descriptivo:

Resolución de adjudicación INCORA	Beneficiario de la adjudicación	Extensión adjudicada	Fecha de inscripción y matrícula inmobiliaria
0290 de 29 de mayo de 1991	Agustín Montalvo Quintero	1.187 hectáreas y 6000 mts ²	7 de noviembre de 2003, M.I. 22513
0296, del 26 de marzo	Catalina Mármol	429 hectáreas y 5.000	10 de noviembre de

³²² "El Rubí"

³²³ "La María"

³²⁴ "La Ceiba"

de 1992	Lemus	Mts2	2003, M. I. 22515
0468, del 5 de mayo de 1992	Elciario Palacios Mosquera	779 hectáreas	10 de noviembre de 2003, M.I. 22516
0557, del 8 de junio de 1992	Benjamín Mosquera Agualimpia	643 hectáreas y 7.000 mts2	25 de noviembre de 2003, M.I. 22538
0715, del 6 de agosto de 1992	Acisclo Romaña Mena	908 hectáreas y 1.000 mts2	10 de noviembre de 2003, M.I. 22514
0884, de 18 de mayo de 1992	Rene Palacios Agualimpia	908 hectáreas y 2.000 mts2 ³²⁵	10 de noviembre de 2003, M.I. 22517

Es menester resaltar tres aspectos. Primero, que estos cinco predios están ubicados en el municipio de Riosucio (Chocó) y sus adjudicaciones fueron registradas en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos en noviembre de 2003.

Segundo, respecto a las Resoluciones 715 del 6 de agosto de 1992; 468 del 5 de mayo de 1992 y 557 del 8 de junio de 1992, el INCODER inició los procedimientos tendientes a su revocación, por considerarlas contrarias a las disposiciones legales, según la Resolución 2.672, del 6 de diciembre de 2006.

Tercero, en relación con las Resoluciones 468 del 5 de mayo de 1992 y 557 del 8 de junio de 1992, referentes a las adjudicaciones de los terrenos denominados “La Casita” y “La Sierpe”, respectivamente, la Superintendencia de Notariado y Registro, efectivamente, mediante Resolución 3.617, del 1º de junio de 2007, revocó las inscripciones registrales correspondientes a dichas resoluciones, **por ser ilegales**, ya que las resoluciones de adjudicación a los particulares fueron proferidas en 1991 y 1992 y su solicitud de inscripción se hizo en noviembre de 2003 en la oficina de registro de instrumentos públicos, esto es, cuando ya habían sido inscritas las adjudicaciones de los territorios colectivos, por lo que esos títulos de dominio particular, al no encontrarse inscritos oportunamente en el registro, no fueron objeto de oposición y, por tanto, no se reconoció sobre ellos propiedad privada, según se indicó en la Resolución 3.247, del 19 de noviembre de 2007, mediante la cual se resolvieron los recursos contra la Resolución 2.424 de 2007³²⁶.

Estas mismas circunstancias, entonces, son aplicables a las demás resoluciones que, como puede observarse, fueron registradas en noviembre de 2003, valga decir, casi once (11) años después de su supuesta expedición y

³²⁵ “La Ceiba”

³²⁶ Folios 273 y ss del C. 17

que, además, exceden la extensión legal permitida de adjudicación -con excepción de la referente a CATALINA MÁRMOL LEMUS-, aspectos que evidencian tanto la concertación como el ánimo delincencial de este procesado, pues ello no puede tenerse como mera casualidad si se conjuga con los demás medios probatorios, como las atestaciones de RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA, alias "Ricardo" o "Caremonda", referentes a que aceptó los cargos que se le imputaron en este asunto porque respaldó a JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, como si fuera su trabajador, a quien lo puso a buscarle tierras para la compra, con base en lo cual JORGE ANTONIO actuó de manera *"no muy santa y me hago cargo de las cosas que haya hecho mal hechas"*, calificativo que especificó que se trataba de *"títulos chimbos"* -sic. Además, adujo que aceptó el concierto para delinquir porque se reunió con JORGE ANTONIO y personas del INCODER, a efectos de mirar cómo se podían solucionar problemas de las titulaciones.

En tal sentido, con su declaración se dilucidó que uno de sus colaboradores fue IMMER RAMOS, quien trabajaba en el INCORA, y le dijo que tenía la forma de organizar títulos en la región, fue el encargado de hacer el estudio topográfico de la zona, ayudó a hacer los títulos y le explicó al deponente acerca de las restricciones en territorios colectivos. Además, les dijo que en las tierras solamente se respetaban los títulos a nombre de personas naturales que hubieran estado antes del año de la promulgación de la ley, esto es, 1993.

Estas particularidades demuestran, entonces, que realmente dichas resoluciones fueron hechizas y, por ende, ilegales, principalmente si se tienen en cuenta que ZAPATA SIERRA se dolió de que tan solo se dio cuenta a raíz de este proceso penal, de la imposibilidad legal del INCORA de adjudicar extensiones superiores a las 450 hectáreas, ya que no sabe por qué *"ellos siendo tan duchos y andando con una persona del INCORA hicieron títulos de más de 450 hectáreas"*, existiendo esas prohibiciones legales.

Así, pues, queda demostrado el engranaje criminal, máxime si se tiene en cuenta que el delito de concierto para delinquir presupone la existencia de una organización, cuyos integrantes actúan con una división de trabajo y codominio de los hechos, de manera que cada miembro aporta a la ejecución de los delitos. Por tanto, no podrían exigirse señalamientos directos de pobladores

como el artífice de desplazamientos forzados o de actuaciones contra el medio ambiente, pues de ello se encargaron los demás concertados.

En relación con las exculpaciones del procesado y su abogado, referentes a que la suscripción de las escrituras públicas de marras se debió al normal ejercicio de su profesión de abogado, pues fue contratado para ello, para esta funcionaria no es atendible esta justificación en razón de que los pormenores que él mismo reseñó en su indagatoria³²⁷ son incoherentes con las circunstancias descritas por otros declarantes y hasta con la lógica elemental.

Pues bien, a efectos de controvertir la defensa, debe precisarse que el justiciable indicó que fue contactado por JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, a fin de que lo asesorara jurídicamente en cuanto a unos títulos que llevaba de tierras ubicadas en Belén de Bajirá, por lo cual le cobró \$18.000.000, de los cuales sólo le anticipó \$2.000.000, y le quedaron debiendo el resto, razón por la que, para pagarle, pues no tenía más plata, debía reunirse con *"un doctor GONZÁLEZ, representante de una de las empresas de palma y póngase de acuerdo en las formalidades respectivas para que dicha negociación llegue a feliz término y le damos cuatro millones de pesos más cuando no sean cancelados los títulos de dichas tierras..."*.

Ahora, si en gracia de discusión se aceptare que un abogado de su experiencia³²⁸ accedería a un condicionamiento de ese talante para el pago de unos honorarios que ya se ganó, no es verosímil que el acusado acepte tramitar unas compraventas de terrenos cuya extensión es significativa, que están ubicados en un sitio donde el orden público está altamente alterado por diferentes causas, por el simple argumento de que se basó en la buena fe, porque JORGE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, que era un desconocido para él, le pareció muy convincente por la *"propiedad con que me hablaba"* y, además, se hacía acompañar de *"tres personas que se decían campesinos dueños de títulos"*.

Es más, no es posible que un abogado que lleva ejerciendo 30 años la profesión, suscriba actos notariales de compraventas sin ni siquiera haber interactuado con el poseedor o propietario, a fin de establecer por lo menos su

³²⁷ Folios 116 y ss del C. 27

³²⁸ Graduado en 1981, con 30 años de ejercicio de la profesión

consentimiento en la negociación jurídica, máxime si él mismo le estaba dando un poder con facultades amplísimas como las de *"para que en mi nombre y representación dispongan como bien les parezca sobre el derecho de dominio y posesión que tengo..."*, o *"mi apoderado queda facultado para vender el inmueble, convenir el precio y forma de pago, dar o recibir sumas de dinero..."*³²⁹ y, aun así manifieste, en primer lugar, que no sabe cuál fue el precio realmente establecido para las ventas, ya que el que se indica en la escritura pública *"de acuerdo al uso cuando todas las personas hacemos una negociación nunca excedemos un valor catastral por lo tanto considero que ese no fue el precio real de la negociación"* y, en segundo lugar, que no realizó ningún pacto con **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, que aparece como vendedor, acerca de precio o cantidad de terreno porque *"yo no era dueño de tierras ni de títulos ni de palmas ni de nada que se le parezca simplemente yo recibí un poder para firmar tres escrituras..."*, estas afirmaciones son inverosímiles precisamente porque en su ejercicio profesional conoce ampliamente de las responsabilidades que adquiriría como supuesto "intermediario" en esas negociaciones.

Así las cosas, ¿qué objeto tenía el poder que supuestamente le otorgaron los propietarios de los predios?, ¿ninguno?, ¿por qué entonces contratar un abogado para firmar una escritura cuando ellos mismos podían hacerlo?. Realmente se trataba de un ardid para concretar la venta de unos terrenos cuya extensión no podía haber sido adjudicada por el INCORA, esto es, por superar las 450 hectáreas que prohíben las Leyes 135 de 1961 y 30 de 1988.

También contraviene a la lógica y a las reglas de la sana crítica que, por ejemplo, los poderes supuestamente otorgados por BENJAMÍN MOSQUERA AGUALIMPIA y ELCIARIO PALACIOS MOSQUERA a **VÉLEZ GIRALDO** hubiesen sido firmados el 25 de febrero de 2004³³⁰, los cuales fueron presentados y autenticados ante la Notaría Única de Chigorodó el 5 de marzo siguiente; y la compraventa de los predios tan solo se hubiesen hecho efectivas el 28 de febrero de 2005³³¹, esto es, más de un año después de otorgados los poderes que están conferidos expresamente para disponer de los bienes inmuebles.

³²⁹ Poder especial, folio 82 del C. 25

³³⁰ Folios 20 y 21 del C. 3

³³¹ Folio 13 y ss del C. 3

Lo mismo ocurrió con el poder de CATALINA MARMOL LEMUS a **VÉLEZ GIRALDO**, también suscrito el 25 de febrero de 2004³³², autenticado ante la Notaría Única de Chigorodó el 6 de marzo de 2004, pero la compraventa del predio se realizó el 10 de mayo de 2005³³³, es decir, más de un año después.

Lo anterior, por supuesto, deja al descubierto el afán de **MARIO ALBERTO** y los demás procesados concertados por hacer un montaje, a fin de demostrar legalidad y buena fe en unas negociaciones que realmente están provistas de fraude, intencionalidad criminal para la consecución de terrenos cuyo origen se circunscribe a invasión, despojos y desplazamientos.

De otro lado, referente a la procesada **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, representante legal de AGROPALMA, el deponente VÍCTOR NORBERTO RENTERÍA MARTÍNEZ³³⁴, expuso que él y su familia tuvieron que abandonar la finca Los Guaduales, que les heredó su padre, por la violencia que los azotó en el año 1997, sin embargo, pese a que no la han vendido, no ha vuelto a la misma porque tiene cultivos de palma de la empresa que representa **OSPINA RENDÓN**.

En tal sentido, el mismo declarante adujo que su hermano LUIS OVIDIO RENTERÍA, a quien también le fue sembrada parte de su tierra con palmas, ha sido el encargado de hacer las respectivas reclamaciones por el poder que le confirió su madre y, en razón de ello, éste le manifestó que los empresarios de dicha empresa reconocieron que *"esa finca no se vendió y dicen que van a devolver las tierras pero no nos han dicho cuándo"*.

Como prueba directa que demuestra la responsabilidad de la procesada en los delitos por los que la Fiscalía la acusó, se encuentra la suscripción de la escritura pública 2.778, del 13 de octubre de 2004, mediante la cual le compró a **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**, representante legal de la asociación de pequeños cultivadores de palma en el Urabá, 254 hectáreas, por valor de \$785.242.980, cuya procedencia eran los actos notariales mediante los cuales se realizó la accesión ficta al terreno de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO y su posterior fraccionamiento.

³³² Folios 41 frontal y anverso del C. 3

³³³ Folios 35 y ss del C. 3

³³⁴ Folios 281 y ss del C. 19

Ahora bien, respecto a la ignorancia en la que se resguarda la procesada respecto a la procedencia de esos predios, debe precisarse que su conocimiento se concluye no sólo de las incongruencias en su versión defensiva, tanto en sí misma como con la realidad de las cosas; sino de su familiaridad o cercanía con JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, alias "Monoleche", reconocido paramilitar que prestaba sus servicios a la Casa Castaño, la cual era la que lideraba el proyecto de siembra de palma africana en la zona, veamos.

La acusada inicialmente manifestó³³⁵ que su llegada a la zona de Belén de Bajirá en el 2002 fue con el objetivo de ejercer el comercio, motivo por el que compraron una estación de servicios, a raíz de la cual estableció relaciones comerciales con URAPALMA, que lideraba el proyecto palmero en la región y estaba realizando obras de infraestructura vial, por tanto, comerciaban con ellos el combustible y demás insumos necesarios, para lo cual hubieron de otorgarles créditos, pero como a veces *"se veían a gatas para pagar"* o no pagaban puntualmente, **JAVIER JOSÉ DAZA PRETEL** le ofreció -a finales de septiembre de 2002- la posibilidad de que le compraran a la empresa una de las parcelas, negocio que se concretó en el 2003.

Sin embargo, los pormenores que rodearon esta negociación obnubilan la buena fe y legalidad de la misma y, por ende, el conocimiento e intencionalidad criminal ya que, pese a que la misma enjuiciada aceptó que suscribió la escritura pública de marras, indicó que el valor del terreno realmente fue \$60.000.000 y no los \$785.242.980 que aparecen en la misma, pues, a su decir, ese fue el valor de las tierras con las mejoras pero *"en las notarías se dice que fue dinero pagado en efectivo porque esa es una cláusula que llamamos mortis porque no manejamos en ese momento para hacer esa claridad en la escritura, de que ese valor no era el pago entregado a Agropalma porque correspondía a una valorización por las mejoras en el terreno, eso no se aclaró y creo que es la única inconsistencia que tiene esa escritura, insisto que Urapalma no recibió ese valor..."*.

No obstante esa aserción, *-pasando por alto que la cláusula mortis no existe en el derecho jurídico colombiano y menos si se trata de uno de los elementos esenciales del contrato de compraventa que es el precio, cuya estipulación*

³³⁵ Indagatoria del 8 de mayo de 2009, folios 128 y ss del C. 27

obliga al comprador en el mismo-, en posterior indagatoria³³⁶ la justiciable alude, en lo relativo al valor consignado, que: ***“Lo que pasa es que los protocolistas en las notarías deben hacer la escritura por el valor que aparece en el paz y salvo que expide el municipio, donde allí figuran los ítems por ejemplo avalúo catastral de la tierra, valor del impuesto y valor pagado y en este caso fue por \$785.242.980 y le preguntan a uno como se pagó el negocio si fue en efectivo y si se recibió a satisfacción entonces en ninguna notaría se puede hacer una escritura por valor distinto al que aparece en el documento expedido por el municipio que es un certificado en donde está el avalúo catastral de la tierra, sobre ese avalúo se liquidan los impuestos y se debe hacer la escritura, a esa expresión se debe la cláusula mortis porque no se puede modificar...”***. (Negrilla fuera de texto).

Se trata, entonces, no sólo de una afirmación falsa sino contraria a toda lógica si se tienen en cuenta las diferencias que existen entre el avalúo comercial y el avalúo catastral³³⁷, último que constituye tan sólo un porcentaje del primero y, por tanto, no es cierto, ni mucho menos jurídicamente viable, que los empleados de las notarías estén obligados a basar el precio de un contrato, en una información suministrada por la alcaldía municipal, la cual simplemente sería para efectos de demostrar el pago de rentas municipales e impuestos, como el recibo de caja que aportó **SOR ENID**, para demostrar el pago del impuesto predial unificado por valor de \$24.009.028³³⁸, suma muy inferior a los \$785.242.980, a los que se alude en la escritura pública.

De otro lado, tampoco resulta verosímil para esta funcionaria que una persona letrada, como la enjuiciada, suscriba un acto notarial en el que compra un inmueble a un sujeto que apenas distingue **-MARIO LEÓN VILLA PACHECO-** y se obligue con el mismo, o con la asociación que éste representaba, a pagarle \$785.242.980 por una supuesta *“ligereza mía pues no se dijo que era por 60 millones de pesos”* y además diga que lo único que sabe de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Urabá *“es lo que se lee en los certificados de representación legal expedidos en las cámaras de comercio, no conozco nada más al respecto”* y que pensaba que **URAPALMA** tenía la

³³⁶ Del 3 de junio de 2009, folios 251 y ss del C. 27

³³⁷ El avalúo comercial se realiza de manera específica sobre cada inmueble sujeto a condiciones físicas y de acuerdo al mercado inmobiliario. El avalúo catastral corresponde a un porcentaje del avalúo comercial y es realizado por las entidades gubernamentales y sirve como base para obtener, después de aplicadas las tarifas y los estratos socioeconómicos, el valor del Impuesto Predial, tomado de la página virtual www.medellin.gov.co.

³³⁸ Folio 157 del C. 27

facultad legal de disponer de las tierras, sin ni siquiera tener un soporte legal que justifique por qué si realmente estaba haciendo el negocio directamente con el gerente de esta empresa, tenía que firmar con un tercero.

Por lo demás, también resulta incongruente que la acusada indique que el ofrecimiento del negocio por parte de **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** fue a finales de septiembre de 2002, según lo indicó en su indagatoria -aunque en el escrito dirigido a **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA** indicó que el "*negocio se acordó desde enero del 2003*"³³⁹-, esto es, cuando supuestamente apenas habían llegado a la zona; negociación que se concretó en el año 2003, sin embargo, en indagatoria del 3 de junio de 2009, la enjuiciada acotó que tan solo empezaron operaciones en julio de 2004:

"Yo a finales de dos mil dos cuando llegamos a Belén de Bajirá a recibir la posesión del negocio de la chocita o estación yo no escuché ese tipo de cosas, cuando nos venimos a meter más de lleno en la región que ocurre en el dos mil cuatro cuando verdaderamente arranca la sociedad operaciones en julio de dos mil cuatro..."

Además, si apenas iniciaron operaciones en julio de 2004, por qué se hizo la negociación con antelación si supuestamente el fundamento de la misma era hacer un cruce de cuentas por el combustible y demás suministros que le vendía.

Estas circunstancias aunadas a la cercanía de la acusada con **JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ**, alias "Monoleche", de quien se demostró en la actuación que fue activo paramilitar y se desmovilizó del **Bloque Casa Castaño**, en principio porque el mismo reconoció³⁴⁰ que fue militante de dicha organización desde 1988 al servicio de los hermanos Castaño Gil hasta la fecha de su desmovilización -2004-, al punto de que este Juzgado hubo de suspender provisionalmente la actuación en su contra, el 28 de marzo de la anualidad que avanza, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1592 de 2012, el cual modificó el artículo 22 de la Ley 975 de 2005³⁴¹, permiten inferir el conocimiento cierto que tenía la procesada que la actividad palmicultora en la región era dirigida de manera directa por los paramilitares, siendo precisamente **VICENTE CASTAÑO**, el "jefe" de **ROLDÁN PÉREZ** uno de sus gestores.

³³⁹ Folio 159 del C. 27

³⁴⁰ En audiencia pública del 23 de julio de 2012

³⁴¹ Este aspecto también puede corroborarse en la página virtual de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y La Paz.

Es más, el mismo líder paramilitar RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA relacionó en su declaración³⁴² a JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ con las actividades palmíferas que el grupo de autodefensas estaba adelantando en la región, en el sentido de que, cuando se percataron de los atropellos graves que estaban cometiendo los sujetos apodados "Palillo" y "55", JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ debía ponerle correctivos a ese tema por orden de VICENTE CASTAÑO GIL, quien a su vez le dijo a RAÚL EMILIO que no interviniera si los problemas no tenía que ver con las autodefensas, pues el afectado debía acudir a la justicia ordinaria.

Acerca de la familiaridad de **SOR ENID OSPINA RENDÓN** con ROLDÁN PÉREZ, no obstante este último trató de mostrar lejanía y desafección con respecto a la acusada, ello se desvirtúa con las mismas aseveraciones de ésta última no sólo en cuanto a que *"mi papá tuvo unos hijos con la mamá de él"*, es decir, tienen hermanos en común; sino que ha sido su asesora jurídica y hasta *"la plata con la que mi hermano vendió la bomba casi que se nos fue en cubrirle gastos personales -refiriéndose a ROLDÁN PÉREZ-"*³⁴³, situación que evidencia el grado de confianza y cercanía con el mismo.

Estas afirmaciones, por supuesto, desvirtúan las atestaciones de JESÚS IGNACIO referentes a que simplemente le mencionó al hermano de **SOR ENID**, JAIRO ENRIQUE, con quien sí se comunicaba asiduamente, la oportunidad de negociar en la zona de Belén de Bajirá con sembradíos de palma y una estación de gasolina. Para controvertir las argumentaciones de este postulado, se extrae un aparte de su declaración, en la audiencia pública del 23 de julio de 2012, acerca de su relación con la procesada:

"... yo sabía de que era abogada, que había trabajado en una alcaldía en Gómez Plata creo que era y como todo señora juez, yo cuando me fui a trabajar con FIDEL CASTAÑO, que fuimos engañados, que era para manejar unas fincas ganaderas, pero cuando llegamos, llegamos fue a un grupo armado, ya al partir de los años, no recuerdo la fecha, yo salía a Medellín y me encontraba con el hermano de ella, porque nos conocimos desde pequeños que se llamaba JAIRO ENRIQUE, entonces con JAIRO si me encontraba en Medellín, ahí hablábamos y se trató de hacer una amistad de ese odio cuando éramos niños, empecé a tener una amistad con JAIRO OSPINA, ya cuando se presenta las compras de tierra para sembrar palma, yo estoy en Medellín y JAIRO es una

³⁴² Declaración en audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012

³⁴³ Indagatoria del 3 de junio de 2009, folios 251 y ss del C 27

persona que viene de una familia rica, de una herencia que les dejó su padre, por lo cual le dije que había trabajado con las empresas públicas de Medellín, preparó a todos su hijos, les dio buen estudio, unos fueron abogados, creo que hoy en día hay unos en otros países, una familia de bien, preparada y estudiada en la ciudad de Medellín, tenían sus buenos carros, tenían todo para esa época, entonces estando con JAIRO una vez en Medellín, cuando ya estaba la palma crecida y todo eso, JAIRO negociaba con carros, tenía negocios, el hombre tenía sus negocios y yo le dije JAIRO porque no vas a la región de Bajirá, hay una oportunidad de negocios en este momento de sembrar palma, colocar una bomba de gasolina, porque en ese momento señora juez había mucho dinero por estas empresas que se estaban montando, ahí fue donde yo como a los 6 meses me dice él vamos a comprar una bomba en Bajirá, la voy a comprar con mi hermana SOR, ahí es donde vuelvo a encontrarme con la señora SOR, que no la conocía, no me acordaba de ella, ese es todo el contacto con la señora SOR...".

Así las cosas, esta declaración no sólo diverge con las mismas aserciones de **OSPINA RENDÓN**, sino con las afirmaciones de **RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA** en cuanto indicó que **JESÚS IGNACIO** era propietario de una estación de gasolina, hecho que simplemente justificó con base en supuestas habladurías en el sector de que **SOR ENID** y él eran hermanos, razón por la cual, en criterio de **JESÚS IGNACIO**, **RAÚL EMILIO** debió haber hecho esa deducción porque seguramente pensaban que eran sus *testaferros*.

Sin embargo, posteriormente el mismo **ROLDÁN PÉREZ** agregó que, no obstante compró en sociedad con alias H.H un terreno para la siembra de palma, posteriormente, este último se retiró del negocio por los altos costos que generaba y "Monoleche" quedó también con su parte, empero, ulteriormente, al no ser capaz de *sostener* económicamente dicho asunto, habló con **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** y le solicitó la devolución del dinero que había invertido y "*quédense ustedes con la palma*", pero ya **DAZA PRETELT** "*la parte de empresa que era mía*", la había hipotecado a un banco, razón por la cual le hizo el reclamo; **JAVIER JOSÉ** se queda con su parte, y ahí es cuando comienzan a vender acciones de **URAPALMA**, empresa que como nunca les hizo "papeles", por ello, la parte que le correspondía fue hipotecada, parte que le pusieron como nombre "*Agropalma para el señor JAVIER poderla hipotecar, que tengo entendido que esa fue la parte que la señora SOR negoció*".

Luego de ello, el postulado dijo que el nombre de **AGROPALMA** fue puesto con posterioridad, esto es, cuando entregó los terrenos a **URAPALMA** y ésta empezó a vender acciones y a conformar otras empresas, empresa sobre la que, casualmente, realizó la procesada **SOR ENID** la negociación.

Ahora bien, conforme a las reglas de la sana crítica y haciendo uso de un mero ejercicio de contrastación, se evidenciaron otras contradicciones en las que incurrieron tanto la acusada **SOR ENID OSPINA RENDÓN** como este postulado, entre las cuales se encuentra que, no obstante la enjuiciada en versión libre³⁴⁴ indicó que cuando llegaron a la región de Belén de Bajirá en el 2002, establecieron contacto y relaciones comerciales con URAPALMA porque le vendían combustible, con la cual, luego de una negociación por un supuesto cruce de cuentas *-al que se aludió más detalladamente con antelación-*, como a finales del 2002, se concretó el negocio de la compra de una parcela dentro de los cultivos de palma, que les ofreció en un mapa, *“el cual todavía no estaba sembrado, era rastrojo, para empezar a sembrar y es donde se concretó el negocio de 254 hectáreas que nos ofreció”*.

Por el contrario, JESÚS IGNACIO indicó en la audiencia pública que los predios que inicialmente tuvo en sociedad con alias “HH” y posteriormente quedaron como suyos, se encontraban totalmente sembrados de palma, al punto de que adujo que *“la parte de la palma mía que la tuve y comencé a tenerla hasta que echó los primeros retoños... ya se comenzó que para comenzar a recoger la fruta había que poner cable vía, eso eran como 80 millones de pesos cada quince días, cada mes...”*, que URAPALMA se había encargado de sembrarla y que era la mejor palma que había en ese momento, lo cual, incluso, fue lo que generó que **JAVIER JOSÉ DAZA PRETEL** la hipotecara.

No es, pues, casualidad que este postulado sea militante de la Casa Castaño, que precisamente debe su nombre a los máximos jefes paramilitares JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL y a sus hermanos, primero de los cuales, como ya se dijo en esta sentencia, fue el precursor del proyecto palmicultor; y que **SOR ENID OSPINA RENDÓN** termine como “comerciante” en esa zona y suscriba una de las escrituras públicas acerca de la adquisición de un predio que deviene de una de las accesiones irregulares, máxime si se tiene en cuenta que la empresa que representaba la enjuiciada, Agropalma, según HASBÚN MENDOZA, *“nosotros siempre la determinamos como dentro del triángulo”*³⁴⁵, denominación que este declarante le dio a una zona en la que quienes estaban en ella debían aportar dinero a un fondo de gastos comunes.

³⁴⁴ Del 27 de septiembre de 2007, folios 135 y ss del C. 14

³⁴⁵ Declaración en audiencia pública del 3 y 4 de diciembre de 2012

Entre el mencionado "triángulo" también se encontraban ubicadas las empresas Palmura, Urapalma, Palmas S.A y Palmadó.

Así las cosas, la empresa AGROPALMA, representada por **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, era un apéndice de URAPALMA y en esa condición la procesada no sólo hizo parte de la organización criminal sino que realizó actos tendientes a hacer efectivos los desplazamientos de pobladores o de personas que trataron de retornar a sus predios pero que, sin embargo, no lo pudieron hacer por las talanqueras y los hostigamientos de paramilitares y demás adeptos a la organización. Dichos actos obviamente se concretaron con la suscripción de la escritura pública 2.778 del 13 de octubre de 2004, mediante la cual ésta acusada compró 254 hectáreas, que devienen de la accesión ficta al terreno del fallecido LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO de un sinnúmero de hectáreas, cuyos poseedores o propietarios también fueron despojados de sus terrenos por la empresa matriz, despojos y consecuentes desplazamientos que fueron también cometidos por AGROPALMA si se tiene en cuenta, por ejemplo, el caso de VÍCTOR NORBERTO RENTERÍA MARTÍNEZ³⁴⁶ y su familia, de quienes si bien es cierto abandonaron su finca inicialmente por la violencia que los azotó en el año 1997, no han vuelto a la misma porque tiene cultivos de palma de la empresa que representa **OSPINA RENDÓN**, no obstante no la vendieron.

De otra parte, en cuanto al delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, debe aclararse que no obstante en el informe final, de julio de 2009, de identificación del impacto ambiental generado por el establecimiento de cultivos de palma de aceite, no relacionó a AGROPALMA como una de las empresas que hubiese generado impacto ambiental negativo e incluso se indicó que el área de "Agropalmas de Bajirá" se encuentra por fuera de la reserva forestal del pacífico y de los territorios colectivos; lo cierto es que en la actuación se probó que AGROPALMA adquirió 254 hectáreas mediante escritura pública 2.778, del 13 de octubre de 2004, por valor de \$785.242.980, cuya procedencia eran los actos notariales mediante los cuales se realizó la accesión ficta al terreno de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO y su posterior fraccionamiento.

³⁴⁶ Folios 281 y ss del C. 19

Así las cosas, como ni siquiera coincide la extensión relacionada en dicho informe, valga decir, de 48 hectáreas, con la realmente adquirida por la justiciable de 254 hectáreas, no puede entenderse que realmente la totalidad de dicho predio se encuentre por fuera de los territorios colectivos y/o de reserva forestal, ya que precisamente una de las finalidades de las accesiones fictas o simuladas era legalizar predios colindantes de terrenos que sí tenían título individual, como es el caso del predio de LINO ANTONIO DÍAZ ALMARIO, el cual fue adjudicado por el INCORA mediante Resolución 4822 del 31 de octubre de 1990.

En otras palabras, si la extensión de dicho predio fue aumentado abruptamente de 18 hectáreas, 3.549 mts² a 5.908 hectáreas, 6.451 mts² fue justamente para que el título individual del predio accedido simuladamente abarcara fundos que no lo tenían, esto es, los que pertenecían al título colectivo y que, por ende era *"inalienable, imprescriptible e inembargable"*, tal como lo indica el artículo 7° de la Ley 70 de 1993 respecto a la tierra de la comunidad negra destinada al uso colectivo.

Por lo anterior, es que para esta funcionaria no es atendible lo referente a la ajenidad de los predios de AGROPALMA de los territorios colectivos y/o de reserva forestal, máxime si LUIS ALBERTO RENTERÍA MOSQUERA³⁴⁷ expuso que en el año 2000 empezaron a trabajar 26 hectáreas de monte de la finca "Rosa Gladis", que pertenece a su padre, empero, luego **JAVIER DAZA** y alias Palillo llamaron a su padre LUIS OVIDIO RENTERÍA, lo llevaron para otra finca y le dijeron que ya esas tierras eran de ellos y que *"el que cruzara a este lado y no fuera trabajador de las palmas era declarado objetivo militar"*, razón por la que no pudieron volver a cruzar para la finca, la cual finalmente fue adecuada para el vivero central de la empresa y, **posteriormente, se la vendió a AGROPALMA.**

Asimismo, este testigo señaló que su padre le reclamó a **DAZA PRETELT**, pero éste le indicó que si no estaba de acuerdo buscara un abogado, que él tenía los suyos.

En cuanto a la naturaleza de predios a los que aludió este testigo como de su familia, manifestó que tres de sus fincas tenían título individual y una de ellas

³⁴⁷ Folios 64 y ss del C. 12

tenía título colectivo y que de dichas fincas aproximadamente están sembradas 120 hectáreas con palma aceitera.

Así las cosas, es claro que el terreno donde se ubicaba AGROPALMA, representada por **SOR ENID OSPINA RENDÓN**, estaba integrado por territorios colectivos, por tanto, pese a que la enjuiciada y su defensor aludieron a que la primera adquirió un préstamo en BBVA y no en FINAGRO, ello no es óbice para que con su comportamiento hubiese incurrido en los delitos que la Fiscalía le endilgó, máxime si existe prueba directa de que participó en actos notariales que finalmente concretaron el desarraigo de los poseedores o propietarios de los predios, circunstancia que también evidencia el acuerdo de voluntades con la agrupación ilegal.

De otro lado, respecto a la solicitud de la defensa de **OSPINA RENDÓN** de rechazar como prueba las declaraciones de MIGUEL PÉREZ CAVADÍA y ENRIQUE MANUEL PETRO HERNÁNDEZ y las aportadas por PEDRO CAMILO TORRES CÁRDENAS a la actuación, porque supuestamente fueron *"recaudadas con violación al debido proceso y ante autoridad diferente a la obligada legalmente a obtenerla, o aportada de manera ilegal previa confesión del aportante de haberla sustraído ilícitamente de su fuente"*, no se accede a dicho pedimento, no sólo en atención a su ambigüedad, pues no se especificó ni siquiera por qué se fracturó el debido proceso, cuáles fueron sus repercusiones y el daño que aparentemente se causó; sino porque verificadas las declaraciones aludidas, ambas fueron recaudadas por la autoridad legal, esto es, el entonces Fiscal encargado de este asunto, doctor Héctor Cruz Carvajal.

Por lo demás, en relación con las pruebas aportadas por TORRES CÁRDENAS, esta funcionaria no se pronunciará respecto a la solicitud de rechazo, ya que en esta sentencia se hizo referencia a su testimonio, el cual hace parte de los medios de pruebas establecidos por el legislador en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal y, por tanto, es susceptible de valoración -Ley 600 de 2000-.

De otra parte, también debe esclarecerse que el hecho de que el Estado colombiano, a través de las diferentes entidades como el entonces INCORA - ahora INCODER- hubiese expedido apenas el 28 de noviembre de 2000 las

Resoluciones 2801 y 2809, mediante las cuales se adjudicaron terrenos baldíos ocupados colectivamente, ello no quiere decir que las negociaciones jurídicas o escrituras públicas suscritas con anterioridad a las mismas no se hubiesen realizado sobre territorios colectivos, pues las comunidades negras adquirieron derechos desde su asentamiento y ocupación ancestral en dicha zona. Así, entonces, de lo que se trata es de reconocer el derecho de esas comunidades negras a la propiedad colectiva. Por ello, el artículo 55 transitorio de la Constitución Nacional estableció:

*"Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, **una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva** sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley..."* (Negrillas y subraya fuera de texto)

Asimismo, la Ley 70 de 1993, mediante la cual se desarrolló dicho artículo transitorio 55 de la Constitución Política, prevé en su canon 1º, que tiene por objeto:

*"... **reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.*

De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley..." (Negrillas y subraya fuera de texto)

Por su parte, el Decreto 1745 de 1995, mediante el cual se adoptó el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de tales comunidades; entre otros aspectos, señala dentro de sus considerandos:

*"Que es deber del Estado **reconocer** y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, para lo cual debe propender por el reconocimiento,*

protección y desarrollo autónomo de las culturas y de las personas que la conforman..." (Negrilla y subraya fuera de texto)

En tales condiciones, de lo que se trataba era simplemente de reconocer y delimitar el terreno colectivo a las comunidades negras, el cual venían ocupando ancestralmente y transmitiéndolo de generación en generación.

En otras palabras, el sólo hecho de que los pobladores aún no tuviesen el título colectivo reconocido no implicaba el desconocimiento de sus derechos, que habían adquirido desde muchos tiempo atrás, ni muchos menos facultaba a terceros de mala fe, como se ha demostrado que son estos procesados, a hacerse arbitrariamente de su terrenos, adjudicación que, por lo demás, de ninguna manera pudo haber sido sorpresiva para los enjuiciados porque no en vano realizaron varias tretas para dar visos de legalidad a la obtención de las heredades, como la accesión ficta de un sinnúmero de predios, a fin de legalizarlos con títulos individuales expedidos por el INCORA.

Además, para la suscrita es evidente, por todos los mecanismos fraudulentos que utilizaron para ello, que los empresarios se aprovecharon de la mora de las entidades del Estado en realizar el proceso de adjudicación y registro e hicieron toda clase de artimañas jurídicas para hacer incurrir en error a diversas entidades públicas, obviamente no sólo para blindarse de requerimientos posteriores sino para acceder a los créditos y beneficios agrarios que se otorgaban en la implementación de este tipo de proyectos.

Por lo demás, deben resaltarse, como pruebas directas, que hacen más fehaciente el origen, establecimiento y desarrollo paramilitar del proyecto palmicultor, el testimonio del paramilitar HEBERT VELOZA GARCÍA³⁴⁸, en el cual manifestó que VICENTE CASTAÑO fue el propulsor del plan palmífero, quien aproximadamente a partir de 1996 comenzó a adquirir "*gran cantidad de tierras en ese sector del país*", aspecto que es corroborado con la carta dirigida a JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL³⁴⁹, hallada en la USB de su hermano, por el jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO GIL, en la que éste confirma que el proyecto del cultivo de la palma era un propósito de aquél.

³⁴⁸ Folios 13 y ss del C. 26

³⁴⁹ La cual fue entregada por el postulado HEBERT VELOZA GARCÍA, según lo manifestó la Fiscal 17 de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, mediante oficio 2343 del 6 de octubre de 2008, folios 244, 245 y 246 del C. 21

En el mismo sentido, VELOZA GARCÍA³⁵⁰ se refirió al enfrentamiento entre otro líder paramilitar, CARLOS MAURICIO GARCÍA FERNÁNDEZ, apodado “Rodrigo” o “Doble Cero”, y VICENTE CASTAÑO por las manifestaciones que hizo aquél en la revista Semana, respecto a una denuncia en contra de VICENTE CASTAÑO, en razón de que la palma en Urabá “se está sembrando con sangre”, que estaban desplazándose comunidades negras y apropiándose de esas tierras, motivo por el cual alias “El Profe” dispuso que se enfrentara militarmente a “Doble Cero”, aspecto del cual “HH” mencionó que tiene conocimiento directo de que VICENTE CASTAÑO *montó un proyecto* en Urabá de palma africana que se hizo en tierras de comunidades negras, incluso aludió al correo electrónico que le remitió CARLOS CASTAÑO a VICENTE respecto al tema de la palma.

Asimismo, este deponente indicó que las comunidades del Urabá sabían que VICENTE canalizó un río, volvió esas tierras aptas para poder cultivarlas de palma y dispuso a varias personas para comprarlas. Además, dijo que “*empresarios bananeros tienen palma allá en este momento*” y que ese proyecto, gerenciado por **JAVIER DAZA**, era de VICENTE, quien trajo una gente de Santa Marta, y después de que “El Profe” *jalonea* se fueron vinculando otras personas, como empresarios bananeros y *gente del interior del país*.

En tales condiciones, luego de un análisis conjunto y concatenado de los elementos de convicción que se encuentran en la actuación, se condenará a los justiciables a los que se aludió en precedencia, por los delitos por los que la Fiscalía los acusó, ya que existe prueba suficiente, de conformidad con el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, que conduce a la certeza respecto de la conducta punible y de la responsabilidad de los procesados.

En efecto, como viene de verse, no se trata de meras conjeturas a partir de un contexto general, como aludieron varios de los abogados, especialmente el defensor de **SIERRA MORENO**, sino de un análisis probatorio conjugado con los principios de la sana crítica, con fundamento en lo cual se vislumbra que no puede ser mera casualidad o coincidencia que los empresarios insistan en que se encontraban de buena fe, sin conocimiento de lo que realmente pasaba en la región, ajenos a los actos de desplazamiento y en general al actuar paramilitar, y que fueran cuidados por un grupo de paramilitares comandados por Palillo y

³⁵⁰ En declaración ante justicia transicional del 14 de agosto de 2008

55, pero como líder máximo VICENTE CASTAÑO, que estaba encargado de todo el sector palmero, y del denominado "triángulo", tal como lo refirió RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA³⁵¹.

Así las cosas, por todas las circunstancias que rodearon los hechos, es que para esta funcionaria no es creíble la buena fe, con la que al parecer, tanto los justiciables como sus defensores, tratan de justificar sus actuaciones en la compra de terrenos, pues se trata de una zona, en la cual fue notoria, por ser de público conocimiento, la predominancia del desplazamiento forzado, los homicidios y la barbarie por parte del grupo paramilitar, por tanto, contraría el principio de la buena fe comprar tierras a muy bajo costo a una población que huye horrorizada o que se encuentra en condiciones de necesidad como consecuencia de su desarraigo, máxime si se tiene en cuenta que para los empresarios y demás colaboradores era evidente la intención que tuvieron la mayoría de pobladores de retornar a sus predios, al punto que se constituyeron zonas humanitarias ante su imposibilidad de recuperarlos y como manera de resguardarse de los hostigamientos.

Esa notoriedad se hace aún más irrefutable si se tiene en cuenta que los éxodos masivos iniciaron en 1997 y tan solo 2 ó 3 años después empezaron a establecerse las empresas palmicultoras en el sector. Por ello, no podría hablarse de un simple desconocimiento de la situación que albergaba esas tierras como que no existió siquiera una solución de continuidad en el tiempo.

Además, los señalamientos de las víctimas demuestran la mala fe de los acusados, su gran aporte en el proyecto paramilitar, sus actos tendientes a desplazar o mantener desplazados a los lugareños y, por supuesto, su consecuente invasión de terrenos que, al unísono, los declarantes manifestaron eran colectivos, en los cuales también aconteció, para el desarrollo del proyecto palmicultor, la tala de árboles, secamiento y desvío de ríos y, con ello, la muerte o huida inevitable de especies animales que habitaban allí, para la siembra de una palma africana, cuya naturaleza es absorber nutrientes importantes en la riqueza del suelo, circunstancia que finalmente ocasionó una afectación grave de los componentes naturales del sector.

³⁵¹ Declaración en audiencia pública del 3 de diciembre de 2012

Así las cosas, no obstante algunas entidades públicas hubiesen patrocinado en algún momento histórico proyectos agroindustriales, como formas de incentivar la inversión en el campo y, por ende, como una manera propicia para el empuje del campesinado, no quiere decir que dicha inversión fuese a costa de los mismos ni que habilitara a los procesados, debido a la ausencia de Estado en el sector, como lo reclamó **SIERRA MORENO** en sus alegatos finales, a utilizar un cúmulo de estrategias ilegales para acceder a los predios y mantener a salvo el proyecto palmicultor y, por ende, sus intereses económicos, los que prevalecieron a toda costa.

Con todo, no se quiere dejar de lado o desconocer que la actividad paramilitar permeó toda clase de entidades públicas y privadas, y alcanzó esferas políticas, religiosas, económicas y sociales, lo cual obviamente generó corrupción, al punto de que varios personajes públicos, como notarios, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios de entidades estatales como el INCODER, ya fueron condenados por los nexos paramilitares y consecuente ayuda en el alcance u obtención de sus fines, lo cual hicieron obviamente por retribuciones de toda índole.

De otro lado, también debe precisarse que el accionar de las ONG en la región, del que se duele la mayoría de procesados y abogados, referente a una posible vinculación de guerrilleros en las mismas y una supuesta manipulación del campesinado, a fin de obtener un provecho propio, ha sido utilizado en esta actuación como una cortina de humo para distraer la atención de los funcionarios en cuanto a la real participación de los procesados en las conductas punibles que les endilgó la Fiscalía, la cual, como viene de verse, se ha inferido o dilucidado a raíz de la concatenación de las pruebas y la coincidencia en la mayoría de aspectos relevantes de las declaraciones entre sí de las víctimas y de estas con los demás elementos probatorios, como, por ejemplo, las irregularidades que salieron a flote tanto en las resoluciones de adjudicación como en las escrituras y registros.

Además, si en gracia de discusión se aceptare esa manera de actuar por parte de las ONG, ello deberá ser investigado por aparte, como se tiene entendido que se está haciendo, lo cual no desdibuja de ninguna manera la autoría de los justiciables en los hechos, pues existe prueba suficiente, que nada tiene que ver

con dicha supuesta manipulación, que lleva al convencimiento, más allá de toda duda, de la responsabilidad de los mismos.

Es más, acerca de la invasión de las tierras, los desplazamientos y la prolongación de los mismos, GLORIA AMPARO SILVA TOVAR, en ampliación de denuncia en el proceso que se adelantaba contra MANUEL MOYA LARA por el delito de fraude procesal, manifestó que éste, sin ser el actual representante del Consejo Comunitario de la cuenca del Río Curvaradó, pues ya se encontraba como tal LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA, firmó actas de compromiso y acuerdos de intención, avalando a empresas palmicultoras que han ocupado el territorio colectivo para la siembra de palma de aceite, sin consultar a las comunidades afrodescendientes, quienes públicamente manifestaron su decisión de proteger las tierras, exigir la devolución de las mismas, la suspensión de la siembra y la intervención de las autoridades.

Asimismo, expuso:

*"Quiero aclarar además que en avance de la siembra de palma se da aprovechando el abandono de las tierras al cual se vieron forzados los campesinos en el año 2001 y a la imposibilidad de regresar debido a la presencia permanente y amenazas que han ejercido los paramilitares en la zona"*³⁵²

En el mismo sentido, LIGIA MARÍA CHAVERRA MENA, en ampliación de denuncia³⁵³ que rindió en esa misma actuación, expresó que MOYA LARA celebró acuerdos con las empresas palmeras haciéndose pasar como representante legal de dicho consejo comunitario.

Estas afirmaciones, las cuales coinciden con la suscripción de un sinnúmero de escrituras que se relacionaron con antelación, también prueban la concertación para delinquir que había entre los procesados mencionados y otros sujetos que se valieron de las funciones que tuvieron en tiempo pasado para avalar a los empresarios en su actividad económica, circunstancia que también demuestra la intención, esto es, el dolo en la ejecución delictiva.

En tales condiciones, no es posible que los procesados hubiesen actuado bajo un error de tipo o de prohibición, no sólo porque, en el caso de los empresarios,

³⁵² Folios 126 y ss del C. 16 anexo

³⁵³ Folios 303 y ss del C. 16 anexo.

su condición precisamente conlleva ciertas habilidades y destrezas para el habitual desarrollo de sus negocios, sino porque aún en el hipotético caso en que se diera por admitido que ingresaron a la zona sin conocimiento de las situaciones antecedentes de desplazamiento en el lugar, lo cierto es que tuvieron plena posibilidad de actualizar su conocimiento, porque de acuerdo a la declaración de las víctimas, en diferentes oportunidades radicaron quejas e hicieron peticiones ante los empresarios para que les solucionaran los problemas con sus tierras.

Asimismo, es menester destacar que las alianzas que realizaron los empresarios con el campesinado en realidad si fueron estratégicas pero para eludir las prohibiciones legales y, además, finalmente sólo favorecieron a la industria palmera y no a los campesinos.

Además, se tiene a varios abogados que precisamente por su conocimiento profesional tenían que saber de las estratagemas que se idearon con la finalidad de asegurar beneficios económicos a partir de una realidad delictiva.

En suma, como están las cosas, este Despacho encuentra que en este proceso se reúnen los presupuestos del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal para condenar a estos justiciables por los delitos de Concierto para Delinquir con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. La prueba en ese sentido es sumamente clara y da la certeza tanto de la materialidad de los delitos como de la responsabilidad de los enjuiciados.

De otro lado, respecto a la invasión de territorios colectivos y a los impactos ambientales que se le dedujeron a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA**, en principio debe analizarse el estudio realizado a la zona de los hechos, a fin de establecer tanto los impactos ambientales que se generaron a partir del desarrollo de actividades dirigidas al cultivo de la palma o de la ganadería, como si la empresa de la cual este procesado hacía parte se encuentra dentro de las relacionadas como asentadas dentro de territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y, en segundo lugar, en suelos pertenecientes a la reserva forestal del pacífico.

Pues bien, en la actuación se demostró con el certificado de existencia y representación³⁵⁴ que **CLAUDIO ADOLFO** es representante legal suplente y socio de "Inversiones Fregni Ochoa Hnos Limitada", empresa que, según el informe de impacto ambiental de marras, tiene un área de actividad productiva de 349.38 hectáreas en palma aceitera en territorios colectivos, extensión que también es reportada dentro de la reserva forestal del pacífico, aspectos que se constituyen como prueba indicadora de la responsabilidad de este acusado.

En efecto, en principio se evidencia en el expediente que dicha empresa adquirió mediante escritura 1.322, del 6 de agosto de 2002, de la Notaría 21 de Medellín, un inmueble denominado "Nueva Esperanza", ubicado en el paraje las Camelias, corregimiento de Curvaradó, cuya extensión es de 56 hectáreas y 2.500 mts2 a la empresa agropecuaria JEG, predio que en precedencia fue adquirido por TOMÁS EUGENIO DE LA OSSA NAVARRO, debido a adjudicación que le hizo el INCORA mediante resolución 409, del 8 de agosto de 1988.

En relación con este fundo, la Resolución 2424, del 10 de septiembre de 2007, mediante la cual se deslindan los territorios colectivos adjudicados al Consejo Comunitario del río Curvaradó de los predios de propiedad privada adjudicados a particulares, determinó que efectivamente se trataba de un terreno perteneciente al dominio privado, según se relacionó en el listado de propiedades particulares.

Sin embargo, por informe de policía judicial del 27 de septiembre de 2010³⁵⁵, rendido por los entonces investigadores criminalísticos del CTI, OCTAVIANO CASAS SÁNCHEZ y JUAN HERNÁN VACA URREGO, se conoció que en la Notaría Única de Carepa, se encontraba la escritura pública 736, del 8 de octubre 2002³⁵⁶, mediante la cual **CLAUDIO ADOLFO**, como representante legal de la empresa Inversiones Fregni Ochoa Hermanos Limitada, declaró que al lote "Nueva Esperanza" de 56 hectáreas y 2.500 mts2, le accedió 307 hectáreas y 1.000 mts2, razón por la cual dicho terreno quedó con una extensión de 363 hectáreas y 3.500 mts2.

³⁵⁴ Folios 81 anverso y ss del C. 19, la cual se constituyó mediante escritura pública 4125, del 30 de agosto de 1971.

³⁵⁵ Folios 143 y ss del C. 53

³⁵⁶ Folios 153 y ss del C. 27 anexo

Pues bien, a raíz de esta declaratoria de accesión es que la suscrita deduce el dolo del acusado y, por ende, su conocimiento respecto de la existencia de los terrenos colectivos y, consecuentemente, de las prohibiciones de la Ley 70 de 1993, veamos:

En primer término, si bien es cierto el fundo "Nueva Esperanza" fue adquirido como terreno de propiedad privada, el sólo hecho de que el acusado haya tratado de apoderarse de una extensión exorbitante de tierras –con la figura ilegal de la accesión- tan sólo 2 meses después de su adquisición, demuestra un evidente interés en la apropiación de predios colindantes tratando de sanear o legalizar dicha adquisición con una figura jurídica que no sólo a todas luces es inaplicable por ilegal, sino que hace parte de una de las modalidades de las que se valieron la mayoría de procesados en este asunto para hacerse de terrenos de propiedad colectiva, con lo cual se estaba contrariando las prohibiciones de la Ley 70 de 1993, lo cual no es mera casualidad.

De otra parte, también se encuentra la limitación relativa a que, si en gracia de discusión se acepta que realmente ocurrió el fenómeno natural de aluvión por el aumento de la ribera de un río o un lago colindante por el **lento e imperceptible** retiro de las aguas, se trata de zonas ribereñas, cuyo borde análogo, hasta de 30 metros, pertenece al Estado y, por ende son bienes de uso público. Por tanto, resulta jurídicamente inviable la adquisición de terrenos por la figura de la accesión por aluvión, precisamente por tratarse de bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, cuya adjudicación como baldío está prohibida expresamente, tal como lo dispone el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente -Decreto 2811 de 1974-:

"Artículo 83°.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

- a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
- b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
- c.- Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
- d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;**
- e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
- f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.

Artículo 84°.- La adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de aguas, cauces ni, en general, la de bienes a que se refiere el artículo anterior, que pertenecen al dominio público." (Negrilla fuera de texto)

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 26 de julio de 2007, con ponencia del Consejero Enrique José Arboleda Perdomo, se refirió a este tema, en razón del requerimiento del entonces Ministro del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holguín Sardi, a raíz del pedimento de la Superintendencia de Notariado y Registro acerca de las adjudicaciones de baldíos riberaños y al registro de la accesión como modo adquisitivo de dominio, precisamente porque en ciernes de la década de los noventa, el INCORA adjudicó terrenos baldíos ubicados en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y posteriormente los propietarios de dichas heredades, mediante escrituras públicas, actualizaron el área y los linderos, por la supuesta ocurrencia de fenómenos naturales, como el desecamiento de ríos, y que como consecuencia habían adquirido por el modo de accesión el derecho de dominio sobre los terrenos drenados. En tal sentido, dicha Corporación indicó:

"Salvo derechos adquiridos con antelación al 18 de diciembre de 1974, no es legalmente posible la accesión por aluvión tratándose de inmuebles riberaños de propiedad privada, pues de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del código de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, el cauce de los ríos, una franja paralela a éste en extensión máxima de 30 metros, y las demás superficies anejas a las aguas, son "bienes inalienables e imprescriptibles del Estado" y están expresamente excluidos de los procesos de adjudicación de baldíos..."

Así las cosas, la prueba de la intencionalidad criminal de **FREGNI OCHOA** se traduce en la declaración que éste realizó de la supuesta accesión "natural" en la Notaría Única de Carepa, máxime si en la escritura pública se hace referencia al alinderamiento del lote de terreno rural, y una de sus colindancias es que al *"... SUROESTE, SURESTE Y OESTE, del punto No. 92 al delta 108. con baldíos nacionales cenagosos..."*, circunstancia que hace aún más evidente la naturaleza pública de los bienes contiguos.

Es más, en el mapa de georreferenciación del Consejo Comunitario del río Curvaradó se percibe que el terreno Nueva Esperanza se encuentra rodeado de predios de titulación colectiva, motivo por el cual tampoco sería legal la aplicación de la figura de la accesión.

De otra parte, en el proceso también se probó la manipulación de los terrenos por parte de la compañía Inversiones Fregni Ochoa, lo que se tradujo

finalmente en un impacto ambiental en la zona, al punto de que en la Resolución 039, del 2 de junio de 2005³⁵⁷, el defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez Ortiz, dispuso *"APREMIAR a las empresas INVERSIONES FREGNI OCHOA y LA TUKEKA que suspendan de manera inmediata el avance de la adecuación de tierras para el establecimiento de ganadería en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó y otros territorios colectivos del departamento del Chocó"*.

En tales condiciones, en este asunto se reúnen los requisitos para condenar a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA** por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, principalmente si, se reitera, su dolo se observa en el hecho de que utilizó una de las artimañas de las que se valieron la mayoría de procesados en esta actuación para hacerse a terrenos de propiedad colectiva, sin que con ello se quiera significar que hizo parte de la concertación o de los desplazamientos, pero su proceder sí constituyó invasión de áreas de especial importancia ecológica, de lo cual existe prueba fidedigna que lo demuestra, tanto así que en la escritura pública 736, del 8 de octubre 2002³⁵⁸, mediante la cual se aumentó abrupta y exorbitantemente la extensión del predio Nueva Esperanza, de 56 hectáreas y 2.500 mts² a 363 hectáreas y 3.500 mts², se aludió al argumento utilizado por el abogado CARLOS DANIEL MERLANO RODRÍGUEZ para justificar el incremento de marras en un simple acto notarial, en el cual también se hace referencia a que la protocolización del supuesto fenómeno natural se realiza *"... en atención al concepto emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual se entrega para su protocolización..."*³⁵⁹.

"... si bien en principio parece ser que se requiere declaración judicial sobre la accesión para que proceda el registro de instrumentos públicos, lo cierto es que nuestro ordenamiento civil y procesal civil no contempla la declaratoria judicial de la accesión como si la de la prescripción. Nuestro sistema registral no es convalidante, no valida derechos ni los constituye si realmente no se tienen, no encontramos inconvenientes en que se tome nota de la declaración que hacen los titulares del dominio sobre la parte del suelo que accedió por aluvión al inmueble, especificándose en esa forma..."

³⁵⁷ Folios 15 y ss del C. 4

³⁵⁸ Folios 153 y ss del C. 27 anexo

³⁵⁹ Negrilla y subrayas fuera de texto, folio 153 anverso del C. 27 anexo

En este acápite debe recordarse que MERLANO RODRÍGUEZ³⁶⁰ ya fue condenado por estos hechos y aceptó en ampliación de indagatoria que cometió fraude procesal precisamente por "sanear" posesiones de manera fraudulenta con fundamento en este tipo de figuras jurídicas, cuyo sustento principal era el que se acaba de relacionar, según escrito del mismo declarante.

Finalmente, en cuanto atañe a la responsabilidad de los acusados **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ** y **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, en la conducta punible de Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, descrita y sancionada en el artículo 337 del Código Penal (Ley 599 de 2000), en su texto original, es decir, sin las modificaciones introducidas por el artículo 39 de la Ley 1453 de 2011, ha de indicar el despacho que impera la absolución de los procesados con fundamento en la siguiente argumentación, a saber:

La vinculación de los referidos **PENAGOS GONZÁLEZ** y **RUIZ COSSIO** a la presente actuación, fue en virtud de la adquisición de los predios denominados "Mis Delicias", *El Tesoro* y otro innominado, y el establecimiento allí, de la empresa de razón social SELVA HÚMEDA, razón por la cual en los albores de la investigación se les atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, sin embargo, posteriormente la Fiscalía decretó la preclusión a su favor respecto de las dos primeras imputaciones, en razón de que no halló pruebas suficientes que soportaran dichas conductas punibles.

No obstante lo anterior, el Fiscal acusó por el delito contra el medio ambiente a estos acusados, cargo que pervive, en esencia, con el argumento de que en la empresa "**Selva Húmeda**: 244. 51 hectáreas se localizan en zonas de reserva de las cuales 189.67 están en territorios colectivos. No obstante no aparecer registro de impactos ambientales, no debe olvidarse que los terrenos tienen uso actual para la ganadería, lo cual generó un impacto ambiental negativo, aspecto ya tratado cuando se hicieron las conclusiones de esta actividad en particular y la del cultivo de palma en general."

Previo al análisis correspondiente a la reseñada afirmación, corresponde retomar algunos aspectos ya dilucidados respecto de la estructuración del delito

³⁶⁰ Folios 181 y ss del C. 38

de invasión de áreas de especial importancia ecológica, conforme se indicó en el aparte relacionado con la materialidad del mismo.

En efecto, ha de recabar la Judicatura en la inflexión idiomática "invasión", por manera que, si bien se determinó que la misma no se restringe exclusivamente a la irrupción violenta por parte del sujeto activo de la conducta, debido a que su realización se puede verificar por quien "***ocupa, penetra, o se introduce de manera fraudulenta, clandestina, arbitraria o violenta en bienes inmuebles que no le pertenecen***", como bien se indicó respecto de aquellos procesados que se hicieron a los mimos empleando alguno de los citados ardidés, a efectos de aparentar su propiedad; en el caso concreto de **RAÚL ALBERTO** y **JOSÉ MIGUEL** sucede una circunstancia diferente, ya que los mismos adquirieron la propiedad de los tres predios relacionados de la manera prevista en la ley.

La anterior aserción no sólo estriba en los argumentos esbozados por la misma Fiscalía, en la resolución a través la cual se les precluyó dos de los delitos inicialmente atribuidos -*concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado*-, sino con fundamento en el principio de legalidad y la imposibilidad de derivar consecuencias punibles por el hecho de hacerse a determinados bienes inmuebles con el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para su adquisición.

Ciertamente, se argumentó respecto de la responsabilidad que, en su momento, se pudiese atribuir al procesado **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ** en relación con el delito de desplazamiento forzado, misma que también concernía al coacusado **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, que en la consecución de dichos predios no existieron "*actos de violencia, arbitrarios o coactivos...*", "*... no se atisba una conducta arbitraria en alguna de las negociaciones y por otro la inexistencia de un desplazamiento real, efectivo y/o potencial de los vendedores como consecuencia de las compraventas, en tanto que éstos siguieron viviendo en la zona libres de coacción al igual que las comunidades negras, al probarse dentro del plenario que dichos predios nunca han sido ocupados por dichas comunidades, sino que su posesión y vocación siempre fue de propiedad individual por parte de mestizos y colonos antioqueños...*".

Como sustento, respecto del predio "*Mis Delicias*" y sobre otro terreno innominado, de propiedad de **PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ BARAHONA**, se

aportó a la actuación el expediente 0132 del INCORA correspondiente a la adjudicación de los terrenos; en tanto que referente al predio nominado como "El Tesoro" y otro sin título de propiedad de **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, igualmente se allegó el expediente 2.897 del INCORA y la respectiva Resolución de Adjudicación 0736, del 6 de agosto de 1992, así como el contrato de promesa de compraventa de **PALACIOS PALACIOS** a **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, del 10 de febrero de 2003; de donde se desprende que las adquisiciones fueron realizadas de manera legal y con sustento jurídico en actos administrativos proferidos por las entidades gubernamentales constituidas para ello.

Adicionalmente, se cuenta con las pruebas testimoniales de **JOSÉ LUIS PALACIOS CUESTA**, **PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ BARAHONA**, **MARCELO MARCELINO POLO** y **JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS**, quienes intervinieron en los negocios jurídicos de carácter dispositivo respecto de dichos predios y confirmaron que su venta no fue mediada por "*amenazas previas, actuales o posteriores*", conforme fue aceptado por la Fiscalía y no fue objeto de discusión por ninguno de los sujetos e intervinientes procesales; de ahí que estime innecesario la Judicatura elaborar mayores elucubraciones sobre dicho asunto.

En ese orden de ideas, se establece una clara diferencia en relación con las circunstancias que rodearon el actuar de estos dos procesados respecto de las de los demás, en cuanto tiene que ver con el tema de adquisición de tierras como se viene desarrollando, ya que su accionar estaba ceñido a la ley, es decir, las negociaciones estuvieron amparadas por la normatividad vigente para la época, máxime si se acepta como verídica la afirmación traída a colación por la misma Fiscalía delegada para el caso, referida en párrafos anteriores, según la cual "... éstos [los vendedores de los predios] *siguieron viviendo en la zona libres de coacción al igual que las comunidades negras, al probarse dentro del plenario que dichos predios nunca han sido ocupados por dichas comunidades, sino que su posesión y vocación siempre fue de propiedad individual por parte de mestizos y colonos antioqueños...*". (Negrilla y subraya fuera de texto original).

Lo anterior significa, entonces, con fundamento en el principio de legalidad y estricta tipicidad, que la pregonada "*invasión*" y las consecuencias jurídico -

penales que se derivan de la misma, no es posible derivarla de actos amparados por la Ley, pues no se incursionó en dichas tierras de manera ilegítima y los terrenos fueron adquiridos bajo la premisa de la propiedad individual, argumento que no sólo fue expuesto por compradores y vendedores, sino que fue preconizado por misma Fiscalía conforme se indicó anteriormente; nótese como los vendedores, en sus testimonios, fueron quienes aseguraron ejercer un dominio exclusivo e individual por varias décadas, lo cual también fue argüido por la Fiscalía en el proveído acusatorio y que resulta importante traer a recuento, para efectos de congruencia con la conclusión del despacho, veamos:

“De otro lado, desde la situación jurídica se dijo del posible desplazamiento de que fue víctima Carmen Alicia Muñoz Garcés y algunos familiares, persona que a su vez, se encuentra relacionada con uno de los predios en discusión en este apartado.

Al respecto, está acreditado por los testimonios de ella y de Palacios Cuesta, Martínez Barahona, Palacios Palacios, y de su propio hijo, que es una persona que ejerció una posesión desde por lo menos el año 1979, ya que indica haberle comprado a otra persona mestiza o colono antioqueño que tuvo por otro espacio de tiempo la posesión del inmueble, entonces, lo que se puede afirmar es que esa es una posesión pacífica, tranquila, pública por espacio superior a cuarenta años, con lo que preliminarmente podemos afirmar que esa venta, de acuerdo a estas circunstancias, es lícita, porque pertenece a propietario individual”.

En consecuencia, no entiende la suscrita la posición ambivalente del ente persecutor cuando, respecto de comportamientos delictivos como el concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, se alega la legitimidad en la adquisición de los predios, no sólo con el argumento de la ausencia de actos que viciaran el consentimiento de los vendedores, sino con el relativo a que los mismos no hacían parte de las comunidades colectivas, en tanto que para estructurar el delito de **Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica**, se indica que gran parte de los terrenos se encuentran en territorios colectivos, erigiéndose tal afirmación en uno de los pilares fundamentales para atribuir dicha conducta.

Ahora bien, siendo consecuentes con la resolución acusatoria y los alegatos de conclusión del Fiscal en desarrollo de la audiencia pública, se argumentó que el delito de Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica es una conducta delictiva de resultado, al respecto se indicó:

"Dogmáticamente podría destacarse entre sus rasgos más relevantes, que se trata de un tipo penal en blanco y de resultado desde el punto de vista de su estructura, en relación al contenido es un tipo de comisión y frente al bien jurídico tutelado corresponde a un tipo de lesión, con mayor razón si se tiene en cuenta la condición modal prevista en el inciso segundo respecto a la agravación de pena cuando se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para la respectiva calificación³⁶¹".

Si ello es así, como en realidad parece serlo, resulta más ambivalente aún el argumento esbozado por la Fiscalía relativo a que *"... No obstante no aparecer registro de impactos ambientales, no debe olvidarse que los terrenos tienen uso actual para la ganadería, lo cual generó un impacto ambiental negativo, aspecto ya tratado cuando se hicieron las conclusiones de esta actividad en particular y la del cultivo de palma en general"*.

Al respecto, debe manifestarse que, a excepción de las demás empresas investigadas, SELVA HÚMEDA, de propiedad de los socios **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ** y **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, no reporta ningún impacto ambiental negativo del cual pueda estructurarse los elementos que tipifican, desde el punto de vista de su resultado, el delito por el que se les acusó, contrario a las demás empresas allí relacionadas, tanto las dedicadas a la explotación de la palma de aceite como a las que tenían como giro ordinario de sus negocios la ganadería extensiva, mismas que en mayor o menor grado sí reportaron, itera el Despacho, impactos negativos medioambientales.

Para una mejor ilustración al respecto, debe tenerse en cuenta lo que se indicó en el respectivo cuadro, interpolado a folio 73, reverso, del cuaderno 30, correspondiente a la página 66 del Informe Final de la Comisión de Peritos; obsérvese:

4.9.4. Cuadro de "IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS":

Para un mejor entendimiento se escanea el aparte del cuadro que se consignó en el informe ambiental:

³⁶¹ "La Corte Suprema de Justicia ha generado un interesante debate científico-dogmático al catalogar como tipo de lesión la contaminación ambiental en sentencia 22286 de 17 de febrero de 2007. Identifica en la conducta, para efectos de lo que atañe a este pronunciamiento, unos efectos primarios y unos secundarios, aquellos avenidos del acto en sí y éstos del peligro a la salud humana, los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrobiológicos."

Empresa	Recurso hídrico	Recurso suelo	Biodiversidad	Aspectos Legales
SELVA HUMEDA Área: 238.17ha Localización: Carmen del Darién Uso actual: Ganadería	Sin datos	sin afectaciones registradas	Sin datos	244,51 hectáreas se localizan en zona de Reserva de Ley 2a de 1959, en territorio colectivo de comunidades negras se localizan 189,67 hectáreas

En conclusión, si se trata de un delito de resultado y no se especificó impacto ambiental negativo respecto de la empresa SELVA HÚMEDA, mal podría derivarse responsabilidad penal con fundamento en que fue un *“aspecto ya tratado cuando se hicieron las conclusiones de esta actividad en particular [la relacionada con la ganadería extensiva, aclara la Judicatura] y la del cultivo de palma en general”*, ello por cuanto en las conclusiones no se atribuyeron dichos impactos a la empresa referida.

Aún más, no es plausible la atribución de los presuntos daños ambientales presentados en las tierras adquiridas por **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ** y **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, ya que, debe recordarse, el objeto de estudio presentado mediante el *“Informe Final de la Comisión de Peritos”*, refiere a que se tomó como base la información disponible en el periodo 2000-2008 y que ***“Las actividades objeto de estudio, se han venido realizando en la región desde antes del año 2000, sin embargo la información cartográfica solo está disponible para el periodo mencionado”*** (resaltado del Despacho)³⁶².

Esa situación también quedó plasmada en el acápite de las conclusiones del referido informe, en cuanto a la identificación de los daños ambientales en el área de estudio, ya que se determinó que con anterioridad al periodo 2000 - 2002, los ecosistemas presentaban alteraciones en sus condiciones naturales, indicándose: ***“De acuerdo con el análisis de coberturas vegetales para la zona de estudio durante el periodo 2000 - 2002 según el mapa de Ecosistemas, para dicho periodo ya se habían realizado actividades de***

³⁶² Folio 43, reverso, del C. 30, página 6 del informe en comentario

establecimiento de cultivos semipermanentes, es decir que en la mayor parte de las fincas se había adelantado un cambio en la cobertura de la tierra con anterioridad al año 2000³⁶³.

En tales condiciones, siendo consecuentes con lo anterior, los cambios en el estado de los recursos hídricos, suelo y biodiversidad, que presuntamente impactaron de manera negativa las zonas adquiridas por los procesados **PENAGOS GONZÁLEZ** y **RUIZ COSSIO**, no pueden ser atribuidos a éstos como personas naturales, ni a la empresa que fundaron, SELVA HÚMEDA, a efectos de que respondan de manera jurídico - penal en calidad de representantes de la misma, por cuanto la adquisición de los terrenos se realizó con posterioridad al año 2002 e, iteramos, la intervención en la adecuación de las tierras para la ganadería, data de antes del año 2000.

El anterior argumento no resulta extraño para la Fiscalía, por cuanto se fundamentó en el mismo para exculpar a los procesados de marras respecto del delito de concierto para delinquir agravado; al respecto se refirió en la resolución acusatoria:

*"Esta versión exculpatoria tiene coherencia con los testimonios de José Luis Palacios Cuesta del 4 de agosto de 2010³⁶⁴, Pedro José Martínez Barahona del 4 de agosto de 2010³⁶⁵ y la ampliación de la Indagatoria de Juan José Palacios Palacios realizada el 5 de agosto de 2010, además se armoniza con la prueba documental allegada, elementos que dan cuenta de la ocurrencia de dicho atentado así como su consecuencia, que no fue otra que la salida de Penagos González de la zona **sin hacer uso de los predios adquiridos**, con lo cual reflejamos la ausencia de acuerdo previo o posterior entre el sindicato y el grupo paramilitar para invertir en la zona del Urabá chocoano, siendo su conducta atípica frente al concierto para delinquir".* (Negrilla fuera de texto).

Es decir, de un lado se estableció que con anterioridad al tiempo de adquisición de los terrenos por los procesados de marras, los mismos ya habían sido intervenidos a efectos de adecuarlos para la explotación ganadera y, del otro, siendo consecuentes, no se demostró que hubiesen desarrollado actividad alguna allí, es más, como se viene de indicar, se estableció que tuvieron que marcharse de la zona **"sin hacer uso de los predios adquiridos"**.

³⁶³Folio 77, reverso, C. 30 ibidem, página 74 del informe

³⁶⁴ "Grabada mediante sistema digital, utilizando para el efecto la grabadora marca SONY ICDP620 la cual es vertida en CD que a su vez se incorporó al expediente. Sobre esta diligencia se suscribió el acta respectiva en la misma fecha de la declaración".

³⁶⁵ "Grabada mediante sistema digital, utilizando para el efecto la grabadora marca SONY ICDP620 la cual es vertida en CD que a su vez se incorporó al expediente. Sobre esta diligencia se suscribió el acta respectiva en la misma fecha de la declaración".

Asimismo, debe notarse que para el referido informe, el impacto ambiental fue evaluado mediante la aplicación de una matriz simple, la cual cruza la información de los componentes, **en términos de magnitud y duración**, y se determinó, respecto del impacto de la actividad ganadera endilgada a los procesados que ***“se presentaron afectaciones muy importantes”***³⁶⁶.

Lo anterior cobra marcada importancia por cuanto respecto de los impactos ambientales que se identificaron en la zona -relativos al fraccionamiento de ecosistemas y efectos de borde; alteración de los hábitats naturales; pérdida de biodiversidad y disminución de poblaciones de fauna y flora; incremento de niveles de fragilidad de ecosistemas; alteración del suelo por cambio de uso y cobertura vegetal; afectaciones de la dinámica hidrogeológica como consecuencia de la construcción de vías de acceso, así como de los numerosos canales de drenaje y la adecuación de tierras para el establecimiento del cultivo de la palma de aceite; alteración de humedales; reducción de la oferta ambiental de servicios ambientales asociado al bosque; inducción a procesos erosivos y alteración de ciclos biogeoquímicos, por el incremento en la compactación del suelo como consecuencia de las actividades de ganadería y afectación de la tradición cultural con el transporte en pequeñas embarcaciones y la pesca -, se indicó que ***“... no incluyen impactos ambientales de corta a muy corta duración o impactos de los cuales se carezca de certeza absoluta sobre su ocurrencia, lo anterior en razón del tiempo transcurrido desde la ejecución de actividades de palma y ganadería y la fecha de realización del presente informe”***. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, por la duración de los impactos evidenciados en la zona, no puede determinarse, desde una óptica temporal, que los mimos se produjeron durante el tiempo que los terrenos permanecieron en posesión efectiva de los procesados, máxime que, según se evidencia de la escritura de constitución de la empresa SELVA HÚMEDA, su objeto jurídico no era la ganadería y que se argumentó por los coacusados que cualquier actividad lesiva del medioambiente era atribuible a los anteriores poseedores de los predios, ya que ellos, los procesados, no los intervinieron de ninguna manera.

³⁶⁶ Folios 61 y 71 del informe del C.30 referido

En este punto cabe precisar, respecto a la declaración efectuada por el testigo RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, referente a la orden que recibió del comandante paramilitar JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL, atiente a que debía hacer que **PENAGOS GONZÁLEZ** y **RUIZ COSSIO** abandonaran la región, debido al presunto drenaje de un lago en el cual, según se indicó, concurrían a desovar unos patos denominados "*pisingos*", que si bien la Fiscalía también sustenta la solicitud de condena con fundamento en la aludida atestación, lo cierto del asunto es que tal solicitud resulta forzada a efectos de erigir la estructuración del delito deprecado.

La primera de las razones que nos llevan a la anterior aseveración, es debido a que el móvil por el cual la organización paramilitar precisaba el desplazamiento de los procesados **RAÚL ALBERTO** y **JOSÉ MIGUEL** no quedó suficientemente esclarecido, pues de un lado se argumentó que lo era por el drenaje del lago donde "desovaban los patos pisingos" y, del otro, que ellos, los coacusados, se habían establecido en una zona en la cual no debían estar al no hacer parte del proyecto paramilitar, es decir, en un vértice de lo que el aludido HASBÚN MENDOZA denominó como "*el triángulo*".

Y la segunda de las razones, es aquella relativa a que al testigo no le consta lo relativo al drenaje del lago, ya que si bien sabía que en ese sector, denominado "*el triángulo*", estaban ubicadas las tierras de los procesados, el lugar concreto y específico no fue conocido por el testigo, luego su conocimiento al respecto es enteramente referencial, pues deviene de los comentarios que al respecto le refirió JOSÉ VICENTE CASTAÑO GIL.

Al respecto, obsérvese lo que mencionó el aludido testigo, luego de indicar que nunca tuvo ningún tipo de relación con **RAÚL ALBERTO** y admitir que si la tuvo con **JOSÉ MIGUEL**, empero la misma se restringió únicamente a la voladura de unas retroexcavadoras, con ocasión de la orden emitida por CASTAÑO GIL con el propósito que desocuparan la zona; veamos³⁶⁷:

"Fiscal: ¿Conoció al señor **José Miguel Ruiz Cossio**? **Testigo:** Eeeee, creo que sí, fue con el único de Selva Húmeda o Selva Negra, ese vivero, o esos propietarios de palma, con el que tuve relación. Nunca me reuní con el señor **Raúl Penagos**. **Fiscal:** ¿Qué tipo de relación tuvo con el señor **Ruiz Cossio**? **Testigo:** En lo que le comento doctor, toda esta problemática de la secada del

³⁶⁷ En audiencia pública del 3 de diciembre de 2012

lago, de las retroexcavadoras, de las voladas y todo, fue con el señor éste, con ummm... **Fiscal:** El señor **Ruiz Cossio**... **Testigo:** correcto. **Fiscal:** ¿Le consta a usted si el señor **Raúl Alberto Penagos** o el señor **Ruiz Cossio** compraron tierras en la zona de Belén de Bajirá? **Testigo:** Si me... no me consta, yo oí, y de hecho esta problemática fue porque compraron tierras en la zona y lo otro fue que se ubicaron dentro del... en una esquinita por allá del triángulo, donde no deberían de estar, pero yo nunca vi una escritura o algo doctor. **Fiscal:** ¿recuerda exactamente el sitio donde se ubicaban esas tierras? **Testigo:** No, no, nunca lo conocí, sé que era parte de la zona esta de influencia de las autodefensas, pero no sé exactamente dónde se ubicaron ellos, ni qué hectareaje o algo, creo que eran 180 hectáreas, creo" (**Subrayas del Despacho**).

Finalmente, recaba el despacho en que el asunto del drenaje del lago no quedó plenamente establecido, ya que del mismo informe final de peritos, no se evidencia que dentro de la fauna de la región existiese alguna especie de pato, de ahí que ni siquiera se les haya mencionado.

Todo lo anterior, en punto a significar que ante el resultado negativo del juicio de tipicidad, pues no se estructura el verbo rector de invadir ni se probó un daño en el medioambiente, impera la absolución de los acusados **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ** y **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO**, como en efecto se declarará en el acápite resolutivo.

Con todo, pese a esta decisión absolutoria, no se accede a la solicitud de la defensora de **RUIZ COSSIO** en el sentido de compulsarle copias al Fiscal por prevaricato por acción, ya que el Despacho considera que el Fiscal simplemente se ciñó a cumplir con los deberes que le impone el artículo 250 de la Constitución Nacional, referentes a que la Fiscalía General de la Nación está "obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querrella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo". (Negrilla y subraya fuera de texto)

En tales condiciones, la abogada no puede pretender que a todos los fiscales a quienes no les salga avante su teoría del caso, se les compulse copias por el delito de prevaricato por acción, pues dicha conducta punible exige para su tipificación que la resolución, dictamen o concepto sea "*manifiestamente contrario a la ley*", lo cual ni siquiera se demostró mínimamente en esta actuación. Además, cabe recordarle a la abogada que se trata de una conducta

netamente dolosa, aspecto que tampoco se probó, ni mucho menos se vislumbra en este asunto.

PENA

Con sujeción a las previsiones de los artículos 4, 60 y 61 del Código Penal, se graduará la pena teniendo en cuenta que se procede por un concurso de conductas punibles integrado por desplazamiento forzado (artículo 180 del Código Penal); concierto para delinquir (artículo 340, inciso 2º, del Código Penal); e Invasión de áreas de especial importancia ecológica (artículo 337 ibídem).

Respecto del desplazamiento forzado, comporta una sanción de seis (6) a doce (12) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso (sin tener en cuenta el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, por razones de favorabilidad), de donde resulta que al dividir el ámbito de movilidad en cuartos, el primero oscila de seis (6) años a siete (7) años y seis (6) meses, los medios entre siete (7) años y seis (6) meses a diez (10) años y seis (6) meses y el máximo entre diez (10) años y seis (6) meses a doce (12) años.

En cuanto a la pena de multa, la misma fluctúa entre seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por tanto, el ámbito de movilidad corresponde a los siguientes cuartos: el primero de seiscientos (600) a ochocientos veinticinco (825) salarios mínimos legales mensuales vigentes; los medios de ochocientos veinticinco (825) a mil doscientos setenta y cinco (1.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y el máximo de mil doscientos setenta y cinco (1.275) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En relación con el delito de concierto para delinquir, conforme se explicitó en precedencia, correspondería pena privativa de la libertad de seis (6) a doce (12) años de prisión (sin tener en cuenta el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, por razones de favorabilidad), de donde resulta que al dividir el ámbito de movilidad en cuartos, el primero oscila de seis (6) años a siete (7) años y seis (6) meses, los medios entre siete (7) años y seis (6) meses a diez (10)

años y seis (6) meses y el máximo entre diez (10) años y seis (6) meses a doce (12) años de prisión.

Respecto a la multa, ésta fluctúa entre dos mil (2.000) y veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, el ámbito de movilidad en los cuartos se extiende, el primero, de dos mil (2.000) a seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales; los medios de seis mil quinientos (6.500) a quince mil quinientos (15.500) salarios mínimos legales y, el máximo, de quince mil quinientos (15.500) a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Entretanto, la conducta punible de Invasión de áreas de especial importancia ecológica agravada conlleva una pena privativa de la libertad de dos (2) a diez (10) años (8) meses, razón por la cual el ámbito de movilidad oscila, el primer cuarto, de dos (2) a cuatro (4) años y dos (2) meses; los medios de cuatro (4) años y dos (2) meses a ocho (8) años y seis (6) meses; y el máximo de ocho (8) años y seis (6) meses a diez (10) años y ocho (8) meses.

Finalmente, respecto a la multa de este delito, dicha sanción oscila entre cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero en aplicación favorable de la Ley 491 de 1999, oscilaría entre cincuenta (50) a cuatrocientos (400) salarios, de donde el primero de los cuartos fluctúa entre cincuenta (50) y ciento treinta y siete punto cinco (137.5) salarios mínimos legales mensuales; los medios, de ciento treinta y siete punto cinco (137.5) a doscientos veinticinco (225) salarios mínimos legales mensuales; y el máximo entre doscientos veinticinco (225) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales.

Así las cosas, como el artículo 31 del Código Penal establece que cuando hay concurso de conductas punibles, el enjuiciado quedará sometido a la que establezca la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, el marco legal punitivo que nos servirá de referencia es el consagrado para el delito de concierto para delinquir, por cuanto si bien la pena privativa de la libertad es similar a la del desplazamiento forzado, la sanción pecuniaria, cuya pena

también es principal, según el artículo 35 del Código Penal, es visiblemente mayor.

En tales condiciones, como no concurrieron circunstancias genéricas de mayor punibilidad, o por lo menos la Fiscalía no las dedujo, la pena se ubicará en el primer cuarto y será la pena mínima para **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO y ORLANDO MORENO MORA** por el delito de Concierto para delinquir en la modalidad del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal. Por tanto, se les sancionará con seis (6) años de prisión y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, como también incurrieron en los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, se les aumentará la sanción en cuatro (4) años, consistentes en tres (3) años por el desplazamiento forzado y un (1) año por la invasión de áreas de especial importancia ecológica. En definitiva, pues, se impondrán diez (10) años de prisión.

La multa, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 39 del Código Penal se fija en dos mil seiscientos cincuenta (2.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde a la sumatoria de las penas pecuniarias mínimas previstas en la ley para cada conducta punible, pagaderos a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura.

La sanción principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se fija por un término de seis (6) años, que corresponde al mínimo previsto en el artículo 180 del Código Penal.

Entretanto, respecto a **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ y REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** por el delito de Desplazamiento forzado también se le sancionará con seis (6) años de prisión y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Empero, por el concurso con el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, se les aumentará la sanción privativa de la libertad en un (1) año. En definitiva, pues, se impondrán siete (7) años de prisión y multa de dos mil cincuenta (2.050) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura.

De otro lado, en relación con **DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO** y **ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ** por el delito de Concierto para delinquir, en la modalidad del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal, también se les sancionará, inicialmente, con seis (6) años de prisión y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, como también se trata de un concurso de conductas punibles, pues con su comportamiento igualmente incurrieron en el delito de desplazamiento forzado, se les aumentará la sanción en tres (3) años por el delito contra la autonomía personal. En definitiva, se les impondrán nueve (9) años de prisión y multa de dos mil seiscientos (2.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura.

Igualmente, a esto procesados se les impondrá como sanción principal, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de seis (6) años, que corresponde al mínimo previsto en el artículo 180 del Código Penal.

Entretanto, a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA** por el delito de Invasión de áreas de especial importancia ecológica se le sancionará con dos (2) años de prisión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura.

Estas penas resultan justas, habida consideración de la gravedad de las conductas y el daño real causado con los punibles, pues obviamente las motivaciones de los acusados para las comisiones delictivas fueron meramente económicas, intereses que se antepusieron a otros de mayor trascendencia

como la autonomía personal de un sinnúmero de campesinos cuya única manera de subsistir y de mantener a sus familias era a través de sus tierras, las cuales, por lo menos, les aseguraban la alimentación, el resguardo y la estabilidad. Sumado a lo anterior, está la mayor intensidad del dolo, que se devela del sinnúmero de tretas de las que se valieron los enjuiciados para legalizar los fundos, cuya consecución fue el fruto del horror, la barbarie y la persecución de familias enteras, lo que denota una mayor planificación del hecho.

Por disposición del artículo 52 del Código Penal, la pena de prisión implica la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la que será por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad que se le impuso a cada uno de los acusados. Dicha pena se cumplirá conforme a las previsiones hechas por el artículo 53 de la citada codificación.

DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DEL ENCARCELAMIENTO:

Los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, de los que tratan los cánones 63 y 38 del Código Penal, respectivamente, condicionan su procedencia a dos requisitos, uno de carácter objetivo y el otro subjetivo, los cuales deben concurrir de manera simultánea.

Así las cosas, respecto a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO y ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ** las referidas exigencias, relativas a que la pena de prisión impuesta no exceda de tres (3) años o que la mínima prevista en la ley para la conducta no sea superior a cinco (5) años, correspondientemente, no se satisfacen, porque en el primero de los casos la sanción privativa de la libertad efectivamente irrogada supera ampliamente dicho monto y, en el segundo, porque la pena mínima prevista para el delito base, esto es, el concierto para

delinquir, parte de seis (6) años de prisión, quedando así erradicada la posibilidad de otorgar a estos sentenciados los aludidos mecanismos.

De la misma manera, ocurre en los casos de **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ** y **REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, ya que el delito de Desplazamiento forzado, con base en el cual se dosificó su pena, también parte de seis (6) años de prisión, razón por la cual tampoco se cumplen las exigencias aludidas para la concesión de estos sustitutos.

Con todo, como la novísima Ley 1709 del 20 de enero de 2014, introdujo varios aspectos más benéficos para el condenado, en virtud del principio de favorabilidad esta funcionaria se referirá en esos términos, concretamente en lo atinente al mínimo de la pena, al igual que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado.

En efecto, dicha normatividad establece, en su artículo 29³⁶⁸, que para la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena la sanción de prisión impuesta no puede exceder de cuatro (4) años -requisito que no cumplen si se tiene en cuenta que su pena parte de seis (6) años-; y para la prisión domiciliaria, el artículo 23³⁶⁹ dispone que el mínimo previsto en la ley para la conducta punible por la que se condena, sea de ocho (8) años.

En tales condiciones, no obstante en principio podría decirse que los condenados cumplen el requisito referido al término para acceder a la prisión domiciliaria, la primera de las disposiciones citadas señala que una de las exigencias para la concesión de este sustituto se refiere a *"que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000"*, disposición que, a su turno, excluye la concesión de subrogados y beneficios, entre ellos la prisión domiciliaria, para quienes *"hayan sido condenados por... concierto para delinquir agravado... desplazamiento forzado"*, situación en la cual se encuentran incursos los procesados.

Así las cosas, como en esta novísima normatividad existe expresa prohibición legal y las exigencias que dispuso el legislador deben concurrir de manera

³⁶⁸ Que modificó al artículo 63 del Código Penal

³⁶⁹ Que adicionó el artículo 38B al Código Penal

simultánea, a los justiciables se les negará la concesión de los referidos sustitutos.

Por tanto, a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA y MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN** a quienes el entonces Fiscal Especializado le concedió, al primero, el 15 de diciembre de 2010; la detención domiciliaria; y a la segunda y tercero, los días 10 de junio de 2010 y 14 de julio de 2010³⁷⁰, respectivamente, la suspensión de la privación de la libertad por su estado de salud; y a **MARIO LEÓN VILLA PACHECO, ORLANDO MORENO MORA, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO, SOR ENID OSPINA RENDÓN**, a quienes la entonces Jueza Adjunta a este Despacho les concedió, al primero, el 25 de abril de 2013³⁷¹; al segundo y tercero, el 7 de junio de 2013³⁷²; al cuarto, el 30 de julio de 2013³⁷³; al quinto, el 31 de julio de 2013³⁷⁴; a la sexta, el 26 de diciembre de 2012³⁷⁵; la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención en su residencia, en razón de que, en su sentir, con esta última medida se cumplían a cabalidad los fines de la medida de aseguramiento, además de que de las pruebas existentes en la actuación se desprendía que estos justiciables no evadirían la comparecencia al proceso ni entorpecerían la administración de justicia; se les revocará la detención domiciliaria y se ordenará a la INPEC su traslado inmediato al centro penitenciario que disponga el director de dicha institución, a fin de que cumplan la pena que se les impondrá.

Lo anterior, por supuesto, conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, que establece que las providencias relativas a la libertad y detención se cumplirán de inmediato, valga decir, aún sin encontrarse en firme la sentencia.

En este punto debe referirse esta funcionaria a la situación de los acusados **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, a quien, como se acaba de mencionar, le fue concedida la detención domiciliaria; y a **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ**

³⁷⁰ Folios 21 y ss del C. 38

³⁷¹ Folios 85 y ss del C. 83

³⁷² Folios 159 y ss, y 187 y ss del C. 84

³⁷³ Folios 51 y ss del C. 88

³⁷⁴ Folios 69 y ss del C. 88

³⁷⁵ Folios 1 y ss del C. 79

MEJÍA y MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, a los cuales la Fiscalía les concedió, los días 10 de junio de 2010 y 14 de julio de 2010³⁷⁶, respectivamente, la suspensión de la privación de la libertad, decisiones que fueron fundamentadas en su estado de salud. Pues bien, como se dijo, a estos procesados se les revocará la domiciliaria en razón de que para la suscrita, salvo mejor criterio, en la actualidad no se cumplen con los requerimientos legales para conceder una prisión domiciliaria con fundamento en un estado grave de enfermedad.

Para ello, se hará un breve recuento de la situación de cada uno de estos acusados para verificar su situación en particular, eso sí, cabe precisar que tan solo se tendrán en cuenta dictámenes de médicos oficiales que son, según la normatividad actual, los que realmente vinculan al juzgador.

En otras palabras no se analizarán las historias clínicas, declaraciones, conceptos ni diagnósticos de médicos o especialistas particulares aportados al expediente, precisamente porque se trata de un asunto exclusivamente dirigido al campo de la medicina y, por ende, ante la imposibilidad tanto académica como legal de emitir un concepto personal en dicha ciencia de la salud, el Despacho se ceñirá a lo conceptuado por el medico oficial, tal como lo dispuso el legislador. Eso sí, dichos dictámenes se analizarán bajo postulados de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, aspectos que sí hacen parte de las funciones del juzgador, a fin de administrar justicia.

Pues bien, en cuanto al acusado **GABRIEL JAIME**, a quien no obstante el entonces Fiscal 8º Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aludió, en providencia del 15 de diciembre de 2010³⁷⁷, a su estado de salud para finalmente concederle el sustituto de la detención domiciliaria, dicho funcionario concluyó que *"pese a que las experticias médicas concluyeron que el procesado no se encuentra en estado grave por enfermedad, el centro penitenciario debe garantizar las condiciones mínimas de sanidad para evitar graves perjuicios, se cuenta con informe expresa (sic) de los centro de reclusión, donde se expresa que no se encuentran en condiciones ni cuentan con los centros y equipos médicos*

³⁷⁶ Folios 21 y ss del C. 38

³⁷⁷ Folios 145 y ss del C. 70

necesarios y que resulten compatibles con la clase de enfermedad que presenta el señor Gabriel Jaime Sierra Moreno"³⁷⁸.

En efecto, en dictamen médico legal, del 2 de diciembre de 2010³⁷⁹, el perito oficial concluyó:

"1. EL SR. SIERRA MORENO ACTUALMENTE PUEDE SER CONTROLADO Y TRATADO MEDIANTE UN SEGUIMIENTO AMBULATORIO; NO REQUIERE DE INTERNACIÓN EN CENTRO HOSPITALARIO. 2. DADO EL COMPORTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y LAS CONDICIONES ACTUALES DE SALUD DEL EXAMINADO, SANIDAD CARCELARIA DEBE GARANTIZARLE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS CONTROLES MEDICOS SUGERIDOS Y EL TRATAMIENTO ESTABLECIDO POR EL EQUIPO MEDICO TRATANTE CON EL FIN DE PREVENIR COMPLICACIONES QUE PODRÍAN EN UN MOMENTO COMPROMETER SU SALUD Y/O SU VIDA. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EN LA SITUACION ACTUAL DE SALUD SIEMPRE Y CUANDO ESTEN GARANTIZADAS LAS CONDICIONES DE TRATAMIENTO Y CONTROL MEDICO YA MENCIONADOS, NO ES POSIBLE FUNDAMENTAR QUE EL SEÑOR SIERRA MORENO SE ENCUENTRE EN ESTADO GRAVE POR ENFERMEDAD O ENFERMEDAD MUY GRAVE INCOMPATIBLE CON LA VIDA EN RECLUSIÓN FORMAL"³⁸⁰ (Negrilla y subraya fuera de texto)

Ulteriormente, mediante autos del 14 de diciembre de 2011³⁸¹ y 24 de enero de 2012³⁸², cuando fungí como Jueza Adjunta a este Despacho, ordené la remisión inmediata de **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN y GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que se determinara la necesidad de continuar con la suspensión de la medida de aseguramiento, sin embargo, mediante oficio remitido por esa entidad al centro de servicios de estos Despachos, el 1º de marzo de 2012, se informó a este Juzgado que **SIERRA MORENO** "no se hizo presente"³⁸³.

Sin embargo, después el justiciable **GABRIEL JAIME** acudió a dicha institución, razón por la cual, en informe técnico médico legal de estado de salud, del 18 de abril de 2012, el médico oficial refirió que:

"... De acuerdo con los documentos aportados y el estado clínico del paciente (que no incluye valoración mental y esta pendiente) el paciente no presenta

³⁷⁸ Negrilla fuera de texto

³⁷⁹ Folios 81 y ss del C. 51

³⁸⁰ Folios 82 y ss del C. 51

³⁸¹ Folios 68 y ss del C. 68

³⁸² Folios 285 y ss del C. 68

³⁸³ Folio 38 del C. 69

signos de descompensación que por sí solos conlleven a la exigencia de sustitución de medida de aseguramiento intramural, sin embargo, la patología denominada ESOFAGO DE BARRETT es clasificada como una definida tendencia a generación de carcinomatosis, que implica un seguimiento estricto por parte de especialista en gastroenterología, cirugía general nutricionista, que no son susceptibles de manejar en un primer nivel de complejidad... no está comprometido su nivel de independencia, que le impidan cumplir por si solo con sus actividades cotidianas (sin consideraciones respecto al examen mental, aspecto que tratara el perito siquiatra)... No hay elementos objetivos que permitan considerar que pone en riesgo la salud de los demás internos (sin consideraciones respecto al examen mental, aspecto que tratara el perito siquiatra)... como se ha advertido, no se trata de manera exclusiva, de manejo con omeprazol, requiere un tratamiento estricto y seguimiento de su enfermedad por parte de los especialistas mencionados, una cama con cabecera elevada, estudios de endoscopia de control, evidentemente, la dieta debe ser estricta y las condiciones fitosanitarias adecuadas, circunstancias que determinara el Señor Funcionario, si pueden ser del cumplimiento en centro carcelario...".

Posteriormente, se allegó al Despacho el informe pericial de psiquiatría, del 19 de octubre de 2012³⁸⁴, realizado a **SIERRA MORENO**, en el cual se concluyó que si bien es cierto este procesado tiene antecedentes por historia clínica de un trastorno mixto de ansiedad y depresión y que incluso al momento de la valoración exhibía leves síntomas ansiosos, *"El trastorno mixto de ansiedad y depresión que exhibe el evaluado NO CONSTITUYE UN ESTADO GRAVE POR ENFERMEDAD O ENFERMEDAD MUY GRAVE INCOMPATIBLE CON LA VIDA EN RECLUSIÓN FORMAL"* y que, además, la patología que presenta requiere tratamiento por especialista en psiquiatría *"el cual puede adelantarse en el penal"*.

Este informe pericial de psiquiatría GRCOPPF-DRNOCC-546-2012³⁸⁵, fue ampliado por solicitud de la defensa el 13 de febrero de 2013³⁸⁶.

El 30 de septiembre siguiente se recibió en el centro de servicios adscrito a estos juzgados el informe de psiquiatría Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses³⁸⁷, en el que el Siquiatra Forense indicó que, luego de examinar la respectiva documentación y de realizar la entrevista siquiátrica y el examen mental al justiciable, desde el punto de vista médico siquiátrico *"NINGUNA DE LAS GUIAS DE TRATAMIENTO DE PSIQUIATRÍA HACE MENCIÓN DEL "TRATAMIENTO AL AIRE LIBRE" PARA LOS TRASTORNOS MIXTOS DE*

³⁸⁴ Folios 207 y ss del C. 77

³⁸⁵ Folios 272 y ss, C. 88

³⁸⁶ Folios 279 y ss del C. 88

³⁸⁷ Folios 262 y ss, C. 88

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN...". Seguidamente manifestó que era importante tener en cuenta las recomendaciones de los médicos tratantes, las cuales describió así:

"EL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL ESCRIBIÓ:

"EL EJERCICIO LE AYUDARÍA A BAJAR EL NIVEL DE STRESS, LO QUE DISMINUYE NOTORIAMENTE LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO, QUE ES LA RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS DEL ESÓFAGO DE BARRET"

POR SU PARTE EL ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA HA MANIFESTADO:

-*"SUGIERO TERAPIA LUMÍNICA POR UNA HORA DIARIA EN LAS MAÑANAS, IDEALMENTE SI FUERA POSIBLE ADICIONADA A ACTIVIDAD FÍSICA COMO CAMINAR EN LAS MAÑANAS AL AIRE LIBRE"*

-*"SUGIERO NUEVAMENTE HACER TERAPIA LUMÍNICA EN LAS MAÑANAS, CAMINAR, IDEALMENTE DEBERÍA TENER UN ESPACIO PARA SALIR DE SU CASA AL MENOS UNA Ó DOS HORAS AL DÍA, ESTO PODRÍA SER BENEFICIOSO PARA SU ENFERMEDAD MENTAL"*

-*"SERÍA MUY ADECUADO INICIAR PLAN DE MEDICINA DEPORTIVA EL CUAL ESTÁ PROPUESTO POR EL ORTOPEDISTA, CONSIDERO QUE ESTO SERÍA ÚTIL PARA MEJORAR LA EVOLUCIÓN DEL TRASTORNO ANSIOSO, DEPRESIVO Y DEL SUEÑO Y AYUDARÍA A BAJAR LAS DOSIS DE BENZODIAZEPINAS"*³⁸⁸

Entretanto, en cuanto a **SÁNCHEZ MEJÍA** el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó, en informe pericial del 2 de junio de 2010³⁸⁹, que está acusada se encuentra en estado grave por enfermedad en atención a las patologías que padece, por lo que es *"mandatorio darle casa por cárcel ya que requiere chequeos continuos por la gravedad del cuadro"*.

El 22 de octubre de 2010³⁹⁰, en otro informe pericial se da cuenta de que *"al momento del examen actual (22 de octubre de 2010 a las 10:00 horas) se encuentra en estado GRAVE POR ENFERMEDAD incompatible con la reclusión formal. Su enfermedad de depresión mayor sumado a su crisis actual de angustia y pánico podría justificar un manejo hospitalario por la ideas de muerte que manifiesta. La necesidad de dicho manejo la deben definir el psiquiatra tratante..."*

No obstante lo anterior, dicha entidad en informe técnico médico legal de estado de salud del 25 de enero de 2012³⁹¹, indicó que se trata de *"Mujer de 56 años con diagnosticos de hipotiroidismo, taquicardia, epilepsia, depresión mayor, coronaria descendente anterior intramural, Hipertensión arteria más vasculitis,*

³⁸⁸ Folio 267, C. 88 original

³⁸⁹ Folios 15 y ss del C. 35

³⁹⁰ Folios 103 y ss del C. 48

³⁹¹ Folios 76 y ss del C. 69

acompañada de episodios de dolor precordial a repetición que se exacerban en momentos de angustia o situaciones que le generan temor por lo que ha requerido manejo intrahospitalario de urgencia para observación hasta que se logra estabilizar, última de estas hospitalizaciones en Agosto de 2011....

(Subraya y negrilla fuera de texto)

Además, se dijo que la paciente se encuentra en buenas condiciones generales, sin síntomas ni signos agudos de sus enfermedades, sin embargo, el profesional universitario forense concluyó que para poder establecer si la acusada se encontraba o no en estado grave de enfermedad incompatible con la vida en reclusión formal, requería la valoración por psiquiatría forense y las valoraciones recientes por medicina interna y cardiología para poder establecer las condiciones actuales de su cuadro clínico.

Por tanto, mediante auto del 14 de marzo de 2012³⁹², el mismo juzgado adjunto insistió en la orden de remisión de dichos justiciables al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, además dispuso oficiar a la EPS COOMEVA, a fin de que remitieran la historia clínica 34972898-5 de **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**.

Así las cosas, el representante legal de la Clínica Montería, el 29 de marzo siguiente, aportó copia de la historia clínica de **SÁNCHEZ MEJÍA**³⁹³, en la cual se manifestó que la paciente ingresó el 9 de febrero de 2011 por "*SUDORACION, PCTE REFIERE CC DE MAS O MENOS 1 HORA DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR DIAFORESIS...*", sin embargo, luego del respectivo examen físico, se le diagnosticó como "*PCTE SANO*".

De otro lado, el informe psiquiátrico forense, del 17 de mayo de 2012³⁹⁴, estableció que a la evaluada **KATIA PATRICIA** no le detectaron signos ni síntomas de trastorno mental psicótico que la aparte de la realidad, que "*El cuadro clínico es compatible con depresión mayor Crónica compensada, en tratamiento ambulatorio*" y que necesita continuar en tratamiento ambulatorio por psiquiatría, neurología, cardiología y medicina interna.

³⁹² Folios 117 y ss del C. 69

³⁹³ Folios 129 y ss del C. 70

³⁹⁴ Folios 250 y ss del C. 72

Asimismo, en informe técnico médico legal, del 11 de julio de 2012³⁹⁵, el profesional universitario forense indicó que se trata de una mujer de 56 años de edad, cuya *"condición de una coronaria intramural (coronaria descendente anterior) le incrementa el riesgo de infarto e incluso muerte súbita cuya aparición no es posible predecir, este riesgo por lo que las revisiones de su estado de salud deben ser frecuentes y siempre realizados por personal médico especializado (Cardiología y Medicina Interna), ahora sumado El diagnostico de depresión mayor realizado por la psiquiatra tratante, este incrementa el riesgo y la morbimortalidad de la enfermedad cardiaca y además el riesgo de suicidio por lo que también se hace necesario que las consultas con psiquiatría sean realizadas de forma frecuente para que se pueda tener un control de la enfermedad y evitar episodios agudos que puedan terminar de forma fatal"*.

Igualmente, en dicho informe se concluyó que las enfermedades de base que tenía diagnosticada la paciente, como la coronaria y la depresión, **hacen aconsejable** que se deba continuar con la suspensión de la detención preventiva *"con el ánimo de preservar su vida"*.

En relación con **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN** el informe técnico médico legal de estado de salud, del 16 de marzo de 2012³⁹⁶, expresó que el paciente aún padece la patología que dio lugar a la sustitución de la medida de aseguramiento, la cual, analizada la historia clínica aportada, es de difícil manejo, ya que el gastroenterólogo ha tenido que duplicar dosis terapéuticas y *"el proceso erosivo severo de la mucosa gástrica continua, considero que dicha patología para ser compatible con la vida en reclusión el penal debe cumplir estrictamente con las medidas terapéuticas por el galeno tratante: ambiente libre de estrés, que se cumpla con las medidas dietéticas estrictas del paciente, y que se cuente con servicio médico y dotación de medicamentos..."*

Ahora bien, como viene de verse, en ninguno de los dictámenes oficiales actuales -o por lo menos más recientes- se concluyó la incompatibilidad del estado de salud de los acusados con el centro de reclusión, requisito sine qua non para la concesión de este tipo de sustitutos, tal como lo dispone el estatuto penal:

³⁹⁵ Folios 4 y ss del C. 75

³⁹⁶ Folios 199 y ss del C. 70

"Artículo 68. *Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. El juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta.*

Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado.

Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38.

El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste.

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida.

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción."

De otra parte, también cabe precisar que según el reglamento técnico para la determinación médico forense de estado de salud en persona privada de libertad, la calificación de "estado grave por enfermedad" depende de las condiciones de salud del examinado, aunadas a la imposibilidad del manejo de su condición de salud en el establecimiento donde se encuentre, lo que busca proteger a la persona, independientemente de su situación jurídica, en situación de salud incompatible con la reclusión.

En tales condiciones, corresponde al perito médico establecer o confirmar el diagnóstico, evaluar la situación de salud actual del examinado y determinar en forma genérica qué tipo de tratamiento requiere y cuáles son las condiciones que deben garantizarse para la recuperación o preservación de la salud, e informar si dicho tratamiento debe ser hospitalario o puede ser ambulatorio. Cuando es del caso, el perito se refiere, según el reglamento, en forma genérica a las condiciones de manejo y cuidado necesarias para la atención adecuada y digna de las circunstancias particulares de salud del examinado³⁹⁷, y si éstas se requieren de manera permanente o transitoria.

³⁹⁷ "(Tales como cuidados de enfermería, rehabilitación, dieta, etc.)", según el reglamento técnico para la determinación médico forense de estado de salud en persona privada de libertad -Estado grave por enfermedad o Enfermedad muy grave-

No obstante lo anterior, el Despacho evidencia irregularidades en varios de los dictámenes periciales, pues varios de los médicos forenses omitieron las directrices que acaban de mencionarse para su presentación, valga decir, el tipo de tratamiento que requieren los procesados y cuáles son las condiciones que deben garantizarse para la recuperación o preservación de la salud de los justiciables.

Además, el solo hecho de que a **KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA**, **MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN** y **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO** se le hayan diagnosticado varias patologías, dichas circunstancias per se no significan la incompatibilidad de las mismas con la reclusión en establecimiento carcelario, máxime si en los informes médico legales relativos a **GABRIEL JAIME** no se indicó expresamente que el estado de salud actual del paciente constituye un estado grave de enfermedad; como tampoco en los eventos de **KATIA PATRICIA** y **MANUEL GREGORIO** se aludió en los últimos informes o dictámenes a que sí lo constituyera, o mínimamente a que el estado de salud fuera incompatible con el centro de reclusión formal. Es más simplemente se aludió a los requerimientos médicos necesarios, como dietas, revisiones frecuentes por especialistas, entre otros, para la preservación de su buen estado de salud.

En otras palabras, los diagnósticos y requerimientos médicos prescritos a estos enjuiciados, por si solos no hacen que automáticamente su condición de salud sea incompatible con su reclusión en establecimiento carcelario, pues el director del mismo debe procurar que a los acusados se les brinde la asistencia médica necesaria.

En efecto, el director del establecimiento deberá garantizarle las atenciones médicas que requieran los internos, según lo dispone el artículo 104 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014:

"ACCESO A LA SALUD. Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse

garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica."

Si bien es cierto el artículo 105 ídem, estableció que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios son los encargados de diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad; el párrafo transitorio del aludido artículo, prevé que mientras entra en funcionamiento el modelo de atención establecido en la novísima ley *—la cual apenas entró a regir el 20 de enero de la anualidad que avanza—* la prestación de los servicios de salud de quienes están privados de la libertad se seguirá garantizando, de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a dicha normatividad. Por tanto, el director del establecimiento carcelario aún es el competente para garantizar la asistencia médica de los reclusos.

En relación con esa asistencia médica, el Decreto 1141 de 2009, por medio del cual se reglamentó la afiliación de la población reclusa al Sistema de Seguridad Social en Salud, preceptúa que la prestación de los servicios de salud de los presos estará a cargo de la EPS del régimen subsidiado con la que contrate el INPEC, que en el caso concreto es CAPRECOM o, eventualmente, cuando el detenido se encuentre afiliado al régimen contributivo, será la EPS de dicho régimen la encargada de la prestación de dichos servicios, para lo cual deberán coordinar con el INPEC lo relacionado con la seguridad de los internos.

En tales condiciones, la suscrita no puede permitir como excusa la contingente evasión de los directores de los establecimientos carcelarios, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de CAPRECOM *-o la EPS del régimen contributivo-* en la prestación de la atención en salud que requieren **GABRIEL JAIME, KATIA PATRICIA y MANUEL GREGORIO**, ya que dichas entidades no tienen ningún pretexto para no suministrarles los servicios médicos que requieren, pues dichas preceptivas son de carácter obligatorio y en caso de incumplimiento existen otros mecanismos para hacerlos efectivos, como la

acción de tutela, máxime si se tiene en cuenta que los requerimientos médicos que necesitan estos acusados no resultan desproporcionados ni dichas entidades carecen de recursos para su cubrimiento.

Así las cosas, no se puede pretender que el eventual incumplimiento de las obligaciones de las entidades mencionadas en el suministro de la dieta estricta, los medicamentos, el seguimiento y los controles especializados periódicos, y demás requerimientos, que le fueron recomendados a los procesados, se subsanen con la concesión de sustitutos del encarcelamiento, ya que ello no sólo acolitaría la incuria y el facilismo de dichas entidades en el cumplimiento de las funciones que les fueron asignadas por ley, sino que conllevaría a que, ante la enfermedad de los reclusos y la consecuente inobservancia o descuido en su tratamiento médico, indefectiblemente deban concederse este tipo de beneficios.

De otra parte, pese a que a esta Funcionaria le parece lógico que la reclusión genere una afectación emocional, estrés o ansiedad, esas consecuencias no constituyen por sí solas causales para la concesión de la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo del encarcelamiento, pues ello conduciría a que ineludiblemente a todos los reclusos haya que concederles dichos sustitutos, a fin de evitar el trastorno del estado de ánimo y la alteración física que les produce la reclusión, circunstancia que no consulta las funciones de la pena, como la prevención general y especial, la retribución justa y la reinserción social³⁹⁸.

Finalmente, cabe precisar que si bien es cierto en un principio a **SÁNCHEZ MEJÍA**, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó, en informes periciales del **2 de junio de 2010**³⁹⁹ y del **22 de octubre de 2010**⁴⁰⁰, que está acusada se encontraba en estado grave por enfermedad, razón lo cual era *"mandatorio darle casa por cárcel ya que requiere chequeos continuos por la gravedad del cuadro"*, estas circunstancias por sí solas no ameritan a estas alturas, más de cuatro (4) años después y con informes posteriores que no avalan un estado grave por enfermedad incompatible con el centro de reclusión formal, una reclusión domiciliaria, máxime si, como viene de

³⁹⁸ Artículo 4º del Código Penal

³⁹⁹ Folios 15 y ss del C. 35

⁴⁰⁰ Folios 103 y ss del C. 48

verse, en el establecimiento carcelario debe proveérsele lo necesario para el sostenimiento de su salud.

De otro lado, respecto a **REMBERTO MANUEL ALVAREZ VERTEL**, a quien la Fiscalía 8ª de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le concedió, el 3 de diciembre de 2010⁴⁰¹, con fundamento en una aparente condición de padre cabeza de familia, conforme al artículo 314, numeral 5º, de la Ley 906 de 2004, también se le revocará dicho sustituto con base en los siguientes argumentos.

Pues bien, el artículo 1º de la Ley 750 de 2002 tiene aplicación sólo a condición de que la calidad de cabeza de familia implique que con la reclusión del condenado, el menor quede en situación de indefensión o desprotección, circunstancia que no se avizora por esta funcionaria, ya que sólo se sabe, con las pruebas relacionadas en la providencia mediante la cual la Fiscalía concedió el sustituto, que **REMBERTO MANUEL** tiene una hija menor, cuya custodia quedó a cargo de su madre **NAUDITH DEL CARMEN NEGRETE TRECO**, según acuerdo de divorcio que quedó consignado en la sentencia, del 7 de noviembre de 2008, proferida por el Juzgado 3º del Circuito de Familia de Montería. Sin embargo, **NAUDITH DEL CARMEN** posteriormente declaró que hubo de entregarle su hija al procesado, ya que no tenía capacidad económica ni estabilidad en cuando a la vivienda.

Asimismo, con la declaración de **NELLY DEL ROSARIO NEGRETE ROMÁN** se supo que **ALVAREZ VERTEL** tiene la custodia de la menor y desde su detención a raíz de este proceso, dejó a la menor a cargo de su hermana, quien posteriormente se la entregó a su madre, esto es, quien funge como abuela de la adolescente, quien es una persona de la tercera edad y, en su criterio, no está en condiciones de atenderla, aspectos corroborados por **MAIRA ÁLVAREZ VERTEL**, hermana del enjuiciado.

De la misma manera, **JULIA IZQUIERDO LÓPEZ** afirmó que la menor, mientras su padre estuvo detenido, convivió con su abuela, quien sufragaba los gastos de mantenimiento, lo cual fue corroborado por **MANUEL ANTONIO ESPINOZA SANTOYA**, quien adicionó que una tía asiste a las reuniones del colegio.

⁴⁰¹ Folios 163 y ss del C. 70

Entretanto, MIGUEL ENRIQUE PAEZ YANES expuso que el justiciable es quien le provee cuidado, afecto, educación y recreación a su hija.

Por su parte, JOSÉ LUIS ORTIZ ACUÑA, quien manifestó que era taxista, adujo que trasportaba diariamente a la menor a su colegio, sin embargo, desde que el acusado fue privado de su libertad le adeuda tal servicio, por tanto, le suspendió el servicio.

Así las cosas, con base en estos elementos, no puede concederse la prisión domiciliaria con fundamento en la Ley 750 de 2002, ya que del cuidado de la menor se pueden y deben encargar su madre o sus demás parientes, que es precisamente lo que ocurrió mientras el enjuiciado estuvo detenido en el establecimiento carcelario.

En otras palabras, la madre de la menor y, en su defecto sus demás familiares, están en la obligación legal de prodigarle a M.A.A.N el afecto y cuidado que necesita, lo cual han venido haciendo según los mismos declarantes. Además, cabe resaltar que la concesión de este sustituto en relación con las madres o padres cabeza de familia, no procede automáticamente para toda mujer u hombre que tenga hijos, sino que debe consultarse si en realidad quien reclama el sustituto tiene la condición de tal en los términos de la Ley 82 de 1993, según la cual es cabeza de familia la mujer que siendo soltera o casada tiene a su cargo en forma permanente, económica o socialmente hijos menores propios o a otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, esto es, que esos menores o personas incapacitadas no tengan otra opción y deba evitarse su abandono, como precisamente lo consideró la Corte Constitucional en sentencia C-154 del 7 de marzo de 2007, con ponencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, en relación con la inexequibilidad parcial del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

Así las cosas, como realmente no se probó que la menor se encuentre en estado de abandono o indefensión, pues, como viene de verse, existen familiares que pueden hacerse cargo de M.A.A.N, como en su momento lo hicieron, se revocará el sustituto.

En síntesis, a **MARIO LEÓN VILLA PACHECO, ORLANDO MORENO MORA, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ROBIN MANUEL CALONGE**

ALCALÁ, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN y REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL se les revocará el sustituto que en su momento se les concedió. Por tanto, se les devolverá la caución prendaria que hubiesen depositado para disfrutar de tal beneficio.

Por sustracción de materia, no se pronunciará el despacho frente a la solicitud elevada por el procesado **MARIO LEÓN VILLA PACHECO**, el día 20 de octubre de 2014, donde solicita cambio de domicilio y permiso para trabajar.

De otra parte, se oficiará nuevamente al Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho y al coordinador del Grupo Interno del Trabajo Consultivo y Extradición de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se tramite lo necesario para que se haga efectiva la extradición de **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT**, quien se encuentra actualmente detenido en Panamá, a raíz de la Notificación Roja de la INTERPOL.

Finalmente, se reactivará la orden de captura de **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ**, a quien, pese la Fiscalía impuso medida de aseguramiento desde la definición de la situación jurídica, no se ha hecho efectiva la misma. En razón de ello, se realizará el respectivo formulario de solicitud de notificación roja de la INTERPOL.

De otra parte, dado el quantum de la sanción privativa de la libertad que se impondrá a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA** se le concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena, debido a que sus antecedentes personales, sociales y familiares permiten inferir que no existe necesidad de ejecución de la pena y se reúnen todos los presupuestos objetivos necesarios para su procedencia. Esta medida, como viene de verse, al tenor del artículo 63 del Código Penal, tiene lugar en aquellos eventos en que la sanción no supera los tres (3) años de prisión, no se trata de un delito excluido expresamente, y el procesado carece de antecedentes penales. Sin embargo, el procesado deberá prestar caución de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en garantía de que durante el periodo de prueba de dos (2) años, cumplirá las obligaciones del artículo 65 del Código Penal, esto es, a)

presentarse cuando fuere requerido a este juzgado o al que vigile la ejecución del fallo, b) informar todo cambio de residencia y c) no salir del país sin previa autorización judicial.

PARTE CIVIL

1. FINAGRO:

De acuerdo a los incentivos de capitalización rural y créditos efectuados a las empresas URAPALMA S.A., PALMAS DE CURVARADÓ y PALMADÓ LTDA., a partir de las alianzas estratégicas y asociaciones de cultivadores ficticias que crearon los procesados para poder acceder a dichos beneficios económicos, solicitó como parte civil, las siguientes sumas de dinero:

1.1 Por perjuicios materiales la suma de \$7.701.000.000 debidamente indexados, correspondiente a los redescuentos e Incentivos de Capitalización Rural otorgados a las empresas ya mencionadas, o lo que llegare a probarse.

De acuerdo a la información y pruebas suministradas por la entidad FINAGRO, mediante memorial dirigido a la Fiscalía de Apoyo a la 8ª Especializada UNDH-DIH, obrante a folios 65 y s.s. del cuaderno 40, la entidad por concepto de redescuentos e ICR desembolsó en total la suma de **\$10.591.869.186**.

En los anexos se pueden observar las certificaciones expedidas por el Banco Agrario de Colombia donde se explican los créditos aprobados y desembolsos realizados a través de la Línea Especial Programa Especial de Fomento y Desarrollo Agropecuario de FINAGRO a favor de URAPALMA S.A., así como constancia de las operaciones realizadas por URAPALMA S.A. con la intermediación de la Corporación Financiera del Valle S.A.

De igual manera, obra certificación del mismo Banco Agrario sobre el crédito aprobado a favor de PALMAS DE CURVARADÓ, los desembolsos efectuados y margen de redescuento.

En similares condiciones se puede observar la certificación de Banco Agrario en cuanto a las operaciones tendientes al estudio, calificación y otorgamiento del

crédito a favor de PALMADÓ LTDA., así como los desembolsos efectuados y beneficios obtenidos a través de la figura de los redescuentos de FINAGRO.

En cuanto a los desembolsos efectuados por FINAGRO por concepto de ICR a favor de las empresas palmeras, a folios 172 y s.s., cuaderno 90, se aportaron los respectivos comprobantes, así:

URAPALMA Crédito solicitado 26/07/01 \$2.478.000.000 –cultivos	Redescuento \$2.190.000.000 (desembolsos en 23/08/01, 13/12/01, 23/07/02, 20/10/03, 11/11/04)	ICR \$1.245.840.159 (abonos en 15/05/02, 09/07/02)
URAPALMA Crédito solicitado 13/09/02 \$3.011.552.085 –cultivos	Redescuento \$2.487.843.177 (desembolsos en 04/03/03, 18/12/03, 08/11/04)	ICR \$1.646.000.000 (abono en 27/10/04)
URAPALMA Crédito solicitado 13/07/05 \$745.000.000 –cable vía	Redescuento \$744.590.000 (desembolso en 18/11/05)	Sin ICR
PALMAS CURVARADÓ Crédito solicito 17/12/04 \$5.468.319.000	Redescuento \$1.788.800.000 (desembolsos en 08/03/05)	Sin ICR
PALMADÓ Crédito solicitado 21/04/05 \$1.396.599.000	Redescuento \$488.795.850 (desembolso en 27/05/05)	Sin ICR

En consecuencia, teniendo claro al interior de este proceso que estos dineros fueron obtenidos por los procesados mediante la utilización de las alianzas estratégicas y asociaciones de cultivadores que se crearon de manera simulada y mediante el engaño a los campesinos por parte de las empresas palmeras, con la única finalidad de acceder a los recursos de segundo nivel que ofrece el Estado a través de FINAGRO para el mejoramiento de las actividades de producción del sector agropecuario, se condenará a los sentenciados **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, JAVIER JOSÉ DAZA PRETEL, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO, ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ y REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** a pagar de manera solidaria y a favor de FINAGRO la suma de diez mil quinientos noventa y un millones

ochocientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos (\$10.591.869.186) la cual deberá ser indexada al momento de su cancelación efectiva.

No se condena por este monto a los procesados **SOR ENID OSPINA RENDÓN** ni a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA**, en razón de que los mismos están vinculados con las empresas Agropalma e Inversiones Fregni Ochoa, respectivamente, las cuales no fueron relacionadas entre las empresas con desembolsos efectuados por FINAGRO por concepto de ICR.

1.2. Por perjuicios morales la suma de 1.000 s.m.l.m.v.

Como se trata de una persona jurídica estatal, no resulta viable efectuar condena al pago de perjuicios morales subjetivos a manera de pretium doloris, teniendo en cuenta que éstos consisten en el sufrimiento causado o daño ocasionado a bienes de naturaleza extrapatrimonial, que en el caso de las instituciones no pueden experimentar ni poseer.

Frente a los perjuicios morales objetivos, cuando la acción delictiva afecta el buen nombre, reputación y desenvolvimiento comercial de la persona jurídica, puede efectuarse una condena para su reconocimiento y pago, pero siempre que los mismos estén demostrados.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho al respecto que: *"no existe una regla absoluta que impida condenar al pago de perjuicios morales objetivados a las personas jurídicas. Lo que ha venido sosteniendo esta corporación es que para que pueda admitirse la existencia de un perjuicio moral objetivado, se precisa demostrar que como consecuencia del delito, la entidad o persona jurídica quedó amenazada seriamente en su existencia misma, o que se disminuyó significativamente su capacidad de acción de acuerdo con su actividad funcional, o que fue puesta en condiciones de desigualdad manifiesta frente a otros entes de su mismo género o especie. Sin estar probado alguno de estos indicadores, no es posible condenar al pago de perjuicios"* (Ver sentencia del 5 de octubre de 2006, radicado 25.419, que reitera fallos del 11 de febrero de 1999 radicado 14.523; 29 de mayo de 2000 radicado 16.441; 10 de julio de 2001 radicado 13.681; 26 de noviembre de 2003 radicado 1.908; 25 de marzo de 2004 radicado 18.654; 13 de octubre de 2004 radicado 18.191; 3 de febrero de 2005 radicado 17.722).

En el presente caso, no está demostrado que la entidad FINAGRO haya padecido daño moral objetivado, porque no se probó afectación alguna de su objeto social como consecuencia de la conducta punible, ni se demostró que hubo mengua tan representativa en su capacidad económica que le impidiera seguir desarrollando sus funciones, lo que resulta apenas lógico, ya que se trata de una entidad del sector público, que tiene como objeto el financiamiento del sector agropecuario, creada por la ley 16 del 22 de enero de 1990, donde se establece su naturaleza como sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Agricultura.

Los recursos de FINAGRO se componen de los aportes de la Nación, los aportes de los demás accionistas -que son las entidades que conforman el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario-, las utilidades que se liquiden en sus ejercicios anuales y que se ordene capitalizar, los créditos otorgados por el Banco de la República que sean objeto de cesión así como otras acreencias de entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.

De igual manera, en caso de iliquidez FINAGRO se estabiliza con recursos del presupuesto del Ministerio de Agricultura, y si la misma es temporal, está cubierto por la Junta Monetaria.

Así las cosas, no obstante FINAGRO haya sufrido un detrimento patrimonial significativo, con ocasión de los punibles aquí juzgados, ello no implica que no haya estado y esté en condiciones de continuar desarrollando su objeto social como quiera que está respaldado su funcionamiento por los recursos del sector público ya explicados.

En consecuencia, no hay lugar a emitir condena por razón de perjuicios morales objetivados.

1.3. La condena en costas y agencias en derecho.

Se condenará a los aquí sentenciados a pagar solidariamente a favor de la parte civil -FINAGRO, Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó y GABRIEL CARO GARCÍA- dentro de este proceso, las costas y agencias en derecho que lleguen a probarse al momento de la respectiva liquidación.

De otra parte, respecto al memorial del 9 de octubre último, suscrito por el defensor suplente de **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO**, referente a que ni su prohijado ni Palmas del Curvaradó "*registra deudas pendientes con dicha entidad*", esto es, con el Banco Agrario de Colombia, de lo cual aportó certificación, por un supuesto "*acuerdo de pago*" por valor de \$2.831.976.778, cabe precisar que esta suma no coincide con la pretendida por el apoderado de FINAGRO en este asunto, esto es, 7.257.119.000, razón por la cual no es posible a estas alturas reabrir un debate a fin de establecer cuál es el real monto, máxime si se tiene en cuenta que ni si quiera se ha allegado al Despacho por parte del respectivo apoderado de la parte civil constancia del desistimiento, la variación o la satisfacción de sus pretensiones en este asunto.

Por lo demás, en firme esta sentencia, la misma prestará mérito ejecutivo, razón por la cual, en caso de que hayan variado las pretensiones del apoderado de FINAGRO por cualquier motivo, ello podrá alegarse y demostrarse ante la autoridad pertinente.

2. MANUEL DENIS BLANDÓN -actuando como representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó- y **LIGIA MARÍA CHAVERRA** -actuando como representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó-:

Su apoderado judicial solicitó, como parte civil, que se ordene a favor de las comunidades que sus poderdantes representan, y que fueron reconocidas mediante las resoluciones 2801 y 2809 del 22 de noviembre de 2000 del INCORA, el reconocimiento y pago de las siguientes sumas de dinero:

2.1. Por perjuicios materiales, estimados en más de 20.000 millones de pesos, pero según avalúo pericial y teniendo en cuenta que se trata de 4.993 hectáreas que componen las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó:

- El valor comercial.
- El impedimento en el uso del suelo desde el año 2001.
- El valor de las construcciones, muebles y semovientes que había en el lugar al momento del desplazamiento.

El avalúo pericial necesario para establecer el valor comercial de las 4.993 hectáreas de terreno que componen los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, así como para determinar el valor de las construcciones, muebles y semovientes existentes allí en la época de ocurrencia de los hechos, y calcular el lucro cesante que se pudo generar al impedirle a las comunidades el uso del suelo desde el año 2001, a pesar de que se solicitó y ordenó como prueba, nunca fue practicado, por lo tanto, ello impide a esta funcionaria dictar condena al pago de perjuicios materiales por este concepto.

En efecto, para que proceda condena por los “más de 20.000 millones de pesos” pretendidos por la parte civil en este caso, debe existir prueba que establezca que ese fue el detrimento patrimonial ocasionado a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó como daño emergente y lucro cesante y, al respecto, ningún medio de conocimiento fue arrimado al expediente.

Por lo anterior, se negará dicha pretensión, quedando abiertas otras vías jurídicas para que el interesado adelante el cobro de dichos perjuicios.

2.2. Por perjuicios morales la suma de 1.000 s.m.l.m.v. a favor de la comunidad.

Se tiene que el desplazamiento forzado a que fueron sometidas las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, efectivamente ocasionó perjuicios morales en sus integrantes, como quiera que el desarraigo sufrido por sus pobladores genera unos daños psicológicos que deben ser compensados, daños que han sido catalogados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como HECHO NOTORIO:

“En efecto, constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzosamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional. Nota de relatoría: ver sentencia SU-1150 de 2000. T-1635 de 2000. T-1215 de 1997”. (Sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 2001-00213, Consejo de Estado, Sección Tercera).

En efecto, a todos estos sentimientos de temor, preocupación, zozobra y desasosiego han hecho referencia insistentemente las diferentes víctimas que fueron oídas en testimonio dentro de esta actuación procesal, manifestando las necesidades a que se han visto sometidas con ocasión del desplazamiento forzado, por lo que existe, además, prueba contundente en este proceso de que ese daño moral sí existe y es grave, como han dicho los Tribunales citados, por lo tanto, no cabe duda que las 483 familias y 2.386 personas que componen la cuenca del río Jiguamiandó (según Resolución 2801 de 2000) y las 642 familias y 2.415 personas que conforman la cuenca del río Curvaradó (según Resolución 2809 de 2000) tienen derecho a la compensación económica que reclaman por el daño moral padecido.

Por lo anterior, se condenará a los sentenciados a pagar de manera solidaria a favor de cada uno de los integrantes de los grupos familiares inscritos como miembros de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, individualmente considerados, la suma tenida en cuenta por el Consejo de Estado para el caso del desplazamiento, por lo que cada persona desplazada de un mismo núcleo familiar recibirá una cuantía de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$19.550.000), con un máximo por núcleo familiar de ciento treinta y ocho millones de pesos (\$138.000.000), por concepto de perjuicios morales, suma que será indexada al momento en que se haga efectivo su pago.

Debe decirse que dicha tasación de perjuicios se realiza teniendo en cuenta los parámetros dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia 34547 (27-04-11):

"Pues bien, el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal establece un límite máximo de 1.000 salarios mínimos legales mensuales en tratándose de perjuicios morales subjetivados⁴⁰², pero lo cierto es que la tasación debe hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado.

Es decir, que no obstante que hay un límite máximo, el juez cuenta con un amplio rango de movilidad dentro del cual puede oscilar para fijar la indemnización por perjuicios morales subjetivados, lo cual no significa arbitrariedad o capricho, pues debe seguir los parámetros fijados en la ley y en la jurisprudencia.

(...)

⁴⁰² Cfr. Sentencia C-916 de 2002.

Finalmente, porque la tasación de cuantías similares a las fijadas por las altas Cortes nacionales permite conservar el principio de igualdad en la solución de las pretensiones planteadas por las víctimas.

(...)

A la hora de determinar estos valores para los casos de delitos de desplazamiento forzado, la Sala observa que no existe una referente concreto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que, por tanto, es necesario acudir a la práctica del Consejo de Estado de Colombia, que, de acuerdo con sus fórmulas, atribuye por daños inmateriales a toda persona desplazada la mitad (50 salarios) de los atribuidos a cónyuge, padres e hijos en caso de un delito de homicidio (100 salarios)".

Al efecto debe recordarse que el perjuicio moral es la compensación al sufrimiento causado con el delito, sufrimiento que en principio es predicable sólo del ser humano, y que tratándose del delito contra la autonomía personal, resulta relativamente fácil dilucidar su existencia, así como sus efectos, frente a todos y cada uno de los residentes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, quienes como quedó demostrado en este proceso, no obstante el tiempo transcurrido, no han podido retornar a sus tierras y efectuar el aprovechamiento de las mismas por el accionar de las personas que aquí resultaron condenadas y otras tantas que están siendo investigadas y juzgadas en procesos que se adelantan bajo cuerda separada; así que las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó como colectividad no tienen derecho a reclamar reparación alguna por este concepto, sino cada uno de sus miembros, ya que esta forma asociativa fue creada única y exclusivamente para administrar y distribuir las áreas de trabajo para cada una de las familias evitando la concentración de tierras en pocas manos, como rezan las resoluciones 2801 y 2809 del 22 de noviembre de 2000 y la Ley 70 de 1993, no para el manejo de los recursos económicos de los pobladores.

Dicha suma de dinero se deberá entregar al Fondo de Reparación a las Víctimas de la Violencia, reglado por la Ley 1448 de 2011, para que a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se realice el proceso de verificación y entrega a los miembros de cada núcleo familiar desplazado de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, para lo cual se actuará conforme a la información recaudada en los censos poblacionales que originaron la expedición de las resoluciones 2801 y 2809 de 2000, a través de las cuales se reconoció la titulación colectiva, y los datos asentados en el Registro Único de Víctimas.

Debe recordarse que los hechos aquí juzgados fueron ocasionados por parte del grupo armado ilegal de paramilitares, dentro del cual varios de sus miembros ya han confesado en Justicia y Paz su responsabilidad y la de varios civiles. Igualmente, en este proceso quedó demostrada y analizada la responsabilidad de todas aquellas personas que prestaron deliberadamente su colaboración a los intereses de dicha agrupación y en la búsqueda de los fines económicos perseguidos, tras el desplazamiento forzado de las mencionadas poblaciones, y a través de la siembra masiva de palma de aceite.

Por lo tanto, cabe efectuar las condenas civiles mediante la figura de la solidaridad, ello según las previsiones de los artículos 96 del Código Penal y 46 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), pues las personas vinculadas al proceso penal y que deben responder patrimonialmente por los perjuicios causados con el delito están obligados a reparar el daño de manera solidaria.

De la misma manera, se sabe que varias de las personas desplazadas siguen aún en la misma situación, así como que se han realizado y se siguen elaborando censos poblacionales a fin de establecer a ciencia cierta quiénes fueron las personas efectivamente afectadas con el accionar paramilitar en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Como también se encuentra ordenado por la Corte Constitucional que se realice una nueva elección de la representación legal de los Consejos Comunitarios para dilucidar todas las controversias que se han suscitado al respecto (ver autos 222 del 17 de junio de 2009, 384 del 18 de mayo de 2010, 045 del 07 de marzo de 2012 y 112 del 18 de mayo de 2012).

Entonces, como es claro que la determinación de todas y cada una de las víctimas reales de los delitos aquí juzgados no es óbice para que se condene a los responsables de ellos a efectuar las indemnizaciones que corresponda, y siendo el Fondo de Reparación a las Víctimas administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde confluyen todos los bienes y recursos que se han podido recuperar dentro de la justicia transicional y en todos los procedimientos que hacen parte del tema de reparación colectiva, incluso en aquellos casos donde en procesos ordinarios se determina la responsabilidad penal vinculada con el accionar de dichos grupos de

desmovilizados, como en este proceso en concreto, en aras de lograr la satisfacción efectiva de las necesidades de las víctimas, se acudirá a dicho fondo para el recaudo de la suma de dinero ordenada, donde además se garantiza la administración eficiente de los recursos mediante la forma de encargos fiduciarios y se podrá concurrir por las víctimas a acreditar su condición como tal para obtener el pago de lo que les corresponde.

Cabe aclarar que el sentenciado **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA** será condenado al pago de los perjuicios aquí ordenados, también de manera solidaria, como quiera que a partir de la comisión de la conducta punible de invasión de áreas de especial importancia ecológica, contribuyó al desarraigo de la colectividad de Jiguamiandó y Curvaradó, ya que al haber acrecentado en varias hectáreas el predio particular que había adquirido, procediendo a invadir el territorio adjudicado a estas comunidades mediante la implementación del sembradío de palma, impidió el uso y disfrute por parte de los legítimos poseedores de estos fundos, quienes sufrieron entonces las consecuencias morales ya referidas, al no tener la plena disposición de sus terrenos, a través de los cuales obtenían incluso el sustento para sus familias.

2.3. Se ordene la devolución de las tierras.

Se ordena al INCODER y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó - Chocó la cancelación de todos los antecedentes registrales sobre gravámenes, limitaciones de dominio, títulos de tenencia, actos de enajenación o disposición, medidas cautelares, y cualquier forma de derecho real que pueda existir sobre los territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y sobre los inmuebles reconocidos como de propiedad particular dentro de dichos Consejos Comunitarios, de acuerdo a las resoluciones 2424 y 2921 -Curvaradó- y 2159 y 2842 -Jiguamiandó-, si aún no se ha hecho.

Igualmente, se oficiará a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de que emita circular, informando que a partir de esta sentencia se prohíbe la realización de cualquier negocio jurídico donde se vean involucrados actos de disposición respecto de los territorios colectivos que administran los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó. Ello, a excepción de los bienes de

propiedad particular, para lo cual se deberá contar, además de la autorización del titular del predio, con un aval del respectivo Consejo Comunitario.

Frente a la devolución de las tierras solicitadas por la parte civil, deberá acudir a las vías judiciales pertinentes en aras que mediante el agotamiento del debido proceso administrativo se impartan las órdenes respectivas y se determine la ruta de restitución de tierras y de derechos de las comunidades.

2.4. Se ordene la reparación del daño ambiental y sociocultural.

Al efecto se exhortará al Gobierno Nacional para que a través de los estamentos correspondientes, inicie de manera inmediata los estudios que sean necesarios en aras de llevar a cabo el proceso de reparación del daño ambiental ocasionado con los punibles aquí investigados, el cual se encuentra documentado en el respectivo informe del mes de julio de 2009, realizado por orden del Ministerio del Medio Ambiente, a que se ha hecho referencia en esta providencia.

De igual manera, se exhortará al Gobierno Nacional para que se dispongan los recursos suficientes con el fin de que, en el menor tiempo posible, se ejecuten las medidas tendientes a compensar el daño sufrido a nivel sociocultural por las poblaciones víctimas de estos hechos, llevando a cabo todas las actividades e inversiones que sean necesarias para recuperar su patrimonio étnico.

También se exhortará al Gobierno Nacional para que realice el acompañamiento a las víctimas de estos hechos, a través de las entidades correspondientes, para que exista garantía de satisfacción de todas sus necesidades en educación, vivienda y salud, mediante el acceso a todos los programas del Estado para la protección de la población desplazada, y en especial a aquellos que propenden por la protección de los menores, la mujer y las personas de la tercera edad.

Igualmente, se exhortará al Gobierno Nacional para que cree mecanismos de vigilancia con el fin de que las autoridades competentes formalicen la devolución de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó en el menor tiempo posible, y a su vez las fuerzas militares les brinden a sus miembros toda la protección que requieran al momento de retornar a sus predios, ofreciéndoles

el Estado, de manera prioritaria, acceso a los programas de proyectos productivos y subsidios de vivienda y mejoramiento, permitiéndoles así el ejercicio real de su autonomía como comunidad, pero siempre bajo el respeto de los principios de voluntariedad, seguridad, dignidad y no repetición.

3. GABRIEL CARO GARCÍA:

A través de su apoderada judicial enfocó su demanda de constitución de parte civil contra la UNIÓN DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE EN EL URABÁ –URAPALMA S.A., solicitando el reconocimiento y pago de los siguientes perjuicios ocasionados a partir del despojo de los 4 predios que adquirió en la zona donde operó dicha empresa palmera, denominados Manantiales, La Culebra, La Cristalina y Villalba, para un total de 64 hectáreas, según la documentación que aportó como prueba y fue reconocida como tal al momento de su admisión como parte civil:

3.1. Por perjuicios materiales –daño emergente- la suma de \$265.930.000 representada en las mejoras que había realizado a los terrenos, por valor de \$67.330.000; 1.000 robles que se encontraban sembrados en los poteros, estimados en \$50.000.000; la suma necesaria para la erradicación de la palma africana afectada con PC, calculada en \$188.600.000.

No obstante la parte civil solicitó la declaración de varios testigos, y la fiscalía decretó dichas pruebas, las mismas nunca fueron practicadas, razón por la cual las sumas de dinero reclamadas por concepto de daño emergente, no están debidamente demostradas dentro de esta actuación, lo que impide su reconocimiento por esta vía judicial, no obstante, quedan abiertas otras vías jurídicas para que la víctima proceda a su reclamación.

3.2. Por perjuicios materiales –daño emergente- la suma que determine un experto y que corresponde al daño ambiental por tala de 18 hectáreas de bosque.

En similares condiciones que la anterior pretensión, nunca se aportó al proceso el dictamen pericial solicitado por la representante de la parte civil, razón por la que no hay base probatoria para efectuar el reconocimiento de lo pretendido, quedando la posibilidad de acudir a otros trámites para el cobro.

3.3. Por perjuicios materiales –lucro cesante- la suma necesaria para reemplazar los potreros donde pastaban 200 reses, determinada en \$240.000.000.

Igualmente, cabe manifestar que no hay prueba alguna en relación con lo que se reclama por concepto de lucro cesante, por tal razón no es posible efectuar condena alguna.

3.4. Perjuicios morales que valore el juez.

Teniendo en cuenta que el señor GABRIEL CARO GARCÍA aparece inscrito junto con su grupo familiar, como miembro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Curvaradó, donde se encuentran relacionados como predios de propiedad privada dentro del territorio colectivo: Los Manantiales y La Culebra, de acuerdo a la resolución 2424 de 10 de septiembre de 2007, y ya se ha anunciado condena en contra de los procesados, obligándolos al pago solidario de la suma de 17 millones de pesos por cada persona desplazada de un mismo núcleo familiar, con un máximo por núcleo familiar de 120 millones de pesos, a favor de aquellos núcleos familiares que estén reconocidos como parte de dicha colectividad, entendiendo entonces que la familia del señor CARO GARCÍA se encuentra debidamente reconocida, no procede efectuar nuevamente condena por este mismo concepto.

Finalmente, respecto a la solicitud del apoderado de la parte civil, se requerirá a la Fiscalía que investigue, en caso de que aún no se haya hecho, a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios y demás particulares que hubiesen estado involucrados en la comisión delictiva.

OTRAS DECISIONES

En atención al informe de auditoría gubernamental con enfoque integral de la Contraloría General de la República, de diciembre de 2007, se ordenará remitir copia del mismo a la Fiscalía General de la Nación para que, si aún no lo ha hecho, se investiguen penalmente las conductas descritas en los hallazgos relacionados en los numerales 31, 32, 33 y 33, relativos al incumplimiento por

parte de funcionarios de FINAGRO de varias disposiciones relativas, en su orden, a los siguientes hechos:

"Respecto a los redescuentos realizados a la empresa PALMAS DEL CURVARADO S.A., se observa que FINAGRO, omitió verificar la calidad de poseedor regular (con justo título) de los pequeños productores que suscribieron compromisos de participación elevada a escritura pública con la citada empresa. Circunstancia que debió comprobar, con el cuadro de asignaciones.

FINAGRO efectuó un redescuento el 18 de noviembre de 2005 por \$744 millones a favor de la empresa URAPALMA S.A., omitiendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en Resolución Defensorial No. 39 de junio de 2005, comunicada al Fondo el día 8 de junio del mismo año y en la que dispuso: "... Décimo Tercero: RECOMENDAR a FINAGRO, al Banco Agrario y demás Entidades bancarias, que se abstengan de otorgar créditos para el desarrollo de proyectos agropecuarios por parte de terceros en territorios colectivos o resguardos indígenas..."

FINAGRO cuando otorgó el crédito a la empresa URAPALMA, que fue sometido a calificación previa, en el año 2001 por la suma de \$2.478 millones, en el formato de calificación previa, manifiestan que la experiencia en actividad financiada es de 15 años, pero atendiendo el certificado de existencia y representación legal de la empresa, da cuenta que fue constituida el 30 de diciembre de 1999, es decir, que a la fecha de la calificación previa, Urapalma tenía dos años de creada. Posteriormente, cuando otorgó un segundo crédito por la suma de \$3.011 millones en enero de 2003, ante el mismo factor dice que tiene experiencia de dos años, presentándose inconsistencia en la información de un mismo beneficiario, sin que se haya pronunciado respecto de este evidente hecho las entidades evaluadoras del proyecto.

Analizada la situación económica de la empresa URAPALMA para las vigencias 2001 y 2002, en donde se evidencia un alto endeudamiento que supera ampliamente su patrimonio sin embargo FINAGRO otorga dos créditos por la suma \$5 mil millones con garantía FAG del 80 %, aprobado por el intermediario financiero, en caso de siniestrarse, los créditos respaldados en los términos de la reglamentación aplicable, no se evidencia como se garantiza y quien asumiría el pago al FAG. Lo anterior, refleja que el sistema financiero asume un alto riesgo, reflejando falencias en las evaluaciones efectuadas por FINAGRO y por el intermediario financiero que pueden ocasionar pérdidas al sistema y al Fondo de Garantías "FAG".

Sin más consideraciones, el **JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLÍN** administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Condenar a GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO y ORLANDO MORENO MORA, de notas personales y condiciones civiles insertas en la motivación, a la **pena principal de diez (10) años de prisión y multa de dos mil seiscientos cincuenta (2.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes**, pagaderos a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, al haberseles encontrado penalmente responsables, en calidad de autores, del concurso de conductas punibles de concierto para delinquir – artículo 340, inciso 2, del Código Penal-; desplazamiento forzado –artículo 180 del Código Penal- e Invasión de áreas de especial importancia ecológica - artículo 337 del Código Penal.

SEGUNDO: Condenar a SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ y REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL, de notas personales y condiciones civiles insertas en la motivación, a la **pena principal de siete (7) años de prisión y multa de dos mil cincuenta (2.050) salarios mínimos legales mensuales vigentes** a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, al haberseles encontrado penalmente responsables, en calidad de autores, del concurso de conductas punibles de desplazamiento forzado -artículo 180 del Código Penal- e Invasión de áreas de especial importancia ecológica -artículo 337 del Código Penal.

TERCERO: Condenar a DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO y ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ, de notas personales y condiciones civiles insertas en la motivación, a la **pena principal de nueve (9) años de prisión y multa de dos mil seiscientos (2.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes** a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, al haberseles encontrado penalmente responsables, en calidad de autores, del concurso de conductas punibles de Concierto para delinquir –artículo 340, inciso 2, del Código Penal- y desplazamiento forzado -artículo 180 del Código Penal-.

CUARTO: Condenar a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA**, de notas personales y condiciones civiles insertas en la motivación, a la **pena principal de dos (2) años de prisión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes** a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, al habersele encontrado penalmente responsable, en calidad de autor, del delito de Invasión de áreas de especial importancia ecológica -artículo 337 del Código Penal-.

QUINTO: Condenar, como sanción principal, a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ y REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO y ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ**, a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de seis (6) años, que corresponde al mínimo previsto en el artículo 180 del Código Penal.

SEXTO: Condenar a todos los justiciables a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad.

SÉPTIMO: Al no satisfacerse las exigencias legales, se deniega a los sentenciados **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, SOR ENID OSPINA RENDÓN, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO, ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ y a REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL**, la suspensión condicional de la ejecución de la

pena y la prisión domiciliaria, en consideración a que no se reúnen los requerimientos para ello.

OCTAVO: En razón de la anterior determinación, se revoca la detención domiciliaria a **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, ORLANDO MORENO MORA, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ROBIN MANUEL CALONGE ALCALÁ, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO y SOR ENID OSPINA RENDÓN**. Para tales efectos, se oficiará al INPEC, a fin de que hagan efectivo el traslado inmediato de estos procesados al centro penitenciario que disponga el director de dicha institución, a fin de que cumplan la pena que se les impone.

Por tanto, se les devolverá la caución prendaria que eventualmente hubiesen depositado para disfrutar de tal beneficio.

NOVENO: Reactivar la orden de captura de **HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ**, a quien, pese la Fiscalía impuso medida de aseguramiento desde la definición de la situación jurídica, no se ha hecho efectiva la misma. En razón de ello, se realizará el respectivo formulario de solicitud de notificación roja de la INTERPOL.

DÉCIMO: Oficiar al Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho y al coordinador del Grupo Interno del Trabajo Consultivo y Extradición de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se tramite lo necesario para que se haga efectiva la extradición de **JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT** a este país, quien se encuentra actualmente detenido en Panamá, a raíz de la Notificación Roja de la INTERPOL.

DÉCIMOPRIMERO: Oficiar a la autoridad por la que actualmente se encuentre a disposición la condenada **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, a fin de que, cuando terminen los motivos de su privación de la libertad en ese asunto, se deje a disposición de este Despacho o del que se encuentre vigilando la pena.

DÉCIMOSEGUNDO: Dado el quantum de la sanción privativa de la libertad que se impone a **CLAUDIO ADOLFO FREGNI OCHOA** se le concede la

suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sin embargo, el procesado deberá prestar caución de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en garantía de que durante el periodo de prueba de dos (2) años, cumplirá las obligaciones del artículo 65 del Código Penal, esto es, a) presentarse cuando fuere requerido a este juzgado o al que vigile la ejecución del fallo, b) informar todo cambio de residencia y c) no salir del país sin previa autorización judicial.

DÉCIMOTERCERO: Se tendrá como parte cumplida de la aflicción irrogada, el tiempo que los enjuiciados han permanecido en privación efectiva de su libertad por razón de este asunto.

DÉCIMOCUARTO: Condenar a los sentenciados **GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, MARIO LEÓN VILLA PACHECO, JUAN JOSÉ PALACIOS PALACIOS, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDÓN, MARIO ALBERTO VÉLEZ GIRALDO, JAVIER JOSÉ DAZA PRETELT, KATIA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, GABRIEL SEGUNDO FERNÁNDEZ NAVARRO, ORLANDO MORENO MORA, DAGOBERTO ANTONIO MONTIEL MERCADO, ROBIN MANUEL GALONGUE ALCALÁ, SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ y REMBERTO MANUEL ÁLVAREZ VERTEL** a pagar de manera solidaria y a favor de **FINAGRO** la suma de **diez mil quinientos noventa y un millones ochocientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos (\$10.591.869.186)**, por concepto de perjuicios materiales, suma que deberá ser indexada al momento de su cancelación efectiva. Sin embargo, no hay lugar a emitir condena por razón de perjuicios morales subjetivos ni objetivados.

DÉCIMOQUINTO: Condenar a los sentenciados a pagar solidariamente a favor de la parte civil –**FINAGRO, Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó y GABRIEL CARO GARCÍA**- dentro de este proceso, las costas y agencias en derecho que lleguen a probarse al momento de la respectiva liquidación.

DÉCILOSEXTO: Negar los perjuicios materiales solicitados por el apoderado judicial de **MANUEL DENIS BLANDÓN** -representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó- y **LIGIA MARÍA CHAVERRA** -representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó-, estimados en más de 20.000 millones

de pesos. Sin embargo, quedan abiertas otras vías jurídicas para que el interesado adelante el cobro de dichos perjuicios.

DÉCIMOSÉPTIMO: Condenar a los sentenciados a pagar, de manera solidaria, a favor de cada uno de los integrantes de los grupos familiares inscritos como miembros de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, individualmente considerados, la suma tenida en cuenta por el Consejo de Estado para el caso del desplazamiento, por lo que cada persona desplazada de un mismo núcleo familiar recibirá una cuantía de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$19.550.000), con un máximo por núcleo familiar de ciento treinta y ocho millones de pesos (\$138.000.000), por concepto de perjuicios morales, suma que será indexada al momento en que se haga efectivo su pago.

Dicha suma de dinero se deberá entregar al Fondo de Reparación a las Víctimas de la Violencia, reglado por la Ley 1448 de 2011, para que a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se realice el proceso de verificación y entrega a los miembros de cada núcleo familiar desplazado de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, para lo cual se actuará conforme a la información recaudada en los censos poblacionales que originaron la expedición de las resoluciones 2801 y 2809 de 2000, a través de las cuales se reconoció la titulación colectiva, y los datos asentados en el Registro Único de Víctimas.

DÉCIMO OCTAVO: Ordenar al INCODER y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó - Chocó la cancelación de todos los antecedentes registrales sobre gravámenes, limitaciones de dominio, títulos de tenencia, actos de enajenación o disposición, medidas cautelares, y cualquier forma de derecho real que pueda existir sobre los territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y sobre los inmuebles reconocidos como de propiedad particular dentro de dichos Consejos Comunitarios, de acuerdo a las resoluciones 2424 y 2921 -Curvaradó- y 2159 y 2842 -Jiguamiandó-, si aún no se ha hecho.

DÉCIMO NOVENO: Oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de que emita circular, informando que a partir de esta sentencia se prohíbe la realización de cualquier negocio jurídico donde se vean involucrados

actos de disposición respecto de los territorios colectivos que administran los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó. Ello, a excepción de los bienes de propiedad particular, para lo cual se deberá contar, además de la autorización del titular del predio, con un aval del respectivo Consejo Comunitario.

VIGÉSIMO: Exhortar al Gobierno Nacional para que a través de los estamentos correspondientes, inicie de manera inmediata los estudios que sean necesarios en aras de llevar a cabo el proceso de reparación del daño ambiental ocasionado con los punibles aquí investigados, el cual se encuentra documentado en el respectivo informe del mes de julio de 2009, realizado por orden del Ministerio del Medio Ambiente, a que se ha hecho referencia en esta providencia.

VIGÉSIMOPRIMERO: Exhortar al Gobierno Nacional para que se dispongan los recursos suficientes con el fin de que, en el menor tiempo posible, se ejecuten las medidas tendientes a compensar el daño sufrido a nivel sociocultural por las poblaciones víctimas de estos hechos, llevando a cabo todas las actividades e inversiones que sean necesarias para recuperar su patrimonio étnico.

VIGÉSIMOSEGUNDO: Exhortar al Gobierno Nacional para que realice el acompañamiento a las víctimas de estos hechos, a través de las entidades correspondientes, para que exista garantía de satisfacción de todas sus necesidades en educación, vivienda y salud, mediante el acceso a todos los programas del Estado para la protección de la población desplazada, y en especial a aquellos que propenden por la protección de los menores, la mujer y las personas de la tercera edad.

VIGÉSIMOTERCERO: Exhortar al Gobierno Nacional para que cree mecanismos de vigilancia con el fin de que las autoridades competentes formalicen la devolución de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó en el menor tiempo posible, y a su vez las fuerzas militares les brinden a sus miembros toda la protección que requieran al momento de retornar a sus predios, ofreciéndoles el Estado, de manera prioritaria, acceso a los programas de proyectos productivos y subsidios de vivienda y mejoramiento, permitiéndoles así el ejercicio real de su autonomía como

comunidad, pero siempre bajo el respeto de los principios de voluntariedad, seguridad, dignidad y no repetición.

VIGÉSIMOCUARTO: No acceder a la condena del pago de perjuicios materiales -daño emergente y lucro cesante-, solicitados por la apoderada judicial de **GABRIEL CARO GARCÍA**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Sin embargo, se le informa al peticionario que para esos efectos quedan abiertas otras vías jurídicas para que la víctima proceda a su reclamación.

VIGÉSIMOQUINTO: Absolver a **JOSÉ MIGUEL RUIZ COSSIO** y a **RAÚL ALBERTO PENAGOS GONZÁLEZ**, de notas personales y condiciones civiles insertas en la motivación, por el delito de Invasión de áreas de especial importancia ecológica, que prevé el artículo 337 del Código Penal, por las razones indicadas en la motivación de esta sentencia.

VIGÉSIMOSEXTO: Absolver a **SOR TERESA GÓMEZ ÁLVAREZ**, de notas personales y condiciones civiles insertas en la motivación, por el delito de Concierto para delinquir, que prevé el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal, por las razones indicadas en la motivación de esta sentencia.

VIGÉSIMOSÉPTIMO: Ordenar remitir copia del informe de auditoría gubernamental con enfoque integral de la Contraloría General de la República, de diciembre de 2007, a la Fiscalía General de la Nación para que, si aún no lo ha hecho, se investiguen penalmente las posibles conductas punibles que descritas en los hallazgos relacionados en los numerales 31, 32, 33 y 33, relativos al incumplimiento por parte de funcionarios de FINAGRO de varias disposiciones relacionadas en la parte motiva de esta sentencia.


VIGÉSIMOOCCTAVO: Requerir a la Fiscalía que investigue, en caso de que aún no se haya hecho, a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios y demás particulares que hubiesen estado involucrados en la comisión delictiva.

VIGÉSIMONOVENO: En firme esta decisión, expídanse las copias que ordenan los estatutos penales sustantivo y adjetivo y remítase el cuaderno respectivo ante el reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, para los efectos relacionados con la ejecución de la sentencia. Asimismo, se

ordena remitir copia de esta sentencia a la jurisdicción coactiva para el cobro de la multa impuesta a los condenados.

TRIGÉSIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


CATALINA RENDÓN HENAO
JUEZA